

NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1187
30 de enero de 1976

ESPAÑOL
Original: FRANCES/INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
32º período de sesiones
Tema 13 a) del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, DE TODOS LOS PAISES Y EN
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS, PREPARADO DE CONFORMIDAD
CON LA RESOLUCION 19 (XXIX) DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 16	1
I. SUDAFRICA	17 - 303	4
A. Evolución de la política de <u>apartheid</u> y de discriminación racial	17 - 90	4
1. Pena capital	17 - 19	4
2. Matanzas y violaciones presuntas del derecho a la vida	20 - 25	5
3. Traslados forzosos de la población	26 - 28	6
4. Trato de los presos político y de los combatientes por la libertad capturados	29 - 65	7
5. Disparidad entre los salarios de los trabaja- dores blancos y negros y bajos salarios de los trabajadores negros	66 - 90	16
B. Política de los "territorios patrios bantúes"	91 - 129	22
1. Antecedentes históricos	93 - 97	23
2. Repercusiones de la política de los territo- rios patrios separados sobre el derecho de libre determinación	98 - 129	24
C. El sistema de trabajo agrícola	130 - 172	30

INDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
Introducción	130 - 133	30
1. Método de reclutamiento de trabajadores agrícolas africanos	134 - 144	32
2. Condiciones de vida de los trabajadores agrícolas africanos	145 - 156	35
3. Análisis comparativo de la situación de los trabajadores africanos en el sector agrícola y en otros sectores	157 - 164	38
4. Granjas-prisión y prisiones privadas	165 - 172	39
D. Movimientos estudiantiles	173 - 242	44
Introducción	174 - 174	44
1. Legislación universitaria de Sudáfrica	175 - 190	44
2. Antecedentes de los movimientos estudiantiles	191 - 207	48
3. Consecuencias de la política de <u>apartheid</u> con respecto a los movimientos estudiantiles	208 - 218	54
4. Disturbios y protestas de los estudiantes ..	219 - 235	59
5. Obstáculos a las organizaciones de estudiantes	236 - 242	65
E. El <u>apartheid</u> y la familia africana	243 - 303	68
1. Descripción de la familia africana y análisis del papel que desempeña	244 - 265	68
2. Efectos del <u>apartheid</u> a corto y a largo plazo sobre la familia africana	266 - 303	72
II. NAMIBIA	304 - 449	81
Introducción	304 - 319	81
A. Nuevos acontecimientos relacionados con la polí- tica de <u>apartheid</u> y de discriminación racial	320 - 386	85
1. Pena capital	320 - 321	85
2. Matanzas y violaciones del derecho a la vida	322 - 323	85
3. Traslados forzosos de poblaciones	324	86
4. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados ...	325 - 340	87
5. Flagelaciones en público	341 - 344	92
6. Situación de los africanos en los "territorios patrios"	345 - 375	94

INDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
7. Salarios bajos pagados a trabajadores negros	376 - 379	103
8. Otras graves violaciones de los derechos humanos	380 - 386	104
B. Movimientos estudiantiles	387 - 410	107
Introducción	387	107
1. Legislación pertinente	388 - 389	107
2. Grupos estudiantiles existentes	390 - 393	108
3. Trabas a los movimientos estudiantiles	394 - 395	109
C. El <u>apartheid</u> y la familia africana	396 - 410	109
Introducción	396	109
1. Descripción de la familia africana y análisis de su función	397 - 400	110
2. Repercusiones, a corto y a largo plazo, de la política de <u>apartheid</u> en la familia africana	401 - 410	111
D. Conferencia de Dakar	411 - 449	113
1. Organización	411 - 420	113
2. Trabajos de la Conferencia	421 - 431	114
3. Resultados	432 - 449	116
Anexo I. Declaración de Dakar sobre Namibia y los derechos humanos		119
Anexo II. Lista de los documentos de la conferencia de Dakar sobre Namibia y los derechos humanos		128
III. RHODESIA DEL SUR	450 - 626	132
A. Nuevos acontecimientos relativos a la política de <u>apartheid</u> y de discriminación racial	450 - 597	132
Introducción	450 - 457	132
1. Pena capital	458 - 472	136
2. Matanzas y violaciones del derecho a la vida	473 - 487	139
3. Traslados forzosos de población	488 - 518	142
4. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados	519 - 553	151

INDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>		<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
	5. Disparidad entre los salarios de los trabajadores negros y de los blancos, y bajo nivel de los salarios de los trabajadores negros ...	554 - 565	160
	6. Otras violaciones graves de los derechos humanos	566 - 597	164
B.	El <u>apartheid</u> y la familia africana	598 - 626	170
	1. Descripción de la familia africana y análisis de su función	598 - 606	170
	2. Efectos a corto y a largo plazo de la política de apartheid en la familia africana	607 - 626	173
IV.	ADOPCION DEL INFORME	627	179

INTRODUCCION

1. Por su resolución 5 (XXXI) de 14 de febrero de 1975 aprobada en su 31º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos decidió que el Grupo Especial de Expertos establecido en cumplimiento de su resolución 2 (XXIII) continuara observando y fiscalizando minuciosamente la evolución de la política de apartheid y de discriminación racial en el marco de la situación que prevalece en Namibia y en Rhodesia del Sur (párr. 12).
2. Por la misma resolución, la Comisión pidió al Grupo que estudiase los sistemas de cárceles privadas y de granjas cárceles, el desarrollo de la política de territorios patrios y sus efectos en el derecho a la libre determinación, así como el sistema de trabajo en las granjas en la República de Sudáfrica (párr. 13), y que estudiara asimismo las consecuencias del apartheid en lo que respecta a la familia africana e investigara las dificultades especiales de los movimientos de estudiantes en Sudáfrica y en Namibia (párr. 14).
3. En el párrafo 15 de la resolución 5 (XXXI), la Comisión pidió al Grupo que le presentase un informe sobre sus conclusiones a más tardar en su 33º período de sesiones, y que le sometiese un informe provisional en su 32º período de sesiones.
4. El presente informe provisional se presenta de conformidad con la referida petición. Fue preparado por el Grupo en dos series de reuniones que celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra, del 28 al 31 de julio de 1975 y del 12 al 23 de enero de 1976. Se basa esencialmente en informaciones reunidas por sus miembros y por la Secretaría, en particular mediante un examen sistemático de los documentos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, los boletines oficiales y las actas de los debates parlamentarios pertinentes, publicaciones del Servicio de Información del Fondo Internacional de Ayuda y Defensa para el Africa Meridional, periódicos y revistas de diversos países, ciertos estudios de las relaciones raciales y obras que tratan cuestiones relacionadas con el mandato del Grupo.
5. El presente informe ha sido precedido por otros ocho informes que el Grupo Especial presentó a la Comisión sobre diferentes cuestiones relativas a los derechos humanos en Africa meridional (E/CN.4/950, E/CN.4/984 y Add.1 a 19, E/CN.4/1020 y Add.1 a 3, E/CN.4/1050 y Corr.1, E/CN.4/1076, E/CN.4/1111, E/CN.4/1135 y E/CN.4/1159).
6. Al preparar su informe, el Grupo Especial de Expertos tuvo presentes las normas internacionales fundamentales que rigen sus actividades y que se enumeraron en informes anteriores, en particular en el presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 31º período de sesiones (E/CN.4/1159). Además, el Grupo tuvo presentes las resoluciones que se mencionan a continuación, aprobadas por la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones: 3383 (XXX), 3396 (XXX), 3397 (XXX), 3398 (XXX), 3399 (XXX), 3411 (XXX), 3412 (XXX), 3452 (XXX) y 3453 (XXX).
7. En la 1335ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada el 7 de marzo de 1975, su Presidente anunció, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social, que el Grupo

Especial de Expertos mencionado en el párrafo 12 de la resolución 5 (XXXI), referente a la renovación del mandato del Grupo, tendría la siguiente composición:

- Sr. Kéba M'Baye (Senegal), Presidente de la Corte Suprema;
- Sr. Branimir Janković (Yugoslavia), catedrático de derecho internacional, Belgrado;
- Sr. Amjad Ali (India), miembro del Parlamento, Nueva Delhi;
- Sr. Annan Arkyin Cato (Ghana), Consejero, Misión Permanente de Ghana ante las Naciones Unidas, Nueva York;
- Sr. Huberto Díaz Casanueva (Chile), catedrático de la Universidad de Rutgers (organizaciones internacionales) y de la Universidad de Columbia (literatura hispanoamericana), Estados Unidos de América;
- Sr. Felix Ermacora (Austria), catedrático de derecho público, Viena.

La Comisión decidió asimismo que el Sr. M'Baye (Senegal) seguiría desempeñando las funciones de Presidente del Grupo.

8. En el curso de las reuniones que celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en julio de 1975, el Grupo Especial de Expertos convino en que su Presidente seguiría ejerciendo igualmente las funciones de Relator y el Sr. Janković las de Vicepresidente.

9. En lo referente al plan del informe, el Grupo se atuvo en lo posible al esquema trazado en la resolución 5 (XXXI) de la Comisión. Por otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 12 de la referida resolución, el Grupo decidió incluir en su informe una reseña de la evolución de la situación política en Africa meridional.

10. Habida cuenta que en cada uno de los territorios a que se refiere el mandato del Grupo impera una situación particular, la evolución política en Africa meridional se analiza por separado para Sudáfrica, Namibia y Rhodesia del Sur, en los respectivos capítulos.

11. En términos generales, será suficiente señalar aquí, en lo referente a Sudáfrica, que el Grupo Especial de Expertos comprobó que, aunque algunos indicios hacían suponer que las autoridades sudafricanas tenían el propósito de moderar algunos aspectos de la política de apartheid, las pretendidas reformas no tendían en modo alguno a eliminar esa política sino que, por el contrario, entraban en el marco del apartheid y su principal objetivo era dividir a la población negra.

12. En lo referente a Namibia, las medidas represivas adoptadas por las autoridades sudafricanas contra los namibianos tienen por principal objeto impedir a éstos desarrollar actividades políticas de cualquier naturaleza y dejarlos en la miseria. Así, con ocasión de las elecciones que se celebraron en el "bantustán" de Ovambolandia, se recurrió a medidas de intimidación a fin de obtener el apoyo de los namibianos para la llamada conferencia constitucional, que debía iniciarse el 1º de septiembre de 1975.

13. En cuanto a la situación en Rhodesia del Sur, el Grupo Especial de Expertos deplora que, a pesar de los pretendidos esfuerzos para solucionar el problema de Rhodesia del Sur, el régimen ilegal continúe aplicando medidas represivas, entre ellas el encarcelamiento y detención arbitraria de dirigentes políticos y otros combatientes por la libertad, la práctica del castigo colectivo y los traslados forzosos de poblaciones.

14. Es conveniente recordar que en el último informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1159), el Grupo Especial de Expertos hizo constar con pesar que las autoridades sudafricanas no habían respetado ninguna de las recomendaciones formuladas en informes anteriores y reiteró tales recomendaciones.

15. Se recordará además que, en su 31º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que remitiese las conclusiones y recomendaciones que se derivasen de las investigaciones efectuadas por el Grupo en 1973 y 1974 a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros 1/. El texto de las conclusiones y recomendaciones se transmitió a todos los gobiernos por nota verbal de fecha 3 de junio de 1975.

16. Debe señalarse, por último, que en el curso de las reuniones que el Grupo Especial de Expertos celebró en Ginebra en julio de 1975 y enero de 1976 se cambiaron impresiones sobre la misión que el Grupo debe efectuar en Africa en 1976 con el propósito de reunir elementos de prueba y oír deposiciones sobre la evolución de la situación en las esferas comprendidas en su nuevo mandato.

1/ Las conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial de Expertos figuran en el capítulo V del documento E/CN.4/1159.

Capítulo I

SUDAFRICA

A. Evolución de la política de apartheid y de discriminación racial

1. Pena capital

a) Algunas leyes pertinentes

17. En documentos anteriores del Grupo Especial de Expertos (en particular en E/CN.4/1020, párrs. 73 a 81, y E/CN.4/1111, párrs. 40 a 43), se reproducen o analizan las leyes sudafricanas vigentes que prevén la pena de muerte. En dichos informes se llamaba especialmente la atención acerca de las disposiciones de la Sabotage Act (ley de sabotaje) (General Law Amendment Act, Nº 76 de 1962), y de la Terrorism Act (ley sobre terrorismo) (Nº 83 de 1967) (véanse E/CN.4/1135, párr. 18, y E/CN.4/1111, párrs. 42 y 43).

b) Análisis de la información disponible

18. De conformidad con la información facilitada al Grupo, durante el período de referencia se han celebrado en Sudáfrica dos conferencias de carácter jurídico: la Conferencia bienal de la "Association of Law Societies" y una conferencia sobre el tema "El delito, la ley y la comunidad", en las que se llamó una vez más la atención acerca del número excepcionalmente elevado de delitos sancionados con la pena de muerte, y del gran número de ejecuciones en la República 1/ (véase también el informe anterior E/CN.4/1159, párr. 38). No obstante, y a pesar de estas censuras públicas, el Ministro de Justicia, Sr. Jimmy Kruger, manifestó en julio de 1975 que "no existía posibilidad alguna" de que el Gobierno examinara nuevamente la cuestión de la pena capital 2/. En el mandato de la Comisión de Encuesta del Sistema Penitenciario se excluye igualmente la revisión de esta cuestión (véase más adelante el párrafo 44).

19. Durante los años 1972-1974, los tribunales sudafricanos condenaron a muerte a 241 personas, de las cuales 127 fueron ejecutadas; 46 ejecuciones tuvieron lugar en 1972, 45 en 1973, y 36 en 1974. En marzo de 1975, 77 personas estaban esperando ser ejecutadas (2 blancos, 20 personas de color, y 55 africanos) 3/, habiendo sido ahorcadas 36 sólo en el primer semestre de 1975 4/.

1/ Sunday Times (Johannesburg), 6 de abril de 1975.

2/ Rand Daily Mail, 9 de julio de 1975.

3/ House of Assembly Debates, 21 de marzo de 1975; Observer (Londres), 30 de marzo de 1975.

4/ Cape Times, 24 de julio de 1975.

2. Matanzas y violaciones presuntas del derecho a la vida

a) Muertes en las cárceles o a manos de la policía

20. Según las informaciones que el Ministro de Policía presentó al Parlamento en marzo de 1975, 79 personas fallecieron durante su detención en 1974, y entre las causas enumeradas de estas muertes figuraban 10 casos de "suicidio", 18 de lesiones "cerebrales", 7 de lesiones "internas" o "múltiples", y 9 casos de personas "mortalmente heridas al tratar de fugarse" 5/.

21. Según otros datos facilitados por el citado Ministro, 101 personas, entre ellas 87 africanos, fueron muertas a tiros por la policía "en cumplimiento de su deber" durante 1974 6/.

22. Entre las muertes registradas en las cárceles durante el período de referencia hay que señalar la de un preso político en la Isla de Robben, Alfred Khonza, quien fue sentenciado en 1963 a 20 años de cárcel, pena que fue ulteriormente reducida a 12 años, por haber salido ilegalmente del país para seguir una instrucción militar en el extranjero. Dicha persona fue enterrada en Dimbaza en marzo de 1975, después de su fallecimiento en la cárcel pocas semanas antes de la fecha en que había de ser puesto en libertad 7/.

b) Muertes a raíz de motines y manifestaciones de protesta de trabajadores negros

23. Según las informaciones de que dispuso el Grupo, 131 mineros perdieron la vida durante los disturbios que se produjeron en el período de septiembre de 1973 a marzo de 1975 en las minas de oro y de carbón 8/.

24. En el informe del Grupo correspondiente a 1974 (E/CN.4/1135, párr. 152) se informa acerca de 11 mineros africanos muertos a tiros por la policía en el curso de los disturbios que tuvieron lugar en la mina de Carletonville en septiembre de 1973, habiendo formulado dicho Grupo recomendaciones en 1975 para que el Gobierno indemnizara a las familias de las víctimas 9/. En otro conflicto ocurrido en las minas -el más grave desde el citado anteriormente- 28 mineros resultaron muertos en la mina de carbón de Northfield, en las cercanías de Glencoe (Natal), en marzo de 1975. En la prensa blanca se describió el conflicto como un "motín", y el Ministro de Policía manifestó que se trataba de un "conflicto puramente interno entre basutos y xhosas" 10/.

5/ House of Assembly Debates, 21 de marzo de 1975.

6/ House of Assembly Debates, 6 de septiembre de 1974 y 18 de marzo de 1975.

7/ Archivos del Fondo Internacional de Ayuda y Defensa para Africa Meridional, marzo de 1975.

8/ Sunday Times, 9 de marzo de 1975.

9/ Star, 8 de marzo de 1975.

10/ Rand Daily Mail, 3 de marzo de 1975; en la misma edición de ese periódico se da cuenta detallada de los "asesinatos y agresiones graves registrados diariamente" en las minas desde septiembre de 1973 y marzo de 1975.

25. Entre los incidentes provocados por la policía al disparar sobre muchedumbres, aparentemente desarmadas, hay que señalar el que se produjo en Thaba Nchu (territorio patrio de Bophuthatswana) en julio de 1975. En aquella ocasión resultaron muertos dos africanos y cuatro heridos al disparar la policía en "defensa propia" contra una muchedumbre que protestaba contra la tentativa de las autoridades del territorio, apoyadas por la policía de la República, de imponer limitaciones al número de cabezas de ganado que podían criarse y pastar en las tierras locales 11/.

3. Traslados forzosos de la población

26. De conformidad con las informaciones facilitadas al Grupo, continúan llevándose a cabo en gran escala los traslados de las poblaciones africanas, a medida que el Gobierno procede a la realización de sus programas de segregación territorial de las razas y a la "consolidación" de los "territorios patrios bantúes" (véase más adelante la sección b). El Ministro Adjunto de Administración y Desarrollo Bantúes indicó en febrero ante el Parlamento que un total de 190.794 personas habían sido desplazadas de los "enclaves negros" durante el período transcurrido desde 1948 12/.

27. En los últimos 10 años se han "reasentado" 74.362 personas en nuevos territorios 13/ y en 1974 lo han sido 5.226. Dicho Ministro no pudo dar una cifra del número de personas que quedan por desplazar 14/.

28. Entre los planes de traslados forzosos que a juicio del Grupo han causado conflictos durante el período de referencia cabe citar los siguientes:

- a) El plan de traslado de varios miles de africanos del Cabo Oriental al nuevo poblado de Committeesdrift en el Ciskei (véase el informe anterior E/CN.4/1159, párr. 156). Ya se ha avisado de estos traslados a los residentes de la aldea Fingo (Grahamstown), quienes, según las informaciones de que dispone el Grupo Especial, viven en estos lugares, que son de su propiedad, desde 1855. Las primeras viviendas de la zona de asentamiento no estarán listas hasta 1977 15/.

11/ Cape Times, 7 de julio de 1975.

12/ House of Assembly Debates, 21 de febrero de 1975.

13/ House of Assembly Debates, 2 de septiembre de 1974.

14/ House of Assembly Debates, 14 de febrero de 1975.

15/ House of Assembly Debates, 13 de agosto de 1974; Financial Mail, 5 de julio de 1974, y Cape Times, 2 de septiembre de 1974 y 6 de mayo de 1975.

- b) La amenaza de desplazamiento de 12.000 zulúes de Charlestown (Natal), de las tierras que poseen, pero que actualmente se han declarado tierras "blancas" 16/
- c) El proyectado traslado de 59.800 suazis de las praderas a los distritos de Barberton, Caroline y Ermel, que han de incorporarse al "territorio patrio suazi". Siete jefes tribales han presentado al Comisionado General una petición en nombre de 80.000 suazis que se oponen a este traslado 17/.
- d) El traslado forzoso de varios cientos de familias de Thaba Nchu (Bophuthatswana) a Witsieshoek (Basotho Qwaqwa). Se ha informado de las detenciones de las personas que oponían resistencia a este traslado, y, según las autoridades de Sotho, algunas de las familias desplazadas no eran en modo alguno basutos, sino zulúes y xhosas 18/.
- e) El traslado forzoso de 2.000 chuanas desde Mayen (Cabo Norte) a Vaalboshoek (territorio patrio de Bophuthatswana). Cuando el Jefe Geoffrey Moseki y 900 súbditos suyos abandonaron sus hogares en mayo de 1975 y se levantaron en armas, el Coronel Krige, Comandante del Distrito de Kimberley, los amenazó con hacerles la "guerra" y "matarlos de hambre" si se negaban al traslado 19/.
- f) El plan de traslado de 28.000 africanos de los poblados de Bophelong y Boipatong, en las cercanías de Vanderbijlpark en el Rand, a Sebokeng, al norte de la ciudad, hacia 1985 20/.

4. Trato de los presos políticos y de los combatientes por la libertad capturados

a) Algunas leyes pertinentes

29. En informes anteriores (véase, por ejemplo, E/CN.4/1159, párr. 50), se ha descrito la legislación que rige la detención sin proceso previo, así como las condiciones de los presos en las cárceles. Las disposiciones legislativas en materia de seguridad en virtud de las cuales son sancionados por la ley una amplia gama de actos de tipo político, a veces con penas extremadamente rigurosas, también se han examinado en diversos documentos de que ha dispuesto el Grupo Especial de Expertos y en el informe de éste correspondiente a 1973 (E/CN.4/1111).

30. Durante el período de referencia, esta legislación se modificó en virtud de la segunda General Law Amendment Act, Nº 94 de 1974 (que enmendó la Bantu Administration Act, con arreglo a la cual constituye un delito causar, estimular o fomentar sentimientos de hostilidad entre los grupos de la población, y prevé la imposición de multas de 2.000 rands o penas de dos años de cárcel, o ambas sanciones a la vez) 21/.

16/ Cape Times, 23 de agosto de 1974.

17/ House of Assembly Debates, 27 de agosto de 1974; Star, 31 de agosto de 1974.

18/ Rand Daily Mail, 3 de octubre de 1974.

19/ House of Assembly Debates, 17 de octubre de 1974; Sunday Times, 16 de febrero de 1975; Rand Daily Mail, 20 y 21 de febrero de 1975 y 8 de mayo de 1975.

20/ Rand Daily Mail, 8 de diciembre de 1974.

21/ Survey of Race Relations, 1974 (South African Institute of Race Relations),
pág. 71.

31. La principal disposición legislativa promulgada durante el período de referencia que puede aplicarse a los presos políticos o a los combatientes por la libertad capturados es la Proclamation for Rehabilitation Institutions in the Bantu Homelands, Nº R133, publicada en la Government Gazette de 6 de junio de 1975. De conformidad con esta Proclamación pueden establecerse centros en los territorios patrios, los cuales, no obstante, continuarán estando bajo la jurisdicción del Gobierno de la República. Estos centros se destinarán a la "recepción, readaptación y formación" de las personas internadas en los mismos en virtud de las leyes bantúes Consolidation Act y Bantu Labour Act. El "Black Sash" y otros observadores consideran que cabe introducir grandes modificaciones en esta disposición legislativa; así, señalaron que estas leyes abarcan principalmente la comisión de delitos de orden técnico y de infracciones de la ley de pases, que normalmente entrañan sentencias de hasta tres meses de cárcel; sin embargo, de conformidad con esta ley, estos "delincuentes" pueden ser condenados arbitrariamente a penas de hasta tres años en un centro de rehabilitación "con objeto de mejorar su condición física, mental y moral" 22/. Ciertos especialistas han indicado asimismo que muchas de las disposiciones de la citada Proclamación se han copiado de las disposiciones de la legislación sobre prisiones, en particular la disposición por la que los reclusos sólo pueden recibir determinadas visitas autorizadas, se censura su correspondencia y se limitan las informaciones de prensa acerca de estas instituciones. El Rand Daily Mail ha conceptualizado este proyecto como "un movimiento concertado de lavado de cerebro -"reorientación" es el término oficial- de los africanos para que acepten la ideología de los nacionalistas bantustanes". Además, el artículo 25 de la Bantu Urban Areas Consolidation Act define como africanos "indeseables" a aquellas personas culpables de los delitos que se consideran de carácter político 23/.

32. Los dirigentes de los territorios patrios han expresado sus recelos y en algunos casos su hostilidad al citado proyecto al afirmar su total desconocimiento acerca de las supuestas "consultas" que se les han hecho. El jefe Buthelezi de Kwazulu ha manifestado que le inquietaban sumamente los citados centros de rehabilitación, añadiendo: "No sé por qué ha de plantearse el problema de los transgresores de la ley de pases". El profesor Ntsanwisi, Primer Ministro de Gazankulu, se ha expresado en estos términos: "Es más que un centro de rehabilitación: más bien se asemeja a una cárcel". En tanto que los Gobiernos de Lebowa y de Ciskei -en donde se pretende que ya se han construido dos centros de esta naturaleza- manifestaron asimismo que desconocían en absoluto la realización de este proyecto 24/. El Primer Ministro del Gobierno de Bophuthatswana -que es el tercer Gobierno al que, según el Ministro de Asuntos y Desarrollo Bantúes, se ha consultado acerca de este programa- manifestó que su Gobierno se "oponía radicalmente" al proyecto, y que no permitiría el establecimiento de ningún centro dentro de las fronteras de Bophuthatswana 25/.

22/ Rand Daily Mail, 19 de julio de 1975.

23/ Rand Daily Mail, 22 de julio y 5 de agosto de 1975.

24/ Rand Daily Mail, 22 de julio de 1975.

25/ Rand Daily Mail, 5 de agosto de 1975.

b) Análisis de la información recibida

33. No se publicaron tampoco durante 1974 cifras completas sobre las detenciones efectuadas de conformidad con las diversas leyes de seguridad. En septiembre de 1974, el Ministro de Policía declaró que no se había detenido a nadie durante los primeros seis meses de ese año en virtud del artículo 6 de la Terrorism Act 26/. En febrero de 1975, el citado Ministro confirmó que algunas personas habían sido detenidas en virtud de aquella ley después de haberse prohibido la reunión pro FRELIMO en septiembre de 1974 27/. Posteriormente, en marzo de 1975, el Procurador General, Doctor Percy Yutar, indicó que se encontraban todavía detenidas 26 personas, aunque dijo que no conocía "siquiera sus nombres" 28/. En aquel entonces, 12 personas detenidas ya habían sido encausadas, de suerte que había probablemente un total de 38 personas detenidas de conformidad con la Terrorism Act en septiembre del citado año 29/.

34. Según el Rand Daily Mail, otras 11 personas, por lo menos, fueron detenidas en Soweto y en los poblados de personas de color de los alrededores de Johannesburgo, durante el período de febrero a abril de 1975, citando dicho periódico los nombres de los detenidos y describiendo las detenciones de madrugada de cada una de esas personas 30/. A algunos de los detenidos se les acusaba de haber tenido contactos con el movimiento de estudiantes negros.

35. En abril de 1975, en un documento publicado por la South African Student's Organisation (SASO) se da los nombres de 24 miembros de organizaciones africanas -South African Student's Organisation, Black People's Convention, Black Community Programme, Black Allied Worker's Union, Theatre Council of Natal y People's Experimental Theatre- que fueron detenidos en noviembre de 1974, la mayor parte de los cuales continúan encarcelados 31/.

36. En mayo de ese mismo año, el Star dio los nombres de 14 personas detenidas de conformidad con la Terrorism Act que al parecer seguían detenidas en Johannesburgo, señalando que diez personas más se encontraban asimismo detenidas en Pretoria 32/.

26/ House of Assembly Debates, 27 de septiembre de 1974.

27/ House of Assembly Debates, 4 de febrero de 1974.

28/ Star, 15 de marzo de 1975.

29/ Rand Daily Mail, 10 de marzo de 1975.

30/ Rand Daily Mail, 5 de abril de 1975.

31/ "Second report on arrests, detentions and trials of members and supporters of SASO, BPC, BCP, BAWU, Tecon and PET" (publicado por SASO, abril de 1975).

32/ Star, 24 de mayo de 1975.

37. En septiembre de 1975, el Rand Daily Mail afirmaba que continuaban detenidas 38 personas, de conformidad con la misma ley, y otras 15, en virtud de la General Law Amendment Act, en Africa sudoccidental. En el mismo periódico se indicaba que de las personas detenidas, 31 eran africanos, 9 blancos, 17 personas de color y 2 indios, figurando en este grupo 5 mujeres. Asimismo se daban los nombres de la mayor parte de las personas detenidas, incluidos los de 7 de ellas que al parecer habían estado encarceladas durante casi un año 33/. A fines del citado mes, dicho periódico estimaba que se encontraban detenidas 68 personas, por lo menos, de conformidad con la Terrorism Act, algunas de las cuales se encontraban incomunicadas; entre los presos figuraban 21 namibios 34/.

38. En el curso de una ola de detenciones que se desencadenó en agosto de 1975, 12 personas fueron encarceladas de conformidad con las disposiciones de la Terrorism Act, entre las cuales figuraban el poeta laureado "afrikaans" Breyten Breytenbach, que habitualmente vive en París; la Sra. Clara Rohm, cuyo esposo era un científico que trabajaba en la Junta en Energía Atómica; el Sr. Karel Tip, Presidente de NUSAS; los estudiantes Glenn Moss y Gerry Mare, y el periodista Lawrence Dworkin 35/.

39. Se han formulado otras acusaciones de malos tratos infligidos a los presos políticos durante el período que se examina. Más adelante, en el párrafo 58 se hace referencia a las acusaciones de torturas a que fueron sometidos durante los interrogatorios los acusados del proceso de la SASO. En febrero de 1975, un portavoz del Departamento de Prisiones declaró que el Sr. Sathaisivan Cooper, antiguo funcionario de relaciones públicas de la Black People's Convention, que se encontraba detenido desde la celebración, en septiembre de 1974, de la reunión pro FRELIMO, había sufrido un colapso en la cárcel central de Pretoria, en donde se le había sometido a tratamiento por "síntomas de convulsiones" 36/.

40. El Ministro de Justicia presentó al Parlamento, en febrero de 1975, las siguientes cifras de condenas de conformidad con las diversas leyes de seguridad durante 1974 37/.

	Blancos	Personas de color	Asiáticos	Africanos
<u>General Law Amendment Act</u> (<u>Sabotage Act</u> , 1962)	0	0	0	1
<u>Suppression of Communism Act</u>	2	2	1	7
<u>Terrorism Act</u>	0	0	0	1

33/ Rand Daily Mail, 3 de septiembre de 1975.

34/ Rand Daily Mail, 13 de septiembre de 1975.

35/ Rand Daily Mail, 23, 27, 30 y 31 de agosto de 1975.

36/ Cape Times, 6 de febrero de 1975.

37/ House of Assembly Debates, 7 de febrero de 1975.

41. El citado Ministro presentó las siguientes cifras de personas que habían cumplido sus respectivas condenas de conformidad con las diversas leyes de seguridad al 1º de enero de 1975 38/:

	<u>Blancos</u>	<u>Personas de color</u>	<u>Asiáticos</u>	<u>Africanos</u>
<u>General Law Amendment Act, 1962</u>	7	3	9	219
<u>Suppression of Communism Act</u>	0	0	0	4
<u>Unlawful Organisations Act</u>	0	0	0	8
<u>Terrorism Act</u>	2	3	4	61

42. Según la información de que dispuso el Grupo, 96.587 personas se encontraban encarceladas en Sudáfrica en octubre de 1974 (no se especificaban las razas a que pertenecían las personas condenadas). En 1968-1969, fueron encarcelados 352.435 africanos y 71.867 africanas, y en 1972-1973, 234.913 africanos y 58.534 africanas 39/.

43. Sin embargo, en el informe del Departamento de Prisiones, publicado en mayo de 1975, se indicaba que el promedio diario de presos durante el año que finalizó el 30 de junio de 1974 arrojó el máximo registrado hasta entonces, de 98.851 personas, lo que suponía un aumento de un 10% aproximadamente en el curso de los últimos diez años. Durante el año de referencia se registró una cifra total de 625.000 presos. De las 342.000 personas condenadas a penas de cárcel, 288.000 eran negros; 45.000, personas de color; 7.000, blancos y 1.500, asiáticos 40/.

44. En octubre de 1974 se estableció una Comisión de Encuesta del Sistema Penitenciario, bajo la presidencia del Juez Viljoen, y su mandato consistía "en realizar una encuesta sobre el sistema penitenciario de la República Sudafricana y formular recomendaciones para su mejora, quedando entendido que no investigaría la cuestión de si se debía continuar aplicando o no la pena capital" 41/.

45. Los familiares de los presos políticos se prepararon inmediatamente para quejarse a la citada Comisión de Encuesta por las restricciones especiales impuestas a esos presos (véase más adelante el párrafo 49) 42/.

38/ Ibid.

39/ House of Assembly Debates, octubre de 1974.

40/ Star, 17 de mayo de 1975.

41/ Government Gazette, Nº 4446, 18 de octubre de 1974.

42/ Sunday Times, 20 de octubre de 1974.

46. No obstante, el Ministro de Prisiones manifestó claramente que no se realizaría una encuesta general sobre las condiciones prevalecientes en las cárceles de Sudáfrica, pretextando que "llevaría mucho tiempo efectuar una investigación de las 242 cárceles de la República" 43/.

47. En febrero de 1975 se anunció que la Comisión había rechazado el testimonio de Bram Fischer y de otros siete presos políticos sobre las condiciones en que se encontraban detenidos, ya que, según las palabras del Juez Viljoen, las "condiciones de los presos políticos... rebasan el alcance de la encuesta de mi Comisión" 44/.

48. Un portavoz del Departamento de Prisiones anunció en febrero de 1975 que este Departamento podría tomar medidas contra cualquier preso que infringiese los reglamentos en sus peticiones dirigidas a la Comisión de Reforma Penitenciaria 45/. Y el Ministro de Justicia manifestó claramente que el testimonio presentado por Bram Fischer constituía un elemento desfavorable para la decisión de su futuro (véase más adelante el párrafo 53) 46/.

49. La Sra. Helen Suzman resumió ante el Parlamento, en octubre de 1974, las restricciones impuestas a los presos políticos en comparación con los presos de derecho común, citando en particular la inexistencia de la remisión de condena, la falta de acceso a las publicaciones periódicas o a otras fuentes de información, la censura de libros y de correspondencia, las dificultades para realizar estudios, y la limitación de los privilegios en materia de visitas y de correspondencia 47/.

50. El Ministro de Prisiones anunció en mayo de 1975 que permitiría la publicación de las fotografías de los presos en la prensa (lo que es ilegal sin esta autorización, en virtud de la Prisons Act, de 1959) "bajo ciertas condiciones" 48/. Solamente se autorizó que apareciera en la prensa una fotografía de Bram Fischer después de su fallecimiento (véase más adelante el párrafo 53).

51. El Gobierno dispuso en enero de 1975, que, en determinadas circunstancias, se examinarían las demandas formuladas por los dirigentes de los territorios patrios de poner en libertad a los presos políticos si las mismas se hacían en nombre de cada preso y si eran "consecuentes desde el punto de vista étnico" 49/.

52. Por otra parte, en los comunicados oficiales se declaró reiteradamente que Nelson Mandela no sería puesto en libertad 50/.

43/ Rand Daily Mail, 25 de octubre de 1974.

44/ Rand Daily Mail, 4 de febrero y 12 de abril de 1975.

45/ Rand Daily Mail, 22 de febrero de 1975.

46/ Rand Daily Mail, 31 de enero de 1975.

47/ House of Assembly Debates, 24 de octubre de 1974, columna NB, págs. 6294 y ss.

48/ Cape Times, 10 de mayo de 1975.

49/ Rand Daily Mail, 15 de enero de 1975.

50/ Rand Daily Mail, 31 de enero de 1975.

53. En diciembre de 1974 se informó que Abram Fischer, distinguido jurista sudafricano de 66 años de edad y dirigente del Partido Comunista Sudafricano, condenado en 1966 a cadena perpetua por "conspirar para cometer sabotaje" padecía de cáncer. Tanto en Sudáfrica como en el extranjero se hicieron inmediatamente peticiones por su liberación, entre ellas un llamamiento del Embajador Edwin Ogbu, Presidente del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid. Estas peticiones fueron desestimadas en diciembre por el Gobierno de Sudáfrica, a pesar de las súplicas presentadas por las dos hijas del abogado Fischer (su único hijo había fallecido mientras el Sr. Fischer estaba en la cárcel) al Ministro de Justicia y al Primer Ministro, y a pesar de los repetidos informes acerca del agravamiento del estado de salud del Sr. Fischer. Se autorizó a sus hijas a visitarlo periódicamente, pero fue necesario esperar hasta el mes de marzo para que se permitiese al Sr. Fischer salir del hospital e instalarse con su hermano, el Dr. Paul Fischer, en Bloemfontein. El Ministro dejó claramente sentado que el abogado Fischer seguiría preso y no podría recibir visita alguna sin autorización del Departamento de Prisiones. Sólo se autorizó a visitarlo a los miembros más cercanos de su familia. Murió el 8 de mayo de 1975. Se dio orden a la familia de restituir sus cenizas, después del funeral, al Departamento de Prisiones. Se permitió a la prensa que publicase una sola fotografía 51/.

54. A raíz de una conversación telefónica recibida por un periódico, en que se decía que Govan Mbeki, uno de los acusados de Rivonia condenado a cadena perpetua, que se encuentra actualmente en la isla de Robben, estaba gravemente enfermo, el Departamento de Prisiones se negó a proporcionar información alguna acerca de su estado de salud. El portavoz del Departamento dijo que no era costumbre de ese Departamento referirse a la salud de los presos 52/.

55. En el período que se examina, se comprobó una vez más la violencia en la vida diaria de las cárceles. Con arreglo a la información de que dispone el Grupo hubo por lo menos 230 investigaciones departamentales entre enero y septiembre de 1974 53/ sobre supuestas agresiones de los guardias contra los presos, y 40 personas fueron declaradas culpables. Tras la condena del guardia Potgieter de la

51/ Sunday Times, 4 de agosto de 1974; Rand Daily Mail, 5 de diciembre de 1974; Sunday Times, 8 de diciembre de 1974; Rand Daily Mail, 9 y 18 de diciembre de 1974; Times, 12 de diciembre de 1974; Morning Star, 23 de diciembre de 1974, Guardian, 23 de enero de 1975; Rand Daily Mail, 3, 24 y 26 de febrero de 1975; Morning Star, 11 de marzo de 1975; Cape Times, 11 de marzo de 1975; Star, 15 de marzo de 1975; Rand Daily Mail, 11 de marzo de 1975; House of Assembly Debates, 5 de febrero de 1975; Cape Times, 9 de mayo de 1975; Guardian, 9 de mayo de 1975; Times, 10 de mayo de 1975. En la Dependencia de Apartheid de las Naciones Unidas (Notas y documentos Nº 8/75) se publicaron extractos de la declaración formulada por Bram Fischer en su juicio, en 1966, desde el banquillo de los acusados.

52/ Rand Daily Mail, 10 de septiembre de 1975.

53/ Sunday Times, 30 de octubre de 1974.

cárcel de Leeukop (véase el informe de 1975, E/CN.4/1159, párr. 86), el Ministro de Prisiones envió una nota en la que expresaba su "enérgica desaprobación" ante las agresiones contra los presos. Pero, al parecer, el hecho de haber sido condenado no impidió en modo alguno que el Sr. Potgieter fuese ascendido a capitán 54/.

Los procesos "Schlebusch"

56. A pesar del éxito obtenido por los acusados, que tras haber sido condenados por negarse a declarar ante la Comisión Schlebusch, habían apelado en 1974 ante la Corte Suprema, el Estado ganó una nueva apelación ante la Appellate Division en el caso del Dr. Beyers Naude, Director del Christian Institute. La audiencia de la Corte Suprema para examinar la apelación del Dr. Naude se celebró en marzo 55/. El Rev. Theo Kotze fue también acusado por negarse a declarar; objetó el secreto de las audiencias de la Comisión y expresó el temor de que pudiese abusarse de las pruebas 56/. El juicio se aplazó hasta el 3 de octubre, después del resultado de la apelación de Naude 57/.

57. En mayo de 1975 la Comisión informó acerca del Christian Institute, acusándolo de apoyar un "cambio violento" en Sudáfrica y acusando a sus dirigentes de adoptar estrategias características de las "técnicas socialistas revolucionarias". Llegó a la conclusión de que, como el Instituto obtenía el 91% de sus fondos en el extranjero, tenía que obedecer las consignas de sus patrocinadores extranjeros 58/. El mes siguiente, el Primer Ministro declaró que el Instituto era una organización "intervenida" con arreglo a la Affected Organisations Act (véase E/CN.4/1159, párrs. 183 y 184), excluyéndolo así de sus fuentes de apoyo en el extranjero 59/.

Juicio por terrorismo contra miembros de la SASO

58. Trece de los miembros de la SASO y otras organizaciones de negros detenidos tras la reunión celebrada en apoyo del FRELIMO en septiembre de 1974 comparecieron en varias oportunidades ante los tribunales entre el 31 de enero y el 13 de marzo de 1975 60/ (véase el documento E/CN.4/1159, párr. 79 y el anterior párr. 33 del presente documento). En el sumario de 105 páginas se los acusa de varios delitos

54/ House of Assembly Debates, 15 de octubre de 1974.

55/ Para los antecedentes de la Comisión Schlebusch, véanse los informes anteriores E/CN.4/1135, párr. 151, E/CN.4/1159, párr. 78; Rand Daily Mail, 26 de marzo de 1975.

56/ Cape Times, 11 de marzo de 1975; Rand Daily Mail, 11 de marzo de 1975.

57/ Star, 16 de marzo de 1975.

58/ Times, 28 de mayo de 1975.

59/ International Herald Tribune (que cita al New York Times), 7 y 8 de junio de 1975.

60/ Rand Daily Mail, 13 de marzo de 1975.

en virtud de la Terrorism Act 61/. Tras las peticiones de la defensa de que se dieran más detalles con respecto a las acusaciones 62/, el Juez Boshoff exigió del Gobierno que suministrase algunos detalles 63/. El 11 de junio, considerando que la acusación era todavía "vaga" 64/ se aplazó nuevamente la causa. Durante el aplazamiento el Gobierno desistió de las acusaciones formuladas contra dos de los acusados 65/. Por último, cuando se inició el juicio en el mes de agosto, ya no había, de hecho, más que nueve acusados 66/. De las trece personas acusadas en un principio, dos habrían de comparecer como testigos y ser acusados en virtud de la Riotous Assemblies Act 67/. El defensor alegó que los acusados habían sido sistemáticamente golpeados y torturados durante el interrogatorio y que sus declaraciones no se podían admitir como prueba porque habían sido arrancadas bajo la tortura 68/.

59. Tras la reunión celebrada en apoyo del FRELIMO en septiembre de 1974, dieciocho miembros de la SASO y otras organizaciones de negros debían ser enjuiciados en agosto de 1975 con arreglo a la Riotous Assemblies Act. Cuatro de ellos, que al parecer estaban en libertad bajo fianza, no comparecieron, y se dictaron las órdenes consiguientes para su detención 69/.

Proscripciones

60. Con arreglo a los artículos 1 y 10 de la Second Bantu Laws Amendment Act Nº 71 de 1974, la faculta de declarar proscritos a organizaciones e individuos se hizo extensiva a los gobiernos de los "territorios patrios". Aunque los poderes legislativo y ejecutivo de la República se sigan ejerciendo en las zonas de los "territorios patrios", los gobiernos de los mismos pueden proscribir toda organización en que haya miembros africanos, proscribir el fomento de los objetivos de una organización de esa índole, imponer limitaciones a todo funcionario africano de una organización de esa índole, restringir la presencia de un africano en cualquier lugar determinado, y prohibir la publicación de cualquier declaración de un africano. Pero el gobierno de un "territorio patrio" sólo podrá actuar con el consentimiento previo del Ministro de Administración y Desarrollo Bantú 70/.

61/ "Second report on arrests, detentions and trials of members and supporters of SASO, BPC, BCP, BAWU, Tecon and PET" (publicado por la SASO en abril de 1975), pág. 6.

62/ Cape Times, 6 de mayo de 1975.

63/ Rand Daily Mail, 17 de mayo de 1975.

64/ Rand Daily Mail, 12 de junio de 1975.

65/ Rand Daily Mail, 24 de junio de 1975.

66/ Rand Daily Mail, 13 de agosto de 1975.

67/ Sunday Express, 23 de marzo de 1975.

68/ Rand Daily Mail, 13 y 18 de septiembre de 1975.

69/ SASO, op. cit., págs. 4 y 5.

70/ Survey of Race Relations, 1974 (South African Institute of Race Relations), pág. 69.

61. El 31 de diciembre de 1973, había en vigor 164 edictos de proscripción en virtud de la Suppression of Communism Act de 31 de diciembre de 1973 71/.

62. En 1973, 62 personas fueron proscritas en virtud de leyes sobre seguridad, tras haber cumplido sentencias de prisión, y 30 lo fueron en el primer semestre de 1974 72/.

Censura

63. Entre las revistas proscritas en 1975, cabe citar Randwagon, editada por el Rev. Theo Kotze y otros (véase el anterior párrafo 56) y Varsity, revista del consejo representativo de estudiantes de la Universidad de la ciudad de El Cabo 73/.

64. El director del Daily News, Durban, acusado en virtud de la Riotous Assemblies Act de hacer publicidad en favor de una reunión proscrita pro FRELIMO en septiembre de 1974, fue absuelto en enero de 1975 74/.

65. Treinta y uno de los principales escritores en afrikaans decidieron constituir una asociación literaria afrikaans para luchar contra la censura 75/.

5. Disparidad entre los salarios de los trabajadores blancos y negros y bajos salarios de los trabajadores negros

66. Según la información de que dispone el Grupo Especial de Expertos, en el período que se examina los trabajadores negros han obtenido aumentos de salarios. No obstante, esos aumentos iban generalmente acompañados de otros aumentos mayores para los trabajadores blancos así como de un encarecimiento creciente del costo de vida, de modo que la diferencia de salarios entre los trabajadores negros y blancos prácticamente no se ha modificado y la inmensa mayoría de los trabajadores negros siguen viviendo por debajo del umbral admitido de pobreza.

67. Como en años anteriores, las tentativas de los trabajadores africanos por organizar sindicatos tropezaron con muchas dificultades, incluidas la proscripción y la detención de dirigentes sindicalistas, aunque un pequeño número de empresas haya empezado a aceptar la idea de sindicatos negros. Las huelgas de trabajadores negros se han seguido combatiendo, deteniéndose y despidiéndose a los huelguistas.

71/ House of Assembly Debates, 9 de agosto de 1974.

72/ House of Assembly Debates, 17 de septiembre de 1974.

73/ Rand Daily Mail, 22 de marzo de 1975.

74/ Cape Times, 24 de enero de 1975.

75/ Guardian, 14 de julio de 1975.

68. La política del Gobierno consiste, según el Sr. Marais Viljoen, Ministro del Trabajo, en no reconocer sindicato africano alguno, teniendo los trabajadores africanos que recurrir al mecanismo de enlace establecido por el Gobierno que todavía no se ha puesto plenamente en práctica. Los empleadores deben establecer comités de trabajo o de enlace con arreglo a la Bantu Labour Relations Regulation Act de 1973 76/.

69. En septiembre de 1974 el Ministro del Trabajo comunicó al Parlamento que, desde 1973 se habían establecido 189 comités de trabajo y 1.230 comités de enlace con arreglo a la Bantu Labour Relations Regulation Act 77/.

70. De todos modos, los sindicatos africanos tienden a considerar a estos comités como dispositivos destinados a entorpecer el desarrollo del sindicalismo africano.

71. En agosto de 1975 se anunció que los acuerdos salariales entre empleadores y trabajadores negros y comités de enlace obligarían jurídicamente a las partes a partir de 1976. Según el Departamento del Trabajo, 2.112 comités contaban entre sus miembros a 587.000 trabajadores negros 78/.

72. Según la información de que dispone el Grupo, las diferencias de salarios seguían aumentando a pesar de los incrementos de los salarios de los trabajadores negros. El cuadro siguiente representa el salario medio mensual de blancos y africanos en abril de 1975, comparado con las cifras de abril de 1973, que figuran entre paréntesis 79/.

SECTOR	Blancos (Rands)	Africanos (Rands)	Efectivos de la mano de obra
Minas y canteras	R593 (R405)	R67 (R27)	620 623 (684 054)
Manufacturas	R486 (R376)	R100 (R67)	1 343 500 (1 260 100)
Construcción	R472 (R376)	R95 (R67)	419 800 (384 700)
Electricidad	R554 (R404)	R116 (76)	31 900 (28 100)
Ferrocarriles de Sudáfrica	R493 (R365)	-- --	248 135 (229 559)

76/ Rand Daily Mail, 15 de agosto de 1974.

77/ House of Assembly Debates, 20 de septiembre de 1974.

78/ Star, 9 de agosto de 1975.

79/ Rand Daily Mail, 15 de agosto de 1975.

MANUFACTURAS	Blancos (Rands)	Africanos (Rands)	Efectivos de la mano de obra
Grupos principales:			
Alimentos	R446 (R343)	R91 (R58)	152 000 (138 300)
Bebidas	R430 (R357)	R108 (R75)	27 200 (26 000)
Tabaco	R434 (R348)	R117 (R84)	3 900 (4 100)
Tejidos	R484 (R396)	R82 (R53)	97 000 (93 800)
Prendas de vestir	R471 (R371)	R79 (R66)	129 700 (127 800)
Calzado	R450 (R356)	R96 (R74)	34 800 (36 100)
Madera y corcho	R464 (R323)	R72 (R52)	64 900 (60 800)
Muebles	R486 (R370)	R91 (R72)	38 900 (37 200)
Papel y productos de papel	R506 (R402)	R116 (R86)	32 900 (32 200)
Cuero y objetos de cuero	R444 (R337)	R89 (R63)	8 100 (7 800)
Productos de caucho	R471 (R432)	R114 (R81)	23 400 (22 800)
Productos químicos	R510 (R399)	R97 (R71)	71 900 (68 000)
Productos minerales no metálicos	R486 (R374)	R93 (R61)	107 400 (101 800)
Metales básicos	R541 (R396)	R115 (R72)	95 100 (89 100)
Productos de metal	R493 (R396)	R103 (R72)	154 900 (145 800)
Maquinaria	R506 (R384)	R123 (R77)	73 100 (65 400)
Maquinaria eléctrica	R462 (R359)	R125 (R82)	51 700 (47 100)
Equipo de transporte	R475 (R371)	R121 (R83)	90 300 (80 600)
Varios	R486 (R392)	R95 (R70)	50 600 (48 100)

73. Varios estudios oficiales o particulares ofrecen pruebas abrumadoras de las diferencias de salarios, en particular los estudios realizados por el Institute of Personnel Management 80/, en los que se demostró que los trabajadores blancos ganaban el 34% más que los trabajadores negros que efectuaban el mismo trabajo; y por el Market Research Africa, en que se establecía que entre 1962 y 1973 los salarios de los blancos habían aumentado en un 101% y los de los negros en un 120%, con lo cual el ingreso medio de un hogar blanco se había elevado de R258 a R519 mensuales, mientras que el ingreso medio de un hogar negro se elevó de R25 a R55 mensuales 81/.

74. El Financial Mail estimaba en febrero de 1975 que, de hecho, la distribución de los ingresos entre las razas había cambiado muy poco desde la primera guerra mundial, correspondiendo todavía cerca del 75% a los blancos y menos del 20% a los negros 82/.

75. Los aumentos de sueldos en la Administración Pública, anunciados en 1974, de poco sirvieron en la práctica para reducir las diferencias 83/, y en octubre los empleados africanos seguían esperando sus aumentos mientras que otros empleados habían recibido ya los suyos 84/.

76. El Ministro de Transportes manifestó que, al 31 de diciembre de 1974, el promedio de salarios pagados anualmente a los empleados de los ferrocarriles sudafricanos era el siguiente 85/:

	<u>Rands</u>	<u>Número de empleados</u>
Blancos	5 153	89
Personas de color	1 343	76
Indios	1 479	12
Bantúes	1 092	72

77. Con arreglo a la información de que dispone el Grupo, existen diferencias análogas en los salarios que paga la policía sudafricana 86/:

"La escala de sueldos de los agentes de policía negros empieza en R65 mensuales y llega a R175. Los sueldos de las personas de color y de los indios van de R97,50 a R225 mensuales, y los agentes de policía blancos con una instrucción del nivel del décimo grado empiezan con un sueldo de R175 (lo que percibe un negro al final de su carrera) y llega a R365 mensuales."

80/ Cape Times, 23 de agosto de 1975.

81/ Star, 3 de agosto de 1975.

82/ Financial Mail, 21 de febrero de 1975.

83/ Cape Times, 10 y 13 de julio de 1974.

84/ Rand Daily Mail, 31 de octubre de 1974.

85/ House of Assembly Debates, 11 de febrero de 1975.

86/ Star, 26 de abril de 1975; véase asimismo House Assembly Debates, de 9 de agosto de 1974.

78. En marzo de 1975 se informó de que los trabajadores sociales negros estaban abandonando la profesión debido a la discriminación existente en materia de sueldos con respecto a trabajadores blancos y a las malas condiciones en que debían trabajar. En muchos casos, después de 20 años de servicios, los negros no llegan a ganar lo que percibe un blanco al comienzo de su carrera 87/.

79. El Presidente de la Junta Central de Trabajo Bantú pidió en marzo a la Junta de Salarios que aumentase de R8,60 a R20 por semana los sueldos de los trabajadores no especializados empleados por los ayuntamientos 88/.

Niveles de pobreza

80. Según la información de que dispone el Grupo, los salarios medios percibidos por los empleados públicos negros seguían siendo inferiores a principios de 1975 al nivel oficial de pobreza. El nivel oficial de pobreza oscilaba entre R82 y R104 mensuales según las regiones, pero los empleados públicos negros no especializados estaban percibiendo R75,17 y los empleados de correos R77,17 89/.

81. De cada diez africanos que trabajan en la industria, ocho perciben también un sueldo inferior al nivel oficial de pobreza, calculado por la Oficina sudafricana de investigación del mercado en junio de 1975 en R99 mensuales para un hogar urbano de cinco o seis personas 90/.

82. Las pruebas presentadas al Grupo Especial indican asimismo que los salarios de los negros no siguen el ritmo de la inflación en la República. La Oficina de investigación del mercado calculó que un hogar negro necesitaría en febrero de 1975 un ingreso superior en un 20% al que percibía en mayo de 1974 para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, y que el precio de los alimentos había subido en ese período en un 25% 91/.

83. El Sr. F. van Wyk, Director del South African Institute of Race Relations, calculó en el mes de mayo de 1975 que en Johannesburgo 500.000 africanos vivían por debajo del nivel oficial de pobreza 92/.

87/ Star, 15 de marzo de 1975.

88/ Rand Daily Mail, 12 de marzo de 1975.

89/ Star, 8 de marzo de 1975.

90/ Sunday Express, 8 de junio de 1975.

91/ Financial Gazette, 25 de abril de 1975.

92/ Rand Daily Mail, 27 de mayo de 1975.

84. Sin embargo, todavía peor que la condición de los trabajadores urbanos, es la de los trabajadores de las llamadas "zonas limítrofes", que rodean a los "territorios patrios bantúes", establecidas de conformidad con la política de "descentralización" del Gobierno. Investigadores de la Comisión NUSAS de salarios, procedentes de la Universidad de Witwatersrand, comprobaron que, a fines de 1974, había en Babalegi, en las afueras de Pretoria, salarios que ascendían apenas a R2,44 por 43 horas semanales de trabajo, y que el salario medio total de la zona no era más que de R7,66. El nivel local de pobreza de la zona era de R16,82 semanales. Las disposiciones de la Wages Act sobre el salario mínimo no se aplican en los territorios patrios 93/. El personal de servicio doméstico de las zonas limítrofes del Cabo Oriental trabajaba 208 horas mensuales por 14,5 céntimos por hora, es decir que percibían R30 al mes 94/.

Reserva de empleos

85. La escasez de mano de obra blanca capacitada sigue siendo un obstáculo para la aplicación de la política oficial de reserva de empleos. Se decía que en marzo de 1975 más de 13.000 empleos para "blancos" en el ferrocarril estaban ocupados por negros 95/; y el Consejo Municipal de Johannesburgo recurría a negros "no especializados" para efectuar trabajos normalmente reservados para blancos "especializados" 96/. En junio, el Ministro del Trabajo aseguró a los trabajadores blancos que los trabajos para "blancos" actualmente realizados por negros volverían a estar a cargo de blancos en el caso en que Sudáfrica sufriese una recesión 97/.

86. En un documento que el Grupo tiene ante sí, la Organización Internacional del Trabajo propuso al Gobierno sudafricano cuatro medidas que le permitirían cumplir la promesa que hiciera a las Naciones Unidas de eliminar la discriminación racial 98/. Se trata de las cuatro medidas siguientes: abrogación de las leyes sobre pases de circulación y eliminación progresiva del sistema de mano de obra migratoria; concesión de derechos sindicales a los trabajadores africanos; eliminación de las restricciones para la promoción profesional de los africanos (reservas de empleos, etc.); y eliminación de las disparidades de salarios basadas en la raza o en el sexo 99/.

93/ Rand Daily Mail, 13 de diciembre de 1974; Financial Mail, 13 de diciembre de 1974; Rand Daily Mail, 9 de junio de 1975.

94/ Rand Daily Mail, 24 de febrero de 1975.

95/ Rand Daily Mail, 4 de marzo de 1975.

96/ Rand Daily Mail, 7 de marzo de 1975.

97/ Rand Daily Mail, 24 de junio de 1975.

98/ Rand Daily Mail, 4 de junio de 1975.

99/ Undécimo informe especial del Director General sobre la aplicación de la Declaración referente a la política de "apartheid" de la República Sudafricana (Ginebra, OIT, 1975), pág. 56.

Hostigamiento de dirigentes sindicales africanos

87. En diciembre de 1974 la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) informó al Grupo de la detención de Drake Koka, Secretario General de la Black Allied Workers' Union, y de L. Mabandla, M. Mbeo y S. Cooper, organizadores de la BAWU en Durban. La CIOSL protestaba enérgicamente contra las detenciones y sostenía que los detenidos habían sido objeto de agresiones brutales y de torturas 100/. La denuncia de la CIOSL fue objeto de un informe del Grupo Especial de Expertos al Consejo Económico y Social en su sexagésimo período de sesiones.

88. Según la información de que dispone el Grupo Especial, pese a estos reveses, una de las características del período que se examina ha sido un cierto desarrollo de los sindicatos negros. En julio de 1974, el Financial Mail dio una lista de 22 sindicatos negros con cerca de 40.000 afiliados 101/. A finales del año, la African Engineering and Allied Workers' Union por sí sola proclamaba que el número de sus afiliados se había incrementado en 42% durante el año 102/.

89. Según la información de que dispone el Grupo, en el segundo semestre de 1974 la policía intervino en 69 huelgas y un total de 826 trabajadores fueron acusados a raíz de las mismas 103/.

90. En 1973 hubo en total 246 huelgas en las que participaron trabajadores africanos y en el primer semestre de 1974, hubo 54 104/.

B. Política de los "territorios patrios bantúes"

91. Aunque la situación e historia de los "territorios patrios bantúes" han sido examinadas en anteriores informes del Grupo Especial de Expertos, especialmente en su informe de 1970 (E/CN.4/1050), que hace una reseña de los orígenes de la política de las "reservas indígenas" y su constitución bajo el gobierno actual como "territorios patrios bantúes", ésta es la primera oportunidad en que el Grupo ha examinado la cuestión con referencia al derecho de libre determinación de los pueblos definido y desarrollado por las Naciones Unidas.

92. El Grupo ha emprendido el estudio de esta cuestión teniendo en cuenta las afirmaciones del Gobierno de Sudáfrica de que está ofreciendo a los territorios patrios "independencia política" y de que, en particular, proyecta conceder la "independencia" al Transkei en octubre de 1976.

100/ Comunicación de la CIOSL, contenida en una nota del Secretario General (E/5638 de 18 de marzo de 1975).

101/ Financial Mail, 19 de julio de 1974.

102/ Sunday Times, 8 de diciembre de 1974.

103/ House of Assembly Debates, 21 de febrero de 1975.

104/ House of Assembly Debates, 9 de septiembre de 1974.

1. Antecedentes históricos

93. Se recordará que el establecimiento de "reservas indígenas" por el Gobierno sudafricano tiene sus orígenes en la política tradicional sudafricana de forzar la mano de obra africana al servicio de la economía blanca, limitando al propio tiempo el asentamiento africano en las zonas urbanas. En particular, las "reservas" se establecieron por las leyes sobre tierras, de 1913, que fijaron la proporción de tierra disponible para uso de los africanos, y de 1936, que establecieron los términos para un "arreglo definitivo" de este problema, según los cuales el 13% de la totalidad de la tierra de Sudáfrica sería "reservada" a los africanos, es decir, la tierra que ya ocupaban más unos 6,2 millones de hectáreas, que serían comprados por un Fondo fiduciario creado con tal propósito 105/.

94. Se recordará también que el actual Gobierno Nacionalista, desde que ascendió al poder en 1948, desarrolló una política de "apartheid territorial", y que en 1955 estableció la Comisión Tomlinson con objeto de que informara sobre las condiciones mínimas necesarias para iniciar el desarrollo de las reservas como "territorios patrios bantúes" 106/.

95. Sin embargo, hasta 1962, con el Dr. Verwoerd, entonces Primer Ministro, no comenzó la política actual de territorios bantúes como "Estados autónomos". En ese año, que siguió al aislamiento internacional de Sudáfrica después de Sharpeville, dijo:

"Creo que estos pueblos (los africanos) deben tener sus propios Estados tal como desean... Creo que se darán cuenta de lo que ocurre en el resto de Africa y que esto reforzará los lazos entre nosotros, en vez de impulsarlos a unirse con países extranjeros, lo que provocaría conflictos y caos... Estamos tratando de establecer pequeños Estados negros vecinos, bien organizados y de protegerlos contra tales peligros, estando dispuestos a ofrecerles toda clase de facilidades." 107/

96. Las medidas adoptadas desde entonces de conceder la "autonomía" al Transkei (1963) y establecer otros siete "territorios patrios" en 1972; de convertir a todo africano en ciudadano de un "territorio patrio" viva o no en él (1970); de poner la enseñanza bajo la supervisión del "territorio patrio" (1970); de permitir al Ejecutivo crear, mediante proclamación consejos legislativos en el "territorio patrio" (1971); y de transferir el control interno de las fuerzas de policía a los "gobiernos del territorio patrio", también mediante proclamación (1972); han sido descritas en informes anteriores (en particular E/CN.4/1020, E/CN.4/1111 y E/CN.4/1135).

105/ Véase E/CN.4/1050. Véase también Oxford History of South Africa, Wilson and Thompson, eds. (citado en lo sucesivo como Oxford History), vol. II. cap. II.

106/ Ibid., véase también B. Rodgers, The Bantu Homelands (International Defence and Aid Fund, 1972) págs. 3 y 4.

107/ House of Assembly Debates, 23 de enero de 1962, citado en Rodgers, op. cit., pag. 4.

97. En informes anteriores también se han descrito las medidas tomadas con miras a la "consolidación" de la tierra de los territorios patrios. En 1972, KwaZulu todavía constaba de 29 regiones dispersas; Ciskei y Bophthatswana de 19 cada una; y sólo Basotho Qwaqwa constituía una única zona colindante 108/.

2. Repercusiones de la política de los territorios patrios separados sobre el derecho de libre determinación

a) Introducción

98. El derecho de todos los pueblos a la libre determinación se reconoce en la Carta de las Naciones Unidas, que contiene disposiciones que establecen expresamente este derecho, especialmente el Artículo 1, párrafo 2 (Capítulo I, "Propósitos y Principios") y el Artículo 55 (Capítulo XI, "Cooperación Internacional Económica y Social"). Muchas resoluciones y otros instrumentos aprobados por la Asamblea General han precisado que, según la Carta, el derecho de libre determinación se aplica tanto a los territorios en fideicomiso como a los territorios no autónomos.

99. En su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó, el 14 de diciembre de 1960, la resolución 1514 (XV), titulada "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales". Esta Declaración representa una de las más importantes contribuciones que las Naciones Unidas han hecho para formular y desarrollar el concepto del derecho de libre determinación, condenar todas las formas de sujeción de los pueblos a la dominación y explotación extranjeras como una negación del derecho de libre determinación y de los derechos humanos fundamentales, y para fortalecer su acción en relación con la descolonización. El derecho de los pueblos a la libre determinación ha sido reafirmado en el artículo 1 de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (aprobada por la Asamblea General en su resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970) y en la resolución 1803 (XVII) relativa a la "Soberanía permanente sobre los recursos naturales".

100. La Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales fue aprobada sin disenso por la Asamblea General y contiene, entre otros, los siguientes principios:

- a) que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional;
- b) que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales;
- c) que todos los pueblos tienen el derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural;
- d) que deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra los pueblos dependientes;
- e) que en los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no hayan logrado aún su independencia, deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a la población de estos territorios, sin condiciones ni reservas, de conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color;

- f) que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;
- g) que todos los Estados deberán observar fielmente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial.

Con objeto de mantenerse al tanto de la aplicación de esta Declaración, la Asamblea General creó el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, llamado Comité de los Veinticuatro o Comité de Descolonización.

101. El Grupo Especial de Expertos se propone examinar la actual situación económica y social en los territorios patrios, y la afirmación del Gobierno sudafricano de que está fomentando "su independencia", teniendo en cuenta los principios antes mencionados.

- b) Situación económica, política y social en los territorios patrios
- i) Legislación represiva

102. Toda la legislación sobre seguridad (véase la sección A supra) que se aplica a la República, se aplicará también a los territorios patrios; además, el Presidente de Estado como "Jefe Supremo" de todos los africanos en los territorios patrios tiene amplias facultades de arresto y detención, de las que puede hacer uso sin referirse al Parlamento sudafricano 109/. El Presidente de Estado puede también ordenar el traslado de cualquier tribu o parte de una tribu, y sobre esta decisión no cabe recurso ante los tribunales 110/. Asimismo puede prohibir toda reunión o impedir a cualquier persona asistir a la misma 111/.

103. El Ministro de Administración y Desarrollo Bantú puede en cualquier momento deponer a todo jefe o cacique, que en todo caso no es más que un funcionario a sueldo del Gobierno 112/. La mayoría (hasta 74) de los miembros de la actual Asamblea Legislativa Transkei son jefes, solamente 50 miembros son elegidos directamente 113/.

104. La Proclamación R400 de 1960 se aplica todavía en el Transkei y prevé amplias atribuciones de emergencia para prohibir reuniones y detener personas, si bien será "probablemente" derogada con la "independencia" 114/.

109/ Conforme a la ley de la administración bantú de 1927, sección 5 modificada por la ley 42 de 1964.

110/ Ibid.

111/ Ibid.

112/ De acuerdo con la Ley Nº 68 de 1951 sobre las autoridades bantúes: proclamación Nº 180 de 1956; GN, 11 de octubre de 1957.

113/ Ley sobre la Constitución del Transkei de 1963, enmendada en 1975, ley Nº 4628.

114/ Sunday Times, 7 de septiembre de 1975.

105. La segunda Ley Bantú enmendada, de 1974, amplía las facultades para prohibir a organizaciones y particulares de los territorios patrios, siempre que sean africanos, formar parte de los gobiernos de los territorios patrios (véase sección A supra).

106. Estas medidas represivas, junto con los planes anunciados por el Gobierno, durante el período que se examina, de establecer "centros de rehabilitación" en los territorios patrios para poder enviar a los que "cometen faltas" en las zonas blancas, y someterlos a un "tratamiento" (véase sección A supra), deben considerarse teniendo en cuenta las disposiciones para la libre determinación por los pueblos de su propio futuro, a que se refieren los apartados c), d) y e) del párrafo 100 supra.

ii) Consolidación de la tierra

107. Durante el período que se examina se han publicado propuestas "definitivas" para consolidar las 113 zonas diferentes que actualmente constituyen los territorios patrios, en unas 36. Los cálculos acerca del número de africanos que todavía tendrán que ser trasladados conforme a esas disposiciones varían entre 130.000 y 200.000 115/. Se estima que el costo de esas propuestas será de 300 millones a 500 millones de libras y que tomará 10 años el llevarlas a cabo 116/.

108. La fragmentación de los propuestos territorios "independientes", incluido el hecho de que el Transkei, considerado como el más viable económicamente de los "Estados" propuestos, consistirá en dos zonas separadas 117/, deberá examinarse a la luz de los principios a que se refieren los apartados a) y f) del párrafo 100 supra.

109. La consolidación de la tierra sigue siendo uno de los problemas públicos más debatidos entre los jefes de los territorios patrios y las autoridades sudafricanas. Ocho jefes declararon a principios de 1974 que no aceptarían la independencia a menos de que se les concediera más tierra 118/; y en julio de 1975 el jefe Buthelezi dijo que era una farsa pedir la independencia de territorios separados inadecuados para el grupo étnico más importante del país 119/. En agosto de 1975 se anunció que en las conversaciones entre los Gobiernos sudafricano y de Transkei se había "aplazado" la cuestión de la tierra y de los límites territoriales 120/.

iii) Población

110. Las cifras del censo muestran que 8.060.773 "ciudadanos" de territorios patrios viven fuera de esos territorios y que solamente 6.997.179 habitan en ellos 121/.

115/ House of Assembly Debates, 14 de febrero de 1975; Rand Daily Mail, 28 de marzo de 1975; Financial Mail, de 18 de abril de 1975; Financial Times, 25 de febrero de 1975.

116/ Star, 8 de febrero de 1975; Financial Gazette, 21 de febrero de 1975.

117/ Rodgers, op. cit., pág. 15.

118/ Times, Londres, 18 de enero de 1974.

119/ Cape Times, 19 de julio de 1975.

120/ Star, 16 de agosto de 1975.

121/ Muriel Horrell, The African Homelands of South Africa (South African Institute of Race Relations, 1973), pág. 37.

Estas cifras también revelan una desproporción considerable entre el número de hombres y mujeres en cada zona, habiendo aproximadamente un millón más de mujeres que de hombres en los territorios patrios, y aproximadamente un millón de mujeres menos que de hombres en las zonas "blancas" 122/.

111. Estas cifras deben interpretarse habida cuenta de las disposiciones f) y g) del párrafo 100 supra, y del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

iv) Africanización

112. Las cifras relativas a la ampliación de los servicios escolares bajo los gobiernos de los territorios patrios, de las estaciones de policía (50) actualmente administradas por africanos, de fiscales (62) y de magistrados (28) fueron presentadas al Parlamento durante el período que se examina 123/. Se anunció la formación diplomática para funcionarios africanos de los territorios patrios, diez de los cuales se están capacitando para cargos diplomáticos en el Transkei "independiente" 124/. La Bantu Investment Corporation Board, que controla los fondos de inversión en empresas de territorios patrios, sigue estando integrada exclusivamente por blancos 125/.

v) Desarrollo económico

113. No obstante, de acuerdo con la información recibida por el Grupo Especial de Expertos, la crítica fundamental que se hace al sistema de los "territorios patrios independientes" es que no entraña una verdadera modificación de la profunda situación de dependencia económica de las zonas africanas respecto del núcleo de la economía industrializada blanca. Hasta ahora no se han tomado medidas tendientes al "desarrollo" de los territorios patrios, con objeto de cambiar esta situación.

114. En un estudio de las economías de los territorios patrios en poder del Grupo, se indica que un 53% de la población de jure de los territorios patrios vive en las zonas "blancas", cuyos ingresos más altos elevan el ingreso anual per capita a R112; pero que el ingreso per capita de los residentes de los territorios patrios exclusivamente (incluidos los trabajadores emigrantes) fue sólo de R75 en 1966/67. Unos 630.000 africanos varones son emigrantes, es decir, más de un tercio de los hombres que residen normalmente en los territorios patrios 126/.

115. Esa dependencia excesiva del exterior como fuente de ingresos de los territorios patrios va acompañada de una extremada pobreza y malnutrición en todos los territorios patrios, según se indica detalladamente en informes anteriores. El

122/ H. Bernstein, For Their Triumphs and for Their Tears (International Defence and Aid Fund, 1975), pág. 66.

123/ House of Assembly Debates, 17 de marzo de 1975, 16 de agosto de 1974, 6 de septiembre de 1974.

124/ BBC, Londres, 4 de octubre de 1974; Star, 16 de agosto de 1975.

125/ Financial Mail, 12 de julio de 1974.

126/ Gavin Maasdorp, Economic Development Strategy in the African Homelands (South African Institute of Race Relations, 1974). Un estudio posterior de Jill Natrass (Financial Mail, 19 de septiembre de 1975) calcula actualmente una cifra de 1.750.000 a 2 millones de migrantes en Sudáfrica, incluidos hombres y mujeres.

salario industrial medio en 1974 fue de R40 por mes, y los salarios pagados por el mejor empleador de los territorios patrios fue sólo de R2,50 a R3,25 por semana 127/.

116. El estudio citado más arriba menciona ocho factores que contribuyen a la dependencia económica:

- i) Empleo - los territorios patrios son incapaces de proveer suficientes oportunidades de empleo;
- ii) Ayuda presupuestaria - no es probable que ningún territorio patrio pueda satisfacer sus gastos presupuestarios con sus propios ingresos; el 75% es actualmente aprobado por el Parlamento sudafricano;
- iii) Las instituciones financieras están todas en el "núcleo" y sus políticas son dictadas por los intereses del núcleo";
- iv) Empresa y capital están en una situación análoga;
- v) Igual ocurre con la tecnología práctica;
- vi) Transporte - la mayoría de los territorios patrios carecen de litoral, en la actualidad ninguno dispone de puerto y los ferrocarriles sudafricanos y las carreteras ejercen un monopolio sobre el transporte de los territorios dispersos;
- vii) Los demás medios de comunicación, incluida la prensa, telecomunicaciones y radio, están igualmente centrados en el "núcleo";
- viii) La estructura comercial se ajusta a los modelos del "núcleo"; todos los distribuidores y mercados se encuentran en el núcleo 127a/.

El Transkei ha decidido ya seguir formando parte de la Unión Aduanera Sudafricana y de la Zona Monetaria del Rand 128/.

117. Comentando que ni siquiera ha habido un plan de desarrollo para los territorios patrios; Maasdorp concluye que "la viabilidad" del potencial económico de los territorios patrios suscita graves dudas"; y que además "las presiones dentro del partido gobernante mismo son tales que el ritmo de desarrollo de los territorios patrios no puede acelerarse más allá de su ritmo actual. La inversión en los territorios patrios implica una redistribución del ingreso, es decir, que los ingresos de los blancos aumentarán a un ritmo más lento... Varios estudios han demostrado que mientras los partidarios del Gobierno aprueban la asistencia de territorios patrios separados, sólo una minoría es partidaria del desarrollo de los territorios patrios" 129/.

118. Los intentos de estimular las inversiones sudafricanas y extranjeras en los territorios patrios ha tenido hasta la fecha muy poco éxito y se están ofreciendo condiciones más favorables a fin de mejorar esta situación. En 1974, el Gobierno de Sudáfrica anunció que se permitiría a los gobiernos de los territorios patrios fijar

127/ Financial Mail, 25 de octubre de 1974, 11 de octubre de 1974.

127a/ Maasdorp, op. cit., págs. 7 y 8.

128/ Sunday Times, 7 de septiembre de 1975.

129/ Maasdorp, op. cit., pág. 31.

sus propias condiciones para las inversiones^{130/}; La Bantu Investment Corporation (BIC), según el Financial Mail, estaba tratando "por todos los medios" de atraer inversiones, ofreciendo como incentivo a los inversionistas los "bajos salarios" (véase el párrafo 115 supra).

119. La BIC anunció que aspiraba a crear "20.000 puestos de trabajo al año", convirtiéndose en "una propuesta atractiva" el establecimiento de industrias ^{131/}; pero las cifras dadas en el Parlamento durante el período que se examina indican que en total sólo 19.253 africanos fueron empleados en las manufacturas de los territorios patrios ^{132/}, principalmente en empresas de propiedad sudafricana ^{133/}, y 110.000 en servicios del Gobierno; por otra parte, 60.000 obtienen empleo anualmente en el mercado de los territorios patrios ^{134/}.

120. Todos esos hechos en cuanto a la lentitud de la africanización y al retardo del desarrollo económico han de apreciarse teniendo en cuenta los principios mencionados en los apartados b), c) y e) del párrafo 100 supra.

c) La situación de los africanos en los campamentos de tránsito

121. En el **período** que se examina ha habido muy poca información en cuanto a la situación de los africanos en los campamentos de tránsito. Sin embargo, el Grupo ha tenido conocimiento del empeoramiento de las condiciones en un "campamento" de Rooigrond, Bophuthatswana en donde el Gobierno del territorio patrio declina toda responsabilidad en cuanto a las personas desplazadas por la fuerza del territorio "blanco" ^{135/}.

122. El Grupo ha tenido también conocimiento de las malas condiciones reinantes en la zona de reasentamiento de Dimbaza en el Ciskei, pese a que se ha gastado la suma de R350.000 en viviendas, y se proyecta una inversión de R3.000.000 por la Xhosa Development Corporation; se distribuyen raciones de alimentos a 1.450 personas, y el kwashiorkor, la tuberculosis, la sarna y los "trastornos mentales", son comunes ^{136/}.

d) Los verdaderos objetivos de la política de los territorios patrios

123. En un documento preparado en 1975^{137/} por el Congreso Nacional de Sudáfrica para la Organización de la Unidad Africana se resumen los verdaderos objetivos de la política de "los territorios patrios bantúes", en la forma siguiente: a) **legitimar la** distribución desigual de las tierras, b) **excluir permanentemente** a todos los africanos, sean o no residentes de los territorios patrios, del cuerpo político. Señala que: c) los "territorios bantúes" sirven para dividir al pueblo africano según criterios tribales, debilitando así su resistencia contra la opresión; d) también tratan de confundir a la oposición internacional al apartheid; e) al crear una "elite"

^{130/} Financial Mail, 4 de octubre de 1974.

^{131/} Star, 3 de mayo de 1975.

^{132/} House Assembly Debates, 25 de febrero de 1975.

^{133/} 11.249 africanos fueron empleados por empresas sudafricanas, 2.159 por empresas extranjeras en 1974. House Assembly Debates, 19 de agosto de 1974.

^{134/} Rand Daily Mail, 1º de agosto de 1974.

^{135/} Rand Daily Mail, 15 de marzo de 1975.

^{136/} Cape Times, 19 de septiembre de 1974; Rand Daily Mail, 5 de octubre de 1974.

^{137/} Reproducido en Sechaba, junio/julio de 1975.

de gobernantes, funcionarios, hombres de negocios y profesionales en los territorios patrios, el Gobierno blanco espera un baluarte para hacer frente a la rebelión contra el apartheid; y f) "los territorios bantúes están destinados a formar parte del mecanismo de la superexplotación de los trabajadores".

124. En un artículo del Anti-Apartheid News publicado en noviembre de 1975, se pone de relieve la función de los territorios patrios como fuente inagotable de mano de obra migrante barata, y se señala que "la viabilidad económica no se considera como condición previa para la independencia de los territorios bantúes", de suerte que están condenados a "una situación de subordinación económica a Sudáfrica de la cual jamás escaparán" 138/.

e) Perspectivas futuras

125. Según la información en poder del Grupo, el Gobierno de Sudáfrica tiene la intención de seguir adelante con sus planes de "independencia" para los territorios patrios, y, en especial, para el Transkei en octubre de 1976 139/.

126. La "independencia" que se prevé para el Transkei planteará contradicciones tales como el hecho de que los "sudafricanos" tendrán libertad para entrar y salir del Transkei; pero los ciudadanos del Transkei no podrán entrar libremente en territorio "sudafricano" sin estar provistos de un "pase"; y mientras que las escuelas del Estado Transkei serán no raciales, seguirán existiendo en Sudáfrica escuelas exclusivas para "blancos" bajo la administración de la República de El Cabo 140/.

127. Un Transkei "independiente" proyecta solicitar su ingreso como Miembro de las Naciones Unidas y espera intercambiar misiones diplomáticas con países extranjeros 141/.

128. Sudáfrica cuenta con la "cooperación militar" de los territorios patrios bantúes independientes, los cuales "deberán encontrar su lugar en el marco militar de Sudáfrica y no fuera" 142/.

129. Entre las fuentes continuas de conflictos entre el Gobierno sudafricano y las autoridades de los territorios patrios figurarán los problemas de la tierra (véanse los párrafos 107 a 109); la situación de los africanos en las zonas "blancas" incluidos los derechos sindicales y las leyes discriminatorias; y la cuestión de la distribución de ingresos entre blancos y negros 143/.

C. El sistema de trabajo agrícola

Introducción

130. Esta es la primera vez que se ha pedido expresamente al Grupo Especial de Expertos que estudie el sistema de trabajo agrícola en Sudáfrica, aunque en informes anteriores se ha tratado de los salarios y de las condiciones de trabajo en la agricultura (véase, por ejemplo, E/CN.4/1159, anexo 2, testimonio de Joel Carlson, páginas 9 a 12, sobre utilización de mano de obra penitenciaria en la agricultura).

138/ Anti-Apartheid News Londres, noviembre de 1975.

139/ Cf. Summary of Nationalist policy, Survey of Race Relations, 1974 pág. 1 y 2; Survey of Race Relations, 1973, pág. 146.

140/ Sunday Times, 7 de septiembre de 1975.

141/ Sunday Times, 7 de septiembre de 1975.

142/ Star, 26 de abril de 1975.

143/ Cape Times, 6 de agosto de 1975.

131. La información que ha obtenido el Grupo Especial sobre el empleo en la agricultura de Africa del Sur es escasa y contradictoria. Incluso las estadísticas oficiales varían considerablemente, entre el censo decenal de la población, los censos agrícolas periódicos y la información presentada en el Parlamento: por ejemplo, la cifra de 980.000 africanos empleados en la agricultura de los blancos desde el censo de población de 1970 144/ no corresponde con el total de 1.461.620 indicado en el cuadro detallado que figura a continuación 145/. Entre las explicaciones de esta discrepancia cabe citar en general el carácter poco fidedigno de las cifras del censo sobre los africanos en las zonas blancas, donde la situación de muchas personas puede ser "irregular" lo cual constituye un motivo para ocultar la información; y también los factores estacionales -el censo de 1970 se efectuó en mayo, cuando la demanda de mano de obra agrícola está en su nivel más bajo. Sin embargo, todas las fuentes concuerdan en que la agricultura sigue siendo el empleador más importante de mano de obra en la República y que los africanos constituyen más del 82% de la mano de obra agrícola. Estas cifras no incluyen a los familiares de los empleados: el total de la población africana de las zonas rurales de los blancos era aproximadamente de 3,5 millones en 1970 146/.

Empleo en la agricultura al 31 de agosto de 1969

		<u>Africanos</u>	<u>Blancos</u>	<u>De color</u>	<u>Asiáticos</u>
Empleados agrícolas regulares	Hombres	592 364	17 780	93 310	4 302
	Mujeres	112 999	996	9 390	216
	Total	705 363	18 776	102 700	4 518
	%	84,8	0,5	12,4	2,3
Empleados agrícolas ocasionales	Hombres	313 605	1 215	79 601	824
	Mujeres	333 701	575	44 749	1 209
	Total	647 306	1 790	124 350	2 033
	%	83,5	0,3	16,0	0,2
Sirvientes domésticos agrícolas	Hombres	11 746	51	1 557	155
	Mujeres	97 205	241	17 529	265
	Total	108 951	292	19 086	420
	%	84,6	0,3	14,8	0,2
Total general		1 461 620	20 858	246 136	6 971

144/ Citado en: Merle Lipton, White Farming: A Case History of Change in South Africa (South African Institute of Race Relations, 1975), pág. 6.

145/ Rosalynde Ainslie, Masters and Serfs: Farm Labour in South Africa (International Defence and Aid Fund, 1973), pág. 51.

146/ Ainslie, op. cit., 45, Lipton, op. cit., pág. 12.

132. El examen efectuado por el Grupo sobre salarios y condiciones de los trabajadores agrícolas se ha visto también dificultado por el hecho de que los pocos estudios completos, ya sean oficiales o procedentes de organismos académicos o de otro género, se han realizado siempre sobre el terreno. El último estudio detallado, aparte de los informes gubernamentales sobre censo agrícola 147/, sobre las condiciones del trabajo agrícola se efectuó en 1968 en una zona del Cabo Oriental 148/. La contribución más importante en esta esfera desde entonces ha sido el capítulo sobre la agricultura que escribió Francis Wilson para la Oxford History of South Africa 149/.

133. En general, la agricultura constituye un sector atrasado de la economía de Sudáfrica y, a pesar de cierto desarrollo en la explotación agrícola comercial desde la segunda guerra mundial y de cierto grado de mecanización 150/ sigue funcionando con gran densidad de mano de obra; y la demanda de mano de obra barata por parte de los agricultores sigue siendo un fenómeno muy frecuente y periódico en la vida económica y política de la República.

I. Método de reclutamiento de trabajadores agrícolas africanos

a) Antecedentes históricos

134. La demanda de mano de obra negra barata por parte de los agricultores data de los primeros días de la conquista y colonización de los blancos, cuando los colonos ocupaban grandes extensiones de tierra que no podían explotar solos. Los africanos desposeídos se convertían en arrendatarios (aparceros) o en ocupantes sin título en las granjas de los blancos 151/.

135. Se establecieron impuestos en efectivo para obligar a los africanos a ganar dinero en la economía blanca; y las diferentes leyes sobre amos y sirvientes controlaban el movimiento de los trabajadores africanos, y los vinculaba a las explotaciones agrícolas haciendo un delito del abandono de un empleador, la ruptura de un contrato o la desobediencia de una orden "legítima" 152/.

136. Las leyes de pases se promulgaron desde fines del siglo XIX para restringir la entrada de africanos en las ciudades (donde los salarios eran más altos que en las granjas) 153/.

147/ De éstos, los últimos de que dispone el Grupo son los relativos a los años 1968/69, y 1971/72, aunque el Grupo tiene entendido que desde entonces se ha publicado un censo para 1972/73.

148/ Margaret Roberts, Labour in the Farm Economy (South African Institute for Race Relations, 1958).

149/ Oxford History, vol. II: Farming 1866-1966.

150/ En 1967 había 170.000 tractores, o sea, casi dos por explotación; Lipton, op. cit., pág. 5.

151/ Oxford History, vol. I, capítulos VI y IX.

152/ H. J. y R. E. Simons, Class and Colour in South Africa, Londres, 1969, pág. 23; Ainslie, op. cit., págs. 11 y 12.

153/ Oxford History, vol. I, capítulo IX; vol. II, capítulos III, IV y IX; Ainslie, op. cit., pág. 12.

137. Las Land Acts de 1913 y 1936, al limitar las tierras de los africanos, obligaron a más africanos en edad de trabajar a integrarse en la economía blanca 154/.

138. Aunque en las explotaciones agrícolas los salarios eran más bajos que en las ciudades y las condiciones de trabajo eran opresivas, el trabajo rural seguía teniendo la ventaja de que los trabajadores tenían tradicionalmente libertad para vivir con sus familias y generalmente también para cultivar una parcela de terreno o apacentar algo de ganado propio (véase a continuación el párrafo 139).

b) Tipos de trabajo agrícola

i) Arrendatarios^{155/}

139. Tradicionalmente, el trabajo agrícola se basaba en el sistema de arrendamiento en virtud del cual las familias africanas vivían en las tierras de los blancos que pagaban mediante un período convenido de trabajo para el propietario (generalmente seis meses por año). Durante algún tiempo, la política del gobierno ha consistido en sustituir esta mano de obra asentada con trabajadores migrantes cuyas familias deben quedarse en el "territorio patrio". En 1960 había aproximadamente 200.000 arrendatarios en granjas de los blancos, pero a fines de 1970 había solamente 27.585. En 1973, según los informes, no había ninguno en El Cabo, Transvaal y el Estado libre de Orange, y sólo 16.350 en Natal 156/.

ii) Ocupantes sin título

140. Este sistema estuvo acompañado de una situación irregular en que las familias "se instalaban" en las tierras de los blancos sin mediar contrato alguno, a cambio de un trabajo realizado por algún miembro de la familia (incluidos los niños) a petición del propietario de la tierra. Las administraciones sucesivas trataron de eliminar este sistema, pero en 1967 había todavía más de 77.000 familias de ocupantes sin título, calculándose que representaban unas 422.000 personas 157/.

iii) Trabajadores registrados

141. La Bantu Laws Amendment Act, de 1964 establecía el registro de los trabajadores agrícolas africanos. Estos trabajadores se reclutan sobre la base de un contrato anual, bien entre los arrendatarios locales de trabajo o entre las familias de ocupantes sin título, o bien, como ha ocurrido cada vez con más frecuencia durante los últimos diez años, directamente en los "territorios patrios" por intermedio de oficinas gubernamentales de trabajo. Este procedimiento responde a la política del gobierno de reemplazar a los trabajadores establecidos que viven en las granjas con sus familias por trabajadores migrantes a base de contratos anuales. Hacia fines

^{154/} Oxford History, vol. II, capítulos III, IV y IX; Ainslie, op. cit., págs. 12 y 13.

^{155/} Véase Ainslie, op. cit., págs. 20 a 22.

^{156/} House of Assembly Debates, 8.5.73, Some Notes of the Size and Distribution of the African Population (South African Institute of Race Relations, 1972); Ainslie, op. cit., pág. 20.

^{157/} Ainslie, op. cit., pág. 21.

de 1972 se había registrado en las oficinas de trabajo 402.518 trabajadores agrícolas africanos, de los cuales, aproximadamente 35.000 estaban inscritos en oficinas tribales (es decir, en los territorios patrios) 158/.

iv) Mano de obra penitenciaria

142. La mano de obra penitenciaria se viene utilizando en Sudáfrica desde el siglo XIX para satisfacer la continua demanda de mano de obra por parte de los agricultores blancos. En 1957/58, los agricultores contrataron 199.312 presos por año. En 1972 existían 22 "prisiones granjas", a saber, 12 en El Cabo, 9 en Transvaal y 1 en el Estado libre de Orange 159/ (para más detalles, véanse los párrafos 165 a 172 infra).

v) El sistema de "voluntarios"

143. Adoptado después de la segunda guerra mundial por acuerdo entre el Departamento de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Justicia y el Comisionado de Policía, pero nunca publicado en la gaceta oficial, este sistema consistía en que a los africanos detenidos en virtud de las leyes de pases se les daba una "opción" entre ser procesados o trabajar en una granja durante seis o doce meses. En realidad, la multa máxima por estos delitos menores era de una o dos libras. Una vez en la granja, estos hombres eran virtualmente prisioneros, a menudo encerrados en construcciones especiales durante la noche, y trabajando durante el día bajo guardia. Sin los pases, en ningún caso podían tener esperanza de escapar. En 1959, a raíz de un escándalo de prensa (véase la declaración de Joel Carlson, E/CN.4/1159, anexo 2) 160/, se suspendió este sistema 161/. Pero el actual sistema de centros de ayuda (véanse los informes anteriores: E/5622, párrs. 76 a 78; E/CN.4/1111, párr. 92) se han considerado en cierto modo como una restauración del antiguo sistema de "voluntarios". A los africanos detenidos en las zonas urbanas por delitos menores "se les ayuda a encontrar empleo" en lugar de procesarlos.

vi) Trabajo infantil en las explotaciones agrícolas

144. Tradicionalmente, los hijos de los ocupantes sin título han trabajado para los granjeros blancos, lo mismo que sus padres (véase el apartado ii) supra). Sin embargo, ha habido repetidas acusaciones de que los granjeros obligaban a los niños que vivían en sus granjas a trabajar para ellos, o bien reclutaban por la fuerza mano de obra infantil en otra parte. Los padres del muchacho de color muerto en el incidente a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 155 infra afirmaron que el muchacho fue "obligado" a trabajar; y los demás niños declararon que eran azotados con látigos de cuero si se negaban a hacerlo. Una madre dijo a un periodista: "No podemos hacer nada. No se cuenta con nosotros. De madrugada, una camioneta pasa

158/ Ainslie, op. cit., pág. 21; F. Wilson, Migrant Labour in South Africa (Johannesburgo, Spro-Cas, 1972), cap. 3.

159/ Ainslie, op. cit., pág. 22.

160/ Para más detalles, véase Joel Carlson, No Neutral Ground, Londres, Davis-Poynter, 1973, capítulo 3.

161/ Ainslie, op. cit., págs. 21 y 22.

recogiendo a los niños. A veces éstos lloran y se escapan. En tales casos nos vemos obligados a ir a buscarlos nosotras mismas por miedo a que nos echen de nuestras casas si nuestros hijos se niegan a trabajar 162/. En agosto de 1975, el Departamento de Asuntos Bantúes examinó ciertas quejas según las cuales un granjero de Natal había engañado a 13 niños africanos para que trabajaran en sus campos de caña de azúcar por salarios bajos, ofreciéndoles "paseos en automóvil" o conducirlos a sus casas en el Transkei. Esto sin el consentimiento de los padres, como exige la ley. Los salarios ofrecidos eran de P4 ó 5 por mes, pero los niños si se escapaban sólo recibían una pequeña parte de dicho salario 163/.

2. Condiciones de vida de los trabajadores agrícolas africanos

a) Métodos de control

145. Una serie de medidas represivas, de las cuales las más importantes son las leyes de pasos que restringen la entrada en las zonas urbanas, contribuyen a asegurar que una vez que un hombre (o una mujer) pasa a convertirse en trabajador agrícola, lo probable es que continúe siéndolo: i) las leyes sobre amos y sirvientes (véase el párrafo 135 supra) estuvieron en práctica hasta 1974, en que fueron abolidas por la General Laws Amendment Act; ii) La Bantu Laws Amendment Act de 1964 estableció las Juntas de Control de los Trabajadores Bantúes con jurisdicción sobre todos los trabajadores agrícolas y con facultades para decidir el número de africanos que podían ser empleados en cada granja 164/; iii) la Bantu Labour Act Nº 67 de 1964 hizo también extenderse a las tierras de los nativos el sistema de oficinas de trabajadores locales y de distrito que ya funcionaban en las zonas blancas -toda persona que busque trabajo debe registrarse en una oficina, la cual lleva un registro de sus empleados y "reglamenta la oferta de mano de obra" para que se adapte a la "demanda" 165/.

146. A fines de 1972 se habían registrado en las oficinas de trabajo un total de 2.829.740 trabajadores africanos, de los cuales 402.518 como trabajadores de granjas. Se declaró delito el abandonar una zona tribal excepto por intermedio de una oficina, y la duración de los contratos no podía ser superior a un año. Se ha criticado este sistema por estimarse que tenía por objeto canalizar la mano de obra africana hacia el trabajo menos popular y peor pagado, es decir, el trabajo agrícola 166/. La Bantu Affairs Administration Act de 1971 centraliza todavía más el control de la mano de obra negra al transferir el control de los africanos en las zonas blancas de las autoridades locales a las juntas de administración de asuntos bantúes. En cada Junta figura un experto en agricultura.

b) Condiciones de salarios y de trabajo

147. Las últimas cifras oficiales sobre salarios para los trabajadores agrícolas africanos proceden del Censo agrícola de 1971/72, en que el salario agrícola medio de los africanos se calcula en R154 anuales (R12,80 al mes), estando incluida en

162/ Sunday Times, 24 de febrero de 1974.

163/ Sunday Times, 10 de agosto de 1975.

164/ Ainslie, op. cit., pág. 37.

165/ Ainslie, op. cit., págs. 38 y 39; Bulletin of the Wages Commission, Students Representative Council, University of Natal, Durban.

166/ Ainslie, op. cit., pág. 42.

dicha cifra la remuneración en efectivo y en especie. Según el Financial Mail, en 1972 los trabajadores agrícolas africanos del Transvaal ganaban entre R12 y 16 al mes, y según estimaciones más recientes para diferentes partes del país los salarios varían ampliamente entre R3,75 y 40 mensuales 167/.

148. Según una investigación realizada en 29 explotaciones agrícolas del distrito de Albany de El Cabo Oriental en 1973, al parecer el único estudio detallado de este género que se ha efectuado entre los trabajadores agrícolas desde 1958, los trabajadores reciben R118,76 anuales en efectivo, que representa, según los cálculos de los empleadores, un 25,23% de su salario total -el resto, pagado en especie, incluye vivienda, agua y el derecho a apacentar ganado, así como raciones alimentarias y tratamiento médico 168/.

149. Esta cifra, aunque inferior a R10 al mes en efectivo, representaba un considerable aumento respecto de las cantidades pagadas en 1954 cuando se efectuó el estudio "Mano de trabajo en la economía agrícola" 169/. En 1958 el promedio mensual de salarios era de 7.7.8 libras, o sea, R15 al mes, incluida la remuneración en efectivo y en especie 170/.

150. El Sindicato Agrícola Sudafricano ha propuesto R42 al mes como salario de los trabajadores agrícolas 171/.

151. Según el estudio de Black Sash, en 1973 el 80% de los trabajadores agrícolas objeto de la encuesta vivían en casas de adobe y metal construidas por ellos mismos o por los propietarios, pero sólo la tercera parte de esas casas tenían agua corriente, y el 84% no tenían inodoros 172/.

152. Según el mismo existían escuelas rurales hasta el grado 6 (aproximadamente 8 años de escolaridad), pero "probablemente" sólo el 5% de los niños procedentes de este medio llegaban a la escuela secundaria. La existencia de las escuelas depende de la buena voluntad del propietario, que debe contruir las él mismo, aunque recibe para ello un subsidio del gobierno. Se asigna un maestro por cada 50 niños 173/.

167/ Ainslie, op. cit., págs. 26 a 31; Report of the Wages Commission, Students Representative Council, University of Natal, Pietermaritzburg: Survey of the wattle-growing industry of the Natal mist belt, 1973; Times, 15 y 16 de agosto de 1972; Financial Mail, 13 de octubre de 1972; Star, 30 de diciembre de 1972; Guardian (Londres) 16 de julio de 1973; Cape Times, 18 de septiembre de 1973; Financial Mail, 5 de octubre de 1973; Rand Daily Mail, 12 de agosto de 1974, 17 y 18 de octubre de 1974; Star, 5 de octubre de 1974; Cape Times, 23 de marzo de 1975...

168/ Jill Joubert, "Down on the farm", The Black Sash, agosto de 1975.

169/ Roberts, op. cit.

170/ Roberts, citado en Joubert, op. cit.

171/ Financial Mail, 2 de noviembre de 1975.

172/ Joubert, op. cit.

173/ Ibid.

153. Los testimonios que tiene ante sí el Grupo indican que la inactividad del gobierno en cuanto a promover la escolaridad para los hijos de los trabajadores agrícolas africanos forma parte de una política deliberada para que la educación no les permita eludir el trabajo agrícola. El Ministro de Educación Bantú dispuso en 1959 que cuando un propietario quisiera dar escolaridad a los hijos de sus trabajadores, una parte del programa debía consistir en "impartir formación en las actividades normales de agricultura, a fin de fomentar el sentimiento de laboriosidad en esos niños, y particularmente, inculcar en su mente el hecho de que la educación no significa que no haya que trabajar con las manos... 174/".

154. Las declaraciones de testigos a través de los años, han señalado a la atención del Grupo una tradición de malos tratos de los empleadores hacia los trabajadores agrícolas negros; el testimonio más reciente es el de Joel Carlson 175/. Los recientes testimonios facilitados al Grupo indican que la prensa sudafricana ha publicado regularmente informes sobre los casos de servicios que llegan a los tribunales, por lo menos en el curso de los últimos 20 años, y que no hay indicios de que estos casos desaparezcan de los expedientes de los tribunales 176/.

155. En el curso de 1974, los periódicos sudafricanos han dado cuenta de los casos siguientes:

- a) En una investigación realizada sobre la muerte de un muchacho de color de 12 años de edad cuyo brazo había sido arrancado por la correa de transmisión de una bomba hidráulica mientras trabajaba a media noche con otros muchachos para regar un campo, un propietario de El Cabo admitió que había azotado (con látigo de cuero) a los niños que trabajaban en su granja. La noche siguiente, según contaron los muchachos, el granjero azotó a los demás muchachos por holgazanería al rehusar éstos venir al trabajo porque estaban asustados después de dicho accidente 177/.
- b) Un granjero de Kameldrift fue multado con R20, o 20 días de prisión por haber abofeteado a un trabajador, el cual sufrió de una fractura del cráneo y hemorragia que le dejó parcialmente paralítico 178/.
- c) Un granjero de Worcester fue reconocido culpable de homicidio y condenado a R600, o 12 meses de prisión, a raíz de la muerte de un niño de 6 años muerto a consecuencia de un "disparo de advertencia" hecho con la escopeta

174/ Survey of Race Relations, 1958-59, págs. 260 y 261, citado en Ainslie, op. cit., pág. 31.

175/ Véase "Pass Laws and prisons - How whites maintain racial supremacy in South Africa" (E/CN.4/1159, anexo 2) y su libro No Neutral Ground (Nueva York, Thomas Y. Crowell, 1973), del cual figura un extracto en el párrafo 156 infra.

176/ Ainslie, op. cit., cita una lista de 10 casos de este género seleccionados de los casos publicados por los periódicos de Sudáfrica en el período de 1954-1972.

177/ Sunday Times, 24 de febrero de 1974.

178/ Rand Daily Mail, 30 de julio de 1974.

de caza del granjero. Este último declaró que estaba tratando de asustar a los niños para que no jugaran en las proximidades de su granja 179/.

- d) Un granjero blanco y dos de sus empleados fueron reconocidos culpables de agresión común por haber azotado a dos africanos -uno de ellos estuvo una semana en el hospital- y después haberlos embadurnado de "plata" 180/.

156. Se recuerda al Grupo que en 1953 el Comité Especial del Trabajo Forzoso definió el sistema de trabajo de Sudáfrica como un sistema de trabajo forzoso, y que dicho Comité estaba

"convencido de que en la Unión Sudafricana existe un sistema legislativo aplicado exclusivamente a la población indígena y concebido para mantener una barrera insuperable entre estas personas y los habitantes de origen europeo. El efecto indirecto de esa legislación es el de encauzar a la masa de habitantes indígenas hacia el trabajo agrícola manual, creando así un volumen de mano de obra permanente, abundante y barata... La consecuencia final de este sistema es obligar a la población indígena a que contribuya con su trabajo a la aplicación de la política económica del país, pero el carácter obligatorio e involuntario de esta contribución resulta del carácter especial del estatuto jurídico y la situación creados por la legislación especial, aplicable solamente a los habitantes indígenas, más bien que de las medidas coercitivas directas concebidas para obligarles a trabajar, aunque se estima también que existen tales medidas, que son la inevitable consecuencia de ese estado de cosas. Por consiguiente, es en este sentido indirecto como, a juicio del Comité, parece existir en la Unión Sudafricana un sistema de trabajo forzoso que reviste importancia para la economía nacional."

El Grupo opina que esta definición es particularmente apropiada para el sistema de reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de Sudáfrica en la actualidad.

3. Análisis comparativo de la situación de los trabajadores africanos en el sector agrícola y en otros sectores

157. La fijación de salarios, los seguros (excepto para los accidentes del trabajo que están cubiertos por la Industrial Injuries Act) y los sistemas de indemnización de los trabajadores no se aplican a los trabajadores agrícolas. Tampoco existe un límite en cuanto al número de horas que se les puede pedir que trabajen, no tienen vacaciones con sueldo o derecho a licencia por enfermedad, y el agricultor que los contrata puede exigir que sus mujeres y niños trabajen también sin recibir remuneración adicional 181/.

158. Los trabajadores agrícolas y domésticos también están específicamente excluidos de la Industrial Conciliation Act, la Wages Act y la Bantu Labour (Settlement of Disputes) Act: es decir, que no existe un mecanismo para revisar sus salarios, exponer reclamaciones o quejas, o solucionar controversias 182/.

179/ Cape Times, 2 y 3 de agosto de 1974.

180/ Rand Daily Mail, 20 de septiembre de 1974.

181/ Ainslie, op. cit., pág. 26; véase también el informe anterior E/5622, párrs. 113 a 115.

182/ Ainslie, op. cit., pág. 26.

159. Estas restricciones contribuyen a asegurar que los salarios agrícolas sigan siendo los más bajos en Sudáfrica. En 1971, un comentarista financiero sugirió que éstos no habían mejorado, e incluso habrían disminuido desde el siglo pasado 183/
160. Los salarios agrícolas tampoco se han beneficiado de los aumentos generales de los salarios industriales para los trabajadores negros registrados a partir de 1973 184/.
161. Las escalas de salarios -que establecen los salarios mínimos obligatorios- para los trabajadores no especializados de la industria variaban en 1973 según la zona, entre R7,80 y R11 por semana 185/. Dos años más tarde (véase sección A supra, párr. 72), muchos de esos salarios habían aumentado en un 30% o más: en el caso de los mineros, el aumento fue casi del 150%. Según el cuadro que figura en el párrafo 72 supra, los salarios en abril de 1975 se escalonaban aproximadamente entre R15 y R56 por semana.
162. En cambio, el Grupo Especial no ha podido encontrar pruebas de que los salarios de los trabajadores agrícolas hayan aumentado apreciablemente desde el Censo Agrícola de 1971-72, citado por la OIT en 1974: se pagaba a los trabajadores agrícolas africanos cerca de R154 al año (R12,8 mensuales), de los cuales el salario en efectivo era sólo de R119 por año (R9,92 mensuales), mientras que la Señora Helen Suzman sostiene que el salario agrícola medio en 1974 fue sólo de R7,50 mensuales 186/.
163. Los trabajadores agrícolas están en la posición especial de que una gran parte de su remuneración (que calcula el agricultor) les es pagada en especie (cf. párr. 147 supra).
164. El Sindicato Agrícola de Sudáfrica ha sugerido que el salario de los trabajadores agrícolas sea de R42 al mes (véase párr. 150 supra), pero incluso esta cifra es inferior al salario mínimo que reciben los trabajadores industriales no especializados.

4. Granjas-prisión y prisiones privadas

165. Hace más de un siglo, en 1860^{187/}, el Estado empleaba a los prisioneros negros de El Cabo para trabajar en las carreteras y los muelles. Poco después, en 1889, el Estado arrendaba la mano de obra de las prisiones a los viticultores de El Cabo. Con el rápido crecimiento económico que siguió a la devaluación de la libra en 1932, la disparidad entre los salarios agrícolas y los salarios industriales se hizo mayor y esto condujo a una escasez de la mano de obra agrícola, situación que no había existido desde que se aprobó la Land Act de 1913. Como la escasez empeoraba y las quejas de los agricultores se hacían más enérgicas, el Departamento de Prisiones adoptó dos medidas para ayudar a los agricultores a obtener mano de obra. En primer lugar se aplicaron más estrictamente las leyes de "pases". La segunda medida fue la introducción en 1934 del "Plan de los seis peniques". De acuerdo con este plan, los presos condenados a penas de corta

183/ Financial Mail, 23 de abril de 1971.

184/ Véase E/5622, párr. 115, prueba citada por el representante de la OIT.

185/ Ibid., párr. 182.

186/ E/5622, párr. 115; Rand Daily Mail, 17 de octubre de 1974.

187/ Oxford History of South Africa, vol. II, pág. 146.

duración (en su mayoría por violaciones de las leyes de pases) estaban obligados a cumplir sus sentencias trabajando en establecimientos agrícolas. Los agricultores pagaban al Departamento de Prisiones seis peniques diarios por cada preso 188/.

166. El siguiente paso importante en el empleo de la mano de obra penitenciaria se dio en 1947 y adoptó dos formas: se establecieron granjas-prisiones y se indujo a los africanos detenidos a "ofrecerse como voluntarios" para trabajar en dichas granjas. La primera "granja-prisión", que acogía condenados a penas de larga duración, se construyó en El Cabo occidental. Este sistema se implantó definitivamente después que el National Party asumiera el poder en 1948. De acuerdo con el nuevo sistema, el costo de la construcción de cada prisión era sufragado por los agricultores locales, cada uno de los cuales compraba acciones, y podía obtener mano de obra en proporción a sus acciones en el capital total. La responsabilidad por la administración de la prisión correspondía al Departamento de Prisiones, incluido el pago de los salarios de los guardianes y el costo de la comida de los presos. El Departamento cobraba entre 15 y 50 centavos diarios por cada preso que cedía al agricultor accionista 189/. En 1952, en la zona de Bethal había cuatro de esas prisiones y ese año se inauguró otra prisión con una capacidad para 350 presos. En el mismo año se construyeron grandes prisiones en Klein Drakenstein para los viticultores de Paarl, y también cerca de Welkom en el Estado libre de Orange. En 1954, se abrieron dos nuevas prisiones en la zona de Paarl y en 1966 había 23 de esas prisiones en las que se alojaban más de 6.000 presos condenados a penas de larga duración. Había 13 de esas prisiones en El Cabo occidental, donde se aplicaban estrictamente las leyes de pases, nueve en el Trasvaal oriental y una en el Estado libre de Orange. En todas estas zonas, toda la mano de obra negra restante era atraída por las minas o por las zonas industriales donde los salarios eran el doble y el triple de los pagados por los terratenientes blancos. Los granjeros tenían intereses creados en la delincuencia, y no hubieran permitido que una prisión que costaba de R50 a R70.000 se quedara sin presos. El derecho de una explotación agrícola a obtener mano de obra de las prisiones aumentaba su valor y los accionistas así lo reconocían en sus declaraciones a la prensa. En El Cabo occidental, el derecho a emplear mano de obra de las prisiones se estimaba en R1.000 por convicto 190/. El Director de Prisiones dijo en 1959 en Riverdale, El Cabo: "Los agricultores quieren que les proporcionemos mano de obra y nosotros no podemos satisfacer toda la demanda, pero estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para salvar esta emergencia". En 1963, la Klapmuts Farmers Association reclamó con urgencia una granja-prisión, pero las autoridades le comunicaron que en la lista de espera de granjas-prisión había más de treinta inscritos.

167. El segundo método utilizado para obtener en las prisiones mano de obra agrícola se adoptó en 1945. El "sistema voluntario" se inició en Johannesburgo. Los transgresores de la ley de pases que detenía la policía eran llevados ante el tribunal donde,

188/ "African labour in South Africa", notas y documentos, Nº 25/74, Dependencia de Apartheid de las Naciones Unidas, agosto de 1974, párr. 10.

189/ F. Wilson, op. cit., pág. 21.

190/ Oxford History, vol. II, pág. 143.

antes de ser sometidos a juicio, se los "inducía a ofrecerse como voluntarios" para el trabajo agrícola. El plan se extendió a todo el país y, en 1954, el Departamento de Administración y Justicia Bantúes y el Comisionado de Policía adoptaron la Circular General 23. Vale la pena citar los tres primeros párrafos.

"Párrafo 1. Es bien sabido que son muchos los indígenas a los que diariamente se detiene y acusa de infracciones de carácter meramente técnico.

Párrafo 2. Estas detenciones cuestan al Estado grandes sumas de dinero y no tienen ninguna utilidad. /El subrayado se ha añadido./

Párrafo 3. Por ello, el Departamento de Justicia, la policía de Sudáfrica y este Departamento han celebrado consultas acerca del problema y han preparado un sistema que tiene por objeto inducir a los nativos desempleados que vagabundean por las calles en las diversas zonas urbanas a aceptar empleos fuera de las zonas urbanas."

168. Las condiciones de trabajo en las explotaciones agrícolas eran atroces, dando lugar a casos de brutalidad y en ocasiones provocando muertes. A continuación figura un resumen de una declaración jurada presentada ante el Tribunal; el agricultor de que se trataba se negó a prestar testimonio para rebatir estas acusaciones.

"En su primer día en la granja, uno de los trabajadores agrícolas dijo:

"Cuando llegué a la plantación vi a Potgieter sentado en el capó de su Ford vigilando a todos los trabajadores. Poco después de haber comenzado a trabajar se me acercaron dos de los capataces, Abram y Philip, y me preguntaron si tenía dinero. Al responderles que no, me golpearon la cabeza y el cuerpo con sus garrotes de nudos. Sangrando por la boca, me desplomé en el suelo y uno de ellos me pateó la cabeza con sus botas. Potgieter permaneció sin moverse y allí seguía cuando me incorporé de nuevo. También vi cómo los dos capataces golpeaban a otros nuevos trabajadores, así como a todos los demás que encontraban a su paso.

Estas palizas se repetían regularmente y observé que cada vez que Potgieter se acercaba al lugar de trabajo y tocaba la bocina, los capataces comenzaban inmediatamente a repartir golpes a todos los que se encontraban al alcance de sus garrotes. Al mismo tiempo nos gritaban que trabajásemos más rápido. Potgieter gritaba también "Slaam hulle dood" (¡matadlos a palos!).

Al principio quise responder a los golpes, pero los que llevaban allí algún tiempo me advirtieron que no lo hiciera. Me dijeron que uno de los capataces había matado a un hombre en noviembre golpeándole en la cabeza con una porra. Me señalaron el lugar donde estaba la tumba del muerto.

He presenciado casos en que, mientras mis camaradas yacían en el suelo tras haber sido golpeados o haberse desvanecido por falta de agua en días de calor, los capataces Abram y Philip les orinaban en la boca y nos invitaban a hacer lo propio para reanimar a los inconcientes. En otras ocasiones, el propio Potgieter se acercaba a golpear nuevamente a los que se habían desvanecido diciendo que simplemente estaban fingiendo y no querían trabajar.

Los trabajadores discutían continuamente planes para escapar y yo nunca perdí la esperanza de poder hacerlo. Mi primer intento fracasó y me capturaron al día siguiente de abandonar la granja. En ese intento 34 trabajadores lograron escapar, pero el hijo de Potgieter nos encontró a mí y a otro trabajador, Leonard. Me hicieron volver a la granja y Potgieter me golpeó con un garrote en los riñones y en la nuca haciéndome caer al suelo. El hijo de Potgieter presenció este ataque así como los capataces y algunos de los otros trabajadores. Me trató de "gorila" y añadió que no podía hacerle nada. Estuve en la granja de Potgieter cerca de 4 meses. No recibí un centavo por mi trabajo ni vi que se le pagase nada a ningún trabajador. Por último, en marzo se me presentó la oportunidad de escapar, cosa que conseguí, en unión de algunos otros 191/."

169. Se inducía a estos voluntarios a trabajar de tres a seis meses (de días de trabajo) por 9 peniques al día, pagados a la terminación del período de contrato.

170. Después de una serie de solicitudes de habeas corpus a las que se dio gran publicidad en la prensa, la indignación pública en Sudáfrica y fuera del país indujo al ministro responsable a suspender este plan en 1959. No obstante, con arreglo a la Prison Act de 1959, fue sustituido por un nuevo sistema de libertad condicional. Conforme a la Prison Act de 1959 era delito revelar las condiciones de las prisiones y de los lugares de trabajo de los presos, y desde entonces no se intentó hacer ninguna revelación como las descritas anteriormente. La prensa todavía señala las brutalidades que practican algunos agricultores en los procesos por asesinato iniciados por el Estado, pero salvo en esos casos no se habla mucho de las condiciones brutales de trabajo de los presos puestos en libertad condicional para trabajar en explotaciones agrícolas.

171. En 1971 y 1972, el Ministro de Prisiones dijo en el Parlamento que el Gobierno estaba estudiando la abolición de las granjas-prisión a pesar de la oposición de los agricultores. Sin embargo, el sistema todavía funciona. Además, en junio de 1975 el Gobierno de Sudáfrica publicó la Proclamación R.133 por la que se establecen "instituciones de rehabilitación en los territorios patrios bantúes". Los africanos que no respetan las leyes de pases pueden ser recluidos en una institución de rehabilitación hasta tres años. En esas instituciones, los africanos deben hacer los trabajos que les ordene el Director. No se especifica el trabajo que deberán hacer los detenidos en estas instituciones ni en qué condiciones, pero sí que están obligados a trabajar. Las atribuciones del superintendente son ilimitadas, a pesar de que no se exige ningún requisito mínimo a las personas designadas para esos puestos. Sin supervisión ni control, sin reglamentos que protejan a estos detenidos, es inevitable que se produzcan y perpetren abusos con este nuevo tipo de "trabajos forzados".

172. Según observa J. Carlson:

"Hace tiempo que la OIT ha condenado la utilización de mano de obra de las prisiones y muchos países han promulgado leyes que prohíben la importación de los productos de esa mano de obra. Un ejemplo de esa prohibición puede

191/ Joel Carlson, No Neutral Ground, (Nueva York, Thomas Y. Crowell, 1973)

encontrarse en la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, que prohíbe la importación de los productos obtenidos con trabajo de presos o de trabajadores forzados. Esta disposición nunca se aplica ... en 1974, el Procurador General de los Estados Unidos en Alabama y el abogado del Sindicato Unido de Mineros, adoptaron medidas para impedir que los Estados Unidos importaran carbón (2.500.000 toneladas) de Sudáfrica. Como ya hace unos 100 años que la Master and Servants Act de Sudáfrica contenía disposiciones penales contra los trabajadores negros no especializados y esa y otras leyes similares se aplicaban a los mineros negros, estaba justificado pedir a los tribunales que prohibieran esas importaciones. Para contrarrestar estas medidas, el Ministro de Justicia de Sudáfrica hizo que el Parlamento aprobara rápidamente leyes para abrogar las disposiciones penales. Según el periódico Star de Johannesburgo del 9 de noviembre, esta medida "parece haber contrarrestado uno de los ataques más ingeniosos y peligrosos" que se habían hecho hasta la fecha contra el comercio de Sudáfrica con los Estados Unidos.

Otros sindicatos y gobiernos podrían haber seguido el ejemplo de este ataque. El uso de la mano de obra de los presos por Sudáfrica constituye una violación del espíritu de competencia leal del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Las granjas-prisión hacen que los agricultores, la policía y los departamentos de prisiones tengan intereses creados en la delincuencia. Es evidente que los granjeros que construyen una "granja-prisión" que les cuesta 25.000 libras esterlinas no estarán satisfechos si no hay bastantes presos para llenarla. Ha de estar llena de presos a los que se obligue a trabajar. En El Cabo, un anuncio reciente de una granja en venta decía, "precio 120.000 libras esterlinas, incluidas las bodegas y 10 presos". El sistema de mano de obra migrante y de mano de obra penal es el sistema de esclavitud más refinado y más arraigado que existe actualmente.

El sistema constituye una violación fundamental de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay que dar a conocer a todos los países que comercian con Sudáfrica las bases en que se asienta su comercio. En muchísimos países existen leyes nacionales que prohíben ese comercio. Debiera informarse a los sindicatos de las formas de trabajo que existen en Sudáfrica. Ningún sindicalista debiera tocar productos sudafricanos.

Los sudafricanos reaccionaron rápidamente a una pequeña amenaza del Sindicato Unido de Mineros de los Estados Unidos y enmendaron cerca de 41 leyes y reglamentos. Hay que entablar la lucha en todos los frentes contra el apartheid sistema que constituye un crimen contra la humanidad. Cada acto de apoyo al apartheid, ya sea político, social o económico, le ayuda a sobrevivir e impide toda evolución. La comunidad de naciones en las Naciones Unidas, los trabajadores organizados, y la comunidad mundial solamente necesitan un ápice de inspiración para encontrar la forma de aislar el cruel sistema de supremacía blanca y terminar con él." 192/

D. Movimientos estudiantiles

Introducción

173. Entre las pruebas y conclusiones del Grupo Especial de Expertos sobre graves manifestaciones de apartheid figuraban en años anteriores las relativas a la discriminación racial en la esfera de la educación. Se señaló a la atención la práctica de la estricta segregación racial en la educación superior, así como en todas las esferas de la enseñanza, y el rígido control sobre los estudiantes en los colegios negros bajo dominio blanco 193/. Los testimonios anteriores también confirmaron la represión de los movimientos estudiantiles que ha desafiado y se ha opuesto a la política docente oficial 194/.

174. No obstante, ésta es la primera ocasión en que el Grupo Especial de Expertos ha estudiado concretamente la cuestión de los movimientos estudiantiles en Sudáfrica. Por lo tanto, se considera necesario situar a los movimientos y entidades estudiantiles en el contexto general del desarrollo del sistema universitario de Sudáfrica y, en particular, del desarrollo de la política de discriminación racial y de apartheid en la educación superior.

1. Legislación universitaria de Sudáfrica

175. Los movimientos estudiantiles se ven afectados por leyes y reglamentos de dos clases: el conjunto de leyes que establecen y afianzan la aplicación del apartheid en la educación superior y las leyes de seguridad a las que están sometidos los estudiantes, al igual que los demás elementos de la población.

a) Leyes por las que se aplica el apartheid a las universidades y colegios universitarios

176. Las nueve universidades residenciales blancas de Sudáfrica están administradas con arreglo a la Universities Act Nº 61 de 1955 y sus enmiendas de 1959, 1961 y 1969. Conforme a dicha ley, estas universidades y la Universidad de Sudáfrica (que ofrece fundamentalmente cursos por correspondencia fuera del recinto de la institución) se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, Artes y Ciencias. En virtud de la ley, el Ministro designa un comité asesor de la Universidad, y un comité de decanos de la Universidad asesora sobre cuestiones relacionadas con la admisión de estudiantes, períodos de asistencia, etc. Las propias universidades deciden sobre los nombramientos del personal y la asistencia de cada estudiante 195/.

193/ Véase el informe anterior del Grupo Especial de Expertos, E/CN.4/1159, párr. 172.

194/ Ibid., párr. 173. En el mismo documento se proporciona información sobre recientes juicios políticos de funcionarios de la SASO (South African Students Organisation) acusados de contravenir las órdenes de proscripción (párrs. 76 y 77) y de infringir la Riotous Assemblies Act al asistir a una reunión prohibida en apoyo del FRELIMO (párr. 79).

195/ Para mayores detalles véase Apartheid: Its Effects on Education, Science, Culture and Information (UNESCO, 1972).

177. El principal instrumento legal para imponer el apartheid en la universidad es la Extension of University Education Act Nº 45 de 1959, por la cual se declara ilegal que una persona no blanca asista a una universidad blanca sin permiso del Ministro y se dispone la creación de instituciones de educación superior separadas -colegios universitarios tribales- para los negros. A las personas blancas se les prohíbe asistir a los nuevos colegios universitarios, y se sanciona la contravención con penas máximas de R200 de multa o seis meses de prisión. El Ministro puede decidir además que determinados colegios universitarios admitan sólo a estudiantes de ciertos grupos étnicos u otros grupos. Los estudiantes deben renovar su inscripción anualmente. El Ministro puede negar este permiso a cualquier persona si considera que así lo exige el interés del colegio universitario: esta atribución la puede delegar en el Consejo. La ley facultaba también al Gobierno a decidir las fechas pasadas las cuales no se permitiría la asistencia a las universidades a los estudiantes no blancos de determinados grupos que todavía no estuviesen inscritos y no hubiesen recibido el permiso escrito del Ministro. Esto impedía la asistencia de los estudiantes no blancos a las universidades "abiertas".

178. En virtud de las normas para el control de los nuevos colegios universitarios que se publican en la Gaceta 196/, cada colegio segregado tiene un rector designado por el ministro correspondiente, quien prescribe sus facultades y deberes. Cada colegio tiene un consejo (blanco) y un consejo asesor (no blanco). Todos los miembros de esos órganos son nombrados por el Presidente del Estado, quien designa a los respectivos presidentes. Análogamente, en todas las instituciones hay una junta (blanca) y una junta asesora (no blanca). El rector es presidente nato del primer órgano, siendo los demás miembros catedráticos o profesores seleccionados por el Ministro después de celebrar consultas con el consejo. El Ministro determina la creación de cada colegio. Originalmente, los puestos debían ser cargos del Estado, correspondiendo la facultad de designar, promover o separar de sus funciones al Ministro respectivo, previa consulta con el consejo.

179. Ese mismo año se aprobó la University College of Fort Hare Transfer Act Nº 64 de 1959, por la que el control de esa institución pasaba de su Consejo de Administración al Ministro de Educación Bantú y la admisión de estudiantes se limitaba a los africanos, a menos que el Ministro hiciese excepciones en el caso de otros estudiantes no blancos. Ninguna persona blanca podía asistir a esa institución. Las disposiciones relativas al control y administración del Colegio Universitario de Fort Hare eran las mismas que las establecidas para los nuevos colegios universitarios en la Extension of University Education Act.

196/ Government Notices 2049 de 1959 y 2059 de 1960; los reglamentos revisados de la Universidad del Norte figuraban en la Government Notice 554 de 5 de abril de 1962. Véase, Muriel Horrell, A Decade of Bantu Education (Johannesburgo, South African Institute of Race Relations), pág. 148. Para un esquema de los reglamentos, véase Survey of Race Relations 1959-1960, págs. 231 a 234.

180. Por la University Education Amendment Act Nº 32 de 1960, se modificaron las medidas antes mencionadas a fin de disponer que la Cuenta de Préstamos pudiese suministrar a la Cuenta de Educación Bantú los fondos para los gastos de capital destinados a los colegios universitarios bantúes en los términos y condiciones establecidos por el Ministro de Educación Bantú y el Ministro de Finanzas 197/.

181. La Extension of University Education Act Nº 29 de 1971, amplió las facultades de los ministros respectivos a fin de hacer aún más estrictas las normas sobre matrícula de los estudiantes no blancos en universidades distintas de las destinadas a sus respectivos grupos raciales, o en la Universidad de Sudáfrica, que sólo proporciona cursos por correspondencia, y en la Facultad de Medicina de Natal 198/.

182. En la University of Fort Hare Act Nº 40, la University of Zululand Act Nº 43 y la University of the North Act Nº 47, todas ellas de 1969, se declaraban "universidades" a los tres colegios tribales africanos; y en la University of Durban-Westville Act Nº 49 y la University of the Western Cape Act Nº 50 de 1969, se hacía lo mismo con los colegios universitarios para indios y personas de color, respectivamente. Las tres universidades africanas serían dirigidas por el Ministro de Educación Bantú, la universidad india por el Ministerio de Asuntos Indios y la universidad mestiza por el Ministerio de Asuntos Mestizos. Posteriormente, la Universities Amendment Act Nº 67 de 1969, estableció que, para la mayoría de los efectos de la ley principal de 1955, el término "universidad" no se aplicaría a las universidades de los grupos africano, de color e indio.

183. La University of Durban-Westville Amendment Act Nº 60 de 1973 abolió las disposiciones relativas al establecimiento de un consejo asesor y de una junta asesora en la Universidad de Durban Westville. En realidad, según el Ministro de Asuntos Indios, nunca había existido una junta asesora. Con el tiempo, el consejo se convertiría en un órgano enteramente indio 199/.

184. La Bantu Universities Amendment Act Nº 6 de 1973 modificó la University of Fort Hare Act, la University of Zululand Act y la University of the North Act, todas ellas de 1969, a fin de concretar el emplazamiento de cada universidad y prever su posible ampliación. La disposición añadía, en cada caso, "si bien la universidad podrá desarrollar sus actividades universitarias asimismo en otros lugares que el Ministerio /de Educación Bantú/ determine, previa consulta con el Consejo". Las universidades tenían facultades para invertir, prestar y tomar prestado dinero. Para solicitar préstamos se necesita la aprobación del Ministro 200/.

197/ Survey of Race Relations, 1959-1960, pág. 211.

198/ Survey of Race Relations, 1971, pág. 288.

199/ Survey of Race Relations, 1973, pág. 335.

200/ Ibid.

b) Admisión, control y expulsión de estudiantes

185. Mientras que las universidades blancas son sociedades establecidas por leyes privadas del Parlamento, que cuentan con la ayuda del Estado pero no son controladas por éste y están gobernadas por consejos universitarios celosos de su autonomía, los "colegios tribales" para africanos están casi directamente bajo el control del Estado. El rector, que corresponde al director o vicedecano de otras universidades, es designado por el Ministro de Educación Bantú. El consejo sólo tiene las facultades que el Ministro decide confiarle. Los miembros de la junta y la junta asesora son seleccionados por el Ministro en consulta con el consejo. El personal y los estudiantes están sujetos a diversas reglamentaciones restrictivas. Los consejos representantes de los estudiantes o no existen o están controlados por las autoridades universitarias. La "cláusula de conciencia" que reconocen todas las universidades sudafricanas (con excepción de Potchefstroom), y que dispone que no habrá discriminación contra el personal o los estudiantes por motivos de religión y que no se exigirá ninguna prueba confesional, no se aplica en el caso de las universidades separadas para no blancos 201/. El Estado financia los colegios universitarios con cargo a la Cuenta de Educación Bantú, cuyo activo procede casi en su totalidad de los impuestos que paga la población africana 202/.

186. En la Gaceta se han publicado normas sobre admisión, control y expulsión de los estudiantes de los colegios universitarios bantús 203/. Esta reglamentación impone limitaciones a los estudiantes para abandonar el recinto del colegio sin permiso, restricciones a las organizaciones estudiantiles o para trabajo de organización sin la aprobación previa del rector; restricciones para celebrar reuniones en el recinto del colegio sin permiso del rector; restricciones para la circulación de revistas, folletos o publicaciones confiados total o parcialmente a los estudiantes, sin permiso del rector, en consulta con la junta asesora y la junta; restricciones para la publicación de declaraciones a la prensa sin permiso del rector. Todo estudiante que en opinión del rector infrinja estas normas es culpable de mala conducta y puede ser suspendido o expulsado 204/.

187. Al colocarse el Colegio Universitario de Fort Hare bajo el control del Departamento de Educación Bantú, hubo varios miembros del personal que no fueron

201/ Martin Legassick "The National Union of South African Students: ethnic cleavage and ethnic integration in the universities", Occasional Paper Nº 4, African Studies Center, Universidad de California, Los Angeles, págs. 12 y 13.

202/ Ibid., pág. 13.

203/ Government Notice 2049, de 18 de diciembre de 1959, respecto del Colegio Universitario del Norte y R. 59, de 15 de febrero de 1960, respecto del Colegio Universitario de Zululandia, véase Survey of Race Relations, 1959-1960, pág. 231.

204/ Survey of Race Relations, 1959-1960, págs. 231 y 232.

confirmados en sus puestos y varios estudiantes 205/ que no fueron readmitidos, lo que dio lugar a amplias protestas en el Colegio que culminaron con la decisión de los estudiantes de disolver el consejo representativo de estudiantes. Pocos días después de estos disturbios, se notificó a todos los estudiantes que tenían que firmar, so pena de expulsión, una declaración en la que reafirmaban su aceptación del reglamento del colegio, y se publicaron nuevas normas más estrictas. En lo sucesivo se exigió a los estudiantes que solicitasen todos los años un permiso para matricularse y la solicitud tenía que venir acompañada de un testimonio de buena conducta de un clérigo, un Comisionado de Asuntos Bantúes o un magistrado. Los padres o tutores tenían que garantizar el pago de la matrícula por adelantado, aceptar la responsabilidad por todo daño que el solicitante pudiese causar a los bienes del colegio y reconocer que éste estaba sujeto a las normas disciplinarias del colegio 206/.

188. El reglamento puesto en vigor en las universidades separadas para los africanos subordina al control de las autoridades universitarias las formas de organización y la presentación de quejas. Estas autoridades han prohibido explícitamente las actividades de los órganos estudiantiles. (Véanse párrs. 238 y 239 infra.)

c) Leyes de seguridad

189. Las leyes de seguridad a las que están sujetos los estudiantes, al igual que los demás miembros de la población, incluyen la Suppression of Communism Act de 1950; la General Law Amendment Act N° 37 de 1963; la Terrorism Act N° 83 de 1967 y la General Law Amendment Act N° 101 de 1969. Se ha enjuiciado a los dirigentes estudiantiles en virtud de varias de esas leyes (véanse los informes anteriores, entre ellos E/CN.4/1135, párrs. 119 a 135 y E/CN.4/1159, párrs. 73, 76, 77 y 79).

190. La censura, las proscripciones y otras medidas del Gobierno restringen la libertad académica en las universidades y las actividades del estudiante 207/.

2. Antecedentes de los movimientos estudiantiles

191. Las normas, elaboradas por el Gobierno, que rigen la estructura de los movimientos estudiantiles sudafricanos y, en especial, los obstáculos que se oponen a su organización y actividades reflejan una política gubernamental de larga data en la esfera de la educación que, en su aplicación de la total segregación de raza y color, culminó con la política adoptada a partir de 1948 por el Gobierno nacionalista para la aplicación de su política de apartheid.

205/ El Ministro de Educación Bantú declaró que el hecho de volver a admitir a esos estudiantes "no redundaba en interés del Colegio, debido a sus actividades en 1959". House of Assembly Debates, 8 de marzo de 1960, col. 2927 y 3 de mayo, col. 6530 y 6531.

206/ Para más detalles del reglamento, véase Survey of Race Relations, 1959-1960, págs. 232 a 234, Horrell, op. cit.

207/ Véase "The Open Universities in South Africa and Academic Freedom 1957-1974", publicado por los comités de libertad académica de las universidades de Ciudad de El Cabo y de Witwatersrand; Sunday Times, 19 de enero de 1975.

192. El movimiento en pro de una institución especial para proporcionar educación superior a los no blancos, y más concretamente a los africanos, comenzó en los primeros años de este siglo. Este movimiento condujo en 1916 a la creación del South African Native College de Fort Hare 208/. Debía preparar a los estudiantes para el examen de ingreso, aunque proporcionaba también cierta formación universitaria. La institución estaba destinada fundamentalmente a los estudiantes africanos, pero se admitían a estudiantes de otros grupos raciales. Hasta 1935, el único diploma universitario que los estudiantes de Fort Hare podían obtener era el de bachiller superior; posteriormente, en 1935 se introdujo un diploma correspondiente al bachillerato universitario científico. En 1937, se interrumpió la formación para el examen de ingreso. En 1949, el número de estudiantes inscritos había alcanzado a 343, y en los años posteriores se mantuvo en 350. Hasta 1951, Fort Hare estuvo asociado a la Universidad de Sudáfrica; en dicho año pasó a depender de la Universidad Rhodes 209/. En los años de posguerra, se generalizó el aumento de la demanda de educación superior para los africanos.

193. Hasta que se introdujo el apartheid universitario, los estudiantes no blancos podían asistir a las universidades "abiertas" de la Ciudad de El Cabo y de Witwatersrand, donde se seguía una práctica de "segregación académica" y también era posible inscribirse en la Universidad de Natal en las clases segregadas (aunque cuando las circunstancias lo permitían compartían con los estudiantes blancos los mismos profesores). Asimismo, podían ser estudiantes del Colegio Universitario of Fort Hare, o del pequeño Kelege ya Bana ba Afrika, de tiempo parcial, de Pretoria. Tenían, además, la posibilidad de seguir los cursos por correspondencia que proporcionaba la Universidad de Sudáfrica, con sede en Pretoria 210/. Las universidades de Stellenbosch, Pretoria, la del Estado Libre y de Potchefstroom que imparten la enseñanza en afrikaans estaban cerradas a los estudiantes no blancos. La Universidad Rhodes admitía ocasionalmente africanos que deseaban seguir cursos de posgraduados que no había en Fort Hare 211/. La creación de una facultad de medicina destinada fundamentalmente a los no blancos se había proyectado con anterioridad a 1948, cuando el Gobierno nacionalista llegó al poder; ese Gobierno continuó con esos planes.

194. En 1949, el establecimiento de la Comisión de Educación Nativa bajo la presidencia del Dr. W. W. M. Eiselen, entonces Secretario de Asuntos Nativos, prefiguró

208/ El nombre de este colegio universitario fue cambiado por el de Fort Hare University College en octubre de 1953. Sobre la historia de este colegio, véase Alexander Kerr, Fort Hare 1915-1948 (Nueva York, Humanities Press).

209/ Véase M. V. O'Dowd, John M. Didcott y P. Tobias, The African in the Universities, escrito por encargo de la National Union of South African Students, diciembre de 1954.

210/ Horrell, op. cit., pág. 21.

211/ Ibid.

la aplicación del principio de apartheid en la esfera de la educación 212/. En la época en que el Gobierno nacionalista llegó al poder se creó la Comisión de Educación Técnica y Vocacional De Villiers; esta Comisión recomendó que estructuralmente el sistema de educación para los africanos debía ser el mismo que para los blancos pero que, al planificar la educación africana, se debería prestar la debida consideración a los antecedentes y al medio de ese pueblo y a las oportunidades de empleo 213/. En virtud del informe de la Comisión Eiselen, publicado en 1951 214/, se sustrajo la educación escolar africana a la competencia de las autoridades docentes provinciales y se transfirió al gobierno central, concretamente al Departamento de Asuntos Nativos. El Ministro de Asuntos Nativos recibió facultades ilimitadas para decidir por sí mismo cuestiones tales como el contenido de la educación escolar africana, las condiciones de empleo de los maestros y el registro y creación de escuelas 215/.

195. El Ministro de Asuntos Nativos, Dr. H. F. Verwoerd, expuso en sus discursos de ese período la política docente del gobierno 216/. Dijo que "Se debía controlar la educación de los nativos" de manera que ésta coincidiese con la política del Estado. No podían existir buenas relaciones "cuando la educación está bajo el control de personas que crean expectativas equivocadas por parte del propio nativo". La educación debía "formar y educar a las personas de conformidad con sus oportunidades y de acuerdo con la esfera en que viven". En un discurso posterior, el Dr. Verwoerd dijo que el anterior sistema de educación había preparado alumnos formados ciegamente sobre un modelo europeo, creando así la esperanza vana entre los "bantúes" de que podían ocupar cargos dentro de la comunidad blanca a pesar de la política de apartheid del país. Dentro de sus propias zonas, las puertas estaban abiertas para los africanos. La educación debía pues "estar sólidamente basada en las reservas y arraigada en el espíritu y la esencia de la sociedad bantú 217/."

212/ Entre las atribuciones de la Comisión figuraban las siguientes: "Formular los principios y objetivos de la educación para los nativos como raza independiente teniendo en cuenta su pasado y su presente, sus cualidades raciales inherentes, sus características y aptitudes distintivas así como sus necesidades en unas condiciones sociales en evolución continua. Decidir en qué medida debían modificarse los sistemas existentes de educación primaria, secundaria y vocacional para nativos y la formación de maestros nativos respecto del contenido y la forma de los programas, a fin de adaptarlos a los principios y objetivos propuestos y preparar a los nativos más eficazmente para sus ocupaciones futuras".

213/ Horrell, op. cit., págs. 3 y 4.

214/ Para las conclusiones pertinentes, véanse los párrs. 754 a 961.

215/ O'Dowd, Didcott y Tobias, op. cit., pág. 16.

216/ Discursos citados en Horrell, op. cit., págs. 5 y 6, en particular, House of Assembly Debates, 17 de septiembre de 1953, cols. 3576 y 3585.

217/ Senado, 7 de junio de 1954, citado por Horrell, op. cit., pág. 6.

196. En 1959, el Ministro de Educación Bantú, Sr. W. A. Maree, dijo:

"El principio supremo de la educación del niño [africano] en las zonas urbanas debe ser exactamente el mismo que en las Reservas. Debemos tratar de que el niño siga siendo un niño de su propia comunidad nacional, porque el principio básico de la educación bantú en general es nuestro objetivo de mantener al niño bantú un niño bantú... Se debe educar al bantú de modo que no desee convertirse en imitador [de los blancos sino] que desee seguir siendo esencialmente bantú." 218/

197. La Bantu Education Act de 1953, modificada posteriormente en 1954, 1956, 1959 y 1961, trata sólo de las líneas generales del sistema sobre cuya base el Gobierno adopta decisiones, y se deja al Ministro responsable la reglamentación de todas las demás cuestiones 219/.

198. Esas declaraciones de política y la aprobación de la Bantu Education Act Nº 27 de 1953, en su forma modificada, fueron precursoras directas de la eliminación de los estudiantes africanos de las universidades "abiertas" en las que habían sido admitidos en reducido número. En diciembre de 1953, el Gobierno creó la Comisión Holloway "para investigar e informar sobre la viabilidad y las consecuencias financieras de proporcionar servicios de formación separados para los no blancos en las universidades". El examen de la conveniencia de esos servicios separados no se incluyó en el mandato de la Comisión. En los testimonios prestados delante de la Comisión, varias universidades se mostraron partidarias de continuar con sus sistemas particulares. La National Union of South African Students (NUSAS) expresó la misma opinión, y en la segunda edición de la publicación "The African in the Universities" figuraba un estudio sobre los servicios existentes para la educación superior de los estudiantes no blancos, junto con un examen de los sistemas de segregación y no segregación en las universidades. Sostenía que las instituciones segregadas eran en muchos aspectos inferiores a los servicios disponibles en las universidades no segregadas 220/.

199. En el informe de la Comisión Holloway, publicado en febrero de 1955, se rechazó, fundamentalmente por razones financieras, la sugerencia de que en un futuro próximo se debían crear nuevas universidades para los no blancos o que se debían establecer secciones separadas para los no blancos en las universidades de Ciudad de El Cabo y de Witwatersrand, de conformidad con el sistema prevaleciente en Natal. La Comisión sugirió que si se deseaba la segregación, el sistema más viable sería concentrar a la mayoría de los estudiantes no blancos en Durban y Fort Hare, pero que el proceso de traslado debería ser gradual 221/.

218/ House of Assembly Debates, 17 de junio de 1959, cols. 8318 y 8319, citado en Horrell, op. cit., pág. 6.

219/ En Horrell, op. cit., págs. 10 y 11, figuran detalles de la Ley.

220/ O'Dowd, Didcott and Tobias, op. cit., véase en particular los caps. 7, 8 y 9.

221/ Horrell, op. cit., pág. 123.

200. A fines de 1955, el Gobierno designó un Comité Interdepartamental encargado de obtener formación adicional, en particular sobre las consecuencias financieras de suministrar servicios separados, y de asesorar sobre la forma de aplicar ese sistema. Antes que las conclusiones de ese Comité se dieran a conocer al público, en marzo de 1957 el Gobierno presentó un Separate University Education Bill. Al producirse protestas, se retiró el proyecto de ley y se preparó una versión modificada que se remitió a un Comité especial durante el período de sesiones parlamentario de 1957. En la Gaceta del Gobierno de 15 de noviembre de 1957 se anunció la intención del Ministro de Asuntos Nativos de presentar el año siguiente un Fort Hare College Transfer Bill 222/.

201. Las protestas en contra de la introducción de la segregación de los servicios universitarios se prolongaron durante dos años, entre 1955 y 1957 223/. Antes que el proyecto de ley hubiese sido examinado en segunda lectura o de que la Comisión hubiese sido nombrada, el Gobierno comenzó la construcción de dos colegios universitarios para africanos, en Ngoya, Zululandia y Turfloop, cerca de Pietersburg, en el Transvaal septentrional 224/.

202. La Extension of University Education Act Nº 45 de 1959 fue aprobada a pesar de la oposición (véase el párr. 176 *supra*). En la ley se disponía la creación de colegios universitarios para personas no blancas. En las definiciones que establecía la ley se declaraba que educación universitaria significaba "educación de un nivel equivalente a la que proporcionan las universidades creadas por ley del Parlamento". Los colegios universitarios para africanos se debían financiar con fondos de la Cuenta de Educación Bantú consignados por el Parlamento y puestos bajo el control del Ministro de Educación Bantú. Posteriormente se decidió que el colegio para personas de color dependería del Departamento de Asuntos Mestizos y el colegio para indios del Departamento de Asuntos Indios, y que esas instituciones se debían financiar con cargo a la Cuenta de Ingresos Generales 225/.

203. El University College of the Western Cape se inauguró en Belville South para los estudiantes de color, y se abrieron dos colegios nuevos para los africanos: el University College of the North, en Turfloop, cerca de Pietersburg, que estaba

222/ Ibid., pág. 124.

223/ Ibid., págs. 125 a 128. Las protestas incluyeron reuniones en masa de estudiantes y asambleas convocadas en las Universidades de Ciudad de El Cabo y de Witwatersrand. Consejos representativos de estudiantes de las universidades reunidos en un congreso de la NUSAS en julio de 1956 convinieron en que ese órgano debiera coordinar una campaña de los estudiantes para oponerse a toda injerencia en el principio de la no segregación en la enseñanza.

224/ Horrell, op. cit., pág. 128.

225/ Horrell, op. cit., pág. 129.

destinado fundamentalmente a los estudiantes de etnia sotho y al University College of Zululand, en Ngoya, para los grupos zulú y swazi. Los nuevos estudiantes africanos aceptados en Fort Hare se seleccionaron fundamentalmente entre el grupo xhosa 226/.

204. Durante 1963, se hicieron ampliaciones en los locales provisionales del University College for Indians, en Salisbury Island, Durban Bay. Se proyectaron edificios permanentes para el colegio y los estudiantes del mismo podían matricularse en las facultades de artes, ciencias, comercio y educación, aunque los estudiantes indios habrían sido admitidos en diversas universidades para estudiar medicina, odontología, arquitectura, ingeniería, derecho y ciencias sociales 227/.

205. La University College of Fort Hare Transfer Act Nº 64 de 1959 facultaba al Gobierno a transferir el control del colegio de su Consejo de Administración al Ministro de Educación Bantú. En esa época el Fort Hare University College era una organización multirracial: en 1959 el personal comprendía 28 blancos, 10 africanos y una persona de color. De los 489 estudiantes, sólo 38% eran de origen xhosa o fingo; 34% procedían de otros grupos africanos; 14% eran de color y el 14% restante indios. El mantenimiento, administración y control del University College of Fort Hare se asignó al Ministro de Educación Bantú a partir del 1º de enero de 1960. (Respecto de las protestas de los estudiantes y el personal y las repercusiones en Fort Hare, véase infra, párr. 220.) 228/. Desde el momento en que se adoptó la política de reunir a los estudiantes por grupos étnicos, la matrícula en Fort Hare disminuyó bruscamente. Dejo de admitirse a los estudiantes que no hablaban xhosa pero, además, el número de estudiantes de lengua xhosa disminuyó también 229/.

206. La admisión de africanos en las universidades que anteriormente se consideraban "abiertas" se redujo considerablemente al proclamarse en la Gaceta 230/ que ninguna persona no blanca que no estuviese ya matriculada como estudiante en una universidad podría hacerlo, salvo con el consentimiento del Ministro responsable. En 1961, sólo se permitió a tres africanos matricularse en una universidad "abierta", y en 1962 sólo se admitieron dos nuevos estudiantes 231/.

226/ Survey of Race Relations, 1959-1960, pág. 228.

227/ Survey of Race Relations, 1964, pág. 294.

228/ Para un examen de la respuesta de las autoridades de Fort Hare University al informe que condujo a la aprobación de la ley, véase Clifford P. Dent, Fort Hare and the Report of the Fort Hare Commission, 1955. Dr. Dent era entonces director del Colegio.

229/ Survey of Race Relations, 1962, pág. 198.

230/ N^{os} 221 y 222 de 16 de octubre de 1959.

231/ Horrell, op. cit., pág. 139.

207. En 1974, la matrícula de estudiantes en todas las universidades era la siguiente 232/:

<u>Universidad</u>	<u>Blancos</u>	<u>De color</u>	<u>Indios</u>	<u>Chinos</u>	<u>Africanos</u>	<u>Total</u>
Ciudad de El Cabo	8 449	404	82	31	6	8 972
Durban-Westville	-	-	2 342	-	-	2 342
Fort Hare	-	-	-	-	1 029	1 029
Natal	7 198	91	347	8	256	7 900
Estado Libre de Orange	6 685	-	-	-	-	6 685
Port Elizabeth	1 967	-	-	-	-	1 967
Potchefstroom	6 415	2	-	-	4	6 421
Pretoria	14 313	-	-	-	-	14 313
Rand Afrikaans	2 143	-	-	-	-	2 143
Rhodes	2 299	-	3	39	1	2 342
Stellenbosch	9 284	-	-	-	-	9 284
Sudáfrica	26 981	1 177	1 946	60	3 995	34 159
El Norte	-	-	-	-	1 509	1 509
El Cabo Occidental	-	1 440	-	-	-	1 440
Witwatersrand	9 855	28	143	231	42	10 299
Zululandia	-	-	-	-	1 003	1 003
Totales	95 589	3 142	4 863	369	7 845	111 808

3. Consecuencias de la política de apartheid con respecto a los movimientos estudiantiles

208. Las divisiones de la sociedad sudafricana como resultado de la institución del apartheid se han manifestado y perpetuado en el carácter étnico de las universidades, así como en los movimientos estudiantiles en Sudáfrica. Estas divisiones se extienden a la existencia separada de universidades inglesas y afrikaans, así como a distintas organizaciones de estudiantes. La National Union of South African Students (NUSAS) se fundó en 1924, con miembros de las universidades afrikaans e inglesas. El Fort Hare College no fue admitido como miembro, y hubo estudiantes no blancos en las universidades libres de Witwatersrand y Ciudad de El Cabo 233/. En 1933, tres de los centros de enseñanza en afrikaans -Grey University College (más tarde denominada Universidad del Estado Libre de Orange), Potchesfroom y Pretoria- se separaron de la NUSAS y formaron el Afrikaans Nasionale Studentebond 234/. En 1948, las universidades en que se enseñaba en afrikaans fundaron una nueva organización, la Afrikaans Studentebond (ASB).

232/ Survey of Race Relations, 1974, pág. 369.

233/ Legassick, op. cit., pág. 15.

234/ Para los motivos que ocasionaron la separación política de los estudiantes blancos en esa época, véase Legassick, op. cit., pág. 16.

Afrikaans Studentebond (ASB)

209. La ASB sigue siendo la representante de las universidades en que se enseña en afrikaans 235/. Durante 1965, los representantes de las universidades y colegios universitarios en que se enseñaba afrikaans celebraron una reunión de estudiantes en la cual la NUSAS fue criticada considerándola como un organismo "izquierdista" 236/. En el congreso celebrado en julio de ese año, la ASB acusó a NUSAS de socavar el sistema de vida tradicional sudafricano y de tratar de entorpecer la acción del gobierno 237/. El congreso de 1969 de la ASB puso de relieve la necesidad de unión de los afrikaaners y el papel que debía desempeñar la ASB al servicio de los intereses del pueblo afrikaaner 238/. En 1972 tuvo lugar una reunión de dirigentes estudiantiles de ocho centros afiliados a la ASB y se recomendaron cambios radicales en la política y estructura de la organización. La reunión recomendó también que la ASB cambiara de nombre, dejara de "seguir dogmáticamente la línea política del partido nacionalista" y se ocupara de proyectos prácticos, especialmente de los territorios patrios bantúes 239/. A raíz de ello se dispuso la creación de centros especiales encargados del "desarrollo de los territorios patrios, de los servicios de la comunidad, de los servicios estudiantiles y de las relaciones con los no blancos". La NUSAS y recientes manifestaciones estudiantiles fueron atacadas de nuevo 240/.

National Union of South African Students (NUSAS)

210. La NUSAS aceptó como miembro al Fort Hare College en 1945. Este hecho, junto con el declarado propósito de la ASB de "combatir por cualquier medio posible las aspiraciones de la NUSAS" hizo imposible la reconciliación de los centros de las universidades de lengua afrikaans y de lengua inglesa. Varios períodos de negociaciones (1949-1950; 1957-1961) dieron lugar a una serie de conferencias, debates y correspondencia, así como a propuestas de estructuras federales para unir o sustituir a los órganos estudiantiles existentes; todos esos esfuerzos fracasaron. Los centros afiliados a la NUSAS insistieron en el derecho a designar los delegados que quisieran, mientras que los centros de habla afrikaan solicitaron que las universidades "mixtas" estuvieran representadas solamente por blancos 241/. La política de la NUSAS en 1951 era de franca oposición a la política docente del gobierno nacionalista y a los aspectos discriminatorios en otras cuestiones de interés para los estudiantes. En particular, la NUSAS se había opuesto a la Christian National Education y a la intervención del Gobierno en las universidades 242/.

235/ Para una reseña, véase Johan C. Fick, "Afrikaner student politics - past and present", Student Perspectives on South Africa, eds., H. W. Van der Merwe y D. Welsh (El Cabo, 1972).

236/ Rand Daily Mail, 9 de abril de 1965, citado en Survey of Race Relations, 1965, pág. 279.

237/ Rand Daily Mail, 7 de julio de 1965; Survey of Race Relations, 1965, págs. 279 y 280.

238/ Survey of Race Relations, 1966, pág. 44, que cita un informe de un observador; Rand Daily Mail, 9 de julio de 1965.

239/ Rapport, 9 de abril de 1972; Sunday Times, 19 de marzo y 9 de abril de 1972, citado en Survey of Race Relations, 1972, pág. 396.

240/ Ibid.

241/ Legassick, op. cit., pág. 17.

242/ Ibid., págs. 18 y 19.

211. Si bien las críticas de la NUSAS a la política del Gobierno se habían centrado en torno a la educación 243/, su crítica del apartheid se extendía a todas las esferas 244/. En 1962 la campaña en pro de cuestiones exclusivamente estudiantiles se convirtió en una lucha "por el reconocimiento de la igualdad y dignidad humanas para todos" 245/. La protesta estudiantil masiva coincidió con la legislación universitaria de apartheid, cuando la NUSAS organizó manifestaciones de protesta contra el proyecto de ley, pendiente de aprobación, de enseñanza universitaria separada 246/. En el campo de la enseñanza, NUSAS participó en proyectos como el Comité Sudafricano para la enseñanza superior, el Fondo de Ayuda y Defensa Estudiantil, y el plan de enseñanza en las prisiones 247/. NUSAS también condenó las leyes de pases, la Sabotage Act de 1962 y la General Law Amendment Act, de 1963.

212. La oposición del Gobierno a la NUSAS y su política se hizo pública a partir de 1963 248/. Se tomaron medidas contra los miembros directivos de la NUSAS 249/. Esas medidas comprendían la denegación de pasaportes, órdenes de proscripción, encarcelamiento y deportación. Los miembros de NUSAS fueron objeto de vigilancia policiaca, y la organización fue infiltrada por la Policía de Seguridad 250/. En 1972 tuvieron lugar grandes protestas estudiantiles en apoyo de huelgas y protestas en los colegios negros como consecuencia de la expulsión de un dirigente estudiantil de Turfloop (Universidad del Norte) (véanse los párrafos 221 a 223 infra). En mayo de 1972, la NUSAS lanzó su campaña en pro de la libertad de enseñanza, durante la cual se organizaron en todas las universidades y colegios afiliados a la NUSAS reuniones masivas de estudiantes, mítines públicos y la distribución de información, y se concentró la atención en los acontecimientos ocurridos en Turfloop a comienzos de ese mes. Esto llevó a que la policía disolviera a porrazos una reunión de estudiantes en la escalinata de la Catedral de San Jorge de la Ciudad de El Cabo. Del mismo modo fue disuelta una marcha de estudiantes en Johannesburgo 251/. Siguieron detenciones y procesos 252/.

243/ Véase "The policy on education", aprobada por el 51º Congreso de la NUSAS, julio de 1974, (mimeografiado).

244/ Para una relación de los antecedentes del desarrollo de la política de NUSAS, véase M. Legassick, especialmente las págs. 15 a 31, 32 y 38; véase también M. Marshall, "Student resistance to apartheid", Unit on Apartheid, Notas y Documentos, Nº 11/73, abril de 1973; C. Bundy "Embattled and embittered", Guardian, 8 de octubre de 1974. Un estudio histórico detallado más reciente de NUSAS figura en Survey of Race Relations, 1965, págs. 278 y 279; Defence and Aid Information Service, enero a julio de 1969, págs. 277 y 278.

245/ Véase Legassick, op. cit., pág. 31.

246/ Ibid., págs. 36 y 37.

247/ Ibid., pág. 40.

248/ Ibid., págs. 44 a 49.

249/ Para los detalles de la acción concreta del Gobierno contra los dirigentes estudiantiles, véase Marshall, op. cit., pág. 8. Véase también Survey of Race Relations.

250/ Marshall, op. cit.; véase también Defence and Aid Information Service, octubre-diciembre de 1967, págs. 105 y 106.

251/ Survey of Race Relations, 1972, págs. 392 y 393.

252/ Ibid., págs. 393 y 394.

Comisiones estudiantiles de salarios

213. El National Union of Students' Welfare Department se estableció en 1971 a fin de fomentar los cursos de alfabetización y de enseñanza privada, hacer campaña en favor del salario igual por trabajo igual, y emprender trabajos para el desarrollo de la comunidad 253/. En 1972 y 1973, las comisiones estudiantiles de salarios de diversos centros universitarios afiliados a la NUSAS publicaron, de común acuerdo, una Carta de Derechos de los Trabajadores, que contenía diez puntos, e hicieron campaña para mejorar los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores negros 254/. Esta campaña incluía la compilación de información acerca de las condiciones existentes en diversas industrias, estudios presupuestarios, visitas a fábricas para obtener respuestas a un cuestionario sobre los salarios de los trabajadores y manifestaciones en las oficinas de las compañías 255/.

University Christian Movement

214. Se trata de un organismo estudiantil cristiano de carácter interconfesional fundado en 1969; después de cinco años de esfuerzos para mantenerse como una organización multirracial, decidió disolverse. Se dieron tres razones de ello: i) la persecución por la Policía de Seguridad; ii) el retiro del apoyo prestado por todas las iglesias, excepto la United Congregational Church; iii) la toma de conciencia entre los miembros negros y su falta de voluntad para trabajar en una organización multirracial. Al decidirse la disolución, se declaró en el congreso que aunque los miembros eran firmes partidarios de una política no racial en Sudáfrica, de momento era necesaria una polarización negro-blanca debido a que la situación de los blancos era muy distinta de la de la mayoría de los miembros del Movimiento 256/. El Movimiento había tropezado con grandes dificultades a causa de las órdenes de proscripción y de confinamiento de sus miembros 257/.

South African Students' Organisation (SASO)

215. La SASO se fundó en julio de 1969 258/. Su conferencia inaugural tuvo lugar en la University of the North (Turfloop). Se envió una notificación oficial 259/ de los motivos que condujeron al establecimiento de la organización a todos los presidentes

253/ Survey of Race Relations, 1971, págs. 292 y 293.

254/ Survey of Race Relations, 1973, pág. 343. Véase también Cape Times, 25 de noviembre de 1972; Bulletin of Wages Commission of SRC de la Universidad de Natal, Nº 4 de 1º de febrero de 1972; Nº 5 de 10 de febrero de 1972; Guardian, 2 y 18 de abril de 1973.

255/ Cape Times, 17 de diciembre de 1973; Guardian, 2 de abril de 1973; Rand Daily Mail, 18 de abril de 1973; Cape Times, 5 de abril de 1973; Rand Daily Mail, 21 de marzo de 1973.

256/ Survey of Race Relations, 1971, pág. 294; Survey of Race Relations, 1974, pág. 31.

257/ Cape Times, 10 de julio de 1972.

258/ Véase la descripción del nacimiento de la SASO en la página 245 de Survey of Race Relations, 1970, y la página 42 del Survey, 1971.

259/ South African Students' Organisation, circular SB/2/70 (mimeografiado). Los objetivos del organismo se reseñan en la página 5. Incluyen, entre otros, "satisfacer las necesidades y aspiraciones de los estudiantes no blancos y dar a conocer sus motivos de queja" y "hacer que los estudiantes no blancos sean aceptados, conforme a sus propias condiciones, como parte integrante de la comunidad sudafricana".

de los consejos representativos de estudiantes de las universidades inglesas y afrikaans, así como a otras organizaciones. Como antecedentes históricos a la formación de la nueva organización se citaban: i) la aplicación en 1960 de la Fort Hare Transfer Act que colocó al Fort Hare University College bajo la dirección y control del Gobierno, dando así un rudo golpe a las relaciones entre los estudiantes de la universidad y el resto de la población estudiantil; ii) los colegios separados para la población de color, zulu y sotho e indios, en que las autoridades ponían el veto a los movimientos estudiantiles asociados a la NUSAS; iii) la situación de los estudiantes negros en las organizaciones libres como la NUSAS y el University Christian Movement citándose a este respecto como factor decisivo la conferencia de la NUSAS de 1967, en que se hizo permanecer a los negros en una iglesia de la localidad, de donde eran conducidos a la conferencia diariamente en automóvil; iv) la selección de un equipo directivo exclusivamente blanco en el Congreso de la NUSAS de 1968. En consecuencia, los consejos representativos de estudiantes de las universidades negras se reunieron en 1968 y decidieron por abrumadora mayoría crear una organización de estudiantes negros.

216. La estructura de SASO se basa en los consejos representativos de estudiantes que funcionan como núcleo de reclutamiento en nombre de sus estudiantes. Cuando no existen consejos, SASO acepta una decisión de la mayoría de un órgano estudiantil como automática afiliación de ese centro. También se prevé la posibilidad de un miembro a título individual. El órgano rector es el Consejo General de Estudiantes, que se reúne anualmente y está integrado por delegados de diversos centros y de la dirección. Este es el órgano oficial de formulación de políticas.

217. Declaraciones posteriores han puntualizado la política de la organización. En agosto de 1971 se publicó un manifiesto de la política de SASO que declaraba 260/:

"1. SASO es una Organización de Estudiantes Negros que lucha por la liberación del hombre negro, primeramente de la opresión psicológica que ejerce sobre él mismo un complejo de inferioridad y en segundo lugar de la opresión física originada por el hecho de vivir en una sociedad racista blanca.

2. Definimos al pueblo negro como aquel que por ley o por tradición política, económica y social es objeto de discriminación como grupo en la sociedad sudafricana, y que se identifica como una unidad que lucha por el logro de sus aspiraciones.

...

4 a) SASO afirma la idea de una conciencia negra y estimula esta toma de conciencia como el medio más lógico y significativo para sacudir el yugo que lo condena a perpetua servidumbre." 261/

La misma declaración rechazaba la política de integración propugnada por el partido progresista y "otras instituciones liberales", puesto que esos intentos van "dirigidos meramente a mitigar cierta legislación opresiva y permitir a los negros formar parte de una sociedad de tipo blanco". Esta política fue expuesta en varios discursos

260/ SASO Newsletter, agosto de 1971.

261/ Véase "The definition of the Black Consciousness" (documento mimeografiado).

pronunciados en 1971 y años siguientes 262/. Una comisión sobre educación negra informó a la segunda conferencia de la organización, lo que dio lugar a la aprobación de una Declaración de los Derechos de los Estudiantes 263/.

218. En 1971, la SASO proyectó sus actividades sobre la base de la formación de dirigentes, el desarrollo de la comunidad y los programas de alfabetización 264/. Los miembros de la Natal Medical School establecieron una clínica gratuita de medicina preventiva 265/. Los estudiantes de algunas secciones de SASO en las universidades North (Turfloop), Fort Hare y Ngoya (Zululandia) y en la Sección Negra de la Universidad de Natal realizaron una campaña de alfabetización de dos meses, en la que participaron eclesiásticos 266/. Los estudiantes de la Universidad de Natal (Sección Negra) han desplegado gran actividad, prestando asesoramiento a las comunidades en presupuestos de bajos ingresos, facilitando alfabetización y recaudando fondos para instalar una bomba de agua 267/. Los estudiantes de la SASO también establecieron una clínica cerca de Wentworth para los pobres de la comunidad de color de la zona 268/. En 1972 se informó que el número de miembros de la SASO era de 6.000 y que seguía creciendo 269/.

4. Disturbios y protestas de los estudiantes

Disturbios en las escuelas africanas

219. En las escuelas africanas la agitación es una consecuencia del sistema. De ella forman parte los incidentes de 1959, cuando los estudiantes de la Amanzimtoti Zulu Training School, abandonaron la escuela como protesta por el sistema de enseñanza; en Kilnerton High School, cerca de Pretoria, se boicotearon las clases y se trató de incendiar los edificios; y en el Moroka Training Institute de Thaba Nchu tuvieron lugar disturbios acompañados de quejas contra la alimentación 270/. En 1961 hubo considerable inquietud en varios colegios y escuelas africanos cuando se proclamó la República, lo que ocasionó la clausura del Fort Hare College tres semanas antes de la fecha en que debía clausurarse el curso. Durante el mismo período, la policía hizo irrupción

262/ Para referencias, véase Survey of Race Relations, 1971, págs. 42 y 43; Survey of Race Relations, 1972, págs. 29 y 30, 386 y 387. Véase también SASO 1972, que da una relación oficial de los antecedentes, propósitos y estructura de SASO y una introducción de la Directiva de SASO.

263/ Mimeografiado.

264/ Survey of Race Relations, 1971, pág. 293.

265/ Rand Daily Mail, 7 de julio de 1971 citado en Survey of Race Relations, 1971, pág. 293. Véase "New Farm", Projects of Preventive Medicine (mimeografiado).

266/ Survey of Race Relations, 1972, págs. 386 y 387.

267/ Ibid.

268/ Ibid.

269/ Ibid.

270/ Para más detalles, véase Survey of Race Relations, 1959-60, págs. 220 y 221. Para más detalles acerca de los disturbios en las escuelas y de las medidas disciplinarias tomadas por las autoridades, véase Survey of Race Relations, 1961, págs. 238 a 241; Survey of Race Relations, 1962, págs. 183 y 184.

en el Healdtown Training College and High School; y fue clausurada la Lovedale United Theological School. En otras instituciones de enseñanza también hubo disturbios especialmente en el Cabo Oriental. En la primera mitad de 1971 se produjeron disturbios en diez escuelas africanas 271/; asimismo se produjeron durante 1973 272/.

Disturbios en las universidades

220. El descontento en Fort Hare llegó a su punto decisivo cuando se disolvió en 1960 el Consejo representativo de estudiantes 273/; durante 1974 los estudiantes boicotearon otra vez la ceremonia de graduación 274/.

221. En marzo de 1972, los estudiantes de University College of the North (Turfloop) hicieron una hoguera con sus diarios cuando las autoridades ordenaron el secuestro del Manifiesto publicado por SASO y de la Declaración de los Derechos de los Estudiantes 275/.

222. En abril de 1972, en la ceremonia de graduación de la University College of the North, el orador elegido por los estudiantes, Sr. O. Tiro, antiguo presidente del Consejo representativo de estudiantes de Turfloop, criticó acerbamente el control predominante de los blancos sobre las universidades negras, la discriminación contra la población negra por las autoridades y en general, el sistema de la educación bantú. El Sr. Tiro fue expulsado por el Comité Disciplinario de la Universidad compuesto enteramente de blancos. Cuando se presentó una petición para que se le rehabilitara, la petición fue rechazada, y los estudiantes comenzaron a amotinarse. Las autoridades suspendieron el consejo representativo de estudiantes, prohibieron todas las reuniones y anunciaron la expulsión de 1.146 estudiantes. La policía penetró en el recinto universitario con porras y perros. El 6 de mayo el recinto estaba desierto y precintado por la policía 276/. Se readmitió a los estudiantes solamente bajo la condición de que aceptaran las disposiciones impuestas por las autoridades. Cuando los estudiantes fueron readmitidos, los 22 miembros suspendidos pertenecientes al consejo representativo de estudiantes habían sido expulsados 277/.

223. En mayo de 1972, SASO pidió a los estudiantes negros un boicot nacional. Una reunión de dirigentes de siete colegios negros pidieron la creación de consejos y senados negros y la libertad de organización estudiantil 278/.

271/ Defence and Aid Information Service, enero a junio de 1971, col. 443.

272/ Ibid., julio-diciembre de 1973, vol. 388.

273/ Survey of Race Relations, 1959-60, pág. 236.

274/ Survey of Race Relations, 1964, pág. 293.

275/ Survey of Race Relations, 1972, pág. 387.

276/ Star, 6 de mayo de 1972, citado en Survey of Race Relations, 1972, págs. 387 y 388.

277/ Star, 6, 7 y 14 de junio de 1972, citado en Survey 1972, pág. 388.

278/ Sunday Express, 14 de mayo de 1972, citado en Survey 1972, pág. 388. Véase también "Alice Declaration on Turfloop Crisis" (mimeografiado), 14 de mayo de 1972.

224. Asimismo, en mayo de 1972, los estudiantes de la Universidad de Durban-Westville, de la Universidad de Zululandia, del Springfield College of Education, del M. L. Sultan Technical College y del Transvaal College of Education tomaron parte en actos de protesta 279/.

225. En julio de 1972, los estudiantes de la Universidad de El Cabo Occidental comenzaron a boicotear las clases en apoyo de los estudiantes de Turfloop 280/. Se adoptaron en la Universidad de El Cabo Occidental nuevas reglamentaciones para los estudiantes en virtud de las cuales se prohibía la constitución o la participación a organizaciones no aprobadas por las autoridades. El rector llamó a la policía cuando los estudiantes se negaron a poner fin a una visita hecha por el Presidente de SASO 281/.

226. En junio y julio de 1974 las protestas estudiantiles por la forma de dirigir la Universidad de El Cabo Occidental culminaron en manifestaciones pidiendo la dimisión del rector. El rector clausuró la Universidad por un mes, y anunció que los estudiantes que desearan volver estarían obligados a llenar un formulario de readmisión que incluía la promesa de aceptar todas las normas y reglamentos de la Universidad 282/. Entre las quejas formuladas por los estudiantes figuraban el bajo nivel de la enseñanza, las normas y reglamentos generalmente opresivos 283/, la negativa de las autoridades a exponer las razones de la expulsión de cuatro estudiantes, y la falta de autonomía universitaria. Un comité interno de investigación llevó al Gobierno a proceder a una investigación bajo la presidencia del Magistrado J. T. van Wyk (véanse los párrafos 233 y 242).

227. En octubre de 1974, más de 1.400 estudiantes africanos de la Universidad North (Turfloop), iniciaron una manifestación pacífica frente a la comisaría de policía de Mankoenq, permaneciendo una hora en dicho lugar. Los estudiantes hicieron entrega de una petición a la policía en la que solicitaban la libertad del presidente de su consejo representativo de estudiantes, Sr. G. K. Sedibe. Durante la permanencia en ese lugar, fue detenido el presidente del comité local de la SASO, Sr. Cyril Ramaphesa. La petición también exigía la libertad de otros estudiantes detenidos al mismo tiempo que su presidente después de una reunión pro-FRELIMO celebrada el 25 de septiembre de 1974 en la Universidad. Los estudiantes pidieron, además, la modificación de

279/ Survey of Race Relations, 1972, págs. 388 a 391.

280/ Cape Times, 9 y 12 de mayo de 1972.

281/ Survey of Race Relations, 1972, pág. 389.

282/ Cape Times, informes mencionados en Defence and Aid Information Service, enero-junio de 1973, pág. 128.

283/ La nueva reglamentación relativa a los estudiantes fue publicada en la gaceta por el Ministro de "Coloured Affairs"; en ella se daba fuerza de ley a las disposiciones disciplinarias internas. En total, había 73 disposiciones. Véase Survey of Race Relations, 1972, pág. 389.

ciertas leyes, citando la Riotous Assemblies Act, la Suppression of Communism Act, la Terrorism Act, y la Sabotage Act 284/. La sentada se extendió más tarde a los locales universitarios. Al sexto día de vigilancia, un contingente de policía se hallaba estacionado en el recinto universitario 285/. Las autoridades universitarias ofrecieron indultar a los estudiantes si volvían a clase 286/. La protesta estudiantil fue seguida del nombramiento de una comisión gubernamental para investigar el incidente (véanse los párrafos 234 y 235).

Comisión de investigación de ciertas organizaciones, incluida la NUSAS

228. En febrero de 1972 287/, el Primer Ministro anunció en la House Assembly el nombramiento de una comisión especial encargada de investigar e informar sobre los propósitos, organización, actividades y financiación de cuatro organizaciones, entre ellas la NUSAS 288/. El Primer Ministro anunció que, de conformidad con la información que las autoridades competentes tenían a su disposición, la investigación estaba plenamente justificada. La información disponible se pondría a disposición de la comisión especial. La comisión tendría facultades para tomar declaraciones y pedir documentos. El United Party de la oposición en el Parlamento combatió la moción basándose en que no estaba debidamente motivada, y sugirió que, en su lugar, la investigación se encomendara a una comisión de carácter judicial, pero participó en los trabajos de la Comisión que estuvo integrada por cinco miembros del partido nacionalista y tres miembros del United Party 289/.

229. La NUSAS anunció que boicotearía la comisión parlamentaria encargada de la investigación, a menos que por ley se le obligara a testimoniar. También anunció que varios de los documentos solicitados por la comisión especial parlamentaria no podrían ser entregados por la organización debido a que no habían sido devueltos por la policía que los había secuestrado en una irrupción realizada hacía más de un año 290/. En abril de 1972, el presidente de la NUSAS, Sr. Paul Pretorius, fue citado para comparecer ante la comisión. Su comparecencia, dijo el presidente, la hizo de acuerdo con una decisión del consejo nacional de NUSAS que lo autorizó a que declarara como testigo únicamente en el caso de que fuera obligado a hacerlo por la ley 291/.

284/ Rand Daily Mail, 17 de octubre de 1974.

285/ Cape Times, 21 de octubre de 1974; Rand Daily Mail, 21 de octubre de 1974.

286/ Rand Daily Mail, 23 de octubre de 1974.

287/ House of Assembly Debates, 10 de febrero de 1972, cols. 723 a 729; véanse las siguientes columnas para el debate de la cuestión.

288/ Las otras tres organizaciones eran el South African Institute of Race Relations, el University Christian Movement y el Christian Institute of South Africa. Para los detalles, véase Star, 12 de febrero de 1972, pág. 7.

289/ House of Assembly Debates, 10 de febrero de 1972, cols. 729 a 732.

290/ Rand Daily Mail, 13 de marzo de 1972.

291/ Cape Times, 4 de abril de 1972.

230. La Oficina del Primer Ministro anunció que la comisión especial parlamentaria se convertiría en una comisión de investigación para que pudiera terminar sus trabajos durante las vacaciones parlamentarias 292/. Se publicaron en la Gaceta la notificación del nombramiento de la Comisión y los detalles de sus atribuciones ampliadas 293/. Estas atribuciones comprendían la facultad de hacer recomendaciones y de investigar a personas y organizaciones relacionadas con las cuatro organizaciones sujetas a investigación. Las nuevas atribuciones incluían también la facultad de citar (subpoena) testigos. Las normas enunciadas en una proclamación del Presidente de Estado disponían también un riguroso secreto de las investigaciones de la comisión 294/. El Ministro de Policía Adjunto, Sr. A. L. Schlebusch, miembro nacionalista en el Parlamento por Kreenstad, fue designado Presidente y la comisión fue conocida con el nombre de Comisión Schlebusch 295/. Durante la segunda mitad de 1972 varias personalidades académicas fueron citadas como testigos ante la Comisión 296/.

231. La Comisión Schlebusch presentó dos informes provisionales a la Asamblea durante el comienzo del período de sesiones parlamentario de 1973. En uno de los informes se recomendaban medidas urgentes contra los ocho dirigentes estudiantiles de la NUSAS; en el otro se recomendaba el establecimiento de una comisión permanente parlamentaria de seguridad interna. Ambos informes eran unánimes, pues las recomendaciones recibieron el pleno apoyo de los cuatro miembros del Parlamento pertenecientes a la oposición que habían formado parte de la Comisión 297/. Como resultado de estos dos informes el Gobierno proscribió a los ocho dirigentes de la NUSAS. El Gobierno también anunció que dictaría las normas oportunas para establecer la comisión de seguridad interna 298/. El testimonio de la Comisión afirmaba que la NUSAS había sido culpable de actividades políticas dirigidas a alterar el orden político existente; que esa actividad estaba dirigida por una "camarilla" de desadaptados socialmente en clara oposición a las leyes y que recibía fondos del extranjero 299/.

292/ Cape Times, 13 de julio de 1972, según la cita que figura en Defence and Aid Information Service, julio-diciembre de 1972, pág. 528.

293/ Government Gazette, 14 de julio de 1972, vol. 85, Nº 3613; Government Notice Nº 1238.

294/ Véase Regulation Nº 14 del Government Notice Nº 1238.

295/ Star, 5 de agosto de 1972.

296/ Rand Daily Mail, 25 de octubre de 1972, Cape Times, 25 de octubre de 1972.

297/ Rhodesia Herald, 5 de marzo de 1973. Las proscripciones del Gobierno produjeron las protestas de parte de la prensa contraria al Gobierno, y dentro del United Party; el Ministro sin cartera de Educación en la oposición, Sra. Catherine Taylor, dimitió alegando que los miembros de la oposición habían suscrito las proscripciones de estudiantes decretadas por el Gobierno. Véase Rand Daily Mail, 5 de marzo de 1973; véase también Sunday Times, 11 de marzo de 1973.

298/ Para el debate sobre el informe de la comisión de investigación, véase House of Assembly Debates, 16 de agosto de 1974, cols. 829 a 914.

299/ Sunday Times, 18 de marzo de 1973. Esta reseña comentaba que las cinco clases de argumentos no habían producido pruebas suficientes ni "para ahorcar a un gato". El testimonio de la Comisión Schlebusch no justificaba la proscripción de ocho dirigentes estudiantiles de NUSAS, según el Sr. Japie Basson, miembro del Parlamento por la oposición; véase Sunday Times, 22 de abril de 1973.

232. La NUSAS publicó un detallado informe rechazando los argumentos de la Comisión Schlebusch. En el "contrainforme" de la NUSAS se analizaban las pruebas en que se basaba el decreto de proscripción de los ocho dirigentes estudiantiles. Se rechazaban los distintos argumentos, se presentaban datos financieros que desmentían la afirmación de que NUSAS dependía de fondos clandestinos del extranjero, y se negaba que la organización estuviera manipulada por una "camarilla" de habitantes de comunas 300/.

La Universidad de El Cabo Occidental

233. A raíz de los disturbios que afectaron a un amplio sector de la comunidad de color, así como a los estudiantes de la Universidad de El Cabo Occidental, que pedían la reintegración incondicional de los dirigentes sancionados como consecuencia de las protestas estudiantiles, el Gobierno designó una comisión de investigación a cargo del Magistrado van Wyk a fin de investigar las quejas de los estudiantes 301/. Durante el conflicto, 17 estudiantes fueron expedientados. La Comisión van Wyk preparó un informe que se publicó en marzo de 1974, en el que decía que el Gobierno tenía, o bien que acabar con el carácter étnico de la universidad de color o bien evitar que los agitadores se introdujeran en la universidad. Se decía que las causas inmediatas de los disturbios provenían de las actividades de la SASO. La Comisión concluyó que, con escasas excepciones, las objeciones a las normas eran infundadas o exageradas 302/.

Comisión de investigación de la Universidad North (Turfloop)

234. En noviembre de 1974, el Gobierno nombró una comisión investigadora para "ciertas cuestiones relacionadas con la Universidad North" 303/. El presidente y único miembro de la Comisión fue el Sr. J. H. Snyman, magistrado del Tribunal Supremo de la División del Transvaal. La Comisión tenía que investigar los acontecimientos ocurridos el 25 de septiembre en la Universidad, determinar sus causas y el papel desempeñado por la dirección universitaria, el consejo representativo de estudiantes y cualquier otra organización. Un millar de estudiantes encargaron al consejo representativo de estudiantes a que compareciera ante la Comisión e informara a un abogado, el Sr. I. Mahomed para que expusiera los argumentos 304/. Un antiguo dirigente estudiantil que se había refugiado en Botswana después de su detención a raíz de la manifestación pro-FELIMO, dijo que podía prestar testimonio ante la Comisión únicamente si se celebraban las audiencias "en terreno neutral" 305/.

300/ Rand Daily Mail, 16 de agosto de 1974. Véase también Cape Times, 14 de agosto de 1974; Varsity (publicación estudiantil de la Universidad de El Cabo), Nº especial sobre el informe Schlebusch.

301/ Rand Daily Mail, 1º de marzo de 1974; Sunday Times, 1º de marzo de 1974.

302/ Para un resumen de los comunicados de prensa, véase Defence and Aid Information Service, julio a diciembre, cols. 383 y 384.

303/ Government Gazette, 1º de noviembre de 1974; Government Notice Nº 2051. Véase también Rand Daily Mail, 2 de noviembre de 1974, 8 de noviembre de 1974.

304/ Rand Daily Mail, 21 de noviembre de 1974. Para algunos detalles acerca del procedimiento y testimonio en la fase inicial de la Comisión, véase Rand Daily Mail, 21, 27 y 30 de noviembre de 1974.

305/ Rand Daily Mail, 6 de diciembre de 1974.

235. El testimonio prestado ante la Comisión por un profesor negro sostenía que la agitación en la universidad había sido una manifestación del descontento por la discriminación contra los negros reinante en la universidad 306/. Cincuenta y dos profesores de la universidad propugnaron un cambio radical en el procedimiento de designación del senado, del consejo, del rector, de los catedráticos y del personal administrativo de la universidad. Las propuestas las presentó la Black Academic Staff Association (BASA) 307/. La policía declaró ante la Comisión que existían abundantes pruebas de que la causa fundamental de la agitación estudiantil se debía a la actividad de la SASO, que estaba siendo manipulada por el "comunismo" y dirigida hacia un enfrentamiento con el Estado. La declaración agregaba que BASA estaba también implicada, puesto que su ideología era "justamente una extensión de la ideología de la SASO 308/. En su alegato definitivo, el día último de la investigación, el Sr. Mahomed resumió las posiciones del personal y de los estudiantes negros en la universidad. El comunicado de prensa de su exposición incluía el texto siguiente:

"Si se emprendieran reformas internas radicales en la administración de Turfloop, y otras universidades negras, para ajustar la administración a la política de una universidad no sólo para negros "sino de negros y por negros", los interesados cobrarían un sentido de dignidad personal y un mayor sentido de dedicación que contribuiría al funcionamiento más efectivo de la Universidad. No hay razón alguna para que la mayoría de los miembros del Consejo Universitario no sean negros, procedentes de órganos responsables, tales como los gobiernos de territorios patrios y las organizaciones de padres de las zonas urbanas africanas. La designación de un rector o de un secretario africano en Turfloop permitiría asimismo a los africanos liberarse de los complejos de inferioridad que han originado las prácticas discriminatorias en las universidades. El control ejercido por los blancos en una universidad africana dentro de una zona considerada como territorio patrio africano era fuente de profundos rencores. Los estudiantes y profesores de Turfloop eran personas cultas, idealistas y profundamente conscientes de su propia dignidad. Las prácticas discriminatorias en la universidad habían, por consiguiente, actuado como un importante catalizador de desunión entre la administración y el estudiantado. No eran las diferencias en materia de sueldos, facilidades o licencias de estudio concedidas a blancos y negros lo que producía una profunda irritación, sino el hecho de que tales diferencias se debieran simplemente a la diferencia del color de la piel." 309/

5. Obstáculos a las organizaciones de estudiantes

236. En informes anteriores del Grupo Especial de Expertos (principalmente E/CN.4/1135, E/CN.4/1111 y E/CN.4/1159) se han indicado las proscripciones y limitaciones de que eran objeto los dirigentes estudiantiles que criticaban abiertamente el apartheid. Así pues, al comienzo del año académico de 1973, siete estudiantes y un profesor asociado a la NUSAS fueron proscritos por cinco años, a raíz del informe provisional de

306/ Rand Daily Mail, 5 de marzo de 1975.

307/ Sunday Times, 30 de marzo de 1975.

308/ Rand Daily Mail, 25 y 26 de marzo de 1975; Star, 29 de marzo de 1975.

309/ Rand Daily Mail, 27 de marzo de 1975.

la Comisión Schlebusch 310/. Análogas medidas se tomaron en el caso de la SASO durante el mismo año. En una ocasión se penetró en las oficinas de la SASO y se robaron documentos confidenciales. A esto siguieron órdenes de proscripción contra ocho activistas de la SASO 311/. En una lista de 29 miembros y partidarios de organizaciones negras, detenidos e interrogados de noviembre de 1974 a marzo de 1975, publicada por la SASO en el período que se examina, al menos ocho figuran como estudiantes o, concretamente, como miembros de la SASO 312/.

237. En un folleto publicado por el Academic Freedom Committee de las Universidades de El Cabo y Witwatersrand se afirmaba la presencia de delatores de la policía en los recintos universitarios 313/. El conocimiento o la sospecha de que esos delatores se hallaban presentes en las clases y en las reuniones creaba una atmósfera de inseguridad bajo la cual los profesores y los estudiantes abrigaban el temor de ser delatados, con razón o sin ella, a las autoridades, que podrían tomar medidas basadas en esas delaciones, sin posibilidad de recurso alguno ante un tribunal de justicia, según se decía en el folleto. Pocos meses después de la publicación del folleto, el jefe de la sección de seguridad del Cabo Occidental informó que uno de sus funcionarios había participado con un estudiante en una reunión secreta. Un periódico publicó extractos de una conversación durante la cual el estudiante dijo que el policía lo venía molestando desde 1972; y que le había hecho diversas ofertas para comprarle información 314/.

238. Las limitaciones a la libertad de expresión de los estudiantes forman parte en todo caso del sistema universitario negro. Por ejemplo, cuando se abrieron las universidades de North y de Zululandia, no se toleraba la afiliación a la NUSAS o a ninguna otra organización estudiantil 315/. Desde el comienzo de 1971 a todos los estudiantes que solicitaban el ingreso en el University College of the North (Turffloop) se les requería para que firmasen una declaración de lealtad al colegio. El texto de esta declaración fue presentado al Parlamento en marzo de 1971 316/. Se confirmó que el Consejo del colegio había prohibido todas las protestas, fueran pacíficas o violentas 317/.

310/ Defence and Aid Information Service, enero a junio de 1973, col. 126.

311/ Cape Times, 1º de febrero de 1973; Rand Daily Mail, 6 de febrero de 1973; Rand Daily Mail, 1º y 3 de marzo de 1973; Star, 17 de marzo de 1973 (citado por Defence and Aid Information Service).

312/ "Second Report on arrests, detentions and trials of members and supporters of South African Students' Organisation, Black Peoples' Convention, Black Community Programme, Black Allied Workers' Union, Theatre Council of Natal, Peoples' Experimental Theatre" (publicado por SASO, abril de 1975).

313/ The Open Universities in South Africa and Academic Freedom, 1957-1964. Los signatarios del folleto incluían dos rectores de universidades, el Presidente de los consejos universitarios, académicos y un dirigente estudiantil. Para un artículo sobre la publicación, véase Sunday Times, 19 de enero de 1975.

314/ Rand Daily Mail, 22 de abril de 1975, Cape Times, 22 de abril de 1975. Para una relación más reciente de la vigilancia y de la intimidación policíacas, véase Defence and Aid Information Service, enero a julio de 1969, pág. 278.

315/ Horrell, op. cit., pág. 151.

316/ House of Assembly Debates, 12 de marzo de 1971, col. 482.

317/ Rand Daily Mail, 12 de marzo de 1971, citado en Defence and Aid Information Service, enero a junio de 1971, col. 443.

239. Desde la creación de SASO, se informó que los Departamentos de Asuntos Indios y de Relaciones con la Gente de Color habían declarado que a las organizaciones universitarias de estudiantes bajo su control no se les permitiría afiliarse a la SASO 318/. En marzo de 1973, ocho dirigentes de la SASO fueron proscritos por cinco años. Otros miembros de la SASO, que se hicieron cargo de las oficinas de los funcionarios proscritos fueron a su vez deportados 319/. En ese mismo año se publicó más tarde que la SASO había sido proscrita de los recintos universitarios de Fort Hare, North y Western Cape, así como de la zona del Gobierno de Bophuthatswana 320/. El Consejo de la Universidad North publicó una orden por la que prohibía las actividades de SASO y tomó la decisión de disolver el consejo representativo de estudiantes y celebrar nuevas elecciones 321/. La SASO se quejó de que esta universidad no sólo había prohibido las actividades de SASO en los recintos universitarios, sino que había rechazado la admisión de algunos estudiantes miembros de esa organización 322/. En el año anterior, se había revelado que había sido rechazada una solicitud de 130 estudiantes negros que pedían su ingreso en la Universidad de Sudáfrica (una universidad por correspondencia) después de haber sido expulsados o suspendidos de colegios tribales 323/.

240. El 1º de febrero de 1974 el Sr. O. R. A. Tiro, dirigente de la SASO que había escapado a Botswana, murió a consecuencia de la explosión de una bomba enviada por correo. Después de su huida, había llegado a ser presidente de la South African Students Union, cuya segunda conferencia debía celebrarse en Gaborone en junio 324/.

241. En un informe anterior del Grupo (E/CN.4/1159, párr. 79), se informó acerca de las detenciones y juicios de una reunión pro FRELIMO prohibida. A principios de 1975, 12 negros encarcelados durante cuatro meses después de la reunión sin haber sido objeto de juicio alguno, fueron juzgados sumariamente en Pretoria, acusados de infringir la ley sobre terrorismo. El acta de acusación, de 81 páginas, mencionaba concretamente a la SASO, y alegaba que los acusados habían conspirado entre sí y con otros elementos en los años de 1968 y 1974 para cometer diversos actos, inclusive tentativas para transformar el Estado por medios anticonstitucionales, violentos o revolucionarios 325/. Días después, se acusó de las mismas infracciones de la ley sobre terrorismo a una decimotercera persona 326/.

318/ Rand Daily Mail, 7 de julio de 1971, citado en Survey of Race Relations, 1971, pág. 293.

319/ Ibid. Se citan los nombres de los dirigentes de la SASO proscritos.

320/ Rand Daily Mail, Townships edn. 8 de septiembre de 1973, citado en Survey of Race Relations, 1971, pág. 344.

321/ BBC Monitoring Service, 20 de febrero de 1975.

322/ Rand Daily Mail, 20 de febrero de 1975.

323/ Star, 6 de julio de 1974.

324/ Defence and Aid Information Service, enero a junio de 1974, col. 665.

325/ Times (Londres), 8 de febrero de 1975.

326/ "Second report on arrests, detentions and trials of members and supporters of SASO, BCP, BAWU, Tecon and PET", (publicado por SASO, abril de 1975).

242. A comienzos de 1975, el informe de la Comisión Van Wyk-De Vries sobre universidades contenía recomendaciones en virtud de las cuales se podría declarar a la NUSAS como organización ilegal, otorgar a las universidades facultades políticas para poner fin a la actividad política en el recinto universitario, suspender a las universidades el subsidio estatal de no poner término a las actividades del personal y de los estudiantes y sustraer estos casos a la jurisdicción de los tribunales de justicia 327/.

E. El apartheid y la familia africana

243. Esta es la primera vez que el Grupo Especial de Expertos estudia con detalle esta cuestión, aunque en varios informes anteriores ya se ha hecho referencia a los efectos destructores que tiene el apartheid sobre la vida de la familia africana.

1. Descripción de la familia africana y análisis del papel que desempeña

244. Dentro de la organización social tradicional de la tribu, la unidad social más importante era la familia u hogar, que solía componerse de un hombre con su mujer o mujeres y los hijos a cargo, más otras personas, fueran o no parientes suyos, que podían estar unidas a él. Además de su función biológica, la familia desempeñaba una función educadora. También era en gran medida una unidad autárquica en cuanto a la producción y el consumo de alimentos 328/.

245. La estructura de la familia africana en el marco del orden social (patriarcado, función tutelar del varón, primogenitura por línea masculina, poliginia, matrimonios arreglados, sororato y levirato) proporcionaba protección a las mujeres y a las familias y aseguraba sus derechos cuando sus miembros pertenecían a hogares autosuficientes en una comunidad agrícola 329/.

246. Aunque el impacto de la ocupación blanca y del desarrollo de la economía urbana blanca contribuyeron a dislocar la sociedad tradicional africana, la acción más violenta de dislocación del sistema familiar se produjo a raíz de la institucionalización en el siglo XX del sistema de mano de obra migrante, que tuvo su origen en la industria de los diamantes hacia la mitad del siglo XIX 330/.

327/ Star, 15 de febrero de 1975; Sunday Times, 16 de febrero de 1975; Rand Daily Mail, 12 de febrero y 4 de marzo de 1975.

328/ I. Schapera, Western Civilisation and the Natives of South Africa, (Routledge, 1934), cap. 1, págs. 6 a 10.

329/ H. J. Simons, African Women: Their Legal Status in South Africa (Evanston, Ill., North-western University Press, 1968), págs. 79 a 84, 87 a 93 y 100 a 106. Para más detalles sobre la organización del parentesco y del clan en la sociedad tradicional, véanse: Schapera, op. cit., págs. 15 a 19; sobre la diferenciación por el sexo y la edad; ibid., págs. 19 a 22; E. J. Krige, en The Bantu-Speaking Tribes of South Africa, compilado por I. Schapera (Routledge, 1937), págs. 95 a 118; sobre los detalles de las diferencias de estructura social: Monica Wilson, "The Nguni people", en The Oxford History of South Africa, compilada por Monica Wilson y Leonard Thompson (Oxford Clarendon Press, 1969) (citado en lo sucesivo como Oxford History), vol. I; Monica Wilson, "The Sotho, Venda and Tsonga", en Oxford History, vol. I, especialmente págs. 153 a 155 y 158 a 163.

330/ Oxford History, vol. II, pág. 214. Véase también Francis Wilson, Migrant Labour in South Africa (Johannesburgo, Spro-Cass, 1972), especialmente el cap. 1, "Historical Background".

247. El sistema de mano de obra migrante se desarrolló y perpetuó como resultado de las políticas de control aplicadas en tres aspectos: a) segregación de las tierras y del territorio; b) mano de obra; y c) entrada de africanos en las zonas urbanas.

a) Tierras

248. La Native Land Act Nº 27 de 1913 fue el primer texto legislativo en el que se incorporaron los principios de la separación territorial. Una serie de comisiones cuya función era establecer líneas permanentes de separación territorial llevó a la promulgación de otras medidas en 1936, en particular la Native Trust and Land Act (Nº 18) de 1936 (para un resumen de esta ley, véase el informe de la Comisión Tomlinson, 1951-1955, págs. 44 y 45, párrs. 30 a 35; véase también el documento E/CN.4/1050) 331/.

249. Las restricciones sobre las tierras africanas estaban íntimamente relacionadas con las demandas de mano de obra por parte de los agricultores e industriales blancos; es decir, las limitaciones sobre las tierras africanas iban dirigidas, lo mismo que las contribuciones en dinero impuestas a los africanos a partir del siglo XIX, a obligarles a ganar dinero en la economía blanca 332/.

b) Mano de obra contratada y migrante

250. Algunas industrias, como la minería, empleaban a trabajadores varones por contrata, lo que excluía la posibilidad de que el trabajador se empleara para trabajar junto con su familia 333/.

251. Las estadísticas laborales indican que hubo un fuerte y constante aumento del número de trabajadores migrantes 334/. El número de trabajadores negros empleados nada más que en las minas de oro se duplicó entre 1910 (183.793) y 1939 (321.400) 335/.

252. Varias comisiones gubernamentales (anteriores a 1948) condenaron el sistema de mano de obra migrante: en 1942 el Comité Interdepartamental sobre las Condiciones Sociales, Sanitarias y Económicas de los Africanos en las Zonas Urbanas (el Comité Smit) en el informe que presentó (párr. 8), y en 1946 el Consejo de Planificación

331/ Para informaciones al día sobre la situación de hecho en el campo, véanse: M. Horrell, The African Reserves of South Africa (SAIRR, 1969); y M. Horrell, The African Homelands of South Africa (SAIRR, junio de 1973).

332/ "La intención inicial era instalar en esas zonas vigiladas a los indígenas residentes, y no planear nada para que el crecimiento natural de la población, el excedente de esa población encontrara trabajo en otra parte ... de forma que ... en la generación siguiente solamente hubiera un número limitado de agricultores, esto es, de agricultores indígenas, y que el resto tuviera que salir a trabajar fuera" (pasaje de "Native location surveys", citado por M. Wilson).

333/ Francis Wilson, Labour in the South African Gold Mines, 1911-1969 (Londres y Cambridge, Cambridge University Press, 1972), especialmente págs. 2 a 5.

334/ Sheila van der Horst, Native Labour in South Africa (reimpreso por Cass en 1971); para el aumento de la mano de obra africana contratada entre 1904 y 1939 véase la página 216.

335/ Wilson, op. cit., págs. 157 y 158.

Económica y Social en su informe Nº 9 titulado "Las reservas de indígenas y su lugar en la economía de la Unión Sudafricana" (párr. 11). El informe de la Comisión de Legislación sobre los Indígenas de 1946-1948 (la Comisión Fagan) vio que la idea de una segregación total era completamente impracticable, y declaró que en las zonas urbanas había una población africana que estaba establecida permanentemente en ellas (página 19, párr. 28). El Comité Smit en particular subrayó las repercusiones del sistema sobre la vida de la familia africana, y en su informe manifestó que "en la última mitad del siglo se ha producido una decadencia de la estabilidad de la vida de las familias indígenas, lo cual constituye un peligro para toda la nación -lo mismo para los negros que para los blancos-, en los terrenos de la salud, la moralidad y las estructuras sociales generales, la paz, el orden, un estado de satisfacción razonable, la buena voluntad y un sentido de solidaridad nacional" 336/.

253. Pero después de ganar las elecciones de 1948, el Gobierno nacionalista rechazó las conclusiones de la Comisión Fagan y reafirmó las de la Comisión Stallard en 1922, según la cual la residencia permanente en las ciudades era un derecho exclusivo de los blancos. La política que se siguió fue la de tratar de bloquear el número de africanos que vivían en las ciudades y evitar que siguieran emigrando a ellas más familias africanas 337/.

c) Entrada en las zonas urbanas

254. La política contra la urbanización de los africanos, salvo como trabajadores eventuales, remonta a los años anteriores a la constitución de la Unión 338/; y después de constituida ésta, la Native (Urban Areas) Act de 1923 estableció las bases de esta política 339/.

255. A partir de 1948 el Gobierno intensificó su política de reducir e invertir la emigración de trabajadores hacia las zonas urbanas, exceptuando únicamente la mano de obra de absoluta necesidad. El artículo 10 de la Bantu (Urban Areas) Consolidations Act (Nº 25), modificada, constituye la cláusula decisiva que controla la admisión y presencia de los africanos en las zonas urbanas. En virtud de esta disposición, ningún africano puede permanecer en una zona urbana más de 72 horas a no ser que tenga un permiso para trabajar o para buscar trabajo, o a menos que esa persona tenga derecho a que se le exima de tal prohibición por haber vivido en esa zona urbana desde su nacimiento o durante quince años consecutivos, haber trabajado diez años para el mismo empleador, o ser la esposa, hija soltera o hijo menor de 18 años de un africano a quien ya se le haya concedido tal exención y que, "después de haber entrado legalmente en la zona, resida generalmente con ese africano".

256. En 1952 se declaró aplicable el artículo 10 de la Native (Urban Areas) Consolidation Act tanto a las mujeres africanas como a los hombres.

336/ Citado en Oxford History, vol. II, pág. 189.

337/ Oxford History, vol. II, pág. 191.

338/ Oxford History, vol. II, pág. 186.

339/ Oxford History, vol. II, págs. 187 y 188.

257. En los últimos años del decenio de 1950, el artículo 10 de esta ley se aplicó de forma cada vez más estricta. (A una mujer soltera se le puede ordenar que abandone una ciudad si no reúne los requisitos para permanecer en ella o si pierde su trabajo y no existe una vacante adecuada. Una mujer casada puese ser obligada a salir de la ciudad si su marido fallece o la abandona 340/.)

258. En 1974, de cada cinco personas detenidas en virtud de la ley de pases una era mujer (se detuvo a 60.273 mujeres y 214.368 hombres) 341/.

259. En 1959 se publicaron las Revised Native Labour Regulations (orden gubernamental Nº 63 de enero de 1959); por vez primera se declaró aplicable el reglamento a las trabajadoras africanas, las cuales no podían tener legalmente un empleo si no se presentaban a la oficina local de colocación 342/.

260. La Bantu Laws Amendment Act Nº 76 de 1963 afectó: a) a la entrada en las zonas urbanas, y b) a los sirvientes domésticos en las zonas urbanas 343/.

261. La Bantu Laws Amendment Act Nº 42 de 1964 reforzó las medidas para el control de la residencia y el empleo de los africanos 344/.

262. Por las Bantu Labour Regulations, publicadas el 3 de diciembre de 1965, se controló la entrada de mujeres en las zonas urbanas y se dictaron medidas para restringir a las mujeres el derecho de alquilar viviendas (las solicitudes de alquiler presentadas por madres solteras son rechazadas; no se puede transferir a una divorciada el alquiler a menos que su ex marido consienta voluntariamente en cederle su derecho; una viuda tiene que probar que ha estado casada legalmente, que tiene medios para pagar el alquiler y que tiene derecho a permanecer en la zona) 345/.

263. A los hijos menores se les puede impedir que vivan con sus padres. Esto puede hacerse por falta de vivienda apropiada -en 1973 había en Johannesburgo 14.000 familias africanas en la lista de espera- 346/ y la política del Gobierno consiste en fomentar el alojamiento de los africanos de las zonas urbanas en barracones, en vez de proporcionarles viviendas familiares (véase el párrafo 280). La causa puede ser también que el padre o la madre no tengan derecho a residir en la zona urbana o que se trate de los hijos de una mujer soltera que no tiene derecho a incluirlos en su permiso de residencia 347/.

340/ Survey of Race Relations, 1957-1958, pág. 47.

341/ House of Assembly Debates, 11 de febrero de 1975; veánse también las estadísticas de detenciones de hombres y mujeres en Survey of Race Relations, 1966, págs. 163 y 164.

342/ Survey of Race Relations, 1958-1959, págs. 104 a 107.

343/ Survey of Race Relations, 1963, págs. 124 a 127.

344/ Survey of Race Relations, 1964, págs. 174 a 181 (las cláusulas relativas a las mujeres figuran en las páginas 179 y 180).

345/ Survey of Race Relations, 1966, pág. 165.

346/ Memorandum on the pass laws and influx control, Sash, Johannesburgo, febrero de 1974.

347/ Survey of Race Relations, 1966, pág. 165; Hilda Bernstein, For Their Triumphs and for Their Tears: Women in apartheid South Africa (International Defence and Aid Fund, 1975).

264. El párrafo 1 del artículo 10 de la Urban Areas Act ha cerrado prácticamente la entrada de nuevas mujeres en las ciudades 348/. Los contratos de los trabajadores domésticos incluyen la promesa de que no se permitirá a sus hijos que vivan con sus padres en la residencia del empleador, y se castiga tanto a los empleadores como a los trabajadores por incumplir esta promesa 349/.

265. Los padres que desean dar a sus hijos una educación superior a la primaria están obligados a enviarlos a los "territorios patrios" para seguir sus estudios, pues se está reduciendo el número de escuelas secundarias urbanas por política deliberada del Gobierno 350/.

2. Efectos del apartheid a corto y a largo plazo sobre la familia africana

a) Efectos sobre las familias rurales

i) Disparidad en la proporción de población masculina y femenina

266. Las estadísticas de 1936 y 1946 (ambos años de censo) indican la siguiente disparidad en la proporción de población masculina y femenina, por regiones urbanas y rurales 351/:

Zonas urbanas en promedio	1936	100.000 hombres más que mujeres
	1946	100.000 hombres más que mujeres
"Zonas rurales no bantúes"	1936	71.000 mujeres más que hombres
	1946	19.000 hombres más que mujeres
Zonas rurales "bantúes"	1936	490.000 mujeres más que hombres
	1946	528.000 mujeres más que hombres
Excavaciones, cuadrillas de trabajadores, recintos de trabajo, etc.	1936	500.000 hombres más que mujeres
	1946	500.000 hombres más que mujeres

267. La proporción entre sexos en una reserva africana muestra el máximo desequilibrio más extremo en la edad en que los padres trabajan y crían una familia. Uno de los pocos estudios completos sobre los efectos de la mano de obra migrante en una reserva africana -el Keiskammahoek Rural Survey- revela "la falta absolutamente desproporcionada de hombres en edad de trabajar y la enorme carga que suponen los ancianos y los niños para el resto de la población productiva ... En vista de la continua

348/ House of Assembly Debates, 18 de febrero de 1975, columnas 962 y 963; Survey of Race Relations, 1966: no se admiten mujeres en el casco urbano de la Ciudad de El Cabo, pág. 162.

349/ Star, 18 de septiembre de 1973, citado en X-Ray, febrero de 1974, vol. 4, Nº 5, págs. 1 y 2.

350/ Bernstein, op. cit., pág. 30.

351/ UG 53 de 1951, Informe de la Comisión Eiselen; véase el cuadro X, pág. 17. El cuadro XII indica el alto porcentaje de mujeres en las reservas africanas: también muestra los muy ligeros cambios registrados entre 1936 y 1946. Hacia 1960 el total de la población urbana africana era de 2.000.929 hombres y 1.443.021 mujeres. (nota 27).

disminución del número de hombres en edad de trabajar y del aumento creciente de niños y de ancianos, se registra una tendencia hacia ... una población compuesta principalmente de ancianos y niños"; y "ya en el momento actual (1946), las personas de 65 años y más y los niños menores de 15 representan más de la mitad de la población y al ritmo registrado durante el decenio comprendido entre los dos censos (1936-1946) podrían representar el 60% del total de la población en otra generación" 352/.

ii) Evolución de la estructura de la familia

268. Según la información de que dispone el Grupo, el sistema de mano de obra migrante ha dado origen a la separación del marido y la mujer y a la ausencia del padre de familia durante prolongados períodos de tiempo 353/. Según el Keiskammahoek Survey, son muy pocos los hogares en los que hay un cabeza de familia varón. Por ejemplo, en una muestra de cinco aldeas, sólo el 59% de los hogares tenían un cabeza de familia varón. En otros muchos hogares, el cabeza de familia era una viuda. La composición de los hogares estaba "en perpetuo estado de fluidez" 354/.

269. Se ha dicho que los efectos económicos de la ausencia de los varones de la familia rural son al mismo tiempo resultado y causa de la pobreza de la economía de las reservas, pues la ausencia de tantas personas en la flor de la edad frena el progreso económico y contribuye a la baja de la productividad agrícola 355/.

270. Las mujeres permanecen en las reservas para cuidar solas de la familia. Pueden considerarse dichosas si disponen de un pequeño trozo de terreno y si su marido ausente les envía regularmente dinero. Les queda la tarea tanto de cuidar a los viejos como de educar a niños "sin padre" 356/.

271. Los campamentos de reasentamiento son zonas en los "territorios patrios" a donde se envía a los ancianos, a las mujeres y a los niños que no tienen derecho a residir en las zonas urbanas. La situación de las familias separadas es, si cabe, más angustiosa que la de otras de las reservas, pues se trata de personas de procedencia urbana, no acostumbradas a trabajar en el campo, que no disponen ni de los servicios sociales ni de oportunidades de empleo, y las tierras que se les asigna son a menudo secas y sin valor 357/.

352/ D. Hobart Houghton y Edith M. Walton, "The Economy of a Native Reserve" (denominado en adelante Keiskammahoek Survey), vol. 2, 1952; véase especialmente el cuadro 8, pág. 35 y págs. 20 a 35.

353/ M. B. Mbata, "The African in the city and his family", conferencia en el South African Institute of Race Relations, Durban, 1960, pág. 3, citado en Oxford History, vol. II, pág. 214.

354/ Keiskammahoek Survey, págs. 53 y 54, véase el cuadro 23, pág. 60, y también el cuadro 26.

355/ Keiskammahoek Survey, págs. 51 y 52 y 112 y 113. Véase también la declaración del Secretario de Sanidad a la Comisión Fagan (informe de la Native Laws Commission, 1946-1948), pág. 40.

356/ Phyllis Ntantala, "The widows of the reserves", Africa South, vol. 2, Nº 3, abril-junio de 1958, págs. 9 a 13. Véase también "Apartheid and the disabilities of women in South Africa", sección sobre el apartheid, notas y documentos, diciembre de 1973, especialmente las páginas 4 a 8, donde se cita Towards Social Change, informe de la Comisión de Estudio sobre el Cristianismo en la Sociedad del Apartheid.

357/ Información documentada por Cosmas Desmond, The Discarded People, Christian Institute of South Africa. Véase también Financial Mail, 15 de junio de 1973.

iii) Consecuencias sociales

Separación de las familias

272. El número de hogares sin maridos en las reservas llega a ser del 54% y en algunos distritos hasta del 72% 358/.

Perturbación de la vida conyugal

273. La prolongada ausencia de los maridos significa, según la información de que dispone el Grupo, que se deshace una elevada proporción de familias. Los maridos en las ciudades, separados durante largo tiempo de sus esposas, tienden a entablar otras relaciones, y a abandonar a sus familias por motivos financieros o de otra clase. Las mujeres también pueden sentirse solas y buscar otros vínculos 359/.

Ilegitimidad

274. Las separaciones prolongadas y las familias deshechas son causa de gran cantidad de hijos ilegítimos. En unos casos se trata de hijos de las madres abandonadas; en otros, de hijos de madres que viven en las ciudades y que, por no poder atenderlos los envían a educarse al campo con algunos parientes. En la Reserva de Keiskammahoek, un niño de cada cuatro era ilegítimo 360/.

Consecuencias para la situación de la mujer

275. La situación de las mujeres africanas en lo que se refiere a la tutela y guarda de los hijos menores, el matrimonio y los derechos de propiedad, se complica por los conflictos que surgen entre el derecho común y el derecho consuetudinario africano. Además, ciertos aspectos del derecho africano han sido reforzados por el Gobierno actual, lo que ha venido a perpetuar la situación de las mujeres como menores, sin derechos de propiedad, ni siquiera el derecho a heredar, sin libertad para casarse sin permiso de sus padres y sin el derecho a la guarda de sus hijos si su padre los reclama 361/.

358/ Monica Wilson, "Let no man put asunder", SA Outlook, enero de 1974.

359/ Ellen Hellman, "The effects of industrialization on social structure and family life" (mimeografiado, 1968), pág. 13. Véase también Dr. Trudi Thomas, "Children of the Ciskei", Fact Paper 8, X-Ray, diciembre de 1973.

360/ Keiskammahoek Survey, págs. 11 y 12 y cap. 3, cuadro 29. Véase también "Migrant labour: Churches' Statement" (Christian Council of South Africa), SA Outlook, marzo de 1956; y Dr. Trudi Thomas, op. cit.

361/ Respecto del debate parlamentario sobre incapacidades legales de las mujeres africanas, véase House of Assembly Debates, de 18 de febrero de 1975, cols. 954 a 966. Véase también "Apartheid and the disabilities of women in South Africa", dependencia de Apartheid, notas y documentos, diciembre de 1973.

Consecuencias para los niños de las zonas rurales

276. Las consecuencias del sistema de mano de obra migrante sobre los niños africanos en el territorio patrio de Ciskei ha sido estudiado recientemente por la doctora Trudi Thomas, de la misión blanca en el territorio patrio de Ciskei 362/. Sus estadísticas, basadas en cuestionarios, muestran que el 60% de los niños mal nutridos eran ilegítimos; y que el 80% de los mismos habían sido abandonados por sus padres, la mayoría de los cuales trabajaban en ciudades. La doctora Thomas llama con insistencia la atención sobre las consecuencias emocionales de la separación: faltos de cariño, dice, los niños se vuelven a su vez "huraños"; al estar descuidados se vuelven negligentes; y faltos de ayuda, se vuelven egoístas. El trabajo migrante tiende a crear y reforzar actitudes hostiles y una conducta cínica e irresponsable.

b) Consecuencias para las familias urbanas

i) Disparidad en las proporciones entre la población masculina y femenina

277. Respecto de las cifras que muestran la disparidad en la proporción entre la población masculina y femenina en las zonas urbanas y rurales, véase el párrafo 266 supra.

ii) Evolución de la estructura de la familia

278. La información de que dispone el Grupo Especial indica que la industrialización en virtud del sistema de mano de obra migrante ha provocado cambios en la estructura y funciones de la familia en las zonas urbanas, a saber, la sustitución de la familia tradicional en sentido amplio por el núcleo familiar estricto, debilitándose los vínculos con el grupo familiar más amplio 363/.

279. Las familias urbanas, al igual que las rurales, se distinguen por una alta proporción de hogares a cargo de mujeres -y ello a pesar de la preponderancia de los hombres sobre las mujeres en las zonas urbanas 364/.

280. En las ciudades, la evolución de la estructura de los hogares se debe en gran parte a la escasez de alojamientos familiares 365/. Ha habido una prolongada crisis de viviendas urbanas para africanos, con largas listas de espera (véase el párrafo 263 supra); pero esta crisis se ha visto agravada por la actual política del Gobierno de demoler las viviendas familiares y construir únicamente albergues 366/.

362/ The Children of Apartheid (Africa Publications Trust), citado en X-Ray diciembre de 1973.

363/ Hellman, op. cit., pág. 13.

364/ Oxford History, vol. II, pág. 215. Véase también M. Wilson y A. Mafeje, Langa (1963), pág. 79.

365/ University of Natal, Institute for Social Research, "The Baumannville Community", pág. 24, citado en Oxford History, pág. 216; Wilson y Mafeje, op. cit., que citan ejemplos de Langa, pág. 75.

366/ Rand Daily Mail, 11 y 15 de abril de 1975; respecto del número de grupo de viviendas familiares construidas y la lista de espera, véase House of Assembly Debates, 20 y 30 de agosto de 1974; véase también Survey of Race Relations, 1974, págs. 165 a 168.

iii) Consecuencias sociales

Separación de las familias

281. La asignación de viviendas en la Ciudad de El Cabo solamente se concede a los cabezas de familia varones, de forma que las viudas, divorciadas, mujeres abandonadas y madres solteras no pueden disponer de un hogar para sus hijos 367/.

282. En un discurso pronunciado en septiembre de 1973, el Ministro Adjunto de Educación Bantú, dijo que en ciertas circunstancias el Gobierno podría permitir que los trabajadores africanos viviesen junto con sus mujeres, pero que los niños tendrían que quedarse en los territorios patrios 368/. En 1975 se hicieron también algunas concesiones en cuanto a la adquisición de viviendas por africanos en las zonas urbanas 369/.

283. Sin embargo, según la información de que dispone el Grupo Especial de Expertos, un desglose de la población negra de Johannesburgo en junio de 1971, junto con el tipo de vivienda que se les asignaba, muestra un rápido crecimiento del número de hombres y algunas mujeres (unas 100.000 personas en una población de 736.134) alojados individualmente. Este total no incluye a los residentes en los recintos para mineros ni a los sirvientes domésticos que viven con sus empleadores. Las cifras muestran también el número de personas que viven a) en albergues y b) en recintos 370/.

284. La magnitud de la mano de obra migrante en Port Elizabeth puede asimismo juzgarse por los cuadros que muestran los datos sobre los albergues municipales y los recintos suministrados por los empleadores, según la situación a fines de 1971 371/.

285. La aceleración de los planes para desplazar de las zonas urbanas a las familias negras "sobrantes", con el propósito de crear una fuerza de trabajo domiciliada en las zonas rurales que emigre a las zonas urbanas a título individual, ha dado lugar a un programa intensivo de construcción de albergues 372/.

367/ Survey of Race Relations, 1967, pág. 176.

368/ Rand Daily Mail, 20 de septiembre de 1973, citado en Survey of Race Relations, 1973, pág. 135.

369/ Times (Londres), 3 de mayo de 1975.

370/ F. Wilson, Migrant Labour in South Africa, op. cit., cuadro 7, pág. 30; para detalles de las posadas municipales, véase el cuadro 8, págs. 31 y 32.

371/ F. Wilson, op. cit., cuadro 24, págs. 65 y 66.

372/ "Hostels for South Africa's urban workers", African Bureau Document Paper 6, X-Ray, junio de 1973. Sobre los albergues en el poblado de Alexandra (cerca de Johannesburgo, véase Rand Daily Mail, 19 de agosto de 1972, citado en X-Ray, junio de 1973; Rand Daily Mail, 20 de marzo de 1975, 21 de abril de 1975; Star, 22 de agosto de 1973, citado en X-Ray, febrero de 1974, pág. 3. Respecto de los planes gubernamentales para suministrar alojamiento a más de 27.000 trabajadores en Pinetown, Natal, véase Rand Daily Mail, 29 de septiembre de 1974; House of Assembly Debates, 13 de agosto de 1974.

286. Los efectos del control de entradas se han hecho sentir de forma especialmente grave en la provincia del Cabo Occidental, en forma de dislocación de la vida familiar, según la información de que dispone el Grupo 373/. En dicha región, el Gobierno anunció en 1961 que no se permitiría la entrada de más mujeres africanas en el Cabo Occidental, ni para obtener un empleo ni para vivir con sus maridos de forma permanente 374/.

287. Es normal que las familias queden separadas por la detención de hombres -y mujeres- africanos por contravenir a las leyes y reglamentos sobre control. Las detenciones en virtud de las leyes de pases ascendieron a 10,5 millones entre 1948 y 1973 375/.

288. Se han señalado a la atención del Grupo Especial de Expertos varios expedientes sobre familias separadas como resultado de la aplicación de las leyes de pases y de los reglamentos de trabajo, así como de los sistemas de traslado de población. Se trata de las mujeres con hijos a quienes se niega el permiso de residir con sus maridos, y se las expulsa de las zonas urbanas, sin tener prácticamente a dónde ir 376/.

289. También se ha tomado nota del Plan complementario de asentamiento, elaborado por funcionarios gubernamentales en 1969, que sólo permitía a ciertas mujeres aceptar un empleo si enviaban a las zonas rurales a los hijos a su cargo. Estos hijos perdían el derecho a regresar 377/.

Consecuencias para las mujeres de las zonas urbanas

290. Las mujeres pueden ser expulsadas de las zonas urbanas y se les puede negar el permiso para vivir con sus maridos 378/. En realidad, según un estudio sobre las incapacidades de la mujer africana realizado por la Organización Internacional del Trabajo en un informe especial sobre el apartheid, incluso si una mujer africana que reúna las condiciones previstas en los incisos a) o b) del artículo 10, 1) de

373/ Survey of Race Relations, 1957-1958, pág. 47, que cita un "Memorando sobre algunas de las consecuencias de la aplicación de la Native (Urban Areas) Consolidation Act ... y otras disposiciones restrictivas", presentado por la Oficina Regional de El Cabo Occidental del South African Institute of Race Relations, mayo de 1958, a raíz de una investigación de ciertos casos.

374/ Survey of Race Relations, 1961, pág. 128.

375/ Respecto de las estadísticas sobre detenciones por el control de entradas, véase Survey of Race Relations, 1958-1959, pág. 108; respecto de detenciones de mujeres en redadas de la policía, véase también Survey, 1967, pág. 181; Rand Daily Mail, 4 de febrero de 1975; Financial Mail, 26 de julio de 1974; House of Assembly Debates, 11 de febrero de 1975; Rand Daily Mail, 8 de febrero de 1975.

376/ Información reunida por el Black Sash, citada en Africa Bureau Document Paper, X-Ray, agosto de 1972; y X-Ray, junio de 1974, pág. 4.

377/ X-Ray, marzo de 1972, Africa Bureau Document Paper, "The flesh and bones of apartheid".

378/ Survey of Race Relations, 1974, pág. 17.

la Bantu (Urban Areas) Consolidation Act (véase el párrafo 255 supra) contrae matrimonio con un africano que resida en otra zona y vaya a vivir con él, pierde sus derechos en su zona de origen. Aun cuando su marido reúna las condiciones de los incisos a) o b) en su propia zona, la esposa no adquirirá en ella esos derechos, aunque haya perdido los suyos en su zona. Aun cuando el marido pueda obtener un permiso para que su esposa viva con él, y la pueda alojar, ello no dará a la esposa derechos permanentes, y si queda viuda o se divorcia habrá perdido sus derechos legales en ambas zonas. Si antes de contraer matrimonio la mujer reunía las condiciones del inciso c), como hija soltera de un africano con derecho de residencia, pierde sus derechos si contrae matrimonio con un africano que no tenga ese derecho en la zona de su mujer 379/.

291. Al igual que las mujeres de las zonas rurales, las mujeres africanas de las zonas urbanas sufren también las consecuencias del apartheid por motivos tanto de su color como de su sexo. Aparte de la limitación de sus derechos para alquilar una vivienda (véase el párrafo 281 supra), de las incapacidades en virtud del derecho consuetudinario (véase el párrafo 275 supra) y de su situación de dependencia respecto de sus maridos (por ejemplo, en lo que respecta a los derechos de residencia descritos en los párrafos 255 y 290 supra), son también víctimas de discriminación en lo que respecta a los salarios (independientemente del hecho de que la mujer pueda ser el único sostén de la familia), seguridad social y otras prestaciones 380/. Y una vez casadas, incluso esta limitada aportación a la economía se supone que desaparece, y tanto ellas como sus hijos, así como los ancianos, son considerados como "apéndices inútiles" en perpetuo peligro de ser expulsados de las zonas "blancas".

292. Las mujeres, cuando se les autoriza a trabajar en las zonas urbanas, son alojadas en albergues para mujeres exclusivamente, aunque estén casadas y sus maridos trabajen en la misma zona. Los albergues actualmente en servicio en Alexandra, en las afueras de Johannesburgo, han sido calificados de "prisiones", construidas según un sistema de celdas, con un puesto de policía en el mismo local y una sala de control desde la que se accionan las rejas de acero para cada piso en caso de motines. No se admiten huéspedes varones, ni siquiera a los maridos, y los niños que vienen de visita no tienen acceso a los cuartos de las madres, sino que deben dormir solos en un cuarto especial 381/.

293. En resumen, las mujeres constituyen el sector de la población africana más vulnerable ante la idea que tiene el Gobierno de los africanos como "residentes temporales" en la economía blanca 382/, y la información de que dispone el Grupo indica que esta inseguridad o ilegalidad total que rodea su existencia en las zonas urbanas trae consigo una alta tasa de criminalidad entre las mujeres 383/.

379/ Undécimo informe especial del Director General concerniente a la aplicación de la Declaración referente a la política de apartheid de la República Sudafricana (Ginebra, OIT, 1975), págs. 37 y 38.

380/ Ibid., págs. 39 a 41.

381/ Para más detalles, véase Bernstein, op. cit., pág. 33; véase también Rand Daily Mail, 20 de marzo de 1975 y 7 de abril de 1975.

382/ Para una explicación del significado de esta política "temporal", véase Hellman, op. cit., pág. 12.

383/ Cape Times, 25 de junio de 1975.

Consecuencias para los niños de las zonas urbanas

294. La Dra. Trudi Thomas describe la inestabilidad de la vida familiar, la pobreza e inseguridad, el desamparo, la privación y la violencia como componentes del ambiente en que se crían los niños africanos de las zonas urbanas. "Si, para estudiar la ciencia del comportamiento, se deseara deliberadamente producir una persona viciosa y brutal, difícilmente se podría encontrar un ambiente depravado más adecuado 384/.

295. De un 30 a un 70% de los niños africanos nacidos en las grandes ciudades, son ilegítimos 385/.

296. La información recibida por el Grupo indica que estas condiciones conducen a un alto grado de delincuencia juvenil en las ciudades de Sudáfrica. Por ejemplo, abundan los "niños vagabundos" de edad no superior a los 7 u 8 años. Muchos de ellos son hijos de padres detenidos en virtud de las leyes de pases; otros son niños para los que no hay lugar en la escuela; otros, finalmente, niños de hogares destruidos y fuera del "control de los adultos". Muchos están ilegalmente en la ciudad por haber sido deportadas sus familias a los "territorios patrios" 386/.

297. Más del 60% de los niños africanos admitidos al Hospital Baragwanath de Johannesburgo están siendo tratados por malnutrición. Las mismas condiciones se observan en los hospitales y clínicas en todo Sudáfrica. El Profesor John Hansen, jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad de Witwatersrand, dijo que entre las causas de la malnutrición figuraban la pobreza e inestabilidad y la separación de las familias 387/.

298. La información de que dispone el Grupo muestra en particular que los niños africanos de las zonas urbanas se ven privados de escolaridad por la política del Gobierno de fomentar las escuelas secundarias para africanos únicamente en los "territorios patrios" (véase el párrafo 265 supra). De esta forma, los niños enviados a estudiar a los "territorios patrios" pierden su derecho a regresar a la ciudad.

Consecuencias para los hombres de las zonas urbanas

299. El sistema de mano de obra migrante implica la separación de las familias, la soledad y la inseguridad para los hombres de las zonas urbanas, así como para las familias que han tenido que dejar. Como consecuencia, los hombres fundan a menudo una segunda familia en la zona urbana tomando así una carga financiera insostenible 388/.

384/ Citado en Bernstein, op. cit., págs. 29 y 30.

385/ Bernstein, op. cit., pág. 29.

386/ "Twilight children", Sunday Times, 28 de julio de 1974.

387/ Rand Daily Mail, 29 de junio de 1973, citado en X-Ray, noviembre de 1973, pág. 1.

388/ Bernstein, op. cit.

300. Entre las consecuencias sociales que la vida de soltero impone a los hombres de los recintos y los alojamientos para solteros de los poblados, figuran, por otra parte, la embriaguez y el alcoholismo, la prostitución y las enfermedades venéreas, la homosexualidad, la violencia y el crimen 389/.

301. Se ha dicho que el control de acceso a las ciudades, que es causa de que muchas personas lleven una "existencia marginal" al margen de la ley, es también causa del elevado nivel de criminalidad: en Soweto, un poblado negro en las afueras de Johannesburgo, se registran 1.000 homicidios al año 390/.

302. También se ha comprobado durante decenios que el sistema de mano de obra migrante ha producido un efecto desfavorable sobre la salud física de los trabajadores migrantes 391/ y según la OMS es también causa de enfermedades mentales. Según la OMS, "para toda la familia separada, la imposibilidad de llevar una vida familiar normal, y el saber que son considerados y tratados como inferiores, no puede menos que repercutir en la salud mental". El informe señala que casi los dos tercios de los africanos admitidos en los hospitales psiquiátricos de Sudáfrica son "esquizofrénicos" 392/.

303. Se ha culpado a la "estructura socioeconómica de la población" de la "avalancha de pacientes" en los hospitales para africanos de las zonas urbanas 293/.

389/ Véase F. Wilson, Migrant Labour..., op. cit., último capítulo; y el informe de la Organización Mundial de la Salud, "Consecuencias para la salud del apartheid en Africa del Sur", marzo de 1975.

390/ Rand Daily Mail, 23 y 26 de noviembre de 1974; véanse también las estadísticas de criminalidad, House of Assembly Debates, 20 de septiembre de 1974.

391/ Para una documentación detallada, véanse las declaraciones del Doctor Gale, Secretario de Sanidad, para el informe de la Native Laws Commission, 1946-1948, págs. 38 a 40.

392/ OMS, informe sobre salud y apartheid, op. cit.

393/ Profesor Shamroth, en su lección inaugural como profesor de medicina, reportaje en Star, 23 de marzo de 1974, citado en X-Ray, julio de 1974, pág. 3.

II. NAMIBIA

Introducción

304. Los procedimientos ilegales mediante los cuales Sudáfrica ha ido ampliando cada vez más su jurisdicción sobre Namibia se han descrito en el informe de 1975 del Grupo Especial de Expertos 1/, en el que se señalan a la atención de la Comisión los azotes infligidos públicamente a las personas sospechosas de ser miembros o simpatizantes de la South West Africa People's Organization (SWAPO) por la policía "tribal" de Ovambolandia; el nuevo despliegue de unidades de la Fuerza de Defensa Sudafricana en la Faja de Caprivi y a lo largo de la frontera septentrional del Territorio con Angola; la detención de los dirigentes de la SWAPO y de la Liga de la Juventud de la SWAPO en virtud de las disposiciones de la Terrorism Act; y la decisión del dirigente del Partido Nacionalista en Namibia de celebrar "conversaciones multirraciales" con los representantes de los distintos "grupos étnicos" del Territorio sobre el futuro constitucional de Namibia 2/. En informes anteriores se analizaron también la Development of Self-Government for Native Nations in South West Africa Amendment Act, Nº 20 de 1973, en la que se facultó al Presidente del Estado a que otorgase estatuto de "autonomía" a "territorios patrios" sin intervención del Parlamento, y la South West African Affairs Act, Nº 25 de 1969, que llevó aún más lejos la integración ilegal de Namibia a Sudáfrica ampliando considerablemente las esferas en que la Administración del Africa Sudoccidental no tiene competencia 3/.

305. A pesar de la opinión consultiva emitida en 1971, por la Corte Internacional de Justicia, de los contactos establecidos por el Secretario General de las Naciones Unidas entre febrero de 1972 y diciembre de 1973, de la designación en enero de 1974 del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia exclusivamente, de las actividades del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas en que se insta a Sudáfrica a que retire su administración de Namibia (que culminaron con la resolución 366 (1974) del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre de 1974, por la que el Consejo exige que Sudáfrica haga una "solemne declaración" de que cumplirá las resoluciones de las Naciones Unidas antes del 30 de mayo de 1975), Sudáfrica ha mantenido y reforzado su ocupación ilegal de Namibia. En el período que se examina ha seguido aplicando medidas de apartheid en el Territorio, especialmente mediante una mayor consolidación de las estructuras de "territorios patrios", incluida la celebración de otras elecciones en Ovambolandia, el frecuente recurso a toda la gama de leyes represivas (que se aplican ilegalmente al Territorio) a fin de reprimir toda actividad política de la población africana, y la celebración de una supuesta "conferencia constitucional" en Windhoek, a la que asistieron representantes de los diferentes "grupos étnicos", con exclusión de la SWAPO y de otras organizaciones políticas compuestas de diversos grupos étnicos 4/.

1/ Véase E/CN.4/1159, párr. 194.

2/ Ibid., párrs. 196 a 199 y 208 a 236.

3/ E/CN.4/1135, párrs. 196, 198 a 201, 245 a 250; E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 2 y 3.

4/ Véanse las actas del Consejo de Seguridad, sesiones del 17 de diciembre de 1974 (S/PV.1811 y S/PV.1812) y del 30 de mayo de 1975 (S/PV.1823).

306. Las leyes que versan concretamente sobre la pena capital, los desplazamientos forzados de poblaciones, el trato de los presos políticos y de los combatientes por la libertad capturados, las flagelaciones en público, las condiciones de los africanos en los "territorios patrios" y la situación de los movimientos de estudiantes y de la familia africana se analizan en las correspondientes secciones del presente capítulo.

307. El estado de emergencia proclamado en Ovambolandia el 4 de febrero de 1972 en virtud de la Proclamation R17 se mantuvo en vigencia durante la totalidad del período que se examina 5/. En las elecciones para el nuevo consejo legislativo de Ovambolandia, celebradas en enero de 1975, los procedimientos generalizados de coerción e intimidación a que fueron sometidos los electores quedaron documentados por la SWAPO y las iglesias luteranas: se declararon "ilegales" y fueron disueltas por la policía tribal las reuniones de apoyo al llamamiento de la SWAPO a un boicot de las elecciones. Tras los disparos de que fue víctima el Ministro Principal de Ovambolandia, Filemon Elifas, el 16 de agosto de 1975, la policía de seguridad de Sudáfrica recibió órdenes del Ministro de Justicia de Sudáfrica de detener a todo posible sospechoso; entre los detenidos había dirigentes y partidarios de la SWAPO, clérigos y miembros de las iglesias luteranas y adversarios personales del Gobierno de Ovambolandia. No se dio ningún detalle oficial de los cargos contra esas personas.

308. En el período que se examina las fuerzas de seguridad tomaron otras medidas contra los dirigentes de la SWAPO y de la Namibia National Convention (NNC) tanto en Windhoek como dentro de la "zona de policía". Se informó de que, en virtud de las disposiciones de la Terrorism Act y de la Suppression of Communism Act, las personas detenidas estaban incomunicadas sin posibilidad de entrar en contacto con un abogado o los miembros de sus familias (véanse párrs. 333 a 338 infra).

309. Durante el período que se examina las autoridades sudafricanas siguieron persiguiendo a las iglesias con mayoría de fieles africanos o de origen multirracial, negándoles licencias y expulsando y encarcelando a sus miembros. El Obispo Sufragáneo Anglicano de la diócesis de Damaralandia fue expulsado en junio; algunos clérigos de las iglesias evangélicas luteranas fueron detenidos en agosto de 1975 (véanse párrs. 336, 337 y 367 a 369 infra).

310. De la información en poder del Grupo se desprende que en el período que se examina las fuerzas armadas sudafricanas han ampliado mucho sus actividades militares en el Territorio. El Sr. Sam Nujoma, Presidente de la SWAPO, en su declaración del 30 de mayo de 1975 ante el Consejo de Seguridad 6/, se refirió al aumento de las tropas y a la apertura de nuevas bases militares cerca de las fronteras de Angola y de Botswana. En septiembre, el Gobierno de Sudáfrica reconoció oficialmente que unas unidades de la Fuerza de Defensa destacadas en el norte de Namibia habían cruzado la frontera de Angola, supuestamente para proteger las instalaciones hidroeléctricas de Kunene de posibles ataques de guerrilla. Tras un supuesto ataque de guerrilleros de la SWAPO contra un puesto fronterizo de Ovambolandia en octubre pasado, Pretoria ordenó a la Fuerza de Defensa que tomase las "medidas del caso" (véase E/CN.4/1159, párrs. 244 a 246; y los párrs. 359 y 360 infra).

5/ Government Gazette, Nº 3377. Para un resumen de los poderes de emergencia, véase E/CN.4/1111, párrs. 149, 164 y 192.

6/ Véase S/PV.1823, de 30 de mayo de 1975.

311. En otra parte del presente capítulo (véase la sección D infra) se analizan la aplicación del plan del National Party de celebrar una supuesta "conferencia constitucional" para discutir el porvenir del Territorio, celebrada en septiembre de 1975, y la actitud adoptada al respecto por la SWAPO y otras organizaciones políticas de Namibia. La celebración de la conferencia se anunciaba ya en el texto de la respuesta oficial del Gobierno de Sudáfrica a la resolución 366 (1974) del Consejo de Seguridad, transmitida en una carta de fecha 27 de mayo de 1975, dirigida al Sr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas por el Ministro de Relaciones Exteriores.

312. En el período que se examina los órganos de las Naciones Unidas que adoptaron medidas respecto de Namibia fueron esencialmente la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

313. La Asamblea General, en su vigésimo noveno período de sesiones, tras el examen en la Cuarta Comisión de los informes del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y del Comité Especial para 1974, aprobó, el 13 de diciembre de 1974, la resolución 3295, (XXIX) sobre la cuestión de Namibia, en virtud de la cual, entre otras cosas, se aprobó el informe del Consejo para Namibia, se reafirmó el derecho inalienable e imprescriptible del pueblo de Namibia a la libre determinación y la independencia y se exigió que Sudáfrica se retirara inmediata e incondicionalmente de Namibia. Además, la Asamblea instó al Consejo de Seguridad a que adoptara sin demora medidas eficaces, e instó a los Estados que todavía no habían acatado las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas a que suspendieran todo tipo de relación directa o indirecta con Sudáfrica, cuando ésta pretendiera actuar en nombre de Namibia o en lo que le concierne.

314. El 17 de diciembre de 1974 el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 366 (1974), por la que exigía que Sudáfrica hiciera una solemne declaración de que cumpliría las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971 con respecto a Namibia y de que reconocía la integridad territorial y la unidad de Namibia como nación, declaración ésta que debería dirigir al Consejo de Seguridad. También exigía que Sudáfrica tomara las medidas necesarias para realizar, de conformidad con las resoluciones 264 (1969) y 269 (1969) el retiro de la administración ilegal que mantenía en Namibia y traspasar el poder al pueblo de Namibia. El Consejo de Seguridad exigía además que Sudáfrica, hasta que se traspasara el poder, cumpliera plenamente en el espíritu y en la práctica las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos; pusiera en libertad a todos los presos políticos namibianos, suprimiera la aplicación en Namibia de todas las leyes y prácticas racialmente discriminatorias y políticamente represivas, otorgara a todos los namibianos actualmente en el exilio plenas facilidades para regresar a su país sin correr el riesgo de arresto o intimidación. El Consejo también decidió seguir ocupándose del asunto y reunirse el 30 de mayo de 1975, o antes de esa fecha, con el objeto de examinar el cumplimiento por Sudáfrica de las disposiciones de dicha resolución.

315. El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales celebró en Lisboa un período de sesiones de una semana de duración, el primero efectuado en Europa, que se inició el 12 de junio de 1975. En un consenso sobre la cuestión

de Namibia, aprobado el 18 de junio, el Comité condenó la política de Sudáfrica en Namibia y la intensificación del "reino del terror"; declaró indispensable organizar sin demora elecciones libres bajo la supervisión y el control de las Naciones Unidas; reafirmó el inalienable derecho del pueblo de Namibia a la libre determinación y a la independencia, y el continuado apoyo y la solidaridad del Comité con el pueblo de Namibia conducido por la SWAPO; pidió a los países que tenían más comercio con Sudáfrica y a los representantes de otros intereses que colaboraban en la explotación y el agotamiento de los recursos naturales de Namibia que cesaran todo apoyo a Sudáfrica y toda colaboración con ese país; y encareció al Consejo de Seguridad que tomara contra Sudáfrica las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 7/.

316. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en conformidad con las atribuciones que le fueron confiadas por la Asamblea General en su resolución 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967, aprobó en su 209ª sesión, celebrada en Nueva York el 27 de septiembre de 1974, un Decreto relativo a los recursos naturales de Namibia. El Decreto, primera medida legislativa adoptada por el Consejo, cuyo objeto es proteger en nombre del pueblo de Namibia los recursos naturales del Territorio y asegurar que esos recursos no se explotasen sin el consentimiento del Consejo para Namibia, disponía entre otras cosas que todo recurso natural de Namibia sacado del Territorio sin el consentimiento del Consejo podía ser embargado y confiscado y que todo vehículo, buque o contenedor, cuando se comprobara que transportaba tales productos, también sería objeto de embargo y confiscación por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia 8/.

317. El Consejo, en su carácter de fideicomisario del Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, aprobó asimismo directrices en las que se especificaban los propósitos con que podía utilizarse el Fondo, tales como enseñanza y capacitación, asistencia médica y social, defensa en juicio y afirmación internacional de la soberanía de Namibia. Se aprobó también un plan de establecimiento del Instituto de las Naciones Unidas para Namibia ubicado provisionalmente en Lusaka, Zambia. Se declaró que la finalidad del Instituto sería permitir a los namibianos, bajo la égida del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, "emprender actividades de investigación, capacitación, planificación y otras actividades conexas, con especial referencia a la lucha por la libertad de los namibianos y la creación de un Estado independiente de Namibia".

318. Tras la solicitud presentada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, el 21 de octubre de 1974 la Conferencia General de la UNESCO aceptó a Namibia como miembro asociado de esa Organización.

319. Por invitación del Gobierno del Senegal y con el patrocinio del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, organizó la Conferencia Internacional sobre Namibia y los Derechos Humanos. La Conferencia se celebró en Dakar del 5 al 8 de enero de 1976. Esta conferencia respondía a la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos expresada en el párrafo 8 de su resolución 5 (XXXI) de 14 de febrero de 1975.

7/ Véase A/AC.109/495, de 26 de junio de 1975.

8/ Véase Descolonización, vol. I, Nº 3 (diciembre de 1974) número dedicado a Namibia, pág. 29.

A. Nuevos acontecimientos relacionados con la política de apartheid y de discriminación racial

1. Penal capital

a) Mención de ciertas leyes pertinentes

320. En el informe del Grupo Especial de Expertos para 1975 se mencionaban disposiciones del Second General Law Amendment Bill en que se especificaba la facultad de los tribunales superiores establecidos en los "territorios patrios" de ejecutar condenas a muerte en las zonas de su jurisdicción. El Ministro de Justicia, Sr. J. Kruger, informó al Parlamento, en primera lectura, que la cláusula 3 sólo tenía por objeto eliminar dudas en cuanto a la situación jurídica de la localidad en que debía ejecutarse toda pena de muerte impuesta por futuros tribunales supremos o superiores de los "territorios patrios". Esta cláusula se ha hecho aplicable al Territorio: de momento no existen tribunales facultados para imponer la pena de muerte en "territorios patrios" del Territorio 9/.

b) Análisis de la información recibida por el Grupo Especial de Expertos

321. La Suprema Corte del África Sudoccidental, en Swakopmund, declaró culpable del asesinato del Director Adjunto de Asuntos Bantúes en Walvis Bay, en marzo de 1975, a un trabajador a contrata africano, procedente de Ovambolandia. Se le acusó de haber muerto al funcionario a puñaladas durante unos disturbios en el recinto de trabajo el 1º de enero de 1975. No se apeló contra su sentencia de muerte 10/.

2. Matanzas y violaciones del derecho a la vida

322. Según las informaciones recibidas por el Grupo Especial de Expertos, un africano fue muerto instantáneamente y 13 resultaron heridos cuando la policía abrió fuego contra unos trabajadores a contrata el 23 de abril de 1975 en el recinto de trabajo de Katutura. Los trabajadores protestaban contra la obligación de llevar pases. En la declaración del Brigadier W. Louw, Comisario Departamental de Policía del Territorio, se sostenía que la policía se había visto obligada a disparar en defensa propia al haberse amotinado 5.000 residentes del recinto, lo que había sido provocado por la irrupción de la policía al amanecer con fines de verificación de documentos de identidad y pases de los moradores; varios de los trabajadores que habían pasado ya la verificación avisaron a los demás y entonces una gran muchedumbre trató de huir por la entrada del recinto,

9/ Entre las demás cláusulas de la ley, que no se han hecho aplicables al Territorio, cabe citar las disposiciones relativas a una multa de 2.000 rands o dos años de prisión, o ambos, por palabras pronunciadas o hechos realizados con la "intención" de alentar o fomentar hostilidad entre distintos sectores de la población de la República. La ley dispone que el hecho de suministrar información relativa a negocios efectuados, dentro o fuera de la República, en cumplimiento de cualquier orden, directriz o carta procedente del exterior sin permiso del Ministro de Asuntos Económicos constituye un delito; dispone asimismo la abrogación de la Masters and Servants Act. (Government Gazette Nº 4510, Ley Nº 94 de 1975, House of Assembly Debates, 31 de octubre de 1974, vol. 7265; South Africa Press Mirror, Londres, vol. 1, Nº 39).

10/ Windhoek Advertiser, 17 de marzo de 1975; Rand Daily Mail, 18 y 24 de marzo de 1975.

que estaba bloqueada por refuerzos de la policía. Luego se comprobó que un africano había sido mortalmente herido; otros diez fueron hospitalizados ulteriormente. Se destacaron unas patrullas motorizadas en los alrededores del recinto en misión de vigilancia permanente, y se detuvo a cierto número de personas, entre las cuales 168 que carecían de documentos que acreditasen su permanencia en Windhoek, y 127 acusadas de actos de violencia. En la subsiguiente audiencia de 76 hombres acusados de actos públicos de violencia, se presentaron declaraciones juradas en las que se afirmaba que la policía tenía la culpa de los actos de violencia. El Sr. David Meroro, Presidente Nacional de la SWAPO en el Territorio, dijo que se trataba de una matanza pues los testigos oculares aseguraban que la policía había disparado sin previo aviso y no había procurado calmar a la muchedumbre por otros medios. Los informes sobre el número de muertos eran contradictorios; un periódico dio cuenta de tres muertos, luego cambió la noticia para hacerla coincidir con el parte policial. El hospital local se negó a dar información sobre los heridos hospitalizados, la mayoría de cuyos familiares estaban demasiado lejos del lugar para poder identificarlos 11/.

323. Con arreglo a la información de que dispone el Grupo, la pérdida de vidas entre la población civil en el período que se examina se debió a las actividades de las tropas sudafricanas y de la policía militar en la zona septentrional de Namibia. Se informó que en las operaciones efectuadas contra un levantamiento, las balas habían causado cinco bajas civiles y muchos heridos, que fueron internados en el hospital de Oshakati. Se efectuaron bombardeos violentos contra distintas aldeas y contra las zonas más remotas y, según noticias procedentes de Angola y de Zambia, los refugiados angolanos recién llegados a Zambia habían declarado que unos aviones militares sudafricanos que volaban a poca altura habían hecho algunos ataques sobre Angola 12/.

3. Traslados forzosos de poblaciones

324. Con arreglo a la información de que dispone el Grupo, en el período que se examina no parece haberse llevado a la práctica ningún traslado forzoso de población. Según los datos mencionados en el informe anterior del Grupo (E/CN.4/1159, párrs. 247 a 250) se calcula que más del 25% de la población africana total de Namibia tendría que ser reasentada si se pretendiese aplicar cabalmente los planes relativos a los "territorios patrios". En 1974 el Ministro para los asuntos de los mestizos y de Rehoboth proporcionó ciertas explicaciones al Parlamento sobre las transferencias de tierras destinadas a consolidar los límites de varios "territorios patrios". Un total de 1.004.374 hectáreas de tierras propiedad de blancos debía transferirse a Namalandia; 73.790 hectáreas a la Rehobot Gebiet; y en cambio, 209.052 hectáreas debían transferirse de Namalandia a blancos, lo que en total costaría al Estado 13.994.247 rands. Hasta ese momento se habían comprado a los blancos 3.227.750 hectáreas para añadir a los "territorios patrios indígenas" al costo total, para el Estado, de 26.554.785 rands 13/.

11/ Windhoek Advertiser, 23 y 24 de abril de 1975; Guardian, 24 de abril de 1975; Namibia News, mayo-junio de 1975; declaración de prensa de la SWAPO, 29 de abril de 1975.

12/ Comunicados de prensa de la SWAPO, L/9/75/1, de 1º de septiembre de 1975, y L/9/75/3, de 10 de septiembre de 1975.

13/ House of Assembly Debates, 27 de agosto de 1974.

4. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados

a) Resumen de algunas leyes pertinentes

325. Como se ha indicado en los informes anteriores del Grupo, las leyes de seguridad sudafricanas por las que se imponen severas penas de prisión y encarcelamiento sin juicio por actividades contrarias al apartheid y por delitos políticos se han hecho aplicables expresamente a Namibia 14/. Entre esas leyes figuran la Prisons Act Nº 8 de 1959 y las General Law Amendment Acts Nº 76 de 1962 y Nº 101 de 1969. Además, hay algunas proclamaciones que se refieren exclusivamente a Namibia 15/, en particular la Proclamation R17 de 1972, por la que Ovambolandia quedó sujeta a la ley de emergencia, y la Proclamation R304 de 1972, por la que se ampliaban las facultades de la fuerza de policía de Sudáfrica en la parte septentrional de Namibia 16/. En un informe anterior del Grupo (E/CN.4/1050, párrs. 264 a 267) se describió la incorporación de las fuerzas de policía del Africa Sudoccidental en la policía sudafricana, con lo que ésta quedó debidamente autorizada para ejercer los poderes confiados a aquéllos por las leyes del Territorio bajo Mandato. El Comisario de la policía sudafricana ejerce el mando, la superintendencia y la fiscalización de la fuerza de Namibia por conducto del comisario de policía de la división de Namibia en Windhoek, bajo la dirección del Ministro de Policía.

326. En Namibia hay tres tipos de policía. Primero, las unidades de la policía sudafricana destacadas en Namibia o adscritas al Territorio, que están fuertemente armadas y utilizan vehículos militares, jeeps y helicópteros, y que hasta junio de 1974 tenían a su cargo la tarea de patrullar la frontera septentrional que separa al Territorio de Angola. Aunque no se dispone de cifras oficiales en cuanto al número de policías que integran esas unidades, con arreglo a las últimas estimaciones se trata de 17.000 hombres en total, entre policías y tropa 17/. Segundo, la policía municipal, que comprende a algunos policías africanos bajo el mando de oficiales blancos y está controlada por las autoridades urbanas blancas. Tercero, la policía tribal de Ovambolandia y de Kavangolandia, que está controlada por las autoridades tribales de esas zonas y no está sujeta a reglamentos departamentales ni al examen público 18/.

b) Análisis de la información recibida por el Grupo Especial de Expertos

327. La información recibida por el Grupo puede analizarse bajo varios epígrafes, como en los informes anteriores: a) información relativa a detenciones recientes y al número de presos políticos; b) denuncias de torturas y trato cruel, inhumano y degradante de los presos políticos; c) denuncias sobre violaciones del derecho del acusado a un juicio imparcial y público, y procedimientos de reclamación y de reparación.

14/ Véase E/CN.4/1020/Add.1, párr. 9.

15/ Véanse los detalles de la Native Urban Areas Proclamation Nº 56 de 1951 en E/CN.4/AC.22/12, y los de la Native Administration Proclamation Nº 15 de 1928 en E/CN.4/1050, párrs. 261 a 263.

16/ Véase E/CN.4/1135, párr. 252.

17/ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento Nº 23 (A/8423/Rev.1), párr. 23.

18/ Véanse E/CN.4/1135, párr. 210, y E/CN.4/1159, párrs. 243 y 244, así como las secciones pertinentes del presente informe.

328. El Grupo examinó la información que figura a continuación basándose, en particular, en las normas internacionales enunciadas en los instrumentos siguientes: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Los Convenios de Ginebra, la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1975).

i) Información relativa a detenciones recientes y al número de presos políticos

329. En el período que se examina la policía siguió efectuando incursiones en los recintos de trabajo en que hay trabajadores africanos migrantes y en reuniones de africanos, para controlar los documentos de identidad y los pases.

330. Se informó que la policía municipal de Outjo había detenido a 39 personas, que desempeñaban cargos en la SWAPO y apoyaban a esa organización, por tratar de celebrar una reunión pública sin permiso. Cinco organizadores de la SWAPO habían circulado por la ciudad para anunciar la reunión. El grupo fue encarcelado durante el fin de semana tras negarse a pagar las multas correspondientes al "reconocimiento de culpabilidad". En la audiencia subsiguiente en el tribunal de Outjo, se les acusó de no haber presentado sus documentos de identidad y sus pases, como solicitaba la policía municipal. Cada uno de ellos fue condenado a pagar una multa de 10 rands o a cumplir 10 días de cárcel 19/.

331. A pesar del mentís de las autoridades del régimen sudafricano, la información de que dispone el Grupo indica que había a la sazón 38 presos namibianos en la Isla de Robben y nueve en la cárcel de Pretoria; además, 11 dirigentes de la SWAPO estaban encarcelados y totalmente incomunicados desde hacía más de seis meses, en virtud de las disposiciones de la ley sobre terrorismo. Cabía citar entre ellos al Sr. David Meroro, Presidente de la SWAPO. Respondiendo a una pregunta en el Parlamento, el Ministro de Prisiones declaró en octubre de 1974 que en las ocho cárceles de Namibia había 1.514 presos 20/.

332. Según la información de que dispone el Grupo, el Sr. J. Kruger, Ministro de Justicia, está examinando la posibilidad de dejar de utilizar la Isla de Robben como cárcel de seguridad máxima. El motivo oficial invocado por el Departamento de Prisiones es la escasez de agua potable, que debe transportarse desde tierra firme. Se informó ulteriormente que el Ministro de Justicia examinaría la posibilidad de transferir a Namibia a los presos del Territorio detenidos en la Isla de Robben 21/.

19/ Windhoek Advertiser, 10 y 12 de febrero de 1975.

20/ Times, 17 de febrero de 1975; informe del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº 24 (A/9624)), vol. II, págs. 15 a 17; House of Assembly Debates, 11 de octubre de 1974, col. 720.

21/ Guardian, 10 de abril y 6 de junio de 1975.

333. Después de la reunión de junio de 1975 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ciertos funcionarios del Territorio tomaron varias medidas contra las actividades políticas de los africanos. La Namibia National Convention (NNC), coalición de organizaciones políticas aliadas con la SWAPO, había anunciado su intención de protestar contra la ocupación sudafricana del Territorio. El Consejo Municipal de Windhoek negó el permiso necesario para la manifestación; subsiguientemente el Magistrado principal interin de Windhoek, Sr. C. J. Botha, recibió instrucciones de prohibir la celebración de la reunión y la marcha proyectadas en Windhoek o en cualquier otra parte del distrito de Windhoek. La prohibición se basó en la Ordenanza 9 de 1930, la Riotous Assemblies Ordinance, combinada con el artículo 19 de la South West African Affairs Act de 1969. Se informó que el 14 de junio de 1975 miembros armados de la policía detuvieron en la calle Kaiser de Windhoek a 18 manifestantes de la NNC que llevaban cartelones. Una manifestación de 3.000 personas procedentes de Katutura fue disuelta por la policía armada sin incidentes. Los manifestantes fueron liberados tras haber comparecido ante un juez dos días más tarde. Entre otras reuniones públicas prohibidas, cabe citar una reunión planeada por la Liga de la Juventud de la SWAPO frente al centro del banco francés en Windhoek. El Magistrado principal de Windhoek, Sr. H. S. van der Walt, hizo público un aviso, por orden del Ministro de Justicia, que prohibía la reunión planeada. La prohibición se dictó de conformidad con el artículo 1 de la Ordenanza 9 de 1930. Se propuso otro lugar en Katutura; ulteriormente el comité de administración del Consejo Municipal dictó nuevas normas sobre reuniones políticas en virtud de las cuales éstas sólo podían efectuarse en la zona del grupo racial que las celebraba 22/.

334. Según la información recibida por el Grupo la policía de seguridad desencadenó en Windhoek y Ovambolandia una ola de detenciones a raíz de los disparos que causaron la muerte del Jefe Filemón Elifas, Ministro Principal de Ovambolandia, el 16 de agosto de 1975 en Oniipa, cerca de Ondangwa (véase párr. 363 infra). Entre los detenidos figuraban los dirigentes de la SWAPO y la NNC del Territorio, así como miembros del clero y fieles de las dos Iglesias Evangélicas Luteranas negras. Las detenciones se hicieron en virtud de las disposiciones de la Terrorism Act, la General Law Amendment Act y la Proclamation R17 de 1972. El Sr. Jannie de Wet, Comisionado General para las Poblaciones Indígenas, achacó el asesinato a la SWAPO y dijo que se había notificado a las autoridades que el Jefe Elifas había recibido varias amenazas de muerte de la SWAPO, la última de las cuales se le había enviado hacía unas pocas semanas. El Sr. David Meroro, Presidente Nacional de la SWAPO, negó en una declaración publicada en Windhoek toda participación de la SWAPO en el incidente. La policía se negó a decir oficialmente que el Jefe Elifas había sido asesinado o a describir la naturaleza del incidente; el Sr. J. Kruger, Ministro de Justicia, anunció que se procedería a una intensa investigación policial. Se dijo que el Sr. Vorster había declarado que su Gobierno no escatimaría esfuerzo alguno por capturar a los asesinos; y en una visita oficial al Uruguay manifestó a los periodistas que la ley y el orden se mantendrían "fueren cuales fueren las consecuencias" 23/.

22/ Windhoek Advertiser, 10, 19 y 25 de junio de 1975; Lutheran World Federation News Service 21/75.

23/ Star, 18 de agosto de 1975; Guardian, 18 de agosto de 1975; Times, 18 de agosto de 1975; Daily Telegraph, 18 de agosto de 1975.

335. El Brigadier W. Louw, Comisario Divisional de Policía, confirmó que cinco dirigentes de la SWAPO estaban detenidos para ser interrogados en virtud de las disposiciones de la Terrorism Act, tras habérseles encontrado, en condiciones supuestamente sospechosas, cerca de la casa del Jefe Clemens Kapuuo, dirigente herero de Katutura. Los cinco dirigentes eran Axel Johannes, secretario nacional de la SWAPO; Aaron Machimba, organizador nacional de la SWAPO; Othniel Kaakunda, secretario organizador de la SWAPO; David Munjaro, secretario de relaciones exteriores de la SWAPO; Alpheus Naruseb, miembro de la sección de la SWAPO en Windhoek. Fueron detenidos por el guardaespaldas del Jefe Kapuuo, de la tribu herero, y entregados a la policía. El Jefe Kapuuo declaró que su nombre encabezaba la lista de los asesinatos que proyectaba llevar a cabo la SWAPO. El Brigadier Louw manifestó que la policía armada, reforzada por unidades de Sudáfrica, estaban protegiendo las casas del Jefe Kapuuo y de otros delegados que iban a asistir a la conferencia constitucional que había de celebrarse el 1º de septiembre de 1975 en Windhoek. Se comunicó que existía cierta tirantez entre los miembros de las comunidades de los herero y ovambo de Katutura a raíz de una reunión de trabajadores a contrata en la que públicamente se dieron muestras de regocijo por la muerte del Jefe elifas y se proclamó a grandes voces que a continuación le tocaba morir al Jefe Kapuuo 24/. Se confirmó que el Coronel Koos Myburgh, Jefe de la policía de seguridad de Windhoek, había registrado las casas del Sr. David Merero, Presidente Nacional de la SWAPO y del Sr. D. Tjongarero, secretario de información y publicidad de la NNC. El Sr. Tjongarero comunicó que la policía se había llevado carteles, publicaciones y recortes de periódicos. Se informó que el Sr. Merero se había escondido para que no le volvieran a detener; ulteriormente logró huir a Botswana y de allí a Lusaka (Namibia) 25/.

336. En una reunión, convocada por la NNC para explicar anteriores detenciones de miembros de la SWAPO, fueron detenidos cuatro miembros de la Iglesia Evangélica Luterana: el Rev. Jeremiah Kameeta del Seminario Teológico Paulinum; el Rev. Festus Maholo, estudiante en el Paulinum y secretario de la sección de la SWAPO en Walvis Bay; el Sr. Alexander Kangueni, profesor de la escuela secundaria Martín Lutero de Okombahe, patrocinada por la Iglesia, y Presidente de la NNC; y el Sr. Emmanuel Giteb, administrador voluntario de la diócesis de Otjiwarongo. Aunque la reunión de Katutura era legal, la policía y un grupo de soldados armados, acompañados de perros, irrumpieron en el recinto y suspendieron la reunión. Por separado se detuvo a un quinto luterano, el Rev. Sebulon Ekandjo, director de la publicación antigubernamental Omukweto de la Iglesia Evangélica Luterana que se imprimía en Oniipa (ovambolandia). Se mantuvo a los cinco incomunicados en virtud de la Terrorism Act y aunque se comunicó que uno de ellos estaba gravemente enfermo no se permitió que los familiares o los miembros de la Iglesia le visitaran, y la policía no dio garantías de que sería sometido a tratamiento médico. El Dr. Lukas de Vries, Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, presentó una petición al administrador sudafricano del Territorio en la que protestaba por las detenciones; la Federación Luterana Mundial de Ginebra 26/ envió también protestas.

24/ Windhoek Advertiser, 19 de agosto de 1975; Star, 18 de agosto de 1975; Financial Times, Guardian, Times, 20 de agosto de 1975; comunicado de prensa de la SWAPO, 1º de septiembre de 1975, L/9/75/1.

25/ Véase Star, 13 y 20 de septiembre de 1975.

26/ Véanse Servicio de noticias de la Federación Luterana Mundial, 31/75, págs. 1 y 2; comunicado de prensa de la SWAPO, 1º de septiembre de 1975, L/9/75/1 y 10 de septiembre de 1975, L/9/75/3.

337. En el período objeto de examen se comunicó que se habían efectuado varias detenciones de miembros de la SWAPO y de la Iglesia en Ovambolandia: entre los dirigentes de la SWAPO detenidos se identificó a Sam Shivute, secretario de la sección septentrional de la SWAPO; Reuben Hauwanga, secretario de publicidad de la SWAPO en el Norte; Skinny Hilundwa, Presidente de la sección septentrional de la SWAPO; Emmanuel Hatutale; y Theophilus Kalimba. Se comunicó que se les mantenía incomunicados y no se permitió que les visitaran los familiares, abogados o miembros del clero. No se proporcionó detalle alguno sobre la acusación que pesaba sobre los detenidos. También se comunicó que habían sido encarcelados varios funcionarios y miembros de la Iglesia Evangélica Luterana.

338. En una declaración de carácter ejecutivo hecha por la SWAPO, que se publicó simultáneamente en Windhoek y Lusaka, se reafirmaba la importancia que la Swapo atribuía a la liberación de los presos políticos en el Territorio y en Sudáfrica y a la libertad de acción en materia de actividades políticas. Se pedía la liberación de los detenidos y la anulación de la orden de destierro del Sr. Immanuel Macuilili, Presidente interino de la SWAPO, como dos de las condiciones previas para cualquier conversación de índole constitucional con el Gobierno sudafricano. Esas condiciones figuraban también entre las ocho contenidas en la declaración de la SWAPO del mes de julio 27/.

ii) Torturas y trato cruel, inhumano y degradante de los presos políticos y los combatientes por la libertad capturados

339. El Presidente Nacional de la SWAPO, el Sr. David Meroro, presentó pruebas detalladas en una declaración jurada hecha durante la continuación de su juicio, en abril de 1975, de que fue torturado mientras estaba detenido con arreglo a la Terrorism Act. Asistieron al juicio observadores diplomáticos y la declaración del Sr. Meroro fue confirmada por otros detenidos. El Sr. Meroro había sido acusado de poseer literatura prohibida después de que la policía efectuó una incursión en su casa y su tienda de Katutura en febrero de 1974 y desde entonces había comparecido varias veces ante el tribunal durante un largo proceso. El Sr. Meroro declaró que había sido torturado, que le habían atado el cuello con una cuerda y le habían dicho que "escuchara a los espíritus". El Mayor W. F. Schoon y el Capitán J. G. Coffes, policías que comparecieron como testigos, negaron estas declaraciones. El Sr. David Sogget, abogado defensor del Sr. Meroro, pidió al tribunal que considerara los "trastornos psicológicos" que habían provocado en su cliente las condiciones de aislamiento en que se le mantuvo durante cinco meses y pidió, en vista de la dureza de las pruebas a que había sido sometido, de los graves trastornos del carácter de su cliente, y de su edad, 57 años, que se le impusiera una condena de aplicación condicional. El Sr. L. V. de Kock, Magistrado del Tribunal Regional, en su sentencia, convino en que los cinco meses de incomunicación constituían un "severo castigo". El Sr. Meroro fue condenado a dos meses de prisión, suspendiéndose condicionalmente la aplicación de la pena durante un año 28/.

27/ A/10023/Add.3, párr. 117; declaración de prensa de la SWAPO, 17 de enero de 1975; Star, 26 de julio de 1975.

28/ Windhoek Advertiser, 14 y 17 de marzo de 1975; Namibia News, mayo-junio de 1975; Anti-Apartheid News, mayo de 1975; véanse también los párrafos pertinentes del informe de 1975 (E/CN.4/1159).

340. La oficina de la SWAPO en Londres comunicó que había recibido una carta del Sr. Theophilus Kalimba, miembro de la SWAPO encarcelado en el Norte, en la que éste contaba con detalle su detención y encarcelamiento y las torturas que le habían sido infligidas y describía cómo se había fugado de la prisión de Oshikango, donde quedaban otros miembros de la SWAPO, entre ellos Sam Shivute y Reuben Hauwanga. La carta decía:

"Quisiera informarle del trato que sufrimos en la cárcel tanto yo como los demás detenidos. Se nos acusa de haber dado muerte a Filemón Elifas. Tenemos las piernas y los brazos atados, nos han colgado del techo y nos aplican torturas. Lo único que se nos da es una taza de agua a mediodía... El Gobierno sudafricano está tratando de destruir a los namibianos física y mentalmente. Los soldados vigilan constantemente a los detenidos para impedirles el sueño. La verdad -y lo digo por experiencia y no de oídas- es que si los demás reciben el mismo trato que se me dio cuando estuve en la cárcel, morirán o perderán la razón. En realidad no sé cómo puede alguien resistir que se le impida dormir aunque sólo sea un segundo durante las 24 horas del día."

El Sr. Meroro había de presentar la carta, con otras pruebas preparadas por la SWAPO acerca de las detenciones que se están llevando a cabo en el Territorio, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Cuarta Comisión. Se comunicó que el General Prinsloo, Comisario interino de la policía sudafricana, había declarado que ni se había detenido a nadie conocido con ese nombre ni se había producido ninguna fuga en Oshikango 29/.

5. Flagelaciones en público

341. En un informe anterior del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/1159, párrs. 260 a 271) se daba cuenta detalladamente de los azotes públicos impuestos por las autoridades tribales de Ovambolandia durante el segundo semestre de 1973, a más de 100 personas -hombres y mujeres- que se suponían miembros o partidarios de la SWAPO. En el período que se examina, los dirigentes de las Iglesias Anglicana y Luterana siguieron luchando por lograr la prohibición permanente de la pena de azotes por supuestas actividades políticas.

342. Según la información de que dispone el Grupo, el Tribunal Supremo de Sudáfrica ha impuesto limitaciones a la imposición de penas de azotes a los adversarios políticos del gobierno de Ovambolandia. El 24 de febrero de 1975, en el asunto Wood and others v. Ondangwa Tribal Authority and another, la División de Apelaciones de Bloemfontein dictó la siguiente sentencia:

"Se prohíbe a los acusados (es decir, a las autoridades tribales) que detengan, encarcelen o impongan castigos a personas que sean, o de quienes se sospeche que sean, miembros del DEMKOP o de la SWAPO, o que hayan desarrollado, o de quienes se sospeche que estén desarrollando, actividades legales en nombre de esas organizaciones."

29/ Comunicado de prensa de la SWAPO, 6 de octubre de 1975, L/10/75/7; Star, 11 de octubre de 1975; Africa, noviembre de 1975.

El Sr. Rumpff, Presidente del Tribunal de Sudáfrica, ordenó que las autoridades tribales pagasen los gastos de la apelación. Esta había sido presentada inicialmente no solamente por una víctima de la represión ilegal, el Sr. Thomas Komati, dirigente juvenil de la SWAPO, que había sido encarcelado durante gran parte de los anteriores procedimientos judiciales, sino también por el obispo Richard Wood de la Iglesia Anglicana, que desde 1973 había tratado de intervenir contra los azotes públicos en Namibia. La sentencia se dictó más de un año después de que el Gobierno sudafricano se hubiera negado a poner término a los azotes alegando que eran una "cuestión tribal" en la que no tenía derecho a injerirse. El Presidente del Tribunal dijo que los jueces Badenhurst y Strydom, del Tribunal Supremo de Windhoek, habían "cometido un error" al no dictar una prohibición permanente de los azotes en marzo de 1974, cuando se rechazó la apelación por considerar que un particular no tenía derecho a entablar una acción en interés del público en general y que los apelantes no tenían locus standi en el caso. El Presidente declaró lo siguiente:

"No sería evidentemente posible que todas las personas expuestas a detención y azotes ilegales emprendieran acciones individuales y presentaran en su apoyo declaraciones juradas, sobre todo cuando residen a unos 800 km del Tribunal y no pueden hallar fácilmente asistencia jurídica. Estimo que en todas las circunstancias, y dada la extraordinaria situación de esas zonas, el tribunal de primera instancia debería haber dictado una prohibición permanente aplicable a las autoridades tribales."

La acción legal se entablo en primer lugar en noviembre de 1973, cuando el Tribunal Supremo de Windhoek dictó una prohibición temporal 30/.

343. De la información en poder del Grupo se desprende que esa decisión no había hecho desaparecer la práctica del azote en Ovambolandia. Así lo denunció el Sr. Johannes Nangtuala, dirigente del DEMKOP, quien dijo que se seguía infligiendo el azote como medio de intimidar a los adversarios políticos. Se comunicó que el Sr. Jannie de Wet, Comisionado General para las Poblaciones Indígenas, había manifestado en una conferencia de prensa en Oshakati, en la que participaron 24 corresponsales políticos sudafricanos, que el Jefe Elifas y sus consejeros habían hecho una serie de concesiones sobre el particular: se acordó poner término a los azotes públicos y no infligirlos ni a las mujeres ni a los adversarios políticos del Jefe Elifas. Pero en privado se seguía azotando por otros delitos. Se había instituido un procedimiento de apelación a un tribunal ovambo designado por el Gobierno. A unas preguntas sobre supuestos azotes a miembros de la SWAPO, el Jefe Elifas contestó que no se había golpeado a nadie antes de que los tribunales tribales de Ovambolandia 31/ hubieran celebrado el correspondiente juicio.

30/ International Herald Tribune, Times, Windhoek Advertiser, 25 de febrero de 1975; Servicio de noticias de la Federación Luterana Mundial, 7/75; Namibia News, marzo-abril de 1975.

31/ Véanse Rand Daily Mail, Star, 23 de mayo de 1975.

344. La Secretaría Internacional de Amnesty International dirigió al Secretario General de las Naciones Unidas un documento con detalles sobre la violación de los derechos humanos que representaban dichos azotes. En el documento 32/ se manifiesta que la organización estima que las violaciones denunciadas en la comunicación, en particular las relativas a los artículos 2, 5 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituyen manifestaciones especialmente flagrantes de crueldad gubernamental.

6. Situación de los africanos en los "territorios patrios"

a) Antecedentes

345. En un informe anterior del Grupo Especial de Expertos se ha descrito el sistema de "reservas indígenas" ideado por la administración alemana antes del período de Mandato y adoptado y ampliado ulteriormente por el Gobierno de Sudáfrica; también se han descrito las consecuencias de la política de los "territorios patrios" expuesta en el informe de 1964 de la "Comisión Odendaal" 33/. En los informes del Grupo correspondientes a 1974 y 1975 se resume la legislación promulgada desde febrero de 1973 acerca de la creación de nuevos "territorios patrios" para las denominadas "naciones nativas", de conformidad con lo dispuesto en la Development of Self-Government for Native Nations in South West Africa Amendment Act, Nº 20 de 1973 34/.

b) Resumen de la legislación reciente

346. La mayoría de las leyes promulgadas en el período que se examina constituyen una ampliación o consolidación del proceso legislativo que se analiza en los informes anteriores del Grupo e implican la consolidación de las estructuras de los bantustanes en el Territorio.

347. La Proclamation R177 y la Proclamation R178 de septiembre de 1974 prevén el establecimiento de "autoridades comunitarias" para la comunidad mbandero del bloque Rietfonstein y la comunidad herero de Okamatapati, ambas situadas en Hererolandia. Las autoridades, establecidas en virtud de lo dispuesto en la Development of Self-Government for Native Nations Act, habían de ejercer sus funciones de conformidad con "las leyes y costumbres locales" 35/.

348. Varias proclamaciones y notificaciones públicas prevén ciertas enmiendas relativas al establecimiento y procedimientos de elección de un "Consejo electo de personas de color para el Africa Sudoccidental". La sede del Consejo, establecida en Windhoek, consta de seis divisiones electorales: Empelheim, Khomasdal, Krönllein, Narraville, Nautilus y Tanariskia. El Consejo ha de funcionar durante cinco años, con un comité ejecutivo compuesto de tres miembros, y podrá ser disuelto en cualquier momento por el Presidente del Estado de Sudáfrica 36/.

32/ "Communication from Amnesty International concerning a consistent pattern of gross and reliably attested violations of human rights perpetrated by the Government of South Africa upon inhabitants of Namibia", Londres, agosto de 1974.

33/ Véanse E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 29 a 36 y A/8723/Add.2, párrs. 11 a 40.

34/ Véanse E/CN.4/1135, párrs. 245 a 252; E/CN.4/1159, párrs. 239 a 242.

35/ Government Gazette, N^{os} 4397 y 4398.

36/ Government Gazette, N^{os} 4375, 4382, 4384, 4391, 4403; Proclamation 158; Government Notice R1599; Proclamations 168, 172, 185.

349. Desde el 1º de noviembre de 1974 se cambió oficialmente el nombre del Departamento de Relaciones con Personas de Color y de Asuntos de Rehoboth por el de Departamento para los Asuntos de Personas de Color Rehoboth y Nama. El cambio de denominación se debe a que, en el censo de 1970, la comunidad Nama en vez de considerarse "indígena" se calificó de "personas de color" 37/.

350. En el período que se examina se modificaron la Ovambo Constitution Proclamation Nº R104 de 1973 y la Ovambo Election Proclamation Nº R105 de 1973 para que cada votante tuviera la obligación de poseer una tarjeta de registro o un documento válido expedido de conformidad con el artículo 10 de la Ovambo Nation Registration Enactment Nº 5 de 1972 38/.

351. Con arreglo a la Rehoboth Gebiet Affairs Proclamation Nº 9 de 1928 y sus correspondientes enmiendas se promulgaron normas, mediante notificación pública, relativas a la elección de miembros de la Junta Consultiva del Rehoboth Gebiet que había de celebrarse en el mes de marzo. Esas normas establecían el procedimiento que debía seguirse para la designación de candidatos para cubrir cinco puestos en la Junta Consultiva. En una proclamación se preveía la aplicación de la Income Tax Ordinance Nº 5 de 1974 del Territorio al Rehoboth Gebiet para el período comprendido entre el 1º de marzo de 1975 y el 29 de febrero de 1976 39/.

352. En la Proclamation 160 de julio de 1975 titulada "Proclamation to provide for the establishment of a Nama Council, Tribal Authorities and Village Management Boards in Namaland", se prevé el establecimiento de los primeros elementos de una estructura de bantustanes para Namalandia. La composición del Consejo Nama ha de ser: jefes de las autoridades tribales; consejeros nombrados por las autoridades tribales; y seis consejeros nombrados por el ministro previa consulta. No se prevé la celebración de elecciones; el ministro ha de designar al presidente del Consejo 40/.

c) Análisis de la información recibida por el Grupo Especial de Expertos

i) Derechos políticos y facultades de la policía

353. Durante el período que se examina, la información disponible reveló que los namibianos que trataban de ejercer sus derechos políticos sufrían continuamente de la persecución tanto de la policía tribal de las autoridades tribales de Ovambolandia, como de la policía y tropas sudafricanas destacadas en el Norte. Esta situación fue probada con todo detalle durante las elecciones, celebradas del 13 al 17 de enero de 1975, para volver a constituir un Consejo Legislativo ovambo con mayoría elegida. En octubre el Sr. de Wet, Comisionado General sudafricano, anunció la disolución del Consejo existente, que estaba dominado por los partidarios nombrados del Jefe Elifas, Primer Ministro; oficialmente se dijo que se trataba de reconstituir el Consejo sobre una base más representativa y proceder a la selección de representantes de la comunidad ovambo durante las conversaciones constitucionales propuestas 41/.

37/ Government Gazette, Nº 4491; Proclamation 20.

38/ Véanse Government Gazette, Nº 4558; Proclamations R14 y R15.

39/ Véanse Government Gazette Nº 4597; Government Notice R392; Government Gazette; Nº 4740; Proclamation 134.

40/ Véanse Government Gazette, Nº 4785; Proclamation 160.

41/ Rand Daily Mail, 2 de octubre de 1974; Africa, abril de 1975.

354. Se informó que el Sr. de Wet había invitado a "todas las partes" a participar libremente en las elecciones, si bien las reuniones públicas requerirían un permiso previo. El portavoz de la SWAPO calificó las elecciones de "tribales", puesto que se iban a celebrar en un bantustán, e hizo un llamamiento para que se boicotearan. En las elecciones de agosto de 1973, el boicot surtió efecto pues sólo hubo un 2,8% de votantes. El obispo Richard Wood hizo una declaración en apoyo del llamamiento al boicot, y dijo que con la abstención se expresaría el rechazo de la política de los bantustanes y del tribalismo caduco. En vista de la persistencia de las disposiciones de emergencia, la SWAPO no hizo campaña alguna para celebrar reuniones en masa, pero un intento de organizar una reunión pública en Oluno, cerca de Ondangwa, fue impedido, según se informa, por la policía tribal siguiendo las órdenes del hermano del Jefe Elifas. Si bien la SWAPO distribuyó una octavilla para anunciar la celebración de la reunión, en una emisión de radio el Jefe Elifas declaró, en su capacidad de jefe tribal de la zona, que la reunión sería ilegal porque no se había pedido autorización para celebrarla. La policía tribal se estacionó en el lugar en que se iba a celebrar la reunión y dispersó, por medios violentos, a un grupo de unas 200 personas, según se calcula; hubo varios heridos que ingresaron luego en el hospital. Los golpes recibidos por uno de ellos, el Sr. Jairus Muleka, le hicieron perder el conocimiento 42/.

355. Los funcionarios de la SWAPO en el Territorio prepararon y presentaron en agosto de 1975 al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y al Comisionado para Namibia un informe sobre las irregularidades y la intimidación a que se libraron la policía tribal y los funcionarios sudafricanos durante las elecciones. El Sr. Sam Nujoma se refirió también a ese informe en mayo de 1975 en su declaración ante el Consejo de Seguridad 43/.

356. Se comunicó que entre los métodos utilizados para intimidar a los votantes de Ovambolandia figuraban los siguientes:

- a) Control frecuente de las 116 urnas electorales mediante helicópteros que volaban encima de ellas, y por la policía de seguridad, la policía tribal de Ovambolandia y el ejército;
- b) Advertencia, hecha por la oficina de contratación de mano de obra de Oluno a unos 2.000 ó 3.000 hombres que buscaban trabajo en el sur, de que no se les contrataría si no votaban; el hecho de que una persona había votado se hacía constar en el dorso de su tarjeta de identidad con una marca especial;
- c) Advertencia, a toda persona que solicitaba un permiso o documento de viaje, de que sólo se le facilitaría si marcaba con una cruz la cédula de votación;
- d) Advertencia al público, hecha por los funcionarios del Gobierno, los jefes y notables, de que se le negaría todo servicio médico si no votaba;

42/ Star, 2 de noviembre de 1974; Financial Mail, 28 de noviembre de 1974; Windhoek Advertiser, 6 de enero de 1975, 13 de enero de 1975.

43/ Namibia News, marzo-abril de 1975; y acta de la 1823ª sesión del Consejo de Seguridad (S/PV.1823), de 30 de mayo de 1975.

e) Advertencia, a los ancianos, ciegos, impedidos y retrasados mentales pensionados por el Gobierno, de que podían perder la pensión si no votaban;

f) Advertencia oficial a los empleados de la Bantu Investment Corporation (BIC) de que votaran pues de lo contrario se exponían a ser despedidos;

g) Aviso, hecho por el Jefe Josia Taapopi de Uukwaluudhi a los pobladores de su zona, que recorrió con ese fin, del castigo que se les impondría si no votaban; la policía tribal, armada de porras de goma y espadas, obligaba a la gente a salir de casa o a abandonar los campos y a dirigirse a las urnas;

h) Falta de interés en cuanto a cerciorarse de que los votantes sabían lo que hacían, y falta de secreto en las urnas de votación. Al Sr. William Hashili, empleado de los servicios públicos de mantenimiento, se le condujo al lugar de votación de Oluno y se le dijo que votara. Un empleado le leyó los nombres y le propuso los más adecuados; el Sr. Hashili sólo conocía a dos de ellos. El empleado hizo una cruz en la cédula de votación y añadió otros cuatro nombres para que fueran seis 44/.

357. La SWAPO y los dirigentes eclesiásticos de Ovambolandia afirmaron que se habían producido actos de intimidación después de que se anunció que había habido un total de 66.100 votantes, o sea más del 55% de los 120.000 electores registrados. Ciertos observadores señalaron que la votación, que duró cinco días, se había desarrollado lentamente en un principio y que en el sur había votado menos del 5% de los 14.000 trabajadores ovambos a contrata con derecho a votar. El resultado de la votación fue celebrado por el Jefe Elifas y el Sr. de Wet como una derrota de la SWAPO y una demostración de apoyo a la política de los "territorios patrios". El Brigadier W. Louw prometió que se haría una "investigación oficial" de las denuncias de irregularidades. La mayoría de los 111 candidatos que se disputaron los 42 escaños en las elecciones estaban clasificados como independientes. Se informó que sólo se había elegido a cinco de los 14 miembros del Ovamboland Independence Party, que apoyaba al Jefe Elifas, y a tres notables y adjuntos 45/.

358. Según la información en poder del Grupo, en el período que siguió a las elecciones se había hostigado a las personas que trataban de reunir pruebas de una supuesta intimidación durante las elecciones. Se informó que el Sr. Sam Shivute, dirigente de la SWAPO en el norte del país, había recibido amenazas de muerte de parte de la policía tribal, que irrumpió en su casa y atacó a su mujer, a raíz de lo cual el Sr. Shivute se escondió. Gracias a una declaración jurada presentada en su nombre, el Tribunal Supremo de Windhoek dictó una sentencia interlocutoria para impedir que las autoridades tribales de Uukwambe atacaran a él o a su mujer, o los vejaran o importunaran. La policía tribal amenazó a otros posibles testigos en una acción judicial, advirtiéndoles que con su testimonio podrían perjudicar sus posibilidades de sustento. Se informó que en ulteriores reuniones políticas pudo verse un gran número de miembros de la policía de seguridad, que con frecuencia trataban de provocar incidentes 46/.

44/ Namibia News, marzo-abril de 1975; Sunday Times, 16 de febrero de 1975; Windhoek Advertiser, 14 de abril de 1975; Africa, abril de 1975.

45/ Times, 13, 15, 16 y 19 de enero de 1975; Windhoek Advertiser, 10 de febrero de 1975.

46/ Windhoek Advertiser, 7 de abril de 1975; Star, 31 de mayo de 1975; Namibia News, mayo-junio de 1975.

359. Según información procedente de fuentes de la SWAPO, durante el período que se examina se registró un continuo incremento de las fuerzas armadas sudafricanas en el Norte de Namibia. Se establecieron nuevas bases militares en Onuno y Ohanguerra (cerca de la frontera de Namibia y Angola), en Nkongo (noroeste de Namibia) y en Gobadis (cerca de la frontera entre Botswana y Namibia). Las tropas de refuerzo que habían sido trasladadas al norte del país aparentemente a fin de mantener la seguridad a lo largo de la frontera, instauraron un "reino del terror" contra todos los que se oponían a su presencia en el país. Se incendiaron los hogares de tres personas por lo menos, entre ellas dos sacerdotes, y hubo muertos y heridos entre la población civil. El Brigadier D. R. Marais asumió el mando de las fuerzas de defensa del Territorio en noviembre de 1974. Más adelante manifestó en una entrevista de prensa, en Outjo, que en Angola se estaba entrenando en actividades terroristas a unos 2.000 ó 3.000 miembros de la SWAPO exiliados, y que 500 hombres ya habían terminado su entrenamiento y estaban listos y bien armados, en campamentos situados al otro lado de la frontera. El poder militar del Territorio estaba constituido por grupos armados de ciudadanos y comandos: su defensa dependía del personal y del equipo procedente de Sudáfrica. El Brigadier Marais dijo que era preciso crear un poder militar en el que participaran todos los grupos nacionales. El General F. Armstrong, Jefe interino de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas, rechazó el informe sobre la situación fronteriza. Anteriormente se comunicó que en Oshakati se había celebrado una conferencia entre oficiales de la policía y las fuerzas armadas para examinar la cuestión de los choques entre las tropas negras angolanas y las unidades de policía y de las fuerzas armadas sudafricanas 47/.

360. El Sr. P. W. Botha, Ministro de Defensa sudafricano, declaró con motivo de la inauguración del tercer período de sesiones del Consejo Legislativo de Kavangolandia, que las fuerzas de defensa habían empezado los preparativos necesarios para entrenar soldados kavangos. Mediante un programa intensivo de entrenamiento las fuerzas de policía de Kavangolandia se prepararon para asumir la vigilancia de la barrera fronteriza entre Botswana y Kavangolandia y del puesto de control entre Grootfontein y Randu de la frontera entre Kavangolandia y Namibia 48/.

361. Según la información de que disponía el Grupo, en septiembre de 1975 el Ministro de Defensa sudafricano reconoció que las tropas procedentes del Norte de Namibia habían cruzado la frontera y penetrado en la parte meridional de Angola. En Lisboa se había comunicado el movimiento de tropas al publicarse el texto de una nota oficial procedente de Pretoria; en virtud de las disposiciones de la Defence Act, se prohíbe que los periódicos de Sudáfrica publiquen informes sobre movimientos de tropas. El Sr. P. W. Botha, Ministro de Defensa, declaró que se había enviado a Ruacana Falls a una patrulla de 30 hombres para proteger de un posible ataque de guerrilleros tanto a las instalaciones como a los trabajadores del proyecto hidroeléctrico del río Cunene. Según las fuentes del MPLA y de la SWAPO, unos 800 soldados sudafricanos penetraron hasta Pereira de Eca, a 50 km de la frontera, y atacaron las aldeas situadas a ambos lados de la frontera en sus operaciones contra los insurgentes 49/.

47/ Times, 3 de julio de 1975; Windhoek Advertiser, 2 de marzo de 1975.

48/ Windhoek Advertiser, 21 de abril de 1974.

49/ Guardian, 6 y 9 de septiembre de 1975; Star, 13 de septiembre de 1975; Financial Times, 2 de septiembre de 1975 y comunicados de prensa de la SWAPO, L/9/75/1 y L/9/75/3, septiembre de 1975.

362. Se informó que en una reunión de carácter urgente, el gabinete ovambo había pedido al Gobierno sudafricano que enviara tropas de refuerzo a la zona fronteriza a raíz de un presunto ataque, lanzado por fuerzas guerrilleras de la SWAPO contra dos puestos fronterizos, en que habían perdido la vida ocho africanos, seis policías tribales y un notable y su mujer. Se anunció que el mando de Pretoria había ordenado a las unidades de las fuerzas de defensa que adoptaran "las medidas apropiadas". Más adelante se informó que durante unas "operaciones complementarias" se habían descubierto y destruido dos bases de la SWAPO en la parte meridional de Angola, que se había capturado cierta cantidad de equipo militar y que se había dado muerte a siete guerrilleros de la SWAPO. En el parte de las fuerzas de defensa no se indicaba el lugar de la incursión ni se decía que las tropas habían cruzado realmente la frontera de Angola 50/.

363. En los párrafos 334 a 337 supra se da cuenta de las múltiples detenciones de miembros de la SWAPO y del clero de las Iglesias Luteranas en el período transcurrido desde el asesinato del Jefe Filemón Elifas el 16 de agosto. El Jefe Elifas murió en el hospital de Oshakati a consecuencia de los disparos de que fue víctima cuando salía de la casa de un amigo en Oniipa, cerca de Ondangwa, a quien había visitado esa noche como era costumbre hacer los sábados. Se suponía que su sucesor, el Pastor Cornelius Ndjoba, seguiría aplicando las mismas políticas pro apartheid. Según se informa, en una reunión que tuvo con el Sr. Vorster varias semanas antes de su muerte, el Jefe Elifas había subrayado su deseo de que Ovambolandia gozara de una independencia política "interdependiente" con otros Estados del Territorio. Había acordado con el Sr. Vorster el traspaso al Consejo Legislativo de nuevos poderes, entre ellos la responsabilidad por los servicios de sanidad y de información, así como la Junta de Transporte por Carretera. Las fuerzas de defensa permanecerían en el lugar mientras su presencia fuera esencial para mantener la ley y el orden 51/.

364. Se comunicó que, durante una visita al Estado de Ngezi, el Sr. M. C. Botha, Ministro de la Administración Bantú, había formulado unas propuestas encaminadas a conducir al territorio patrio de Caprivi oriental a la etapa final de "autonomía". Se formaría un nuevo Consejo Legislativo con miembros elegidos y un gabinete, para adaptar el territorio a la situación constitucional de Ovambolandia y Kavangolandia, que ya gozan de mayores poderes legislativos 52/.

ii) Libertad individual y libertad de movimiento

365. En un documento 53/ preparado por la Iglesia Católica Romana, la Anglicana, la Luterana Ovambokavango y la Congregación Baptista, se hace una detallada reseña del éxodo de unos 3.000 a 4.000 jóvenes namibianos en junio-septiembre de 1974. En ese documento se señala que las disposiciones relativas al uso de permisos y documentos de viaje coartaba considerablemente el movimiento dentro del país. Era difícil conseguir pasaporte, la concesión del cual solía negarse. Mientras que los blancos pagaban 3 rands por un pasaporte, un africano tenía que depositar, además, una fianza de 200 a 400 rands. La Proclamation R17 restringía la libertad de expresión y de movimiento,

50/ Guardian, 14, 15 y 18 de octubre de 1975; Windhoek Advertiser, 14 de octubre de 1975.

51/ Star, 4 de agosto de 1975; Guardian, 18 de agosto de 1975; Financial Times, 27 de agosto de 1975.

52/ Star, 27 de junio de 1975.

53/ "Why people are leaving Namibia", Lutheran World Federation News Service, 38/74, 23 de octubre de 1974.

así como la libertad de participar en actividades políticas sin ser objeto de persecución, contrariamente a las promesas hechas en 1972 por el Sr. Vorster al Dr. Escher, enviado del Secretario General de las Naciones Unidas.

366. Según la información de que dispone el Grupo Especial de Expertos, el Gobierno sudafricano alegó falsamente haber abolido las "leyes de pases" en el Territorio. Un párrafo de la carta de 27 de mayo de 1975 dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por el Dr. Hilgard Muller (véase el párrafo 311 supra) se refería a la abolición de varias leyes relativas a los permisos para transitar y decía que algunas leyes habían sido abrogadas por considerarse restrictivas. Esas leyes afectaban a la libertad de movimiento y de empleo de algunos sectores de la comunidad africana y aparentemente habían sido derogadas en abril de 1975. Se trataba de la Extra-Territorial and Northern Natives Control Proclamation Nº 9, de 1935, del artículo 19 de la Native Administration Proclamation Nº 11, de 1922, de la Masters and Servants Proclamation Nº 34 de 1920, y de la Control and Treatment of Natives on Mines Ordinance Nº 3, de 1917. La derogación significaba que, a partir de ese momento, ya no se expedirían pases a los africanos procedentes de los "territorios patrios" septentrionales, cuya situación sería idéntica a la de las personas que residían en la "zona de policía". Los africanos del Sur, tanto los de las zonas urbanas como los de las granjas, recibirían tarjetas de identidad expedidas oficialmente en los "territorios patrios" o cartas de nombramiento para probar que tenían trabajo. El Sr. Dirk Mudge, Presidente del Comité Ejecutivo de la Asamblea Legislativa del África Sudoccidental, declaró que se podía transitar por todas partes, con fines de visita, si bien era preciso tener contrato de trabajo para permanecer en un lugar. Las disposiciones que regían las entradas y salidas seguirían vigentes, puesto que su anulación provocaría el "caos y el desempleo" en Windhoek. Según se comunicó, el Sr. P. E. S. Lude, Comisionado Jefe de Asuntos Bantúes, había dicho que tal vez se considerase también la posibilidad de abolir las leyes sobre los pases para transitar dentro del país. La Master and Servants Act que rige el empleo de los trabajadores agrícolas y del personal de servicio doméstico, y que contiene varias disposiciones sobre sanciones penales en lo que se refiere a los contratos laborales, había sido abrogada en 1974 en Sudáfrica por el Ministro de Justicia 54/. En una declaración sobre ese problema, el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia dijo que cualquier afirmación en el sentido de que se habían abrogado las "leyes de pases" era engañosa, puesto que muchas de las medidas en virtud de las cuales se exigía que los africanos llevaran documentos de identidad, permisos o recibos, seguían teniendo vigencia. Había muchos reglamentos municipales que exigían que los africanos llevaran pases para poder transitar durante el toque de queda, así como recibos de pago de contribución y de alquiler, reglamentos que podían aplicarse a discreción a instancias de la Administración del África Sudoccidental. Las leyes vigentes comprendían la mayor parte de las disposiciones de la Native Administration Proclamation Nº 11, de 1922, la Urban Areas Proclamation Nº 56, de 1951 y de los Employment Bureaux Regulations, de 1972 55/.

367. Durante el período que se examina se adoptaron varias nuevas medidas represivas contra el clero y los miembros seculares de las Iglesias Anglicana y Luterana.

54/ Véanse Windhoek Advertiser, 29 de mayo de 1975; Rand Daily Mail, 29 de mayo de 1975; Financial Times, 30 de mayo de 1975; Times, 30 de mayo de 1975.

55/ Windhoek Advertiser, 5 de junio de 1975.

368. Según se comunicó, el clero de la Misión Evangélica Unida alemana se había reducido a cinco miembros al negarse la Administración a renovar el permiso de residencia del Reverendo Hans-Jochen Messerschmidt, quien, enviado al Territorio cuatro años antes, salió de allí a fines de marzo de 1975. La policía dispersó una manifestación de apoyo en el aeropuerto, organizada por un grupo de jóvenes de la Iglesia. En los últimos tres años, el número de personal de la Misión se redujo de 50 a 20 56/.

369. En junio, el Administrador sudafricano del Territorio dictó una orden de expulsión contra el Obispo Wood y su mujer, así como contra el Sr. Rolf Friede, director seglar del Centro Cristiano de Windhoek. El matrimonio Wood y el Sr. Friede fueron declarados "indeseables", pero no se dio ninguna otra razón, ni se les imputó ningún cargo. Se les concedió sólo una semana para que abandonaran el Territorio. Esta medida fue adoptada a raíz de una campaña llevada a cabo en círculos oficiales y en la prensa contra el Obispo Wood, en la que se le tachaba de partidario de la SWAPO y liberalista político: el Obispo Wood había desempeñado un destacado papel en la campaña jurídica contra las prácticas de flagelación en Ovambolandia y en los esfuerzos por presentar a los tribunales las alegaciones relativas a las elecciones. Según se informó, la hostilidad de los blancos hacia esos tres eclesiásticos era evidente. En una carta de fecha 22 de septiembre de 1975 dirigida a todos los comités nacionales e iglesias miembros de la Federación Mundial Luterana, el Dr. Carl Mau, Secretario General de la Federación, adjuntaba el texto de una carta que había enviado al Sr. Vorster, en la que protestaba de que las iglesias del Territorio fueran objeto de un "hostigamiento sistemático". La carta decía:

"La detención de varios pastores y maestros, así como de muchos miembros de nuestras iglesias y de otras iglesias cristianas, sumada a la expulsión de pastores y dirigentes de iglesias cristianas de la región, nos lleva a concluir que el Gobierno sudafricano está empeñado en un sistemático e intolerable ataque contra las iglesias cristianas de Namibia que ofende a la comunidad mundial de Iglesias Luteranas. Esta situación se ve agravada por el hecho de que en muchos casos los dirigentes de las iglesias o los familiares de los detenidos, a quienes se encarcela sin imputárseles delito alguno, no tienen siquiera la posibilidad de verlos. Las peticiones dirigidas por las familias o los dirigentes espirituales de los detenidos para que les permitieran verlos han sido inútiles. La brutalidad con que se aplican esas medidas no puede sino ofender la conciencia de todos los pueblos amantes de la paz y la libertad." 57/

iii) Salud

370. Según lo comunicado, se creía que la clausura de dos hospitales de las misiones anglicanas perjudicaría considerablemente los servicios médicos de Ovambolandia. Con la ayuda de cinco dispensarios de consulta externa, los hospitales atendían a más de 200.000 pacientes al año, y anualmente ingresaban en ellos alrededor de 2.000 personas. El hospital Odibo era el único que podía ofrecer en el Territorio servicios de formación de enfermeras en lengua inglesa; sin embargo, las autoridades negaban persistentemente a las enfermeras autorización para prepararse con fines de registro oficial. A juicio del Reverendo Lazerus Haukongo, archidiácono de Ovambolandia, esta

56/ Lutheran World Federation News Service, 12/75, 21 de abril de 1975.

57/ Véanse Windhoek Advertiser, 16, 18 y 24 de junio de 1975; Lutheran World Federation News Service, 20/75, 18 de junio de 1975; 21/75, 25 de junio de 1975; 33/75, 26 de septiembre de 1975; Anti-Apartheid News, septiembre de 1975.

situación ha sido causa de muchas muertes y grandes sufrimientos al privar a vastas zonas del norte de Namibia de los debidos servicios médicos 58/.

371. Se comunicó que la policía de seguridad había impedido a unos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud entrar en el Territorio para investigar una epidemia de peste bubónica en Ovambolandia. A fines de noviembre de 1974 se había notificado que, de 252 casos de peste registrados en el período transcurrido desde el mes de septiembre, siete habían sido mortales, mientras que 11 personas seguían en el hospital. El Dr. Libertin Appollus Amathila, representante de la SWAPO ante la OMS desde mayo de 1974, solicitó una investigación oficial sobre la epidemia, pero, siguiendo instrucciones del Coronel Jan Griebenau de la policía de seguridad, los funcionarios de inmigración del aeropuerto no permitieron que los Dres. B. Cvjetanovi y A. A. Arata entraran en el Territorio alegando que carecían del correspondiente visado 59/.

372. En una respuesta del Ministro dada en 1974 en el Parlamento se facilitaron los siguientes detalles sobre los servicios sanitarios en los "territorios patrios"; el Territorio contaba, según se afirmó, con un total de 3.441 camas repartidas en 22 hospitales de misiones, cinco hospitales del Estado y 50 "centros clínicos". Se disponía de los servicios de 39 doctores blancos, 213 enfermeras blancas, 575 enfermeras negras, un dentista blanco, siete químicos blancos, seis fisioterapeutas blancos, cinco radiólogos blancos, diez inspectores de sanidad blancos, dos inspectores de sanidad negros, 18 asistentes de sanidad blancos y siete asistentes de sanidad negros. No se facilitaron detalles sobre la distribución del personal médico entre los distintos "territorios patrios" 60/.

373. Según información oficial publicada por el Gobierno sudafricano, en 1973 había un total de 183 hospitales y dispensarios en el Territorio, de los cuales 145 estaban reservados a los grupos de población negra y mestiza, 17 para todos los grupos y 21 para el grupo de población blanca. Había 1.085 camas para la población blanca y 6.300 para los grupos de población no blanca, es decir, una proporción de diez camas por 1.000 habitantes del conjunto de la población. El Territorio tenía 143 médicos generalistas y 19 especialistas, 2.330 enfermeras, 1.530 de las cuales pertenecían a los grupos de población blanca y mestiza. Desde que se inauguró el hospital estatal de Oshakati en 1966, un grupo de especialistas se traslada allí dos veces al mes. En el sector meridional, o sea la zona de policía, había cuatro especialistas y 20 médicos oficiales que hacían las veces de cirujanos de distrito. En la zona septentrional, los médicos oficiales asumían las funciones de cirujanos de distrito 61/.

374. Un estudio sobre las consecuencias del apartheid en Sudáfrica en la esfera sanitaria, publicado por la Organización Mundial de la Salud, contiene datos sumamente pertinentes en cuanto a las condiciones en el Territorio. El Comité Especial Contra el Apartheid, órgano de las Naciones Unidas, había pedido a la OMS que preparase un estudio

58/ Véase Namibia News, febrero de 1975.

59/ Windhoek Advertiser, 9, 21 y 29 de octubre de 1974, 27 de noviembre de 1974; Namibia News, febrero de 1975.

60/ House of Assembly Debates, 15 de febrero de 1975, col. 59.

61/ South West Africa Survey, 1974 (South African Department of Foreign Affairs), pág. 66.

sobre las repercusiones del apartheid en la esfera de la salud y la medicina. La información se refería a cuestiones tales como la salud mental y física, las tasas de mortalidad infantil, la malnutrición, las enfermedades transmisibles, los servicios de higiene y la situación del personal profesional sanitario de los grupos de población negra y mestiza 62/. De las conclusiones de ese estudio se desprende que la situación actual, resultante de la política de apartheid, impide que todos los individuos alcancen el más alto nivel de salud posible. En efecto, la prevalencia masiva de enfermedades evitables y de fallecimientos prematuros se debe principalmente a las carencias nutricionales y a las infecciones. Por ello las medidas discriminatorias de que son víctimas los negros no pueden por menos de perjudicar su salud.

iv) Oportunidades en la esfera económica

375. De la información en poder del Grupo en el período que se examina se desprende que las oportunidades en la esfera económica en los "territorios patrios" seguían siendo escasísimas, lo que provocaba la emigración de la mano de obra al sector meridional en busca de trabajo. El nivel de desempleo de Ovambolandia se ha estimado en un 70% de la población económicamente activa, o sea unas 135.000 personas. Según un estudio preliminar realizado por un economista de la Universidad de la Ciudad de El Cabo sobre la economía y la mano de obra de Namibia, la segunda se componía de 302.000 trabajadores, aproximadamente; 37.000 mestizos, 32.000 blancos, 233.000 africanos; los migrantes representaban 54% de la mano de obra masculina total y 37% de la mano de obra ovamba. Se consideraba que los principales problemas eran la baja productividad de la mano de obra agrícola de los "territorios patrios", la baja intensidad de mano de obra de la industria minera, las escasas posibilidades de empleo en la industria manufacturera y la posibilidad de un futuro desempleo en gran escala. Se estimaba que a partir de 1975 el total de la mano de obra aumentaría anualmente a razón de unos 8.000 ó 9.000 trabajadores 63/.

7. Salarios bajos pagados a trabajadores negros

376. La información en poder del Grupo Especial de Expertos sobre el período que se examina señala que los ingresos en efectivo de los trabajadores no blancos siguen siendo bajos tanto en el sector comercial como en el de la economía de subsistencia. En una reciente encuesta oficiosa se dan cifras relativas al promedio de los salarios brutos que pagan las distintas industrias a los negros de Namibia:

Estimación de los salarios mensuales brutos que rigen en Namibia

Sector	Rands
Minería	30
Construcción	25
Productos metálicos	40
Industria alimentaria	27

62/ Unit on Apartheid. Notes and Documents, Nº 5/75 (marzo de 1975), "Health Implications of Apartheid in South Africa".

63/ Véanse Jo Morris, "The role of foreign firms in Namibia" (Africa Publications Trust, Londres, 1974), pág. 137; W.H. Thomas, "The economy of South West Africa: an over-all perspective", Universidad de la Ciudad de El Cabo, febrero de 1975 mimeografiado), págs. 7, 8, 15 y 16.

En 1973, el nivel de pobreza (NP) en Windhoek se calculó en 81,75 rands al mes, y la mayor parte de la fuerza de trabajo africana ganaba menos de la mitad del NP. Según se calculaba, los precios de los alimentos en Namibia aumentaban a razón del 17% al año 64/.

377. En un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones sobre Planificación, de la Universidad de Port Elizabeth, se indica que el costo de vida del Territorio había aumentado en un 40% en el período de 12 meses que finalizó en diciembre de 1974. El NP había sido revisado y había pasado a 112,74 rands al mes para una familia africana de seis personas. La expresión empleada por el Instituto fue "nivel de subsistencia de una familia". El NP se calculó en 138,79 rands al mes para una familia mestiza de cinco personas 65/.

378. En el estudio oficial del Territorio se facilitaban cifras sobre los niveles de salarios y prestaciones no monetarias de los trabajadores africanos 66/. Según estas cifras, en 1973 los ingresos medios en efectivo de los empleados africanos de la Consolidated Diamond Mines eran de 87,38 rands al mes, mientras que los ingresos mensuales garantizados del grupo más bajo de asalariados representaban entre 49 y 62 al mes. Se calculó que las prestaciones no monetarias, como alimento, vivienda, tratamiento médico, etc., ascendían a 25.09 rands por trabajador al mes. En la Tsumeb Corporation Ltd., que explota tres minas de metales comunes en el Territorio, los ingresos medios en efectivo eran de 36,63 rands al mes en 1973, con prestaciones no monetarias estimadas en 34,78 rands mensuales. En 1974, en las industrias pequeñas los ingresos "típicos" en las fábricas de envasado durante los seis meses de la temporada de pesca eran los siguientes: salario básico en efectivo, 27,30 rands, horas suplementarias, 26 rands; primas, 3,66 rands, pago de vacaciones, 1,43 rands; o sea, un total de 63,39 rands al mes. Además, la industria pagaba un promedio de 17 rands por trabajador al mes en concepto de gratificaciones. Los miembros de las tripulaciones percibían un salario básico de 80 rands al mes durante 8 meses y 40 rands al mes por los cuatro meses restantes 67/.

379. En un discurso pronunciado en una conferencia de industriales, el Viceministro de Administración Bantú indicó que los trabajadores y empleadores seguían descontentos de la aplicación del sistema revisado de mano de obra a contrata, particularmente en lo relativo al nivel de los salarios. Declaró que en 1974, de 3.300 jornaleros agrícolas que habían pedido trabajo a contrata, más de 1.000 habían abandonado el trabajo antes de fines de año 68/.

8. Otras graves violaciones de los derechos humanos

380. De la información de que disponía el Grupo Especial de Expertos se desprende que el programa de consultas políticas encaminadas a alcanzar una "solución mutuamente satisfactoria" sobre el porvenir del Territorio, iniciado por el Comité Ejecutivo del

64/ Morris, *op. cit.*, págs. 141 y 142.

65/ Windhoek Advertiser, 2 de diciembre de 1974.

66/ South West Africa Survey, 1974, págs. 58 a 61.

67/ Namib Times, 31 de enero de 1975.

68/ Star, 7 de julio de 1975.

National Party en septiembre de 1974, estaba acompañado de una campaña de creciente represión de las organizaciones políticas que trabajaban en pro de la independencia nacional del Territorio sobre una base unitaria. Entre estas organizaciones figuraban, en particular, la SWAPO y la Namibia National Convention (CNN), grupo de organizaciones políticas y tribales vinculadas con la SWAPO. Aunque los dirigentes del National Party declararon que la política de "territorios patrios" no era una condición fundamental para la llamada conferencia multirracial y que se podrían discutir todas las posibilidades, desde una federación hasta un Estado unitario, en la práctica sólo participaron en la Conferencia los dirigentes africanos que se avinieron a representar los "intereses particulares" de un "grupo étnico". En la moción oficial adoptada por la Asamblea Legislativa integrada únicamente por blancos, por la que se aprobaba la celebración de conversaciones multirraciales, se declaraba que existían diversos grupos de población y que cada uno de ellos tenía derecho a su propia cultura e idioma; se excluía de la participación en las conversaciones a los partidos políticos no blancos por el motivo de que nadie sabía exactamente a quién representaban; se excluía cualquier solución que se basara en el gobierno de la mayoría y se observaba que Sudáfrica debía mantener el "orden público" durante el proceso de progreso hacia la libre determinación 69/.

381. En una declaración publicada en Lusaka el 26 de septiembre de 1974, portavoces de la SWAPO indicaron que deseaban aclarar categóricamente que el anuncio de la celebración de las conversaciones multirraciales era una maniobra política bien calculada y deliberada destinada a fortalecer el "bantustanismo" y anexar a Namibia a Sudáfrica. En una declaración publicada en Windhoek, Axel Johannes, Secretario organizador de la SWAPO en Namibia, declaró que la SWAPO estaría dispuesta a considerar la posibilidad de celebrar discusiones con el Gobierno sudafricano siempre que éste estuviera dispuesto a renunciar a la política de "territorios patrios" y a restaurar los derechos humanos de los habitantes del Territorio. El pueblo de Namibia había sido víctima de "matanzas, asesinatos, torturas, encarcelamientos y de la bárbara práctica de flagelaciones en público, y durante muchos años se había visto privado de todos los derechos humanos fundamentales", pero estaba dispuesto a reconocer un sincero propósito de cambio de política 70/.

382. En una conferencia de prensa celebrada en Windhoek el 17 de enero de 1975, Axel Johannes, secretario administrativo de la SWAPO, reiteró la negativa de su organización de participar en las llamadas conversaciones multirraciales porque tenían una "orientación tribal" y porque no participarían en ellas los verdaderos dirigentes del pueblo namibiano, y reafirmó las condiciones previas para celebrar negociaciones con el Gobierno sudafricano. Dijo, además, que el futuro gobierno de la SWAPO promulgaría una carta de derechos que garantizaría los derechos humanos fundamentales de los que el pueblo del Territorio había sido despojado. Las seis condiciones previas que Sudáfrica debía aceptar eran las siguientes: i) reconocer y declarar públicamente el derecho del pueblo namibiano a la independencia y a la soberanía nacional; ii) aceptar el principio de la absoluta e inviolable integridad territorial de Namibia;

69/ Véase A/10023/Add.3, párrs. 106 a 110.

70/ Ibid., párr. 6; comunicado de prensa de la SWAPO, 30 de diciembre de 1974.

iii) reconocer y aceptar a la SWAPO como único representante auténtico del pueblo namibiano; iv) poner en libertad a todos los presos políticos tanto en Namibia como en Sudáfrica; v) permitir que todos los namibianos que se encontraban en exilio regresaran libremente a su país sin temor de ser detenidos o de ser objeto de alguna otra forma de persecución; y vi) comprometerse, antes de la celebración de las conversaciones, a retirar del Territorio namibiano a todas las tropas y policías 71/.

383. En la novena reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en Dar-es-Salaam, del 7 al 10 de abril, se aprobó por unanimidad una resolución sobre Namibia por la que se condena a Sudáfrica por su persistente ocupación ilegal de Namibia y los métodos de represión cada día más drásticos empleados contra el pueblo namibiano 72/.

384. El Sr. Sam Nujoma, Presidente de la SWAPO, facilitó detalles sobre lo que calificó de "medidas adoptadas por el régimen de ocupación en su campaña encaminada a impedir el progreso del pueblo namibiano hacia la libre determinación y la independencia nacional auténtica". Se refirió en particular al aumento de las fuerzas armadas sudafricanas en el Territorio y a la imposición de elecciones para los bantustanes en Ovambolandia 73/.

385. Según se comunicó, los funcionarios sudafricanos del Territorio estaban tratando de formar una alianza contra la supuesta dominación de los ovambos, explotando el miedo de los grupos étnicos más pequeños de quedar en minoría en un Estado unitario, lo que se evitaría con un sistema federal que garantizara los derechos de las minorías. Se comunicó asimismo que poco antes de iniciarse las conversaciones constitucionales en Windhoek el 1º de septiembre se había comunicado a la prensa de todo el mundo un documento de la SWAPO que contenía detalles provisionales de las disposiciones constitucionales del Territorio. En virtud de las propuestas, el partido se compromete a erradicar el racismo y a conceder plena ciudadanía namibiana a toda persona nacida en el país o que hubiese residido en él durante cinco años con anterioridad a la independencia. Todo ciudadano podría invocar la aplicación de las disposiciones de una exhaustiva carta de derechos contra decisiones del Poder Ejecutivo o de la Administración; se ratificaría la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Además, se respetaría el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que permite la acción internacional contra los gobiernos que no protegen los derechos humanos de sus ciudadanos. Se descartaría el regionalismo étnico y la representación proporcional en el órgano legislativo unicameral de 100 miembros elegidos, pero quedaría la posibilidad de crear una cámara de jefes como segunda cámara con funciones de asesoramiento 74/.

71/ Véanse A/10023/Add.3, párr. 117; comunicado de prensa de la SWAPO, 17 de enero de 1975.

72/ Véase SWAPO Information Bulletin, Nueva York, 16 de abril de 1975.

73/ S/PV.1823, 30 de mayo de 1975.

74/ Star, 29 y 30 de agosto de 1975; Times, 2 de septiembre de 1975.

386. Se comunicó que los días 13 y 14 de septiembre de 1975 se había celebrado en Okahandja una reunión de representantes de grupos y partidos políticos anti-apartheid. Entre los participantes figuraban representantes de la Namibia National Convention y de las comunidades Damara, Nama y Herero, que publicaron una declaración en el sentido de que la llamada conferencia constitucional convocada por el Gobierno sudafricano había tenido un carácter tribal y no representativo y que los delegados no reflejaban los deseos del pueblo del Territorio. Mientras que el Gobierno trataba ostensiblemente de lograr una solución pacífica, la policía detenía e intimidaba a los dirigentes políticos y a sus partidarios. Calificaron de ilegal la conferencia porque no había reconocido la condición jurídica internacional del Territorio. En dicha declaración se apoyaba una constitución unitaria basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con motivo del examen de la cuestión de Namibia en el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión, de conformidad con una decisión tomada en su 2134ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 1975, accedió a la petición de audiencia formulada en un telegrama de 22 de septiembre de 1975, dirigido por Secretario General por los representantes de los partidos y grupos políticos anti-apartheid de Namibia.

B. Movimientos estudiantiles

Introducción

387. Esta cuestión se examina por primera vez en el presente informe. De la información y las pruebas en poder del Grupo Especial de Expertos se desprende que la enseñanza en Namibia tiene un carácter tan restrictivo y autoritario que la población negra y mestiza queda privada de una educación adecuada. En Namibia no hay universidades, pero existen varios institutos técnicos y teológicos, así como escuelas secundarias segregadas, en las que cabe decir que hay conciencia estudiantil. Pueden citarse la Augustineum de Windhoek, controlada por el Gobierno, una escuela secundaria, un centro de formación docente y capacitación técnica, el Instituto de formación profesional y educativa de Ongwediva de Ovambolandia y el Paulinum Theological Seminary y la escuela secundaria Martin Luther controlados por la Organización de Iglesias Luteranas. En consecuencia, los únicos negros graduados proceden de las universidades sudafricanas (véase el capítulo I sobre Sudáfrica, sección D supra).

1. Legislación pertinente

388. La Comisión Van Zyl de 1958 recomendó que se adoptara en el Territorio la política de apartheid sudafricana de educación bantú, lo que entrañaba una enseñanza basada en el programa del Departamento de Educación Bantú: instrucción en el "idioma materno", según el grupo étnico, y sustitución de las escuelas dirigidas por las misiones por escuelas públicas. Según la información facilitada en el "informe Odendaal", en 1972 el 89% de las escuelas para mestizos y el 57% de las escuelas para africanos estaban dirigidas por misiones 75/.

389. Hasta 1969 la educación de los africanos estaba patrocinada por la Administración del Africa Sudoccidental en Windhoek. A raíz de la promulgación de la South West African Affairs Act Nº 25, de 1969, la educación de los africanos fue confiada al Departamento de Administración y de Educación Bantú; la de los mestizos, de los rehoboth

75/ Report of the Commission of Enquiry into South West African Affairs, 1962-63 (Informe Odendaal), citado por M. K. McGill en "Education policy and Results" de South West Africa, Travesty of Trust, ediciones R. First y R. Segal (1967).

y los namas, al Departamento para los Asuntos de los Mestizos, Rehoboth y Nama. Al aplicarse en 1970 la South Africa Bantu Education Act N° 47 de 1953, enmendada, a Namibia, se ha procedido a desarrollar el sistema educativo del Territorio con arreglo a las mismas pautas que rigen en el de la República. Se han promulgado leyes que disponen la separación de los servicios educativos de los diferentes "grupos étnicos" y el traspaso del control de la educación local a las autoridades de los "territorios patrios".

2. Grupos estudiantiles existentes

390. Hasta donde ha podido saberse, en Namibia no se han desarrollado grupos estudiantiles identificables, dada la estructura oficial impuesta por el Gobierno sudafricano en los centros educativos. El Gobierno sudafricano todavía no proporcionaba, hacia fines del decenio de 1960, casi ningún servicio de enseñanza superior en el Territorio; en 1962, el 98% de los escolares seguían estudios primarios y sólo un 46% de los niños africanos iban a la escuela. Ese mismo año, tres africanos seguían estudios para ingresar en la universidad 76/. La información más reciente de que se dispone indica que hay un total de siete escuelas secundarias, cuatro centros de formación profesional y cinco de formación docente. No hay ningún instituto de enseñanza superior. De las 451 escuelas oficialmente registradas en 1973, 407 eran "escuelas de la comunidad", cuya enseñanza se basaba en el plan de estudios bantú. El 75% de los africanos matriculados abandonan la escuela en los tres primeros años. En 1971, sólo seis de los 1.911 maestros africanos del Territorio tenían diploma universitario. En 1973 y en 1974, había, respectivamente, 39 y 29 estudiantes namibianos calificados para ingresar en la universidad y otros 33 seguían estudios en universidades sudafricanas (bantú) 77/.

391. A pesar de la gran demanda de educación básica entre los africanos, las deficiencias de los servicios educativos existentes, su tendencia ideológica y lingüística y el autoritarismo de las instituciones hacen que los estudiantes africanos rechacen las escuelas públicas. Los que no pueden ingresar en las escuelas de las misiones, en las que se brinda un nivel educativo razonable, prefieren trabajar a estudiar en una escuela pública. Desde que Sudáfrica administra el Territorio, ha disminuido el número de escuelas de misiones, habiendo pasado de 211 en 1922 a 36 en 1973.

392. Muchos jóvenes namibianos se las ingenian para salir a estudiar en el extranjero. En los decenios de 1950 y 1960 la comunidad Herero y otras comunidades africanas reunieron dinero para enviar al extranjero a los jóvenes de talento, muchos de los cuales pasaron a ser con el tiempo portavoces de la SWAPO y la SWANU, organizaciones nacionalistas. En los últimos diez años esos movimientos, a su vez, han dado su patrocinio a estudiantes en países africanos, en Europa tanto occidental como oriental y en los Estados Unidos de América. Todos estos factores militan en contra de la evolución de una comunidad de estudiantes dentro de Namibia 78/.

76/ Gottfried Geingob, "Experience as a student and teacher", in South West Africa, Travesty of Trust; informe Odentaal; Breaking Contract: The Story of Vinnia Ndadi, Canadá, LSM Press, 1974.

77/ Survey of Race Relations, 1974 (SAIRR), págs. 342 a 353; Morris, op. cit., págs. 166 y 167, 177; House of Assembly Debates, 18 de marzo de 1975.

78/ Geingob, op. cit., pág. 221.

393. Sin embargo, el desarrollo de las actividades políticas en escuelas e institutos de formación ha sido constante desde 1971, año en que, según se informa, hubo manifestaciones y huelgas en apoyo de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 1971. En agosto de 1973 se creó la SWAPO Youth League, que cuenta entre sus miembros a muchos estudiantes. En informes anteriores del Grupo se ha dado cuenta de las actividades de la SWAPO Youth League y de la subsiguiente represión lanzada contra la misma. En el período que se examina ha continuado la represión de los estudiantes por la policía. La salida de jóvenes namibianos de su patria en 1974 se atribuyó en parte a la aplicación de la política de segregación en la esfera de la enseñanza, a la expulsión de alumnos y estudiantes que querían seguir sus estudios, y al traslado forzoso de maestros, especialmente los adversarios del Gobierno. Recientemente se ha expulsado a cierto número de estudiantes namibianos de universidades de la República, así como de escuelas o de sus empleos en el Territorio, alegándose que pertenecen a la SWAPO y que tratan de organizar reuniones públicas 79/.

3. Trabas a los movimientos estudiantiles

394. Aparte de las trabas enumeradas más arriba, parece que los principales obstáculos que entorpecen el desarrollo de movimientos estudiantiles dentro del Territorio son la segregación de estudiantes africanos y mestizos según grupos étnicos, y la aplicación de las disposiciones de la Bantu Education Act y la Education Acts for Coloureds, Namas y Rehobothers, en virtud de las cuales las autoridades suspenden y castigan a los alumnos por una serie de presuntos delitos contra la disciplina 80/.

395. En los "territorios patrios" septentrionales de Ovambolandia y Kavangolandia, el Departamento de Administración Bantú y los gobiernos de dichos territorios comparten en teoría la supervisión del sistema educativo. En los informes anteriores del Grupo se han descrito los crecientes conflictos políticos de esas regiones, así como el clima general de intimidación que reina en ellas 81/.

C. El apartheid y la familia africana

Introducción

396. El Grupo Especial de Expertos trata por primera vez en el presente informe la cuestión del apartheid y la familia africana. La estructura del sistema de segregación racial, las disposiciones en materia de pases, permisos y control de entradas y salidas, así como la aplicación del sistema de contratación de mano de obra, todo lo cual repercute en la comunidad africana y en la vida de la familia, se examinan en las secciones pertinentes tanto del presente como de anteriores informes del Grupo. Estos aspectos se vuelven a examinar aquí dentro del contexto de la cuestión fundamental de las repercusiones del apartheid en la familia africana.

79/ E/CN.4/1135, párrs. 208, 220, 221, 223, 228 a 232; Magdalena Shamena, "Letter from a Namibian woman", en Objective: Justice, marzo de 1975; Lutheran World Federation News Service, 38/74, 23 de octubre de 1974; Namibia News, mayo-junio de 1975.

80/ South West Africa Survey, 1974, págs. 62 y 63; Survey of Race Relations, 1974, págs. 342, 347, 352, 353; E/CN.4/1159, párr. 275; Breaking Contract: The Story of Vinnia Ndadi (Canadá, LSM Press, 1974).

81/ E/CN.4/1159, párrs. 196 y 276.

1. Descripción de la familia africana y análisis de su función

397. En general, se dispone de escasa información original sobre la familia africana en lo que respecta concretamente a Namibia. Sin embargo, gran parte de la labor realizada en lo que atañe a la familia y el papel que desempeña en Sudáfrica guarda relación con la situación en Namibia. En consecuencia, para la descripción de las consecuencias que tienen en la familia africana la urbanización, los traslados de población, el sistema de mano de obra migrante, las leyes de pases y la segregación por grupos étnicos se remite al capítulo I del presente informe.

398. Se dispone de algunos datos posteriores a la segunda guerra mundial sobre la población, la estructura por edades, la familia y la vida social de los africanos de las zonas rurales, de las reservas y de los centros urbanos, que han sido compilados por el Departamento de Asuntos Autóctonos y Bantúes. Esos datos se refieren a la situación de la familia africana en el período prebantustano, anterior a la preparación del "informe Odendaal" sobre los "territorios patrios" de los distintos "grupos étnicos". La mayor parte de los datos atañen a familias o individuos de las comunidades Herero y Damara (Bergdama) 82/. Los estudios abarcan las siguientes reservas: Otjituo (Herero), Waterberg East (Herero), Okambahe (Damara), Otjohorongo (Herero), Epukiro (Herero), Aminuis (Tswana/Herero), Otjimbingwe (Herero/Damara), Ovitoto (Herero); y las siguientes localidades: Grootfontein, Otjiwarongo, Omaruru, Gobabis, Karibib, Usakos, Okahandja, que tienen poblaciones mixtas de varias comunidades, mestizos y trabajadores migrantes procedentes de las zonas septentrionales. Según esos informes, en general los hereros viven en viviendas familiares grandes, predominando entre los damaras una estructura nuclearia, y en ambos casos existe un desequilibrio entre la población masculina y femenina ya que los hombres de 16 a 30 años de edad trabajan fuera en las explotaciones agrícolas de blancos y en la ciudad. Los informes revelan también que siempre que es posible las familias y los parientes mantienen estrechas relaciones en las reservas rurales y en los centros urbanos, y que con mucha frecuencia se celebran en éstas matrimonios entre personas de diferentes tribus y comunidades africanas.

399. En varios estudios recientes se han analizado las actuales condiciones en los centros del Territorio, particularmente en Katutura, localidad africana de las afueras de Windhoek. Estos estudios ponen de relieve las dificultades sociales provocadas por el hecho de que los ingresos de muchos cabezas de familia apenas alcanzan para un mínimo sustento de la familia, y por el aislamiento en que se encuentran los trabajadores migrantes, incluso dentro de las localidades africanas, que se deben a la restricción de la libertad de movimiento y de residencia 83/.

400. El Grupo no dispuso de estudios históricos ni antropológicos sobre la vida de la familia africana fuera de la "zona de policía", es decir, en Ovambolandia, Kavangolandia, Kaokoveld y Caprivi. Sin embargo, a raíz de la huelga general llevada a cabo en 1971

82/ Estudio del distrito Grootfontein, EP Nº 45, Departamento de Administración Bantú, 1959; Estudio del distrito de Otjiwarongo, EP Nº 44, 1959; Estudio del distrito de Omaruru, EP Nº 43, 1959; Estudio del distrito de Gobabis, EP Nº 42, 1959; Estudio del distrito de Karib, EP Nº 40, Departamento de Asuntos Autóctonos, 1958; Estudio del distrito de Okahandja, EP Nº 38, 1957.

83/ Morris, op. cit., págs. 148 a 152; W. Pendleton, Marriage and Urban Tribalism among Africans, Paper Nº 30 (Johannesburgo, Institute for the Study of Man in Africa, 1972); W. Pendleton, Katutura, A Place Where We Do Not Stay (San Diego State University Press, 1974).

por los trabajadores migrantes procedentes de Ovambolandia y de otras zonas septentrionales se realizaron varios estudios sobre las repercusiones del sistema de mano de obra a contrata en la vida de la familia. En esos estudios se subrayan las nocivas consecuencias que tienen tanto la ausencia del marido y del padre, pues quedan a cargo de la mujer y la madre la labranza y la educación de los hijos, como las leyes de pases, los reglamentos sobre el control de entradas y salidas y la segregación en materia de residencia de los "grupos étnicos" africanos en las zonas blancas. La agricultura de tipo ordinario en las reservas, que podría proporcionar cierto grado de autosuficiencia a las familias africanas, se ve entorpecida por la ausencia continua de los hombres 84/.

2. Repercusiones, a corto y a largo plazo, de la política de apartheid en la familia africana

a) Repercusión en las relaciones conyugales

401. Se han analizado a fondo los siguientes efectos destructores del sistema de mano de obra a contrata: embriaguez, adulterio, enfermedades venéreas y ruptura del matrimonio. Los repetidos períodos de ausencia a que obliga el contrato de trabajo pueden suponer el alejamiento del cónyuge de su hogar durante dos terceras partes de la duración del matrimonio. La estricta imposición de controles relativos a las entradas y salidas que, según se anunció en las recientes declaraciones del Gobierno del Territorio, iban a mantenerse sean cuales fueren las demás liberalizaciones de los reglamentos sobre el apartheid que pudieran introducirse, impide que la mujer y la familia acompañen al trabajador. Una de las principales reclamaciones de los huelguistas de 1971 era la de que se permitiera a las familias trasladarse con ellos al lugar de trabajo 85/.

402. Los trabajadores a contrata están resentidos porque se dan perfecta cuenta de las nefastas repercusiones de este sistema en su vida, como se desprende del estudio realizado por Rauka Voipio para el Sínodo de las Iglesias Evangélicas Luteranas de Namibia. Para realizar ese estudio se enviaron cuestionarios a los trabajadores a contrata, a sus mujeres y a los trabajadores pastorales de Ovambolandia y de los centros mineros e industriales. Cerca de un millar de estos cuestionarios fueron devueltos y constituyen la fuente de información más exhaustiva sobre las repercusiones del sistema de mano de obra migrante en la vida de la familia africana en el Territorio. Según se indica, los trabajadores faltan del hogar por término medio entre 12 y 18 meses consecutivos, aunque, desde que se implantó en 1972 el sistema de contratación "revisado" los períodos de ausencia suelen ser de 6 a 12 meses 86/.

403. Se calcula que hasta un 37% de los varones adultos se ausentan por lo menos una vez de su hogar, lo que somete a los matrimonios a una tensión constante, tanto a la mujer que se queda en el hogar como al marido, que se encuentra solo en los recintos de trabajo o en las explotaciones agrícolas 87/.

84/ John Kane-Berman, "Contract labour in South West Africa" (South African Institute of Race Relations, documento RR/30/72, abril de 1973); Breaking Contract: The Story of Vinnia Ndadi (Canadá, LSM Press, 1974), págs. 14 y 15.

85/ Kane-Berman, op. cit., págs. 22 a 24; apéndice III, XI a XIV.

86/ Rauha Voipio, Kontrak soos die Ovambo dit sien (Christian Institute, Sudáfrica, 1972), extensivamente citado en Kane-Berman, op. cit.

87/ Morris, op. cit.

404. Para detalles sobre los reglamentos laborales y las medidas de control de entradas y salidas que imponen la separación de las familias se remite a anteriores informes del Grupo 88/.

405. En los estudios del Gobierno mencionados supra se hacen abundantes referencias a las disparidades que acusa el equilibrio entre la población masculina y la femenina en las reservas situadas fuera de la "zona de policía". La falta de oportunidades de trabajo cerca del lugar de residencia obliga a los hombres a ausentarse del hogar durante largos periodos de tiempo 89/.

b) Repercusiones en las relaciones entre padres e hijos

406. Los hijos de las familias que residen en las zonas septentrionales tienen que criarse forzosamente sin la presencia del padre; el frecuente resultado de esa prolongada ausencia es el olvido de los padres por sus hijos. Una de las respuestas a los cuestionarios de 1972 fue la siguiente: "Por causa del contrato de trabajo, mis hijos no me conocen" 90/.

c) Repercusiones psicológicas, sociales, morales, culturales, políticas y económicas

407. Las políticas de apartheid que afectan particularmente la vida de la familia en Namibia son las leyes de pases, el control de entradas y salidas, la segregación en lo que respecta al lugar de residencia, los instrumentos relativos a la inmoralidad, los traslados forzosos y las prácticas en materia de "territorios patrios". Aunque existe un caudal de información considerable sobre estas cuestiones en lo que respecta a las familias africanas de la República, se ha escrito poco sobre las repercusiones que tienen concretamente en Namibia. Es preciso pues remitirse a la información sobre las condiciones que reinan en la República.

408. Como resultado de las leyes de pases y de las restricciones a la libertad de movimiento y de asociación de los africanos, las familias se encuentran separadas en distintos distritos judiciales, territorios patrios o reservas, lo que plantea problemas económicos, sociales, morales y psicológicos. En anteriores informes del Grupo, en particular los de 1974 y 1975, se ha examinado también este proceso 91/.

409. Se ha informado extensamente sobre las nocivas repercusiones políticas y económicas que tiene la aplicación de la política de "bantustanización", como por ejemplo, la inexistencia de derechos políticos y las privaciones económicas de las familias

88/ Por ejemplo E/5622, párrs. 118 a 130.

89/ Informes del Gobierno, mencionados supra, EP Nº 45, párr. 140; EP Nº 44, párr. 59; EP Nº 43, párr. 157; EP Nº 42, párr. 130; EP Nº 38, párr. 62.

90/ Kane-Berman, op. cit.; Morris, op. cit.

91/ Kane-Berman, op. cit., págs. 11 a 13; Morris, op. cit., pág. 148; A Trust Betrayed: Namibia (Nueva York, Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas, 1974), págs. 11 y 12; W. Courtney, Namibia: US Corporate Involvement, págs. 10 y 11; E/CN.4/1135, párrs. 211 a 232; E/CN.4/1159, párrs. 68 y 69.

africanas de las zonas de los territorios patrios. Esta cuestión ha sido también examinada en informes anteriores del Grupo 92/.

410. En marzo de 1974, la Srta. Natalia Kanta constituyó un ejemplo de las consecuencias que pueden tener las políticas de apartheid en la vida de la familia. Se trataba en este caso del control de las entradas y salidas. Según se comunicó, la Srta. Kanta había apelado sin éxito al Tribunal Supremo contra una decisión, adoptada por el Comisionado de Asuntos Bantúes de Windhoek, por la que se le exigía volver a la reserva de Otjinene. La Srta. Kanta, madre soltera de tres niños, se había trasladado a Windhoek a raíz de habersele muerto el ganado durante un traslado forzoso desde Tses: si bien en un principio se le había permitido quedarse temporalmente en Windhoek, luego se le negó el permiso de trabajar 93/.

D. Conferencia de Dakar

1. Organización

a) Preparación

411. La Comisión de Derechos Humanos aprobó, en su 31º período de sesiones, la resolución 5 (XXXI), de 14 de febrero de 1975, cuyo párrafo 8 dice así:

"Pide al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial y que, en particular, ponga de manifiesto el hecho de los azotes en público infligidos a los adversarios del apartheid, y organice un seminario mundial dedicado exclusivamente a las violaciones en gran escala de los derechos humanos que se producen diariamente en Namibia."

412. Como resultado de los contactos establecidos entre el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, el Instituto Internacional de Derechos Humanos y el Presidente del Grupo Especial de Expertos, el Gobierno de la República del Senegal invitó al Instituto a que organizara, con los auspicios del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia y en colaboración con la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, una conferencia que habría de celebrarse en Dakar sobre el tema "Namibia y los derechos humanos".

b) Participación

413. La Conferencia de Dakar se celebró efectivamente del 5 al 8 de enero de 1976, con participación de eminentes personalidades de todo el mundo. Asistieron a ella en particular delegados designados por sus gobiernos, por organizaciones intergubernamentales y por organizaciones no gubernamentales. Estuvieron asimismo presentes representantes de la SWAPO, dirigidos por su Presidente, Sr. Sam Nujoma. También participaron en la Conferencia de Dakar expertos invitados a título personal.

92/ E/CN.4/1135, párrs. 244 a 272; E/CN.4/1159, párrs. 238 a 254; A Trust Betrayed: Namibia, págs. 7 y 8; M. Scott, A time to Speak (Londres, 1958); R. First, South West Africa (Londres, 1963); R. Vigne, A Dwelling Place of Our Own (Londres, International Defence and Aid Fund, 1973), págs. 33 a 36.

93/ Windhoek Advertiser, 30 de marzo de 1974.

414. Todos los miembros del Grupo Especial de Expertos, de conformidad con el deseo que éste había expresado, fueron invitados a participar en la Conferencia, y así lo hicieron.

415. Es importante señalar, además, que todos los miembros del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, así como una representación del Comité de los Veinticuatro y una representación del Comité Especial contra el Apartheid asistieron también a la Conferencia de Dakar.

416. El Sr. Rupiah B. Banda, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Zambia; el Sr. Amadou Mahtar M'Bow, Director General de la UNESCO, y el Sr. Issoufou Djermakoye, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, estuvieron asimismo presentes en Dakar.

c) Actividades conexas

417. Al mismo tiempo que la Conferencia se organizaron actividades conexas tendientes a llamar la atención del público sobre la discriminación racial, en general, y acerca del problema de Namibia, en particular.

418. Un festival internacional cinematográfico sobre la discriminación racial, que se inauguró con una sesión de gala presidida por el Ministro de Justicia de la República del Senegal, permitió presentar al público, en diferentes salas de Dakar, once películas dedicadas a la discriminación racial de que es objeto la raza negra.

419. En el vestíbulo de la Conferencia se organizó una exposición de documentos relativos a Namibia.

420. Un sello conmemorativo de la Conferencia de Dakar sobre Namibia y los derechos humanos se emitió al mismo tiempo que se utilizaba un banderín y un matasellos durante todo el tiempo que duró la Conferencia.

2. Trabajos de la Conferencia

a) Documentos

421. El Instituto Internacional de Derechos Humanos, un subcomité jurídico senegalés y los servicios del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia prepararon los documentos de la Conferencia, algunos de los cuales fueron reproducidos durante o después de la misma. La División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó asimismo un documento de trabajo 94/.

422. Conviene destacar muy particularmente un documento de trabajo que reviste una señalada importancia por el hecho de que fue objeto de la aprobación unánime de los representantes de las iglesias que participaron en la Conferencia de Dakar, así como el trascendental discurso que pronunció el Presidente Léopold S. Senghor, y que se presentó a la vez como una monografía y como un programa sobre el problema de Namibia. El Profesor Felix Ermacora, solicitud del Presidente del Grupo Especial de Expertos, preparó un estudio sobre la flagelación pública en Namibia.

94/ La lista de los documentos distribuidos con motivo de la Conferencia de Dakar sobre Namibia y los Derechos Humanos figura en el anexo II del presente capítulo.

b) Comisiones

423. La Conferencia se declaró abierta en la sesión inaugural presidida por el Sr. Léopold S. Senghor, Presidente de la República del Senegal. Hicieron uso de la palabra en el curso de esta sesión el Sr. Amadou Makhthar M'Bow, Director General de la UNESCO; el Sr. Issoufou Djermakoye, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas; el Sr. Sam Nujoma, Presidente de la S'VAPO; el Sr. Rupiah B. Banda, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Zambia, y el Sr. Léopold S. Senghor, Presidente de la República del Senegal.

424. En el curso de la segunda sesión plenaria, presidida por el Sr. Kéba M'Baye, Presidente del Grupo Especial de Expertos y Presidente de la Conferencia, hicieron uso de la palabra las siguientes personas: El Sr. Duncan W. Kamana, Presidente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia; el Sr. C. A. Allana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; un representante del Comité de los Veinticuatro; el Sr. Franck Boaten, representante del Comité Especial contra el Apartheid; Monseñor Johannes Dyba, representante de la Santa Sede; el Sr. Hellberg, representante de la Federación Luterana Mundial; el Sr. Dwain Epps, representante del Consejo Mundial de Iglesias, y el Sr. Schreiber, Director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

425. Se constituyeron dos comisiones, cada una de ellas dirigidas por una mesa que comprendía dos copresidentes, dos relatores y un secretario.

426. De la labor de coordinación de la Conferencia se encargó un comité ejecutivo compuesto de las siguientes personas: el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, Sr. Sean McBride; el Presidente de la Conferencia, Sr. Kéba M'Baye; el presidente interino del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Sr. Gansho van der Meersch; el Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas, Sr. Niall McDermot, y el Presidente de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, Sr. Jöe Nordmann.

427. La primera comisión tuvo por mandato estudiar el tema "Namibia y los derechos humanos de ayer y de hoy", en torno de las tres cuestiones siguientes:

- "Factores históricos, políticos, económicos y sociales de la situación de los derechos humanos en Namibia";
- "La situación jurídica de los habitantes de Namibia bajo el régimen ilegal actual";
- "Aspectos de la lucha interna y externa en pro de los derechos humanos en Namibia.

428. La segunda comisión trató del tema "Namibia y los derechos humanos de hoy y del mañana", tratando los debates de las tres cuestiones siguientes:

- "La actividad presente y futura de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la liberalización de Namibia; aplicación del decreto del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia sobre los recursos naturales";
- "Las comisiones de ejercicio del derecho a la libre determinación por los namibianos";
- "La observancia de los derechos humanos en Namibia independiente".

429. Los trabajos de las diferentes comisiones se describen en un informe general, cuya redacción se confió al Sr. Abdoulaye Dieye, Consejero del Tribunal Supremo del Senegal.

430. La Conferencia puso término a sus trabajos con una sesión plenaria de clausura, presidida por el Sr. Abdou Diouf, Primer Ministro de la República del Senegal, en el curso de la cual, después de que el Sr. Allana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sometiera una moción de agradecimiento, se aprobaron, sin discusión y por aclamación, el informe general, presentado por el Sr. A. Dieye, y la Declaración de Dakar, así como su anexo, el Programa de Acción, presentados por el Sr. Kéba M'Baye, Presidente de la Conferencia.

431. En el curso de la sesión plenaria de clausura, el Primer Ministro hizo uso de la palabra para declarar clausurada la Conferencia.

3. Resultados

a) Declaración de Dakar y Programa de Acción

432. Las conclusiones y las recomendaciones de la Conferencia se aprobaron en forma de dos documentos: la Declaración de Dakar y el Programa de Acción, anexo a la primera. Estos documentos se reproducen en el anexo I del presente capítulo.

i) Declaración de Dakar

433. La Declaración de Dakar y el Programa de Acción representan la expresión de la opinión pública mundial acerca de la presente situación de Namibia, territorio ilegalmente ocupado por la República Sudafricana, a pesar de que se encuentra legalmente bajo la administración de las Naciones Unidas. Esta opinión pública mundial no ha de identificarse con la opinión de los gobiernos, ya que los participantes en la Conferencia no asistieron a ésta como representantes de un determinado Estado, sino a título personal, como representantes de organizaciones gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales. No obstante, es de observar que se tuvieron especialmente en cuenta las decisiones y resoluciones que los diversos organismos de las Naciones Unidas han aprobado respecto de Namibia. La lista de participantes pone de manifiesto la variada gama de la participación en la Conferencia y el interés que en todo el mundo suscita el problema de Namibia. La prensa mundial dio cuenta extensamente de los trabajos y las conclusiones de la Conferencia de Dakar.

434. En la Declaración se hace hincapié en el derecho a la libre determinación, que considera como el derecho humano que prevalece sobre todos los demás derechos.

435. La Declaración comprueba que Sudáfrica ha violado su mandato, y estima que la extensión del régimen de apartheid a Namibia representa una amenaza contra la paz y la seguridad.

436. La Declaración denuncia el reciente refuerzo de la presencia militar de la República Sudafricana en Namibia, y censura severamente la complicidad activa o pasiva de que son culpables ciertos Estados.

437. Después de describir las características del régimen de apartheid, la Declaración se congratula de las medidas adoptadas por la comunidad internacional e invita a la prudencia por lo que se refiere a la supuesta política de apertura y de diálogo de Sudáfrica.

438. La Declaración invita a los gobiernos a reconocer la SWAPO como único y auténtico representante del pueblo namibiano.

439. La Declaración precisa asimismo que, aparte de la utilización de medios coercitivos por la comunidad internacional, solamente la fuerza, incluida la lucha armada, puede persuadir a la República Sudafricana a respetar las decisiones de las Naciones Unidas.

ii) Programa de Acción

440. El Programa de Acción se propone a las organizaciones internacionales, a los Estados, a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos socioprofesionales y de información, y constituye un conjunto de medidas que habría de adoptarse para garantizar a los namibianos el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Este programa se anexa a la Declaración, con la que forma un todo.

441. El Programa va dirigido en primer lugar al Consejo de Seguridad, al que se propone que declare que la ocupación de Namibia por Sudáfrica constituye una amenaza para la paz y para la seguridad internacionales, y que, consecuentemente, adopte cierto número de medidas, señaladamente el embargo de la venta, de las donaciones y de las transferencias de armas, la intervención ante ciertas organizaciones intergubernamentales para suspender las relaciones económicas y financieras con Sudáfrica, y la intervención cerca de la República Federal de Alemania para que cierre su consulado en Windhoek.

442. En el Programa se solicita asimismo del Consejo de Seguridad que declare la necesidad de celebrar elecciones libres, de exigir a Sudáfrica que reconozca los derechos del pueblo namibiano y adopte las medidas necesarias para retirar su administración, y en todo caso, observar las decisiones de la comunidad internacional, liberar a los presos políticos y suprimir el régimen de apartheid en Namibia.

443. Tal Programa invita a su vez a la Asamblea General a suplir al Consejo de Seguridad en caso de que éste no ejerciera los poderes que le confiere la Carta.

444. El Programa prevé además la celebración de una semana internacional de solidaridad, que se organizaría todos los años el 27 de octubre por comités internacionales de ayuda a Namibia; que el Parlamento y las organizaciones interparlamentarias deberían discutir esta cuestión cada año; que el decreto Nº 1, relativo a la protección de recursos naturales, debe aplicarse; que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia debería estudiar la adhesión, en nombre de Namibia, a los Pactos de 1966, y que los sindicatos deben utilizar los medios de que dispongan para contrarrestar la asistencia que ciertos Estados prestan a Sudáfrica.

445. El Programa de Acción prevé también la liberación efectiva de los presos políticos, la ayuda a ciertas iglesias, la institución de un sistema de información eficaz, la constitución de un fichero para prever y, más tarde, prevenir los crímenes cometidos en Namibia, y cierto número de medidas que debería aplicar el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia.

446. El Programa de Acción, para evitar que quede sin efecto, ha previsto que el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia debería proceder todos los años al establecimiento de una relación de los esfuerzos desplegados y de los resultados obtenidos dentro del marco de las medidas proyectadas.

b) Recomendaciones del Grupo Especial de Expertos

447. El Presidente Léopold S. Senghor transmitió inmediatamente al Presidente en ejercicio de la OUA la Declaración de Dakar y el Programa de Acción. Conviene recalcar que la Conferencia ha expresado el deseo que estos dos documentos se divulguen en la forma más amplia posible. De ahí que, como consecuencia de la carta que el Presidente del Grupo Especial de Expertos remitió, el 16 de enero de 1976, al Secretario General de las Naciones Unidas para solicitarle que comuniqué la Declaración y el Programa de Acción a los miembros del Consejo de Seguridad y, de ser posible, a todos los Estados Miembros, el Grupo sugiere que la Comisión recomiende en una resolución que esta Declaración y este Programa de Acción se distribuyan a todos los Estados Miembros como documentos oficiales de la Organización.

448. El Grupo recomienda asimismo que la Comisión de Derechos Humanos señale a la atención de todos los órganos la necesidad de dar pleno efecto al Programa de Acción anexo a la Declaración de Dakar.

449. El Grupo recomienda también que la Comisión de Derechos Humanos exprese su agradecimiento y reconocimiento al Gobierno del Senegal por haber tomado la iniciativa de convocar la Conferencia de Dakar.

Anexo I

DECLARACION DE DAKAR SOBRE NAMIBIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Los participantes en la Conferencia Internacional sobre "Namibia y los Derechos Humanos", celebrada en Dakar del 5 al 8 de enero de 1976,

Considerando que el derecho de los pueblos a la libre determinación es un derecho inalienable e imprescriptible,

Considerando que la aplicación del derecho de los pueblos a la libre determinación es la condición sine qua non del disfrute de los derechos y libertades fundamentales que se desprenden señaladamente de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos relativos a los derechos humanos,

Considerando, en particular, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados,

Considerando que, por su resolución 2145 de 27 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas revocó el mandato de Sudáfrica sobre el África sudoccidental,

Considerando que la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que la presencia de Sudáfrica en Namibia es ilegal,

Considerando que el Consejo de Seguridad ha declarado que esta presencia es perjudicial para el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región,

Convencidos de que la lucha armada del pueblo namibiano, apoyada por las fuerzas progresistas y democráticas, triunfará ineluctablemente,

Tomando nota de que la SWAPO ha sido reconocida por las Naciones Unidas como único y auténtico representante del pueblo namibiano,

Tomando nota con satisfacción de la creación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,

Esperando que la aplicación de las medidas del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en particular el decreto Nº 1 sobre los recursos naturales de Namibia, acelerará el proceso de la descolonización de Namibia,

Firmemente decididos a apoyar, por sus actos, palabras y estudios, la lucha por la liberación de Namibia,

Adoptan la siguiente Declaración y el Programa de Acción anexo a la misma:

I

1. Al igual que todos los pueblos, el pueblo namibiano tiene derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho debe poder determinar libremente su estatuto político y asegurar su desarrollo económico, social y cultural.
2. El ejercicio de este derecho por el pueblo namibiano es una condición previa para que pueda disfrutar de los derechos humanos. Ello implica la liberación del pueblo namibiano del yugo del colonialismo de Sudáfrica y la restauración de sus derechos nacionales fundamentales, que son la independencia, la soberanía, el derecho a disponer de sus recursos naturales, la unidad y la integridad territoriales.
3. Toda tentativa tendiente a destruir la unidad nacional y la integridad territorial de Namibia es incompatible con los fines y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La policía de "bantustanización" es contraria a estos fines y principios y tiende a privar al pueblo namibiano del ejercicio de su derecho a la libre determinación.
4. Es menester denunciar y condenar la supuesta conferencia constitucional convocada por Sudáfrica, cuya composición y finalidad han sido fijadas ilegalmente por el Gobierno sudafricano.

II

5. Sudáfrica ha violado en forma deliberada las obligaciones que se desprenden de su Mandato sobre el África sudoccidental. Su negativa a colocar al África sudoccidental bajo el régimen de administración fiduciaria, a pesar de las diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que invitaban a dicho país a proceder en esa forma, revelan claramente sus pretensiones anexionistas. La revocación del Mandato por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de octubre de 1966 hace que su presencia en Namibia sea ilegal.
6. La presencia de Sudáfrica en Namibia es tanto más intolerable cuanto que somete al pueblo namibiano al régimen de apartheid, que es la negación deliberada de los derechos humanos más elementales y que se condena universalmente.
7. Namibia ha sido escindida en una zona de "reservas", árida y sin interés económico ("territorios patrios"), en donde se ha reasentado, en una tercera parte del Territorio, la gran mayoría de la población negra, y en una zona de "policía", exclusivamente reservada para los blancos y que se extiende sobre la mayor parte de la meseta, zona que es favorable a la agricultura y rica en recursos minerales, especialmente en uranio. Los negros están excluidos del "Gobierno territorial", cuya autoridad es, en sí misma, muy limitada. Además, no tienen libertad de movimiento ni pueden salir de la reserva sin salvoconducto. Tampoco tienen derecho a elegir empleo ni a su empleador. Cuando se les obliga a trabajar en la zona de "policía" tienen que abandonar a sus mujeres e hijos y vivir así separados de sus familias. No tienen derecho a afiliarse a un sindicato ni a declararse en huelga.

8. Un régimen de esta naturaleza, que reduce a todo un pueblo a la condición de esclavitud, constituye un crimen contra la humanidad.

III

9. El mantenimiento de la ocupación de Namibia por Sudáfrica y del régimen de apartheid es una amenaza permanente contra la paz y la seguridad en África meridional, en todo el continente africano y en todo el mundo. Consecuentemente, la comunidad internacional en su conjunto debe denunciar firmemente y combatir enérgicamente a Sudáfrica y su política colonialista, racista y agresiva.

10. El reciente refuerzo de la presencia militar de Sudáfrica en Namibia debe condenarse como medio de consolidar la ocupación ilegal de este país y de reprimir la resistencia legítima del pueblo namibiano. Además, la utilización del Territorio namibiano como base de intervención en los asuntos internos de países de África, como es el caso actualmente en Angola, agrava la amenaza contra la paz y la seguridad internacionales y debe cesar inmediatamente.

11. Es lamentable que el triple veto de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia hayan paralizado al Consejo de Seguridad al impedir que adoptara medidas eficaces y, más precisamente, que aplicara las sanciones previstas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Así se explica que la actitud de estos tres Estados haya indignado y continúe indignando a los pueblos africanos y a los otros pueblos del mundo.

12. La ayuda militar y económica que ciertos Estados prestan a Sudáfrica debe asimismo denunciarse y combatirse clara y abiertamente por todas las fuerzas progresistas. La venta de armas, los acuerdos de cooperación nuclear y las actividades económicas de las sociedades transnacionales en Sudáfrica o en Namibia constituyen actos de patente complicidad con la política de apartheid.

13. Ha llegado la hora de que los Estados africanos den claramente a entender a los países que apoyan de ese modo a Sudáfrica que no pueden continuar procediendo en esta forma, al tiempo que pretenden contar con la amistad de los pueblos africanos.

IV

14. Es evidente que, las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han desplegado notables esfuerzos para lograr que Sudáfrica entre en razón, y para obtener mejoras en la vida del pueblo namibiano y lograr su acceso gradual a la independencia. Entre las numerosas y variadas medidas que se han adoptado con este fin, la revocación del Mandato de Sudáfrica sobre el África sudoccidental, y la creación del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia constituyen, sin duda alguna, una etapa significativa hacia la independencia de Namibia.

15. El decreto Nº 1 del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, legalmente dictado por este órgano de conformidad con los poderes que se le han conferido, tal como se definen en la resolución 2248 (S-V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe poder utilizarse juiciosamente para "proteger los recursos naturales del pueblo de Namibia y lograr que esos recursos naturales no sean explotados en detrimento de Namibia, su población o su patrimonio ambiental".

16. Hay que acoger asimismo con satisfacción la firme actitud de la Organización de la Unidad Africana frente al problema namibiano, actitud que, unida a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a la lucha del pueblo de Namibia, no dejará de surtir efectos.

V

17. No obstante, hay que convencerse y reconocer que todos estos esfuerzos han sido insuficientes para modificar fundamentalmente la política sudafricana en Namibia y para lograr un cambio cualitativo en la situación del pueblo namibiano.

18. Es indudable que Sudáfrica ha emprendido últimamente una ofensiva diplomática de gran envergadura, en forma de una supuesta política de "apertura" y de "diálogo" dirigida a los Estados africanos, ofensiva poderosamente apoyada por los medios de comunicación social controlados fundamentalmente por el imperialismo, que trata de imprimir a este movimiento un alcance considerable a través de la difusión mundial de una "información" hábilmente orientada.

19. Mas esta política sudafricana es simplemente un señuelo, puesto que es ajena a los verdaderos intereses del pueblo namibiano y se integra en una estrategia global de tipo imperialista militar y políticoeconómica. Además, los hechos muestran que Sudáfrica no ha renunciado, ni en principio ni en la práctica, a su política de anexión y de dominación de Namibia.

20. En estas condiciones, como recomendó la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OUA, en Dar-es-Salaam, en Abril de 1975, deben "rechazarse categóricamente la política de concertación y la supuesta distensión con los Estados africanos", propiciadas por Sudáfrica y tendientes a "sembrar la confusión en la opinión pública internacional y a socavar la unidad africana y la lucha por la eliminación del apartheid en Sudáfrica".

VI

21. Hay que convencerse, en efecto, de que Sudáfrica no renunciará nunca de buen grado a su ocupación ilegal de Namibia, y que tampoco abandonará jamás voluntariamente su política de opresión y de avasallamiento de los pueblos de Africa meridional.

22. Es necesario, por tanto, obligar a ese país a que rectifique su actitud por todos los medios de que dispone la comunidad internacional, en el seno de la cual las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, las organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales y los Estados africanos pueden cada uno de ellos desempeñar, en la medida de los recursos con que cuenten, un papel particular.

23. Deben adoptarse medidas coercitivas de tipo económico o de otra índole para obligar a Sudáfrica a respetar las decisiones de la comunidad internacional. En este sentido, la acción de los sindicatos y de las agrupaciones sociales y de información debería reforzar y estimular la acción de las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

24. Es evidente, no obstante, que mientras la comunidad internacional no recurra a los medios que haya previsto o que pueda prever para poner término a la ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica, todos los recursos, incluso la lucha armada, se justifican para liberar a este país. Así pues, es necesario a estos efectos aunar los esfuerzos de la comunidad internacional y, más particularmente, los de los países africanos, para prestar a la SWAPO todo el apoyo político, moral y material de que tanto precisa.

25. En consecuencia, conviene que los gobiernos que no lo hayan hecho todavía reconozcan a la SWAPO como único y auténtico representante del pueblo namibiano.

*

* * *

Programa de Acción

aprobado por la Conferencia de Dakar sobre Namibia y los Derechos Humanos, y que se propone a las organizaciones internacionales, a los Estados, a las organizaciones no gubernamentales, a las agrupaciones socioprofesionales y de información, como un conjunto de medidas que han de adoptarse para garantizar a los namibianos el ejercicio de su derecho a la libre determinación.

1. El Consejo de Seguridad podría dar efectividad a su resolución 366 (1974) adoptando las siguientes medidas:

- a) Decidir, en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que la ocupación continuada de Namibia por Sudáfrica, y señaladamente la utilización de ese Territorio como base militar, constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
- b) Decidir el embargo total de las ventas, donaciones o transferencias de armas de toda clase de material militar destinados a Sudáfrica. Este embargo se aplicaría igualmente a los acuerdos concertados o que hayan de concertarse entre Sudáfrica y cualquier otro país o alianza militar respecto del suministro de material de radar o de telecomunicaciones destinado a fines estratégicos y militares.

- c) Estudiar las medidas que hayan de adoptarse para impedir que las autoridades sudafricanas instruyan militarmente y equipen a mercenarios portugueses u otros para que combatan los movimientos de liberación en Namibia y en otras partes de Africa.
- d) Oponerse a toda tentativa de Sudáfrica tendiente a modificar las fronteras de Namibia o a fragmentar o dividir cualquier parte del Territorio.
- e) Pedir a la CEE y a la AELI y a todos los Estados que mantienen relaciones económicas y financieras con Sudáfrica que las suspendan mientras este Estado continúe ocupando ilegalmente Namibia o aplicando el régimen de apartheid.
- f) Pedir al Gobierno de la República Federal de Alemania que cierre su consulado de Windhoek y emprenda una campaña de información con vistas a modificar la actitud de los alemanes establecidos en Namibia, a fin de que puedan vivir en una Namibia libre.
- g) Pedir a todos los Estados que se abstengan de proporcionar a Sudáfrica medios que directa o indirectamente le permitan producir uranio, plutonio y otras materias o reactores nucleares.

2. El Consejo de Seguridad podría también adoptar las siguientes medidas:

- a) Declarar que, para que el pueblo namibio pueda determinar libremente su porvenir, es indispensable que se organicen elecciones libres bajo la supervisión de las Naciones Unidas para el conjunto de Namibia, considerado como una sola y misma entidad política. La fecha, el calendario y las modalidades de estas elecciones se fijarían por las Naciones Unidas lo antes posible, en la inteligencia de que deberá transcurrir un período de 18 meses, por lo menos, entre el momento en que se fije la fecha de las elecciones y la fecha en que éstas se celebren efectivamente, a fin de que el pueblo namibiano pueda organizarse políticamente con vistas a estas elecciones, y para que las Naciones Unidas dispongan de tiempo suficiente para establecer en Namibia el dispositivo necesario para garantizar la vigilancia y control de las elecciones.
- b) Exigir que Sudáfrica haga ahora una solemne declaración de que acepta las mencionadas disposiciones acerca de la organización de elecciones libres en Namibia, bajo el control de las Naciones Unidas, y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971 con respecto a Namibia, y de que reconoce la integridad territorial y la unidad de Namibia como nación, declaración ésta que deberá dirigir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- c) Exigir que Sudáfrica tome las medidas necesarias para realizar, de conformidad con las resoluciones 264 (1969), 269 (1969) y 366 (1974) del Consejo de Seguridad, el retiro de la administración ilegal que mantiene en Namibia y traspasar el poder al pueblo de Namibia con la asistencia de las Naciones Unidas.

d) Exigir de nuevo que Sudáfrica, hasta que se traspase el poder como se dispone en el párrafo 4 supra:

- i) Cumpla plenamente en el espíritu y en la práctica las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
- ii) Ponga en libertad a todos los presos políticos namibianos, incluidos los encarcelados o detenidos en relación con delitos sancionados por las llamadas leyes de seguridad interna, sea que tales namibianos hayan sido acusados o juzgados o estén detenidos sin cargo, o bien se encuentren detenidos en Namibia o Sudáfrica;
- iii) Suprima la aplicación en Namibia de todas las leyes y prácticas racialmente discriminatorias y políticamente represivas, en particular los bantustanes y los territorios patrios;
- iv) Otorgue incondicionalmente a todos los namibianos actualmente en el exilio por razones políticas plenas facilidades para regresar a su país sin correr el riesgo de arresto, detención, intimidación o encarcelamiento.

3. En caso de que el Consejo de Seguridad no adoptara las medidas efectivas destinadas a poner término a la ocupación ilegal de Namibia, la Asamblea General debería ejercer su autoridad legal, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para aplicar sus decisiones precedentes contenidas en la resolución 2145 (XXI) (1966) por la que se revoca el Mandato de Sudáfrica sobre Namibia.

4. A partir de 1976 se organizará una semana internacional de solidaridad con el pueblo de Namibia durante la semana siguiente al 27 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario de la terminación del Mandato de Sudáfrica sobre Namibia.

5. Para organizar esta semana internacional de solidaridad con el pueblo namibiano se crearán en todos los países comités nacionales de ayuda a Namibia, en caso de que no existan ya.

6. Los parlamentos y organizaciones interparlamentarias deberían inscribir todos los años en su orden del día, como punto de discusión, la cuestión relativa a la liberación de Namibia.

7. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben aplicar plenamente el decreto N° 1 sobre la protección de los recursos naturales de Namibia, aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y especialmente:

- a) Adoptar, siempre que sea necesario, las medidas requeridas para la aplicación del decreto por las autoridades nacionales, y prohibir, con imposición de sanciones penales, la importación, sin autorización del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, de productos originarios de este país.

- b) Proporcionar al Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia todas las facilidades para entablar las actuaciones judiciales para las que está habilitado en virtud del decreto N° 1.
- c) Difundir las informaciones relativas al carácter ilícito de la importación de productos originarios de Namibia, en violación de las disposiciones del decreto N° 1, y dar toda la publicidad posible a las infracciones cometidas por las empresas pertenecientes a su jurisdicción.

8. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia debe hacer todo lo que esté a su alcance para que se respeten los derechos humanos en Namibia y, en particular, examinar la posibilidad de suscribir el Pacto de las Naciones Unidas relativo a los derechos económicos, sociales y culturales y el Pacto de las Naciones Unidas relativo a los derechos civiles y políticos.

9. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería establecer un organismo de encuesta encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos en Namibia e instruir los expedientes necesarios para entablar los correspondientes procedimientos judiciales.

10. Las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales y la opinión pública deben prestar todo su apoyo político y material a la SWAPO, auténtico representante del pueblo namibiano en su lucha de liberación.

11. Los sindicatos deberían organizarse para oponerse por todos los medios de que dispongan al mantenimiento y al desarrollo de relaciones económicas entre Sudáfrica y otros Estados.

12. Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales deben velar porque se asegure la defensa efectiva de los presos políticos y por que se preste una ayuda económica a sus familias.

13. Las organizaciones y los organismos públicos deben hacer extensivo su apoyo a las iglesias de Namibia que oponen resistencia a la administración colonial racista y que ayudan a las víctimas de la opresión sudafricana en Namibia, señaladamente a los presos y las personas a su cargo.

14. En la realización de la iniciativa que ha tomado, el Instituto Internacional de Derechos Humanos debe preparar y publicar una compilación de todos los documentos fundamentales relativos a Namibia.

15. Una emisora de radio de las Naciones Unidas se establecerá en un país libre de Africa a fin de transmitir, en todos los idiomas que se hablan en Namibia, emisiones de las Naciones Unidas sobre el racismo, la descolonización y Namibia.

16. Todas las naciones deben hacer contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para Namibia y al Instituto de las Naciones Unidas para Namibia, con objeto de promover la formación y la instrucción de namibianos, de forma que adquieran la competencia necesaria para asumir la responsabilidad de la administración de su país.

17. El Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia debe proceder a la preparación y publicación de estudios especiales sobre las siguientes cuestiones:

- a) La producción y la explotación del uranio en Namibia.
- b) La producción y la exportación de diamantes de Namibia.
- c) La exportación de pieles de Swakara.
- d) El proyecto de la presa de Cunene (destinado a proporcionar energía eléctrica a las minas y a las obras hidráulicas).

18. Todos los años, al concluir la semana internacional de solidaridad con el pueblo namibiano, el Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia debe establecer una relación de los esfuerzos desplegados y de los resultados obtenidos dentro del marco del presente Programa de Acción, y presentar, a este respecto, un informe al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.

Anexo II

LISTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA DE DAKAR
SOBRE NAMIBIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

I. Documentos de trabajo

- Conf. Dakar (NDH 76) I: Human Rights in Namibia
- by Mrs. Elizabeth S. LANDIS
- Conf. Dakar (NDH 76) II: Selected Aspects of the Activities of the United Nations concerning Namibia and Human Rights
- by the Division of Human Rights, United Nations
- Conf. Dakar (NDH 76) III: Flogging in Namibia
- by Felix Ermacora
- Conf. Dakar (NDH 76) IV a: Namibia and the International Rule of Law
- SWAPO of Namibia
- Conf. Dakar (NDH 76) IV b: Discussion Paper on the Constitution of Independent Namibia
- by SWAPO of Namibia
- Conf. Dakar (NDH 76) V: Constitution of the South West Africa Peoples's Organisation
- Conf. Dakar (NDH 76) VI: Self-Determination: Techniques of Implementation and the United Nations
- by a Member of the Staff of the International Institute of Human Rights
- Conf. Dakar (NDH 76) VII: Self-Determination: its Continuing Validity
- by M. Sornarajah
- Conf. Dakar (NDH 76) VIII: Independent Namibia: Survey of Methods Utilized to Ensure the Protection of Minorities
- by a Member of the Staff of the International Institute of Human Rights
- Conf. Dakar (NDH 76) IX: Les droits de la femme: normes internationales, programmes de mise en oeuvre
- par Jean-Bernard Marie
- Conf. Dakar (NDH 76) X: Labour Regime and the Namibian Worker: Some Reflections on Human Rights
- by Osita C. EZE

I. Documentos de trabajo (cont.)

- Conf. Dakar (NDH 76) XI: La Namibie et les Parlements: diverses activités parlementaires relatives à la Namibie
- par un membre du Secrétariat de l'Institut International des Droits de l'Homme
- Conf. Dakar (NDH 76) XII: La Namibie et les Conventions internationales des Droits de l'Homme
- Document préparé par un groupe de travail à Strasbourg (rapporteur: A. C. Kiss)

Legal history of Namibia through documents (International Institute of Human Rights)

II. Discursos inaugurales

- Sr. Amadou Mahtar M'BOW, Director General de la UNESCO
- Sr. Issoufou DJERMAKOYE, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas (mensaje del Secretario General, Sr. Kurt WALDHEIM)
- Sr. Sam NUJOMA, Presidente de la SWAPO
- Excmo. Sr. Rupiah B. BANDA, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Zambia
- Excmo. Sr. Léopold Sédar SENGHOR, Presidente de la República del Senegal
- Excmo. Sr. Embajador Duncan W. KAMANA, Presidente del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
- Sr. ALLANA, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Excmo. Sr. Embajador Franck BOATEN, representante del Comité contra el apartheid
- Sr. HELLBERG, representante de la Federación Luterana Mundial

Textos no distribuidos

- Excmo. Sr. JOKA-BANGURA, Presidente de la Cuarta Comisión durante el trigésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y representante del Comité de los 24
- Monseñor Johannes DYBA, Observador de la Santa Sede en la Conferencia
- Sr. Dwain EPPS, representante del Consejo Mundial de Iglesias

III. Otros documentos

- Règlement Intérieur (E/F)
- Déclaration d'un Groupe de Représentants des Eglises (E/F)
- Forces for Change in Namibia (by R. WOOD)
- Projet de Déclaration tel que proposé par le Comité Exécutif de la Conférence (E/F)
- Programme de mesures éventuelles: avant-projet susceptible d'être révisé par le Comité Exécutif (E/F)
- Déclaration faite par S. E. l'Ambassadeur S. KARIM au nom du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au cours de la visite officielle que les Membres du Conseil ont rendue à S. E. M. Léopold Sédar SENGHOR, Président de la République du Sénégal, le 7 janvier 1976 (E/F)
- A list of Namibian Political Prisoners (by Amnesty International) (E/F)
- Rapport sur la situation juridique des habitants de Namibie sous le régime illégal actuel (sous-comité juridique) (F)
- La situation sociale en Namibie (sous-comité juridique) (F)
- Le Décret sur les ressources naturelles de la Namibie (par M. RIGAUX) (F)
- Statement by the Representative of Netherlands in the 4th Committee of the General Assembly of the UN (E/F)
- Case Histories from Namibia (SWAPO) (E)
- Esquisse d'une théorie juridique justificative de la guerre de libération nationale (par le Doyen Ibrahima FALL) (F)
- La responsabilité chrétienne en Namibie (Fédération Luthérienne Mondiale) (E/F)
- Reproduction of article published in "The Review" of the I. C. J., N° 14, juin 1975 (E/F)
- Statement on behalf of the Okahandja summit (E)
- Communication de M. Mohamed FALL (République Islamique de Mauritanie) (F)
- Namibia's Population: South Africa's misleading Estimates (E/F)
- Résolution adoptée à l'unanimité par la 25e Assemblée de la FMANU (E/F)

III. Otros documentos (cont.)

- Extract from Business Week of 24 Nov. 1975 (E/F)
- Prepared Statement of M. PEAY (Lawyers Committee for Civil Rights under law: 1st: before Special Political Committee of UN GA (NY, Oct. 75); 2nd: Dakar Conf.
- Halting the arms race, arms reduction, disarmament and detente (by a working group in Warsaw) (E/F)
- Resolution adopted at the 62nd Inter-Parliamentary Conference, London, 4-12 September 1975 (Extraits relatifs à la Namibie déjà reproduits en Annexe III du Document Dakar Conf/NDH/XI) (E/F)
- Reports of British House of Lords (20 October 1975): Uranium purchases from Namibia (cité en page 11 et annexe I, § 4, du document Dakar CONF/NDH/XI) (E)
- Letter from the SWAPO Chief Representative for West Africa, M. HISHONGWA
- Liste provisoire des participants, Rev.2

IV. Documentos finales

- Rapport de la Commission I (F)
- Rapport de la Commission II (E/F)
- Rapport Général (F)
- Resolución (presentada por el Sr. ALLANA, y adoptada unánimemente por la Conferencia) (E/F)
- Declaración de Dakar (aprobada unánimemente por la Conferencia) (E/F)
- Programa de Acción (aprobado unánimemente por la Conferencia) (E/F)
- Presentación de la Declaración de Dakar por el Sr. Kéba MBAYE, Presidente de la Conferencia (F).

III. RHODESIA DEL SUR

A. Nuevos acontecimientos relativos a la política de apartheid y de discriminación racialIntroducción

450. El proceso ilegal y unilateral por el que el régimen rebelde proclamó la independencia de Rhodesia del Sur de la Potencia colonial se describe detalladamente en los documentos E/CN.4/AC.22/13 (párrs. 1 a 11) y E/CN.4/1020/Add.1 (párrs. 72 a 74). La llamada "nueva Constitución", que adoptó el Parlamento de Rhodesia del Sur, así como las diversas leyes complementarias, se analizan en informes anteriores del Grupo Especial (E/CN.4/1020 (párrs. 369 a 373) y E/CN.4/1020/Add.1 (párrs. 73 y 74).

451. Como señaló el Grupo en su informe de 1973 (E/CN.4/1111, párr. 232), el régimen ilegal y el Gobierno británico negociaron "propuestas de arreglo" en 1972. Esas propuestas fueron rechazadas en forma abrumadora por todo el pueblo de Rhodesia ^{1/}, pero se dejaron en "suspense" hasta que el Gobierno del Reino Unido canceló, el 4 de julio de 1974, todas las ofertas previas de arreglo.

452. Como ya lo ha subrayado el Grupo en informes anteriores (E/CN.4/1111, párr. 231; E/CN.4/1135, párr. 327), aunque el Reino Unido se ha negado reiteradamente a tomar medidas adecuadas para restablecer un gobierno legítimo en Rhodesia del Sur, el territorio sigue siendo, desde el punto de vista del derecho internacional, de la legislación británica y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, una colonia de la Corona Británica a la que se aplican todas las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por el Reino Unido.

453. En el período que se examina, el régimen rebelde no sólo se ha abstenido sistemáticamente de presentar propuestas aceptables para la mayoría africana, sino que también se ha negado a aceptar propuestas razonables sobre las modalidades de negociación con los dirigentes de la mayoría africana. Como se indica en el informe del Grupo correspondiente a 1975 (E/CN.4/1159, párr. 284), el régimen rebelde aceptó una cesación del fuego, a la que habían de seguir negociaciones. Este acuerdo se concertó en Lusaka el 11 de diciembre de 1974, y según un comunicado de prensa del African National Council (Consejo Nacional Africano), el citado acuerdo contenía las siguientes cláusulas:

- "1) El Gobierno pondría en libertad inmediatamente a todos los detenidos políticos y levantaría la proscripción de ciertas personas (entre ellas, algunas que se encontraban en aldeas protegidas);
- 2) El Gobierno liberaría a todos los presos políticos lo antes posible;
- 3) El Gobierno revocaría la sentencia de muerte impuesta a los presos políticos y los pondría en libertad;

^{1/} Rhodesia: Report of the Commission of Thodesian Opinion under the Chairmanship of Lord Pearce, Cmnd 4964.

- 4) El Gobierno concedería una amnistía general a todas las personas consideradas autoras de delitos políticos, incluidas las que se encontraran fuera del país;
- 5) El Gobierno levantaría la prohibición impuesta a la ZANU y a la ZAPU;
- 6) El Gobierno crearía las condiciones necesarias para permitir la libertad de expresión y de acción política en el país;
- 7) El Gobierno pondría fin a los procesos políticos;
- 8) El Gobierno levantaría el estado de urgencia.

En cuanto a la cesación del fuego, se acordó que fuera oficioso y que las partes lo anunciaran a sus fuerzas respectivas sin un comunicado oficial. Después de anunciada la fecha de celebración de una conferencia constitucional y una vez iniciadas negociaciones concretas se procedería a una cesación del fuego formal, que podría proclamarse oficialmente" 2/. El régimen rebelde afirmó que no se había concertado ningún acuerdo de esa naturaleza, y, el 9 de enero, el Ministro de Orden Público interrumpió la liberación de las personas detenidas (véase también el párr. 525). El "Primer Ministro", Sr. I. D. Smith, en representación del régimen rebelde, y los dirigentes del African National Council (ANC), celebraron una serie de reuniones para determinar el lugar de celebración, la presidencia y el programa de una conferencia constitucional. El principal obstáculo a este respecto ha sido la fijación del lugar de celebración de las negociaciones, ya que el régimen rebelde ha insistido reiteradamente en que éstas debían celebrarse en Rhodesia del Sur, en tanto que el ANC estaba dispuesto a tomar en consideración cualquier otro lugar que no fuera Rhodesia del Sur. Aunque el régimen rebelde prometió que no se emprendería acción alguna contra los dirigentes del ANC en caso de que la citada conferencia no llegara a ningún acuerdo, se negó a garantizar que ningún miembro de la delegación del ANC sería detenido en caso de asistir a una conferencia en Rhodesia del Sur. Esto significaba que el Sr. J. R. D. Chikerema y, posteriormente, el Reverendo Ndabaningi Sithole habrían quedado en la práctica excluidos de la delegación del ANC. Este y el régimen rebelde se reunieron en una conferencia plenaria en Livingstone/Victoria Falls, en un tren situado sobre la frontera, encima del río Zambezi, conferencia que fracasó al negarse rotundamente el régimen rebelde a conceder una amnistía o a continuar las negociaciones fuera de Rhodesia del Sur.

454. Sin embargo, durante este período de distensión prosiguieron las operaciones de guerrillas en las zonas norte y este del país, y el régimen ha continuado tratando de imponer su autoridad mediante nuevas leyes represivas y medidas ejecutivas.

455. Durante el período que se examina, se ha registrado un cambio en las relaciones entre el régimen y el Gobierno de Sudáfrica. La distensión en Africa del Sur se inició oficialmente con un discurso del Sr. B. J. Vorster, Primer Ministro de la República Sudafricana, el 23 de octubre de 1974, quien lanzó un llamamiento a "todos aquellos que puedan influir sobre todas las partes interesadas para hallar una solución duradera, justa y honorable, a fin de que puedan normalizarse las relaciones internas y externas". Este llamamiento dio por resultado la liberación en diciembre

2/ Rhodesia Herald, 13 de enero de 1975.

de 1974 de los dirigentes nacionalistas de Zimbabwe. Entre octubre de 1974 y septiembre de 1975 hubo los siguientes contactos oficiales conocidos entre el régimen rebelde y el Gobierno de Sudáfrica:

- 9 de diciembre de 1974: el Sr. Vorster efectuó una visita secreta a Rhodesia del Sur 3/;
- 2 de marzo de 1975: el Sr. P. K. van der Byl, "Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa", visitó al Sr. Vorster para informarle acerca de la detención del Reverendo Ndabaningi Sithole 4/;
- 18 de marzo de 1975: el Sr. Smith se trasladó a Sudáfrica para entrevistarse con el Sr. Vorster en El Cabo 5/;
- 3 de abril de 1975: el Sr. H. Muller, Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, se trasladó a Salisbury. Como resultado de esta visita, se autorizó al Reverendo Ndabaningi Sithole a salir del país 6/;
- 29 de junio de 1975: el Sr. Smith visitó al Sr. Vorster en Pretoria 7/;
- 9 y 10 de agosto de 1975: el Sr. Smith visitó al Sr. Vorster en Pretoria 8/;
- 25 de agosto de 1975: el Sr. Vorster (así como el Sr. Kaunda, Presidente de Zambia) participó en las negociaciones de Victoria Falls/Livingstone 9/.

El objeto de todas estas entrevistas era tratar de hallar una solución en Rhodesia del Sur, como medio de salvaguardar la situación interna de la República. No han producido resultados dignos de ese nombre. No obstante, los blancos de Rhodesia del Sur han continuado contando con la ayuda económica y social de Sudáfrica. Por ejemplo, el Dr. H. Muller, Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, se negó rotundamente a aplicar sanciones económicas a Rhodesia del Sur 10/. Ante la posibilidad de que todas las mercancías de este país tuvieran que transportarse a través

3/ Report by Robert Mugabe to the Justice and Peace Executive, Catholic Commission for Justice and Peace in Rhodesia, 17 de diciembre de 1974.

4/ Rhodesia Herald, 7 de marzo de 1975.

5/ Guardian, 19 de marzo de 1975.

6/ Rhodesia Herald, 4 de abril de 1975.

7/ Sunday Mail, 29 de junio de 1975.

8/ Guardian, 11 de agosto de 1975.

9/ Guardian, 26 de agosto de 1975.

10/ Rhodesia Herald, 22 de mayo de 1975.

de Sudáfrica se declaró que ello les plantearía un "problema insoluble" a los ferrocarriles de este país, pero que éstos harían todo lo que estuviera razonablemente a su alcance para prestar ayuda 11/. Esta preocupación de orden económico se explica por las importantes inversiones de Sudáfrica en Rhodesia del Sur 12/, efectuadas mucho antes de la declaración unilateral de independencia, y que han aumentado considerablemente desde entonces 13/. La Organización del Trabajo de la Cámara de Minas de Sudáfrica también ha comenzado a contratar mano de obra africana procedente de Rhodesia del Sur (véase el párr. 560 infra).

456. Los cambios ocurridos en la situación política del Africa austral, entre ellos la terminación de las operaciones de guerrilla en Mozambique y la independencia de este país, han influido también en la contratación de trabajadores extranjeros en Rhodesia del Sur. Cuando se levantó el censo de la población en abril de 1969, el número de africanos "extranjeros", por sexo, era el siguiente:

	Hombres	Mujeres
Procedentes de Mozambique	77 440	31 670
Procedentes de Malawi	123 310	40 130
Procedentes de Zambia	29 700	14 810

El número de africanos procedentes de otros países (incluidas otras antiguas colonias portuguesas) es reducido. Desde 1969, sólo se han compilado cifras sobre las migraciones de hombres adultos, pero en todos los casos se ha podido observar una emigración neta. Según las citadas cifras, cabe apreciar que el número de hombres es considerablemente superior al de mujeres. Si se tienen en cuenta las cifras correspondientes a personas mayores de 15 años (es decir, las personas económicamente activas) la preponderancia de los hombres es incluso mayor.

457. La contratación de esa mano de obra africana se ha efectuado, bien con carácter voluntario (es decir, africanos que se trasladan a Rhodesia del Sur en busca de empleo), por empleadores que actúan a título individual, o bien por la Rhodesian African Labour Supply Commission (RALSC) (Comisión de Rhodesia para la contratación de mano de obra africana). Esta organización se creó de conformidad con el modelo establecido por la Witwatersrand Native Labour Association (WNLA) (Asociación de Witwatersrand para la contratación de mano de obra aborígen) de Sudáfrica, y, en el decenio de 1950 la RALSC constituyó una fuente importante de mano de obra (principalmente procedente de Nyasalandia, pero también de Mozambique) para ser empleada en las granjas y en las plantaciones. En el decenio de 1960, la citada Comisión no logró tan buenos resultados debido a los bajísimos salarios que ofrecía, considerablemente inferiores a los de la WNLA. Asimismo fracasaron completamente los intentos de contratar trabajadores dentro de Rhodesia para las granjas y las plantaciones. Desde la declaración unilateral de

11/ Rhodesia Herald, 11 de junio de 1975.

12/ Véanse también, en relación con el comercio exterior de Rhodesia del Sur, los informes del Comité del Consejo de Seguridad establecido en cumplimiento de la resolución 253 (1968) relativa a la cuestión de Rhodesia del Sur; el último informe figura en los documentos S/11594 y Add.1 y 2.

13/ Véase John Sprack, Rhodesia: South Africa's Sixth Province for Southern Africa (international Defence and Aid Fund)..

independencia, la mayor parte de las operaciones de contratación de trabajadores se han efectuado en Malawi. Durante el período 1965-1971, se contrataron 3.669 trabajadores al año, en su mayoría procedentes de Malawi, no obstante, los salarios eran bajos y la tasa de deserción del trabajo muy elevada 14/. En abril de 1974, el Gobierno de Malawi puso término a las operaciones de contratación de trabajadores de la Comisión, y en el informe anual de la RALSC, correspondiente a 1974, se declara que "la suspensión de la contratación tiene graves consecuencias para los cultivos comerciales de nuestros agricultores". En efecto, los ingresos de los trabajadores agrícolas son realmente muy bajos. La finalidad que persigue el sistema de trabajo a contrata ha sido socavar la posición negociadora de los trabajadores africanos en Rhodesia del Sur, y por tanto mantener los salarios a un nivel bajo.

1. Pena capital

a) Resumen de la legislación pertinente

458. La legislación que impone la pena de muerte en Rhodesia del Sur fue analizada en detalle en un informe anterior del Grupo Especial (E/CN.4/1020/Add.1, párrs. 75 a 77). La Law and Order (Maintenance) Act (ley de mantenimiento del orden público) y sus numerosas enmiendas, establece la aplicación de la sentencia de muerte -frecuentemente con carácter obligatorio- para una amplia gama de delitos, y dispone que incumbe al acusado probar su inocencia.

459. La Law and Order (Maintenance) Amendment Act se promulgó en diciembre de 1974. Esta ley establece la aplicación obligatoria de la sentencia de muerte a toda persona declarada culpable de reclutar a alguien para darle una formación "terrorista". Anteriormente, los tribunales tenían poderes discrecionales para optar entre la condena a prisión perpetua y la sentencia de muerte 15/.

460. Un portavoz del "Ministerio de Justicia" declaró, el 22 de abril, que ya no se anunciarían públicamente las ejecuciones en la horca. Esta decisión se adoptó debido a que la cuestión de las ejecuciones tenía un carácter "emotivo". El mismo portavoz manifestó que cuando se pronuncia una sentencia de muerte y se rechaza el recurso interpuesto debe considerarse que la sentencia se ha ejecutado 16/. Conviene observar que una serie de juicios se han celebrado a puerta cerrada, por lo que es posible que se haya ejecutado con todo secreto a las personas inculpadas (véanse párrs. 566 y 567).

b) Pena capital sancionada mediante un proceso judicial

461. Prácticamente, las únicas fuentes de información sobre la pena capital -tanto por lo que se refiere a la ejecución de las sentencias de muerte como al proceso judicial por el que se pronuncian estas sentencias- son las versiones dadas por el régimen rebelde en la prensa de Rhodesia del Sur. Es muy dudoso que se haya informado de una pequeña proporción de los procesos en que se pronuncian sentencias de muerte o de cualquier otro tipo. Toda una serie de juicios se celebran a puerta cerrada (párrs. 566 y 567), o se omite información importante sobre ellos.

14/ D. G. Clarke, Contract Workers and Underdevelopment in Rhodesia (Mambo Press), cap. III.

15/ Rhodesian Parliamentary Debates, House of Assembly (en lo sucesivo Parl. Deb.), 14 de noviembre de 1974, columnas 913 a 918; Rhodesia Herald, 12 de diciembre de 1974.

16/ Guardian, 23 de abril de 1975.

462. En el informe del año pasado del Grupo Especial se señalaba que la mayor parte de los africanos condenados a la pena de muerte fueron efectivamente ejecutados (E/CN.4/1159, párr. 291). Las ejecuciones anunciadas en el período que se examina (por tanto, sólo un semestre aproximadamente) no parecen ajustarse siempre a la misma modalidad, es decir, las ejecuciones tienen lugar con un lapso de sólo dos o tres meses desde que se pronuncia la sentencia o se interpone el recurso. Es, pues, de suponer, basándose en pruebas empíricas, que las sentencias de muerte se ejecutan automáticamente casi todas las veces. El "Ministro de Justicia" se negó, "en interés nacional", a contestar a una pregunta que se le hizo en el Parlamento, en agosto de 1975, solicitando detalles acerca del número de personas condenadas a la pena capital y ejecutadas desde la declaración unilateral de independencia y desde la celebración del acuerdo de Lusaka, en diciembre de 1974 17/.

463. De conformidad con la citada declaración del "Ministerio de Justicia", es de suponer que todas las personas condenadas a la pena capital han sido ejecutadas. En una declaración del Secretario de Publicidad del African National Council se presentan asimismo pruebas de que continúan los ahorcamientos. A mediados de junio de 1975, el doctor Edson Sithole manifestó: "Condenamos en los términos más enérgicos la forma en que se llevan a cabo las ejecuciones", citando los casos recientes de dos hombres que fueron ahorcados a las siete de la noche en lugar de serlo a primera hora de la mañana. "Antes, a los condenados a muerte se les anunciaba con suficiente antelación el momento de la ejecución, dándoles así la última oportunidad de ver a sus parientes y amigos. Actualmente, el Gobierno /sic/ ha suprimido esta práctica. A algunos condenados a muerte se les anuncia la ejecución una o dos horas antes". Esta declaración no fue impugnada por el régimen rebelde 18/.

464. A un simpatizante (que no se nombra) de los combatientes por la libertad se le rechazó el recurso que había interpuesto contra la sentencia de muerte en noviembre de 1974. Esta persona había sido declarada culpable de ser cómplice de dos combatientes por la libertad que habían matado a golpes a dos africanos. Este condenado a muerte no había participado en la agresión 19/.

465. Otros dos combatientes por la libertad perdieron su recurso contra la sentencia de muerte pronunciada contra ellos en marzo de 1975. Uno de ellos, Clever Mabonzo, fue declarado culpable de haber dado muerte a un miembro del Departamento de Veterinaria del régimen, de haber disparado contra un agricultor blanco y de tener en su posesión armas de guerra. Al otro condenado a muerte, Baya Tsauke, se le había acusado de haber disparado contra cuatro africanos, de haber hecho fuego también contra un agricultor blanco y de estar en posesión de armas de guerra. Conviene señalar que los partidos nacionalistas pretenden que no matan africanos más que si son delatores y partidarios del régimen rebelde 20/.

17/ Parl. Deb., 29 de agosto de 1975, col. 1533.

18/ Rhodesia Herald, 17 de junio de 1975.

19/ Rhodesia Herald, 23 de noviembre de 1974.

20/ Rhodesia Herald, 7 de marzo de 1975.

466. En febrero de 1975, dos africanos (que no se nombran) fueron condenados a la pena capital por actos de "terrorismo", y por posesión de armas de guerra. El juicio se celebró a puerta cerrada 21/.

467. En marzo de 1975, dos combatientes por la libertad, Maxwell Nyamhandu y Chiviye Mapfundi, fueron condenados a la pena capital por complicidad en el asesinato de un agricultor blanco, cometido hacía dos años, aproximadamente 22/.

468. En marzo de 1975, Elly Wandiauwona, dirigente de un grupo de combatientes por la libertad, fue sentenciado a la pena capital por haber dado muerte a un africano y por haber cometido un "acto de terrorismo" al hacer disparos contra las fuerzas de seguridad 23/.

469. Asimismo, en el mes de marzo de 1975, otro combatiente por la libertad, Kariba Herbert Tobias, perdió el recurso que había interpuesto contra su sentencia de muerte. El interesado había sido condenado por haber dado muerte a un delator africano, por haber tendido una emboscada a un vehículo automóvil y por posesión de armas de guerra 24/.

470. En abril de 1975, cuatro hombres fueron detenidos y acusados de reclutar a muchachos como combatientes por la libertad. Los inculcados eran Maurice Nyagumbo^{25/}, dirigente del ANC y uno de los miembros de la Zimbabwe African National Union (Unión Nacional Africana de Zimbabwe) (ZANU) que habían negociado con el régimen ilegal en Lusaka; Moven Mahachi, gerente de una cooperativa agrícola africana de Inyanga que ha prestado una ayuda considerable a la tribu Tangwena; John Mutasa, agricultor que había estado asociado anteriormente con la Cold Comfort Farm Society, y Percy M'kudu, ex diputado africano y miembro preeminente de la Iglesia Anglicana. Todas estas personas pueden ser condenadas a muerte automáticamente si son declaradas culpables^{26/}.

471. En agosto de 1975, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia de muerte de dos combatientes por la libertad, que habían sido declarados culpables de un acto de "terrorismo" y de haber causado la muerte de un trabajador agrícola africano. Aparentemente los condenados habían colocado una mina que hizo explotar un vehículo cargado de trabajadores agrícolas. Uno de estos trabajadores sufrió heridas graves y falleció de tétanos, a pesar de haber sido tratado con suero antitetánico 27/.

472. En agosto de 1975, Benson Ncube y Robbie Nyambabu fueron condenados a la pena capital por haber reclutado e incitado a seis menores africanos a seguir un entrenamiento de "terrorismo" 28/.

21/ Rhodesia Herald, 28 de febrero de 1975.

22/ Rhodesia Herald, 11 de marzo de 1975.

23/ Rhodesia Herald, 19 de marzo de 1975.

24/ Rhodesia Herald, 22 de marzo de 1975.

25/ Información proporcionada por Amnesty International, sección sueca, el 27 de mayo de 1975.

26/ Guardian, 5 y 7 de mayo, y 25 de junio de 1975; Rhodesia Herald, 9 de abril de 1975.

27/ Rhodesia Herald, 5 de abril y 7 de agosto de 1975.

28/ Rhodesia Herald, 16 de agosto de 1975.

2. Matanzas y violaciones del derecho a la vida

a) Africanos no combatientes muertos por las fuerzas de seguridad

473. En el período que se examina, las informaciones de que dispuso el Grupo Especial de Expertos señalan el elevado número de africanos no combatientes que fueron muertos por las fuerzas del régimen, bien "por accidente" o bien por no haber respetado el toque de queda. Las autoridades del régimen han reconocido la mayor parte de los incidentes de ese tipo. De algunos de ellos, no obstante, solamente se ha tenido conocimiento gracias a las actividades desplegadas por organizaciones no oficiales, como la Roman Catholic Justice and Peace Commission (Comisión Católica de Justicia y Paz).

474. La Catholic Commission for Justice and Peace in Rhodesia ha informado de que, el 19 de abril de 1974, cinco helicópteros y un avión de combate atacaron a un grupo de siete niños que estaban guardando un rebaño. Dos de ellos fueron muertos, y los otros cinco gravemente heridos; cuatro de éstos fueron transportados al hospital, y sus padres se enteraron del incidente por el quinto niño. No se ha ofrecido ninguna indemnización a los padres de las víctimas 29/.

475. En una encuesta judicial efectuada en octubre de 1974 se declaraba que un africano (Cosmos Kasana) había sido muerto a tiros, y otras personas gravemente heridas porque se encontraban cerca de la valla de seguridad de la estación aérea de Nueva Sarum. Los guardas abrieron fuego y mataron a Kasana 30/.

476. Dos muchachos resultaron muertos en un tumulto que se produjo en una aldea "protegida". Un portavoz del régimen rebelde manifestó que a un ayudante de distrito se le había disparado la pistola cuando trataba de "recogerla del suelo". Según esta declaración, estas muertes ocurrieron durante un "leve disturbio" 31/. Sin embargo, según la Catholic Commission for Justice and Peace, el incidente ocurrió porque los niños, de un golpe, tiraron al suelo la pistola del funcionario en el momento en que éste y sus acompañantes se iban de la aldea "protegida". El ayudante de distrito se molestó por ello y descargó el arma sobre los niños. Al parecer, un hombre ha comparecido ante el juez de distrito (Salisbury), pero toda la vista de la causa se llevó a cabo a puerta cerrada 32/. (Para más información sobre las condiciones en las aldeas "protegidas", véanse más adelante los párrs. 513 a 518).

477. El 20 de marzo de 1975, las fuerzas de seguridad mataron a una persona que había desobedecido el toque de queda 33/.

29/ Man in the Middle: Torture, Resettlement and Eviction, informe preparado por la Catholic Commission for Justice and Peace in Rhodesia (Londres, Catholic Institute for International Relations, 1975), pág. 4.

30/ Rhodesia Herald, 18 de octubre de 1974.

31/ Rhodesia Herald, 24 de diciembre de 1974.

32/ Man in the Middle..., op. cit., pág. 4.

33/ Rhodesia Herald, 28 de marzo de 1975.

478. Dos africanos fueron muertos "accidentalmente" al explotar una granada en la comisaría de policía de Mtoko el 5 de abril de 1975. El régimen rebelde no confirmó este incidente hasta que los medios informativos se ocuparon del caso cuatro semanas después 34/.

479. En abril de 1975 se anunció que las fuerzas de seguridad habían dado muerte a un hombre que dijo que contravenía el toque de queda 35/. El 18 de abril de 1975 resultaron muertas otras dos personas por la misma razón, y otro africano fue muerto en un "accidente" que no se especificaba 36/. El 13 de mayo de 1975 37/, fue muerta una persona que no había respetado el toque de queda, y el 20 de mayo de 1975 38/ fueron muertas otras dos personas.

480. El 15 de 1975, el Sunday Mail informó de que el 12 de junio habían muerto 20 africanos en un choque de las fuerzas de seguridad con "terroristas", en una aldea situada en la zona "operacional". Según las autoridades del régimen, una patrulla, a la que habían alertado ruidos como si se estuviera pegando a un hombre, fue atacada con armas de fuego, y las "20 personas perecieron en la batalla que siguió" 39/. Sin embargo, según la Catholic Commission for Justice and Peace, de los 20 africanos muertos, nueve eran niños y cuatro mujeres, y todos eran civiles. Tres combatientes por la libertad habían llegado a la aldea y habían apaleado al cacique local por "vendido". Al abandonar la aldea explotó una granada, y las fuerzas de seguridad abrieron fuego desde una distancia de 10 metros, sin que replicaran esos combatientes. Las fuerzas de seguridad retiraron los cadáveres de las 20 personas, que fueron quemados a unas millas del lugar. Además, otras 15 personas, de las cuales cinco eran niños y ocho mujeres resultaron heridas en el tiroteo. La citada Comisión pidió que se llevaran a cabo una encuesta y una investigación judicial. Haciendo uso de la palabra en el "Senado", a fines de agosto, el "Ministro de Justicia y de Orden Público" declaró que: "hablando en términos generales", resultaba, después de una investigación, que las afirmaciones de la Comisión "distaban mucho de ser verdad". El Ministro continuó diciendo que un hecho que se desprendería efectivamente de los incidentes era que los civiles que se habían unido a los "terroristas" sufrirían probablemente como resultado de ello 40/.

481. En el período del 4 al 12 de julio de 1975 41/ tres africanos fueron muertos y uno herido por haber desobedecido el toque de queda, y el 12 de julio fue muerto otro al encontrarse en un "fuego cruzado" entre los combatientes por la libertad y las fuerzas de seguridad 42/; cuatro africanos resultaron muertos en las zonas de toque

34/ Rhodesia Herald, 1º de mayo de 1975.

35/ Rhodesia Herald, 17 de abril de 1975.

36/ Rhodesia Herald, 26 de abril de 1975.

37/ Rhodesia Herald, 17 de mayo de 1975.

38/ Rhodesia Herald, 20 de mayo de 1975.

39/ Sunday Mail, 15 de junio de 1975.

40/ Rhodesia Herald, 2 de agosto de 1975; Guardian, 2 de agosto de 1975; y Rhodesia Herald, 22 de agosto de 1975.

41/ Radio Salisbury, 16 de julio de 1975.

42/ Rhodesia Herald, 4 de julio de 1975.

de queda en la frontera oriental con Mozambique, dos de los cuales trataban de incorporarse a los combatientes por la libertad en ese país 43/. Por último, el 1º de diciembre de 1975 44/ se anunció que las fuerzas de seguridad habían dado muerte a otras dos personas que habían desobedecido el toque de queda.

482. Es de observar que la información acerca de las personas muertas por el régimen por no haber respetado el toque de queda no se inició hasta marzo de 1975. Esto puede indicar una nueva política de información pública del régimen, o también un recrudecimiento de la represión al extender el toque de queda a zonas más amplias del país. Por otra parte, como se señalaba en el informe anterior del Grupo Especial (E/CN.4/1159, párr. 294), las fuerzas de seguridad del régimen rebelde han venido ejecutando sumariamente a combatientes por la libertad, y esa información puede constituir un medio de ocultar las ejecuciones de este tipo.

b) Muertes ocasionadas por los interrogatorios

483. Según una declaración de la Catholic Commission for Justice and Peace, Alois Mutanda Fred Chimimba recibió un tiro en la cabeza y murió en los interrogatorios a que fue sometido por las fuerzas de seguridad en la zona de Mount Darwin el 2 de enero de 1975. Al parecer, un soldado interrogó a Chimimba en inglés, pero al no contestar éste a las preguntas, el soldado le empujó con la pistola, la cual se disparó. Aunque la policía investigó posteriormente este incidente, no se había entablado proceso alguno hasta el momento de la publicación de la citada declaración (mayo de 1975) 45/.

c) Muertes ocasionadas por la agitación política

484. El 1º de junio de 1975 se produjo un grave incidente en el que perdieron la vida gran número de africanos. La creciente excitación de los ánimos durante una reunión del Comité Central del ANC, que se celebró en Highfield Township, en Salisbury, dio al parecer lugar a un encuentro violento de dos grupos importantes de africanos que sustentaban opiniones políticas contrarias. Evidentemente, el destacamento de policía que intervino no tenía la intención de dispersar la multitud sino de disparar pura y simplemente contra ella. En efecto, no se componía de más de 20 hombres y no contaba con elementos de apoyo ni refuerzos, ni disponía de gases lacrimógenos o de otro medio habitual para la dispersión de multitudes. Como consecuencia de un incidente en el que estaba complicado un blanco, dedicado a la cría de perros, el jefe del destacamento de policía disparó dos tiros al aire y ordenó a sus hombres que hicieran fuego sobre la multitud, causando la muerte de cinco africanos e hiriendo a otros ocho. Posteriormente, aunque la muchedumbre se dispersó rápidamente, en una serie de incidentes que se produjeron en barrios africanos resultaron muertos otros nueve africanos y heridos una docena aproximadamente (aunque es probable que muchos más no se atrevieron a acudir a los hospitales para ser tratados). Una de las víctimas murió pisoteada por la multitud que huía presa de pánico 46/. En una

43/ Rhodesia Herald, 5 de agosto de 1975.

44/ Radio Salisbury, 1º de septiembre de 1975.

45/ Man in the Middle..., op. cit., pág. 4.

46/ Rand Daily Mail, 2 de junio de 1975; Radio Salisbury, 2 de junio de 1975; Guardian, 2 de junio de 1975.

declaración hecha dos días más tarde, la policía afirmó que solamente había muerto 11 personas, y no 12 como se había comunicado originalmente 47/; pero la investigación que se realizó subsiguientemente reveló que habían resultado muertas 14 personas en el incidente 48/.

485. La información facilitada al Grupo Especial de Expertos indica una alarmante falta de respeto por las vidas de los africanos por parte de las autoridades en esta ocasión 49/. El jefe de la división sur de la policía de Salisbury manifestó en el curso de la investigación que se había ordenado a la policía que abriera el fuego si consideraba que corrían peligro vidas humanas o propiedades. También se habían dado instrucciones a las fuerzas de policía de que hicieran fuego sobre las personas que les apedrearán.

486. La policía detuvo a 68 personas, aunque más adelante sólo 34 fueron acusadas de violencia pública 50/. Entre las personas detenidas figuraban tres hombres que, según un testigo de cargo, habían contenido a una parte de la muchedumbre para evitar tanto que atacara a la policía como que combatiera a otros africanos. Dos de estas tres personas fueron declaradas culpables (la tercera escapó de la cárcel): Lovemore Mapondera, que fue condenado a la pena de cinco años de cárcel, y Lancelot Biyanda, a cuatro años de trabajos forzados, con un año de remisión condicional de la pena en cada caso 51/.

487. El African National Council pidió que se llevara a cabo una investigación judicial para "aclarar las graves acusaciones de que la policía actuó precipitadamente y sin previo aviso" 52/. No se ha realizado tal investigación.

3. Traslados forzados de población

a) Introducción

488. El informe de 1970 del Grupo Especial de Expertos (E/CN.4/1020/Add.1) contiene los antecedentes históricos del desarrollo de las zonas africanas, y en los informes de 1970 y 1971 (E/CN.4/1020/Add.1 y E/CN.4/1050) se incluye un estudio amplio de las leyes que afectan a los africanos en estas zonas. Durante el período que se examina no ha habido modificaciones legislativas importantes.

489. En el informe de 1974 (E/CN.4/1135, párrs. 357 a 362) se hace un estudio detallado de la distribución de la población africana y blanca (según el censo de abril de 1969), por categoría de las tierras. Desde entonces (y según cálculos oficiales) la población africana de Rhodesia del Sur ha pasado de 4.880.000 habitantes en junio de 1969 a 5.900.000 en diciembre de 1974 53/. No existe información al día sobre

47/ Rhodesia Herald, 4 de junio de 1975.

48/ Rhodesia Herald, 25 de julio de 1975.

49/ Rhodesia Herald, 8, 11, 15 y 26 de julio de 1975.

50/ Rhodesia Herald, 17 de junio de 1975.

51/ Rhodesia Herald, 11 de julio y 15 de agosto de 1975.

52/ Rhodesia Herald, 5 de junio de 1975.

53/ Monthly Digest of Statistics, agosto de 1975, cuadro 1.

la distribución de la población. La distribución de la población africana (también según el censo de abril de 1969) figura más adelante en los párrafos 610 y 618 por categoría de las tierras y sexo, así como por edades. Examinando esta distribución, se observará que las Tierras Tribales en Fideicomiso (TTF) tienen un número excesivo de mujeres y niños pequeños, en comparación con las zonas blancas urbanas y rurales.

490. En el informe de 1975 del Grupo (E/CN.4/1159, párr. 330) se daban detalles importantes sobre reglamentos nuevos y opresivos aplicables a las zonas rurales (particularmente en el nordeste).

b) Condiciones de los africanos en las zonas rurales

491. Según se desprende claramente ya de anteriores informes del Grupo, a los trabajadores africanos se los aloja en barrios africanos situados en los suburbios de ciudades blancas. Entre los alojamientos facilitados existen apartamentos en barracónes para solteros; pequeñas casas construidas por los municipios, y sostenidas frecuentemente por empresas industriales para uso exclusivo de sus propios empleados, y un número (cada vez mayor) de terrenos donde los africanos pueden tener casas de su propiedad. Los empleados domésticos viven generalmente con las familias a las que prestan servicio, alojándose en un "kia" a un extremo del jardín, aun cuando existen disposiciones que regulan su presencia en zonas blancas.

492. Como Salisbury es la ciudad mayor y más desarrollada, su Ayuntamiento es el que ha ido más lejos en la formulación de políticas para fomentar el apartheid en las zonas urbanas. Durante el período que se examina, la declaración de política más importante fue el "Plan urbano" de la Sección de asuntos africanos del Ayuntamiento de Salisbury, plan que fue aprobado por el Ayuntamiento en abril de 1975 y que probablemente originará el desplazamiento de africanos en número variable de los poblados a la ciudad. En este documento, que constaba de 200 páginas y cuya preparación llevó un año, la preocupación básica era proteger a Salisbury como ciudad "donde los intereses europeos son supremos". Por eso proponían en él algunas medidas para dar salida al incremento estimado de población africana de la ciudad durante los próximos 50 años, a saber, establecer ciudades satélites en las TTF de Seki y Chiota (ambas a menos de 20 kilómetros de Salisbury); expulsar a los africanos "extranjeros"; reducir la dimensión de las familias africanas (con la consiguiente reducción en la tasa de crecimiento de la población africana), y la eliminación de los barrios africanos de Dziva eskwa, Tafara, Mabvuku, Harari.

493. Las ciudades satélites constituirían una fuente de mano de obra para Salisbury. En el documento se sugería que la administración de estas ciudades fuese en parte africana, pero continuaba diciendo: "Está todavía por demostrar que los africanos puedan alcanzar y mantener el elevado nivel técnico y contable que se espera en los países gobernados por europeos".

494. En este plan se proyecta suprimir los nombres de los africanos extranjeros de las listas de viviendas municipales, cobrar la renta económica completa por el alquiler de estas viviendas y (en general) emplear exclusivamente a africanos autóctonos. (Debe advertirse que aproximadamente el 10% de los habitantes africanos de Salisbury nacieron fuera de Rhodesia del Sur).

495. Entre las propuestas para reducir la población, se sugiere en el plan que se fomente la planificación de la familia "utilizando la estructura de honorarios de los servicios sociales", para que los africanos comprendan mejor la carga financiera que representan los hijos, y que se intensifique el empleo de las mujeres, para disuadir las así de producir familias "numerosas y gravosas".

496. Al propugnar la supresión de los cuatro barrios, se afirma en el documento que la seguridad de los blancos, asiáticos y mestizos de los suburbios adyacentes a Harari, y la de la parte central de Salisbury, se ven amenazadas por la existencia de Harari como barrio africano, y se recomienda que esa zona se destine al comercio y la industria 54/.

497. Según la información de que dispone el Grupo, los africanos no tuvieron intervención alguna en la preparación de este plan (todos los funcionarios municipales que intervinieron eran blancos), ni tampoco en el debate posterior en el Ayuntamiento al respecto. En una carta aparecida en el Rhodesia Herald el 16 de enero de 1975, el Sr. E. M. Munetse, habitante de Harari, se quejaba en estos términos: "Los residentes de Harari parecen personas en espera de ser juzgadas... los residentes de los barrios urbanos sienten verdadera preocupación. ¿Durante cuánto tiempo tendrán que vivir temiendo por la suerte de sus barrios?".

498. Al comentar el plan, un portavoz del régimen rebelde hizo constar que, siempre que fuera factible, los futuros barrios africanos deberían establecerse en las TTF. Se informó que ya se había obtenido o se solicitaba aprobación para el establecimiento de barrios en Seki, Sansaguru, Fort Victoria y Chiweshe, y que luego seguirían otros 55/.

499. En noviembre de 1974, el "Ministro de Administración Local y Vivienda" dijo que en 1975 comenzaría la construcción de casas para africanos en Seki. Los primeros africanos que se alojaran en ellas trabajarían en Salisbury, y el Gobierno estaba considerando diversos medios de transporte rápido entre Seki y Salisbury 56/. (En el documento E/CN.4/1135, párr. 367, se describe la falta de "consultas" en relación con este proyecto, incluso con los "dirigentes" oficiales reconocidos por el régimen.)

500. Según otra información recibida por el Grupo, Salisbury ha emprendido también un importante proyecto para la construcción de 5.000 viviendas en el barrio de Zengeza, colindante con la TTF de Seki. En julio de 1975 se informó de que se encontraban muy adelantados los trabajos de construcción de 2.402 casas para el alojamiento de familias en dicho barrio. Al mismo tiempo, se encuentran en construcción manzanas de viviendas de un solo piso para dar alojamiento a 1.868 varones solteros cerca de la zona industrial de Willowvale 57/.

54/ Rhodesia Herald, 30 de abril de 1975 y 1º, 5, 7, 12, 22 y 28 de mayo de 1975.

55/ Rhodesia Herald, 17 de mayo de 1975.

56/ Rhodesia Herald, 26 de noviembre de 1974 y 13 de abril de 1975.

57/ Rhodesia Herald, 27 de julio de 1975.

c) Intentos de expulsar a los africanos que son residentes "ilegales" de zonas urbanas

501. La información presentada al Grupo indica que, conforme a la política del régimen rebelde de limitar al mínimo la población africana en las zonas urbanas, la policía efectuó el pasado año batidas periódicas en los barrios africanos, especialmente en los grandes albergues para hombres de las poblaciones, y que también se ejercieron otras presiones oficiales para expulsar a todo residente que no tuviese trabajo y no estuviese en posesión de un "permiso" especial para encontrarse en una zona urbana:

- a) El 22 de enero de 1975 un africano resultó herido de un tiro disparado por la policía y otros 61 fueron detenidos a primeras horas de la mañana cuando la policía buscaba a "conocidos delincuentes" en el albergue Mbari para varones solteros de Harari 58/.
- b) El 9 de abril de 1975 la policía (siguiendo instrucciones del Departamento de Administración Africana del Ayuntamiento de Salisbury) efectuó una batida en el albergue Nyenyere Nº 13. Fueron encontrados 544 residentes "ilegales". De ellos, 409 tenían colocación (aun cuando no estaban autorizados para residir en el albergue), pero otros 135 estaban desempleados, con lo cual se exponían a ser procesados 59/.
- c) El 29 de mayo de 1975 la policía (una vez más con la colaboración del Departamento de Administración Africana), hizo una batida en los dos albergues más grandes del complejo de Mbari. De más de 600 africanos detenidos, 471 estaban colocados y fueron puestos en libertad después de recibir una advertencia por ser huéspedes "ilegales"; 44 jóvenes fueron entregados al Departamento de Asistencia Social; 75 tendrían que comparecer ante los tribunales y otros 50 estaban todavía en prisión preventiva 60/.

502. En Salisbury, el Ayuntamiento tiene inspectores que efectúan pesquisas en busca de huéspedes ilegales en las habitaciones de criados, de conformidad con la Africans (Urban Areas) Accommodation and Registration Act (que entró en vigor en 1971). En el primer semestre del año, los residentes blancos de la zona de Borrowdale intentaron sin éxito conseguir que el Ayuntamiento accediese a exceptuar de las normas a los terrenos destinados a vivienda de blancos y que tuviesen 4 acres (1,6 hectáreas) o más de extensión. El régimen actual es que la esposa e hijos de un empleado africano pueden ser autorizados a permanecer en la residencia del empleador por un período de hasta 14 días; pueden concederse permisos especiales de tres meses de duración, como máximo, si la esposa necesita tratamiento médico o si trabaja a jornada completa en Salisbury; asimismo, un niño menor de seis años de edad puede ser autorizado a estar con su madre durante tres meses si el empleo de ésta es cuidar niños blancos (a jornada completa) 61/.

58/ Radio Salisbury, 22 de enero de 1975.

59/ Rhodesia Herald, 10 de abril de 1975.

60/ Rhodesia Herald, 30 de mayo de 1975.

61/ Rhodesia Herald, 19 de marzo de 1975 y 6, 11 y 28 de junio de 1975.

503. Sin embargo, el Grupo observa que, a pesar de ser evidente que muchos africanos han debido de ser procesados por alojarse "ilegalmente", bien en los barrios africanos o en las zonas blancas, la prensa y la radio de Rhodesia no han informado de ningún juicio ni condena.

d) La política de "bantustanización" de Rhodesia del Sur

504. La política de "desarrollo comunitario", que ha sido vigorosamente impulsada por el régimen rebelde, fue descrita con cierto detalle en el informe del Grupo Especial de Expertos correspondiente a 1974 (E/CN.4/1135, párrs. 368 a 371). En particular, se está poniendo en práctica la política de "provincialización" mencionada en ese informe (párr. 370), ligeramente modificada ahora. Según este plan, el país se dividirá con el tiempo en ocho "autoridades regionales". Según el "Ministro del Interior", estas autoridades regionales constituirán los brazos ejecutivos de las asambleas provinciales de jefes, y sus miembros serán elegidos por el presidente del Consejo Africano de la zona 62/. El Grupo reconoce que la mayoría de los presidentes de esos consejos son africanos elegidos por el consejo respectivo, pero comprende también que esos presidentes están sometidos a la vigilancia del Comisionado del Distrito, que "se encarga de hacer que el presidente desempeñe debidamente su cargo" 63/. Aun cuando el objeto de las autoridades regionales será coordinar las actividades de los diversos consejos africanos en sus zonas respectivas, el "Gobierno" central no renuncia por ello a sus poderes y no está previsto conceder de ninguna manera la independencia a las zonas sometidas a las autoridades o a los consejos africanos. De hecho, se hace constar expresamente que cada órgano será "asistido" por un comisionado de distrito 64/.

505. Según la información de que dispone el Grupo Especial de Expertos, el régimen sigue presionando a los africanos para que formen consejos, y aproximadamente un 80% de la población africana depende actualmente de un consejo africano. Uno de los principios cardinales de esta política es que los consejos africanos son responsables de las escuelas primarias de las zonas rurales, y ello ha sido un argumento importante en la campaña para establecer los consejos. Respondiendo a la pregunta de un miembro africano del Parlamento, el "Ministro del Interior" dijo que el régimen estaba "estudiando la posibilidad de que, si las autoridades regionales están de acuerdo, ayuden a mantener abiertas las escuelas como medida provisional". Dio a entender que las escuelas se cerrarían si esta medida no fuese aceptada o no resultase posible 65/.

62/ D. K. Davies, Race Relations in Rhodesia 1972-1973, (1975), págs. 275 y 276.

63/ C. G. Passmore, The National Policy of Community Development in Rhodesia, (Universidad de Rhodesia, 1972), pág. 231.

64/ Rhodesia Herald, 2 de noviembre de 1974, 21 de noviembre de 1974; Radio Salisbury, 13 de enero de 1975; Parl. Deb., 4 de octubre de 1974, cols. 277 y 278.

65/ Parl. Deb., 16 de julio de 1975, cols. 834 y 835.

En otra respuesta, el mismo "Ministro" declaró que en unas dos terceras partes de los consejos africanos los miembros eran elegidos por los contribuyentes, y que en la otra tercera parte eran nombrados por los comisionados provinciales. Aun cuando siguió afirmando que en el caso de estos últimos había "una especie de elección", dijo también que los jefes de la zona eran los "responsables de nombrar los miembros del consejo" 66/. Como se recordará, de hecho los jefes son nombrados por la administración blanca (E/CN.4/1135, párr. 364).

506. El régimen ilegal ha establecido en el "Ministerio de Comercio e Industria" una nueva dependencia para poner en ejecución la política de descentralización industrial, siguiendo las recomendaciones del Comité Selecto de Descentralización, el cual propuso que la industria se instalase en los límites de las TTF, a semejanza de las industrias fronterizas de Sudáfrica. El régimen rebelde declaró en un libro blanco que tenía intención de desalentar la expansión industrial en Salisbury y Bulawayo, y de estimularla en cambio en otros polos de crecimiento 67/. Esta política de bantustanización debe considerarse en un contexto en que la pobreza de las zonas rurales africanas es cada vez mayor y la utilización de la tierra cultivable "blanca" es a todas luces insuficiente.

507. En una carta al Rhodesia Herald publicada en octubre de 1974, el Sr. Harry Dunlop, profesor de economía agrícola de la Universidad de Rhodesia, dijo que el 70% de las TTF se encontraban en la región de menores precipitaciones, que en conjunto era impropia para el cultivo. El restante 30% de las tierras, con precipitaciones elevadas, tenían unos suelos ligeros y arenosos que se utilizaban demasiado intensivamente. Sin embargo, de los 6 millones de acres (2,4 millones de hectáreas) de la zona blanca clasificados como potencialmente cultivables, sólo la cuarta parte se encontraban realmente en cultivo. El Sr. Dunlop llegaba a la conclusión de que de no derogarse la Ley de Régimen agrario, el sistema ecológico se vería gravemente afectado 68/.

508. En el informe de 1974 del Grupo (E/CN.1135, párr. 373) se señalaba la disminución de los ingresos en el campo, de 15 libras per capita anuales en 1956 a unas 11 libras en 1968. En junio de 1975 un miembro de la Junta de Recursos Nacionales hizo otra advertencia en los siguientes términos: "la llamada "economía de subsistencia" de las tierras tribales está agotando y destruyendo inexorablemente los recursos mismos de los que ese sistema de vida depende para poder continuar existiendo". Dijo que, de no tomarse alguna medida, se produciría un "inevitable colapso ecológico" 69/. Otro crítico, el Profesor Hans Holleman, que en 1960 fue el autor del informe de la Comisión Mangwende, dijo que en la zona de Mashonaland, que él había estudiado, la presión por encontrar tierras había llegado casi al "punto de combustión". Criticó la política "gubernamental" de las TTF que hacía caso omiso de la interdependencia de los intereses económicos de los sectores blanco y africano de la comunidad 70/.

66/ Parl. Deb., 13 de noviembre de 1974, cols. 748 y 749.

67/ Rhodesia Herald, 30 de diciembre de 1974.

68/ Rhodesia Herald, 10 de octubre de 1974.

69/ Rhodesia Herald, 6 de junio de 1975.

70/ Rhodesia Herald, 25 de febrero de 1975.

509. En un artículo de A. K. H. Weinrich aparecido en el Rhodesian Journal of Economics, la autora analizaba "los factores que influyen en el desarrollo económico de las zonas rurales" de Rhodesia del Sur. La autora demostró que el régimen rebelde estaba dispuesto a apoyar el desarrollo agrícola de los africanos únicamente cuando éste no amenazase a la agricultura blanca. Así por ejemplo, consideró rígida y de poca utilidad la administración blanca de los planes de riegos y de asistencia a la agricultura en las TTF. Observó, por ejemplo, que aunque los agricultores más eficientes parecían ser los poseedores de un Certificado de maestro agricultor, en algunas zonas se habían suspendido los planes de capacitación para obtener ese certificado 71/.

e) Traslados forzados de africanos del campo: traslados como consecuencia de la política agraria

510. Según los informes recibidos por el Grupo Especial de Expertos, el Jefe Mapungwana y sus seguidores iban a ser trasladados a principios de 1975 desde la zona que ocupaban en Chipinga a unos terrenos designados como africanos. El "Ministro del Interior" consideraba que eran "ocupantes sin título" en "tierras europeas" situadas en las ahora llamadas "tierras forestales de Gungunyana", tierras que sus antecesores habían venido ocupando desde que emigraron de Zululandia en el siglo XIX. Este traslado fue denunciado en una declaración (redactada con el asesoramiento de abogados para asegurarse de que no contravenía la Law and Order (Maintenance) Act) hecha por la United Church of Christ in Rhodesia. En esta declaración se censuraba también la forma en que unas tierras propiedad de la iglesia habían sido divididas en zonas blancas y africanas 72/.

511. A mediados de marzo de 1975 se anunció que a finales de agosto del mismo año serían expulsados los africanos que vivían en una zona de 2.400 hectáreas de extensión en la TTF de Chiweshe (solamente se exceptuaba a los habitantes de dos "aldeas protegidas"). El "Gobierno" había decidido construir un nuevo barrio en Chiweshe debido a la amenaza de hacinamiento en el barrio africano de Glendale. Se declaró que "probablemente los africanos expulsados serían absorbidos en los "kraals" vecinos si no estaban viviendo ya en aldeas protegidas". Los informes no indicaban si se daría o no alguna indemnización 73/.

512. En los informes de 1974 y 1975 del Grupo se describía la forma en que los Tangwena seguían siendo hostigados, sin que se les permitiera el acceso a sus tierras ancestrales en la zona de Inyanga (E/CN.4/1135, párr. 383 y E/CN.4/1159, párr. 339). Respondiendo a una pregunta en el Parlamento, el "Ministro del Interior" dijo en el período que se examina que ignoraba dónde se encontraba el Jefe Rekayi Tangwena, pero creía que él y los suyos habían "vuelto a Mozambique, de donde vinieron hace varios decenios". (Por otra parte, y según la información de que dispone el Grupo, los propios tribunales de Rhodesia dictaminaron que los Tangwena venían residiendo en Rhodesia por lo menos desde 1905, y probablemente desde antes). El "Ministro" añadió que el "Ministro de Bienestar Social" tenía todavía a su cargo unos 100 niños Tangwena 74/.

71/ Rhodesian Journal of Economics, 2 (Nº 1) (1975), págs. 7 a 14.

72/ Rhodesia Herald, 16 de octubre de 1975 y 21 de octubre de 1975.

73/ Rhodesia Herald, 13 de marzo de 1975, 22 de marzo de 1975.

74/ Parl. Deb., 14 de febrero de 1975, cols. 1414 y 1415.

f) Condiciones en las "aldeas protegidas"

513. En el informe de 1975 del Grupo Especial de Expertos se describía con gran detalle el establecimiento de las llamadas "aldeas protegidas" (E/CN.4/1159, párrs. 341 a 352). Esta política se ha mantenido durante todo el período que se examina. A finales de octubre de 1974 quedó terminado el traslado de los habitantes de la TTF de Madziwa a "aldeas protegidas", operación de cuyo comienzo se informó el pasado año. Asimismo el Grupo ha recibido información de que el régimen rebelde ha decidido establecer inmediatamente 15 "aldeas protegidas" en las zonas de Mtoko, Mudzi y Mrewa, y de que está proyectado el establecimiento de otras 40 aldeas de este tipo 75/.

514. El Grupo ha recibido nuevos informes sobre las condiciones en estas aldeas. En particular, la actitud del régimen rebelde fue indicada por el "Ministro del Interior" el cual, en diciembre de 1974, dijo que los africanos que habían sido reasentados "no serían mimados". "Al trasladar a aldeas protegidas a los miembros de tribus les estamos salvando la vida. No creo que pueda esperarse de nosotros otra cosa aparte de que les ayudemos a ayudarse a sí mismos". Dijo que los africanos que no se habían construido una vivienda estaban haciendo el vago 76/. Esto venía como continuación a unas declaraciones gubernamentales en las que se desmentía que los "habitantes de aldeas protegidas" estuviesen separados de sus tierras de cultivo tradicionales, pues, según el "Ministerio", las aldeas habían sido instaladas cerca de esas tierras de cultivo 77/. Un portavoz de alto nivel declaró una semana después: "No tenemos intención de dar de comer a los habitantes de las aldeas de Chiweshe y Madziwa", pues eran ellos los que tenían que cultivar sus propios alimentos. Respondiendo a una acusación de que los habitantes de las aldeas no podían llevar consigo ni alimentos ni bebidas cuando salían a trabajar, el portavoz dijo: "Una de las principales razones en que se basó el sistema de las aldeas protegidas era la de aislar a los terroristas [sic] de la población africana local, de forma que no puedan vivir sobre el terreno como solían **hacer** antes con tan buenos resultados, y también impedir que tengan acceso a ninguna información en materia de seguridad. Los habitantes de las aldeas están libres para trabajar en sus tierras mientras dura la luz del día, pero los vigilamos cuidando de que no se lleven más comida ni agua que las necesarias, pues podrían caer en manos de los terroristas [sic] 78/. En junio de 1975, el "Viceministro del Interior" indicó que las aldeas "protegidas" brindaban una magnífica oportunidad para mejorar la agricultura tribal 79/.

515. Un informe recopilado por la Asociación de Residentes de Chiweshe y mimeografiado por la Catholic Commission for Justice and Peace, contiene el siguiente cuadro, en el

75/ Man in the Middle..., op. cit., pág. 7.

76/ Sunday Mail, 1º de diciembre de 1974.

77/ Rhodesia Herald, 21 de noviembre de 1974.

78/ Rhodesia Herald, 28 de noviembre de 1974.

79/ Rhodesia Herald, 26 de junio de 1975.

que se indica la distancia en millas que los habitantes tenían que recorrer a pie para llegar a sus campos:

<u>Kraal</u>	Distancia a los campos (en millas)	<u>Kraal</u>	Distancia a los campos (en millas)
Goredoma	15	Rwanga	16
Mufuka	21	Jaji	10
Mushaninge	5	Mashiri	5
Shambira	7	Masoka	5
Matsvororo	10	Mawodzwa	14
Nyamiri	17	Chiwunda	16
Mubaira	1	Musakanyi	1
Goromokwa	1		

Esto hace que el cultivo de esas tierras resulte muy difícil, especialmente para los ancianos. Además, a los habitantes de las aldeas les resulta totalmente imposible proteger las tierras contra los animales silvestres durante la noche 80/ y también les resulta muy difícil cuidar de su ganado, especialmente cuando la política reconocida del régimen es deshacerse del ganado no guardado que se encuentre en zonas donde se crea que están operando los combatientes por la libertad. En su informe Man in the Middle, dicha Comisión comenta: "De esto a la táctica de "tierra quemada" no hay más que un paso" 81/.

516. Además, según este testimonio, las condiciones higiénicas y sanitarias en las "aldeas protegidas" son espantosas. En diciembre de 1974 se anunció que se había cerrado una clínica de la Universidad de Rhodesia que tenía su centro en Chiweshe y que sólo llevaba construida desde 1972. Las autoridades de la Universidad mantenían estrecho contacto con las autoridades civiles y militares, cuyos "consejos influyeron mucho en la decisión de suspender provisionalmente el plan" 82/. La gravedad de este acto fue subrayada en algunas observaciones hechas en febrero de 1975 por el Director del Instituto Howard del Ejército de Salvación, quien, tras expresar su inquietud por la desnutrición y el hambre que padecía esa zona, indicó que "Chiweshe ha sido siempre una zona de fiebres tifoideas. El médico de nuestra misión está preocupado por la posibilidad de que se produzca una epidemia de fiebre tifoidea al final de la estación lluviosa" 83/. Análoga preocupación fue expresada por la Asociación de Residentes de Chiweshe en su informe mencionado en el párrafo 515, en el cual se describen las letrinas diciendo que son sencillamente un agujero en el suelo recubierto por un tubo de gran diámetro. "De esas letrinas salen moscones verdes que van a posarse en la comida, otros incluso en los recipientes de agua, en los tarros de leche, etc.". Hay muchos mosquitos porque la

80/ Catholic Commission for Justice and Peace, documento mimeografiado, 24 de marzo de 1975.

81/ Man in the Middle..., op. cit., pág. 9.

82/ Rhodesia Herald, 6 de diciembre de 1974.

83/ Rhodesia Herald, 28 de febrero de 1975.

mayor parte de las aldeas han sido instaladas en terrenos bajos cerca del agua; y en algunos sitios ha habido brotes de fiebre tifoidea, diarrea y paludismo. El problema se ha visto agravado por la dificultad de encontrar medios de transporte a un centro médico, y los conductores se resisten a correr el riesgo de ir a esos sitios por la tarde, ya que el toque de queda comienza a las seis y se dispara sin previo aviso contra los que se encuentren fuera de una aldea después del toque de queda (véanse los párrafos 473, 477, 479, 481 y 482 supra) 84/. En relación con los desfoliantes químicos utilizados por las fuerzas de seguridad para destruir todos los cultivos en el Valle del Zambeze, en el informe Man in the Middle se recogían indicios de que esos productos habían provocado una enfermedad que causaba violentos temblores en los niños. El régimen rebelde lo desmiente 85/. Según el Rhodesia Herald, el régimen rebelde tampoco "ha querido hacer comentarios sobre la acusación /formulada por la Asociación de Residentes de Chiweshe/ de que las enfermedades causan cada día una nueva víctima en algunas aldeas protegidas de la TTF de Chiweshe 86/.

517. Sin embargo, las mayores causas de preocupación han sido probablemente las repercusiones sociales de la política de "aldeas protegidas". En Man in the Middle se hace un excelente estudio de la dislocación social que causa esa operación. Dicho informe trata de la importancia psicológica y espiritual de la aldea de origen, y señala que no se deben efectuar traslados sin una minuciosa preparación. Se analizan seguidamente los problemas que surgen cuando una comunidad acostumbrada a disponer de abundante espacio se ve de repente confinada en una superficie reducida. Las relaciones sociales entre viejos y jóvenes y entre los dos sexos quedan súbitamente perturbadas. En Africa (lo mismo que en otros sitios) se tropieza con grandes dificultades para adaptar a la vida urbana a personas procedentes de un ambiente rural, pero cuando esos casos se presentan uno por uno, su solución es relativamente fácil. En cambio, este traslado ha sido sumamente brusco. Las prácticas religiosas han sufrido también graves trastornos 87/.

518. Según el informe de la Asociación de Residentes de Chiweshe, este trastorno social ha ejercido también efectos destructivos en la moral sexual 88/.

4. Trato dado a los presos políticos y a los combatientes por la libertad capturados

a) Introducción

519. En el informe del Grupo Especial de Expertos correspondiente a 1973 (E/CN.4/1111, párrs. 242 a 252) se hace un extenso examen de los antecedentes históricos y las disposiciones legislativas sobre la seguridad y encarcelamiento sin juicio, en particular la Law and Order (Maintenance) Act y sus enmiendas.

84/ Catholic Commission for Justice and Peace, documento mimeografiado, 24 de marzo de 1975.

85/ Man in the Middle..., op. cit., pág. 9.

86/ Rhodesia Herald, 28 de febrero de 1975.

87/ Man in the Middle..., op. cit., págs. 6 a 12.

88/ Catholic Commission for Justice and Peace, documento mimeografiado, 24 de marzo de 1975.

520. Durante el período que se examina se han promulgado o se proyecta promulgar otras disposiciones legislativas sobre trato a los presos políticos, a los combatientes por la libertad capturados y a las personas que los ayudan, a saber: la Law and Order (Maintenance) Amendment Act, y el Indemnity and Compensation Bill (proyecto de ley sobre indemnización y compensación).

521. En la Law and Order (Maintenance) Amendment Act, promulgada en diciembre de 1974, se introduce otro motivo para la sentencia obligatoria de muerte (a la que se hace referencia en el párrafo 458 *supra*), y se proponen nuevas ampliaciones de poderes. En una enmienda anterior a la ley principal se enumeran ocho tipos de declaraciones que se consideran como subversivas, pero que pueden defenderse demostrando que la declaración se hizo de buena fe y con intención de corregir supuestos errores por "medios legales". Este tipo de defensa no se acepta actualmente. El "Ministro de Orden Público", al proponer la nueva enmienda, manifestó lo siguiente: "Debido a esta disposición... es difícil proceder judicialmente contra las personas que formulan declaraciones subversivas, salvo en los casos más manifiestos". La nueva ley también considera como delito negar deliberadamente que se conoce a los "terroristas" o proporcionar informaciones falsas acerca de éstos. Por último, la ley prohíbe a toda persona declarada culpable de declaraciones subversivas concurrir a reuniones públicas durante uno a tres años, prohibiendo asimismo que todo lo que diga durante este período se cite en forma impresa u oralmente ^{89/}. El Grupo Especial de Expertos ha observado en particular que, cuando el proyecto de ley se presentó a debate en el Senado, su Comisión Jurídica declaró que los dos artículos relativos, respectivamente, a la citada prohibición de concurrir a reuniones públicas y a la prohibición de citar las palabras de las personas inculpadas eran incompatibles con la Declaración de Derechos que forman parte de la "Constitución" ilegal de 1969. Sin embargo, a pesar de ello, el Senado se pronunció, sin oposición alguna, partidario del proyecto de ley en su totalidad, "en interés nacional" ^{90/}.

522. A fines de agosto de 1975, el régimen rebelde presentó el Indemnity and Compensation Bill. El aspecto fundamental de este proyecto de ley son las facultades para sobreseer las causas civiles o penales entabladas contra el Estado o sus funcionarios o empleados por actos cometidos de buena fe con propósito de sofocar el terrorismo ^[sic] o en relación con ese objetivo. El proyecto de ley también prevé el sobreseimiento de los procesos ya incoados ante los tribunales, y que toda persona que sufra pérdidas imputables a cualesquiera actos previstos en el proyecto de ley pueden solicitar la indemnización correspondiente. De los debates celebrados en el Parlamento se desprende claramente que el régimen rebelde se encontraba en una situación particularmente embarazosa a causa de la labor de Catholic Commission for Justice and Peace in Rhodesia, así como debido a los juicios que había entablado esta comisión ante los tribunales. El "Ministro" al proponer el proyecto de ley declaró:

"No solamente tenemos que enfrentarnos a la amenaza directa del terrorismo ^[sic], sino también a aquellas personas -algunas de ellas sinceras y otras que no lo son tanto- que no pierden oportunidad para poner en situación difícil al Gobierno ^[sic] al prestar una asistencia e incluso persuadir a que otros entablen

^{89/} Parl. Deb., *op. cit.*, 14 de noviembre de 1974, cols. 913 a 918.

^{90/} Rhodesia Herald, 5, 6, 7, 11 y 12 de diciembre de 1974.

juicios ante los tribunales contra el Gobierno /sic/. En suma, existe una quinta columna activa que aparenta trabajar en pro de la justicia y de la paz, pero que, en realidad, persigue objetivos mucho más siniestros 91/."

Es de prever que, cuando se apruebe este proyecto de ley, las nuevas disposiciones permitan a las autoridades respetar los derechos humanos aún menos que ahora.

b) Trato dado a los presos políticos

i) Condiciones de los detenidos

523. Conviene señalar la dificultad con que se tropieza para dar cuenta de las detenciones en la prensa de Rhodesia del Sur, a causa de la legislación que prohíbe mencionar los nombres de las personas detenidas. Así, los nombres de las personas muy conocidas se citan en la prensa de otros países, pero no en la de Rhodesia del Sur. Sin embargo, los nombres de los numerosos detenidos que no son conocidos fuera de este país no se citan en ninguna parte.

524. En una declaración publicada en febrero de 1975, el ANC incidaba que 60 presos de la cárcel central de Salisbury, en la galería de máxima seguridad habían declarado una huelga de hambre, la cual, según dicha declaración, se debía a la introducción de medidas más severas de seguridad a consecuencia de la evasión de Kenneth McIntosh, encarcelado por espionaje en relación con las actividades para burlar las sanciones económicas impuestas contra Rhodesia; a un supuesto ataque perpetrado por un guardia blanco contra un preso africano; y a la reducción a la mitad del tiempo del paseo en la cárcel 92/.

ii) Prisión preventiva

525. De conformidad con el acuerdo de Lusaka, de 11 de diciembre de 1974, el régimen rebelde convino en liberar a todos los detenidos, confinados y presos políticos, y en levantar las restricciones impuestas a ciertas personas (véase el párr. 453 supra). No obstante, según la información disponible para el Grupo, el régimen rebelde nunca liberó a ningún preso político, argumentando a este respecto que los presos condenados, por ejemplo en virtud de la ley de mantenimiento del orden público o de otras medidas legislativas en materia de seguridad, son culpables de actos delictivos y, por tanto, no están protegidos por el citado acuerdo. Por lo que se refiere a los presos preventivos, entre 60 y 90 de ellos fueron liberados antes de que el "Ministro de Justicia y Orden Público" pusiera término a toda liberación de preventivos, es decir, exactamente un mes antes de concertarse el acuerdo de Lusaka 93/. El Guardian dio cuenta de la forma inhumana en que se procedió al poner en libertad a los presos preventivos 94/.

91/ Parl. Deb., 28 de agosto de 1975, cols. 433 a 439.

92/ Times, 19 de febrero de 1975.

93/ Daily Telegraph, 10 de enero de 1975.

94/ Guardian, 2 de enero de 1975.

526. Amnesty International ha proporcionado información con documentos relativos a ocho presos por "objección de conciencia", seis de los cuales eran preventivos y dos habían sido puestos en libertad oficialmente. En una carta de Amnesty International, el Sr. Malcom Smart, del Departamento de Investigación, escribe lo siguiente:

"Varios presos políticos preventivos fueron confinados en alguna de las "aldeas protegidas", después de haber sido liberados a comienzos de 1975. La mayoría de ellos fueron enviados a Sowe New Village, en la zona de Centenary, pero otros fueron asimismo dirigidos a Mzarabani, Hoya y Mzengedzi. Hemos leído algunas cartas de estas personas según las cuales éstas se encuentran efectivamente en confinamiento en las aldeas en que viven, por lo que su situación ha empeorado notablemente en comparación con las condiciones de su detención anterior. Estas personas no pueden abandonar la aldea para buscar trabajo en Salisbury, etc., ni tampoco tienen muchas posibilidades en cuanto a la agricultura de subsistencia. Al referirse a las aldeas, las llaman "jaulas" 95/."

527. En la documentación que presenta Amnesty International también se indica que después de concertado el acuerdo de Lusaka, el 11 de diciembre de 1974,

"más de 250 presos políticos preventivos no fueron liberados y continúan encarcelados hasta la fecha... Amnesty International calcula que hay aún actualmente más de 300 presos políticos preventivos, algunos de los cuales no han gozado de libertad desde... /la declaración unilateral de independencia/. En los diez años transcurridos desde esta Declaración, Amnesty International estima que, quizá hayan pasado por la cárcel, sin proceso ni juicio, más de 1.000 durante diversos períodos prolongados."

528. El Guardian dio cuenta de la declaración de Sor Mary Aquina, monja dominica y profesora de la Universidad de Rhodesia, según la cual el régimen rebelde había preparado 2.000 mandatos de detención, y que pensaba ponerlos en ejecución en un futuro relativamente próximo. Esta información procedía de una "fuente fidedigna de Rhodesia" 96/.

529. En julio de 1975 el "Ministro de Orden Público" reiteró ante el Parlamento su intención de no liberar a ningún preso preventivo más 97/.

iii) Nueva detención del Reverendo Ndabaningi Sithole

530. El 4 de marzo de 1975 se anunció que el régimen rebelde había detenido al Reverendo Ndabaningi Sithole alegando que planeaba el asesinato de ciertos adversarios de sus candidatos a la dirección del African National Council. Se indicaba que su detención podía ser examinada por un tribunal especial encabezado por el

95/ Carta de 3 de octubre de 1975, del Departamento de Investigación de Amnesty International.

96/ Guardian, 6 de junio de 1975.

97/ Parl. Deb., op. cit., 9 de julio de 1975, cols. 713 y 714.

"Presidente interino del Tribunal Supremo", "Magistrado" Macdonald^{98/}. Posteriormente pudo comprobarse que el mandato de detención se había formulado incorrectamente, que el formulario utilizado había caducado y que además en él se hacía referencia a artículos equivocados de la Emergency Powers (Maintenance of Law and Order) Regulations 1974 (reglamentación de 1974 de los poderes excepcionales de la ley de mantenimiento del orden público) ^{99/}. Asimismo, se informó dos días más tarde de que el "Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa" se había trasladado a Sudáfrica en visita a la que no dio publicidad para informar al Primer Ministro de la República de Sudáfrica de que esa detención era inminente ^{100/}. Un periodista del Times hizo el siguiente comentario a este respecto: "Desde hace mucho tiempo es un secreto a voces en Salisbury que el Gobierno /sic/ considera que el Sr. Sithole es un obstáculo para un acuerdo" ^{101/}. El 7 de marzo el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica manifestó en la Asamblea de este país que confiaba en que podría verse el caso en "un proceso penal" en lugar de un simple examen cuasi judicial, como se había anunciado ^{102/} y, el 10 de marzo, el régimen rebelde indicó que al cabo de algunos días se publicaría la correspondiente reglamentación detallada y que, a pesar de las declaraciones anteriores en el sentido de que todas las actuaciones se celebrarían a puerta cerrada, el "Presidente interino del Tribunal Supremo" intentaría que el mayor número posible de las actuaciones fueran públicas, "teniendo presente la necesidad de proteger la seguridad del Estado y la identidad de ciertos testigos" ^{103/}.

531. Cuando se publicó oficialmente la reglamentación, el 13 de marzo de 1975, del procedimiento del "tribunal" especial, pudo observarse que en este caso la audiencia difería de un juicio ordinario en una serie de aspectos muy importantes. Por ejemplo, no sería obligatorio observar las reglas en materia de pruebas, tal como se aplican en el Tribunal Supremo, en los casos civiles o penales. Así, sería posible ocultar las pruebas (aducidas personalmente o en declaraciones juradas) no solamente al público, sino también a la persona detenida o a sus representantes letrados; la decisión de determinar si la audiencia debía celebrarse en público o en privado incumbiría pura y simplemente al juez que presidiera esa audiencia; la decisión del "tribunal" no tendría un carácter definitivo, ya que podría ser anulada por el "Presidente de Rhodesia"; y, por último, aunque el "Ministro de Orden Público" habría de comunicar a la persona detenida los motivos de la orden de detención, estaría facultado para presentar nuevas acusaciones en cualquier momento antes de que se pronunciara la sentencia ^{104/}. En una carta de fecha 14 de marzo de 1975, el régimen rebelde aumentó el número de cargos formulados contra el Sr. Sithole, incluida la acusación de que había continuado asumiendo efectivamente la jefatura

^{98/} Rhodesia Herald, 5 de marzo de 1975.

^{99/} Sunday Mail, 9 de marzo de 1975; Rhodesia Herald, 10 de abril de 1975.

^{100/} Rhodesia Herald, 7 de marzo de 1975.

^{101/} Times, 7 de marzo de 1975.

^{102/} Star, 8 de marzo de 1975.

^{103/} Rhodesia Herald, 11 de marzo de 1975

^{104/} Rhodesia Herald, 14 de marzo de 1975.

de la ZANU y ocupando el puesto de Comandante en Jefe del Zimbabwe African National Liberation Army (Ejército Africano de Liberación Nacional de Zimbabwe (ZANLA)), y que no había repudiado los objetivos de este movimiento. Asimismo, se le acusó de violación del "acuerdo de cesación del fuego" 105/. El 16 de marzo, el régimen rebelde acabó por ceder a una opinión pública desfavorable y posiblemente también a la presión ejercida por Sudáfrica, y convino en que acataría la decisión que adoptara el "tribunal especial" 106/.

532. La audiencia se inició el 24 de marzo de 1975, y todas sus actuaciones fueron públicas. No obstante, el segundo día de la audiencia el "Magistrado" Macdonald anunció que no mantendría la primera acusación (la de que el Sr. Sithole proyectaba asesinar a algunos de sus colegas), sino el segundo cargo; tras lo cual, el Reverendo Ndabaningi Sithole y su abogado abandonaron el tribunal. El resto de la audiencia se dedicó a unas declaraciones en las cuales (desde el punto de vista del régimen) se detallaba la extensión del conflicto armado en el noroeste del país con citas del programa político de la ZANU obtenidas tanto del Mwenje Nº 2 como del Zimbabwe News. En estas citas se ponía particularmente de relieve la base socialista del programa de la ZANU 107/. En su decisión, el Sr. Macdonald confirmó la prisión preventiva del Reverendo Ndabaningi Sithole. Indicó claramente que la acusación de asesinato había dependido de la declaración de un testigo solamente (véase Record, Nº 24, April, 1974, Ministry of Information, Immigration and Tourism, Rhodesia).

533. El Lawyer's Committee for Civil Rights Under Law (Comité de abogados para la defensa de los derechos civiles de conformidad con la ley) (EE.UU.) y Amnesty International enviaron como observador en la audiencia al Sr. E. Clinton Bamberger, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de América. En su informe, el Sr. Bamberger manifestaba lo siguiente:

"El intento del Gobierno [sic] de presentar una fachada judicial debe considerarse como tal, esto es, como una fachada: una degradación vergonzosa de la administración de justicia y de la función judicial... Tuve la impresión de que la "audiencia" se celebraba con la finalidad concreta de presentar a la ZANU como un movimiento guerrillero que atacaba al pueblo africano, en vez de ser un movimiento representativo de las aspiraciones políticas africanas, como una organización indigna de participar en las negociaciones para llegar a un acuerdo político 108/."

c) Detenciones de personas políticamente activas

534. Las informaciones a disposición del Grupo Especial de Expertos indican que casi todos los africanos detenidos y acusados de reclutar combatientes por la libertad, de prestar ayuda a éstos, etc., son miembros del African National Council o de otro partido político, o de ambos. No obstante, en esta sección se tratará únicamente

105/ Sunday Mail, 16 de marzo de 1975.

106/ Rhodesia Herald, 17 de marzo de 1975.

107/ Rhodesia Herald, 25, 26 y 27 de marzo de 1975.

108/ Caso Sithole, resumen de la declaración de E. Clinton Bamberger a la prensa, conferencia de prensa, 2 de abril de 1975.

de personas que se mencionan concretamente en los comunicados de prensa como miembros del ANC. Tampoco está claro si las personas detenidas quedan en algunos casos en prisión preventiva sin proceso o si han sido juzgadas por separado o simplemente si el juicio no se ha comunicado.

535. En octubre de 1974, la policía dio cuenta de que "varias" personas habían sido detenidas en la zona de Gwanda para ser juzgadas posteriormente. Según las informaciones del ANC se había detenido a 20 personas, muchas de las cuales eran directivos de la Organización 109/.

d) Deportaciones y prohibiciones de entrada en el país

536. En octubre de 1974 la Sra. Barbara Harvey, de raza blanca y de 30 años de edad, fue deportada porque se la consideraba "residente indeseable". Como ocurre con casi todas esas órdenes, no se daba ninguna explicación. La interesada atribuía su destierro al hecho de que había sido miembro del Centre Party (partido político levemente reformista e integrado principalmente por blancos, que se opone al Rhodesian Front), y por tener amigos africanos 110/.

537. En febrero de 1975 se negó la entrada en el país a dos periodistas noruegos: Gunnar Selgaard, del Aftenpost, y Jan Erik Smilden, del Dagbladet (dos diarios de Oslo) quienes fueron detenidos en el aeropuerto de Salisbury bajo custodia armada antes de ser expulsados del país 111/.

538. Ese mismo mes, el Dr. Morgan Johnson, un misionero que había prestado servicios a la Iglesia Metodista Unificada en Rhodesia durante 23 años, abandonó el país al ser declarado inmigrante prohibido. Se le había acusado, de conformidad con la ley de mantenimiento del orden público, del delito de haber dibujado en 1974 una caricatura para la publicación mensual Umbowo de la citada Iglesia, aunque se había retirado posteriormente esta acusación 112/.

e) Restricciones para viajar impuestas a los africanos de Rhodesia del Sur

539. El derecho a salir del país con un pasaporte se ha denegado a varios africanos. Además, los que han abandonado el país "ilegalmente" sin documentos de viaje corren el peligro de ser encarcelados si regresan.

540. En enero de 1975 no se permitió a los dirigentes del ANC que se entrevistaran con el Sr. James Callaghan. En efecto, el régimen rebelde negó a todos los miembros de la delegación los documentos de viaje necesarios 113/.

109/ Rhodesia Herald, 16 de octubre de 1974.

110/ Rhodesia Herald, 15 de octubre de 1974.

111/ Rhodesia Herald, 15 de febrero de 1975.

112/ Sunday Mail, 16 de febrero de 1975.

113/ Guardian, 3 de enero de 1975.

541. Cuando el ANC trató de enviar una delegación de diez personas a los actos de celebración de la independencia de Mozambique, a fines de junio, el régimen rebelde se negó a expedir pasaportes a las personas que carecían de ellos. Las autoridades dijeron entonces que estaban examinando las solicitudes, pero que no estaban dispuestos a acelerar su tramitación. Sólo tres miembros del ANC pudieron concurrir a dicha celebración 114/. Posteriormente, en agosto, se anunció que se habían negado los pasaportes al Dr. Edson Sithole, al Sr. Enos Nhala y al Sr. Morton Nalianga (todos ellos miembros del comité central del ANC) 115/.

542. Varios ex presos han tropezado con dificultades al tratar de obtener pasaporte. A ese respecto se ha recibido de Amnesty International la siguiente información: "A Joel Ndlovu y Norman Mabena, que salieron de la cárcel preventiva y de la cárcel de hombres de Salisbury el 24 de diciembre de 1974, se les han negado los pasaportes. El Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el África Meridional les había ofrecido becas de estudios, y hay plazas para ellos en el Politécnico de Middlesex (Reino Unido)". Las citadas personas no pueden actualmente aprovechar esas becas 116/. Es sabido que el Sr. Mabena es miembro del ANC 117/.

543. El Reverendo Canaan Banana salió de Rhodesia del Sur en mayo de 1973 con objeto de ampliar sus estudios, para lo cual cruzó la frontera con Botswana sin pasaporte, ya que le había sido retirado. Obtuvo un pasaporte británico que utilizó para trasladarse a Estados Unidos con objeto de realizar estudios universitarios. Al regresar a Rhodesia del Sur, en mayo de 1975, fue detenido inmediatamente, impidiéndosele incluso que saludara a su familia. En junio de ese año fue condenado a la pena de 3 meses de trabajos forzados por haber abandonado el país en 1973 "ilegalmente". Según el Daily Telegraph: "Se tiene entendido que el Reverendo Canaan Banana seguirá preso después de cumplir su sentencia" 118/. Según la información proporcionada por Amnesty International: "Un caso similar es el de Robert Bhebe, que fue detenido a comienzos de 1970 a su regreso de Botswana. Dicha persona había salido anteriormente del país /sic/ ilegalmente cuando se encontraba sometido a una orden de restricción" 119/.

f) Trato dado a los combatientes por la libertad y a quienes los ayudan

544. En los párrafos 462 a 472 supra ya se han señalado los casos de algunos combatientes por la libertad y personas que los ayudan que han sido condenadas a la pena capital. Se han registrado asimismo una serie de casos probados de graves e injustificados ataques por parte de las fuerzas de seguridad. Estos casos se examinarán más adelante en los párrafos 563 a 574. Como se desprende claramente de los informes

114/ Radio Lusaka, 25 de junio de 1975.

115/ Rhodesia Herald, 3 y 4 de agosto de 1975.

116/ Carta de la Secretaría Internacional del Departamento de Investigación de Amnesty International, de 2 de octubre de 1975.

117/ Rhodesia Herald, 29 de agosto de 1975.

118/ Sunday Mail, 25 de mayo de 1975; Daily Telegraph, 21 de junio de 1975, y Rhodesia Herald, 21 de junio de 1975.

119/ Carta de Amnesty International (véase nota 136).

anteriores del Grupo Especial de Expertos (en particular el documento E/CN.4/1111, párrs. 242 a 252), el régimen rebelde persiste en tratar a los combatientes por la libertad como delincuentes de derecho común, y no les reconoce ninguno de los derechos del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. Durante el período que se examina, no se ha observado ningún cambio de actitud a este respecto.

545. Doce africanos fueron condenados a penas de tres y cuatro años de prisión y a trabajos forzados por no haber comunicado la presencia de combatientes por la libertad. Una de las personas condenadas era un jefe de aldea. Los "delitos" fueron cometidos en el nordeste del país entre febrero de 1973 y septiembre de 1974 120/.

546. Seis jefes de aldea y otros 26 africanos fueron sentenciados en Mtoko a penas de cárcel que oscilaban entre 5 y 10 años. Todos ellos fueron declarados culpables de no haber comunicado la presencia de combatientes por la libertad, y tres de ellos también fueron declarados culpables de haberles prestado ayuda. Se dieron los nombres de todos los condenados 121/.

547. Dos combatientes por la libertad, Kanan Matongo y Sani Takavarasha, fueron condenados a 30 años de cárcel. Se les acusaba de haber participado en el ataque perpetrado contra otros africanos a quienes se acusaba de ser "simpatizantes del Gobierno" 122/.

548. Dieciséis africanos fueron condenados a penas de cárcel que oscilaban entre cinco y siete años por no haber denunciado la presencia de combatientes por la libertad y por haberlos ayudado 123/.

549. Un combatiente por la libertad fue condenado a 18 años de cárcel por posesión de armas 124/.

550. Dos combatientes por la libertad fueron sentenciados a cadena perpetua después de haber sido declarados culpables de posesión de armas de guerra y de haber cometido "actos de terrorismo" 125/.

551. Un ex preso, de quien se decía que era miembro del ANC, fue detenido en 1975 por el asesinato del Jefe Makope de Chiweshe. Se dijo que el Jefe Makope era un decidido partidario del régimen rebelde 126/.

552. Norbert Mushuma fue condenado a nueve años de cárcel por haber tratado de salir del país para recibir instrucción militar como combatiente por la libertad. Fue detenido en el momento en que intentaba cruzar la frontera con Botswana 127/.

120/ Rhodesia Herald, 17 de diciembre de 1974.

121/ Rhodesia Herald, 8 de enero de 1975.

122/ Rhodesia Herald, 1º de febrero de 1975.

123/ Rhodesia Herald, 28 de febrero de 1975.

124/ Rhodesia Herald, 13 de marzo de 1975.

125/ Rhodesia Herald, 21 de marzo de 1975.

126/ Radio Salisbury, 16 de abril de 1975.

127/ Rhodesia Herald, 31 de julio de 1975.

553. Brazio Chimungondoro fue condenado a cadena perpetua por haber prestado ayuda a los combatientes por la libertad, por no haberlos denunciado y por el "asesinato" de cuatro policías sudafricanos 128/.

5. Disparidad entre los salarios de los trabajadores negros y de los blancos, y bajo nivel de los salarios de los trabajadores negros

a) Introducción

554. La disparidad de ingresos entre blancos y negros ha sido tratada en los informes previos del Grupo Especial de Expertos, en particular los informes de 1974 (E/CN.4/1135, párrs. 417 a 421) y de 1975 (E/5622, párrs. 137 a 160) al Consejo Económico y Social.

555. En 1975 se introdujeron dos disposiciones menores al respecto. En julio de 1975 se introdujo la Services Levy Amendment Bill, destinada a eliminar el subsidio que la industria de Rhodesia paga para subvencionar la vivienda de los africanos en los barrios situados en zonas blancas. Como consecuencia, los alquileres subirán, aunque el "Ministro de Trabajo y Bienestar Social" ha dicho que los salarios subirán por lo menos en una proporción correspondiente 129/. En agosto de 1975 se presentó la Agricultural Industry (Employees Pension Scheme) Bill. En esa disposición se propone un fondo de pensiones financiado mediante contribuciones, por partes iguales, del empleado y el empleador. La aplicación del proyecto de ley depende de las recomendaciones de la Rhodesian National Farmers' Union, que designará el consejo de síndicos del Fondo. No se reserva ningún lugar para los representantes de los trabajadores africanos 130/.

556. En 1974, el Gobierno de Sudáfrica derogó las disposiciones penales de la Masters and Servants Act, lo que determinó que hubiera ciertas discusiones respecto de la versión de esas leyes en Rhodesia. Según un portavoz del "Gobierno", los casos de procesamiento en virtud de la Masters and Servants Act fueron "pocos e infrecuentes". Sin embargo, en una audiencia celebrada en junio de 1975, el "Magistrado" Goldin dijo que la ley pertenecía a la "categoría de las disposiciones rigurosas, opresivas o arcaicas". Al parecer, el 10% de los juicios que se celebraron en 1974 en Karoi (donde se inició el caso al que se refería el Sr. Goldin) correspondían a esta ley; el 90% de los declarados culpables no tenían antecedentes penales y fueron enviados a la cárcel porque no podían pagar las multas. En el caso que se examinaba, 15 africanos fueron declarados culpables porque "habían abandonado ilegalmente el servicio de sus amos con intención de no volver". La sentencia condenatoria fue anulada. De todos modos, resultó que las multas impuestas inicialmente eran superiores a lo que permitía la ley. El "magistrado" dijo que en esos casos la prueba demostraba con frecuencia que estaba plenamente justificado que el "sirviente" abandonara el puesto, y que en este caso particular el juez, en su carta al "magistrado", había informado de que se había retirado una acusación porque el demandante había disparado, cerca de sus empleados, siete tiros con un arma automática, mientras estaba en estado de embriaguez 131/.

128/ Radio Salisbury, 6 de agosto de 1975.

129/ Parl. Deb., 18 de julio de 1975, cols. 1028 a 1036.

130/ Parl. Deb., 13 de agosto de 1975, cols. 536 a 538 y 541 a 544.

131/ Rhodesia Herald, 9 de noviembre de 1974, 25 de noviembre de 1974 y 27 de junio de 1975.

b) Relaciones industriales y políticas de empleo y remuneración de los empleadores

557. El Grupo Especial de Expertos ha recibido información sobre el modo de controlar en Rhodesia del Sur el empleo de los africanos impidiendo el desarrollo de los sindicatos, en particular de los negros, y manteniendo la mayoría de los trabajos especializados y semiespecializados en manos de los trabajadores blancos. En un artículo publicado en el South African Labour Bulletin, el Sr. Peter Harris ha descrito cómo en Rhodesia del Sur se aplican criterios raciales en la reserva de empleos, aunque jurídicamente la disposición al respecto no tiene carácter racial. Los sindicatos controlados por los blancos conciertan con los empleadores acuerdos jurídicamente obligatorios a fin de que ciertos trabajos sólo puedan encomendarse a trabajadores especializados. No obstante, formar a los trabajadores es costoso, y el grupo de blancos que se puede capacitar no es suficiente para ocupar todos los empleos. Así, el régimen fomenta vigorosamente la inmigración, en especial de artesanos, para ocupar esos puestos, y los empleadores sólo necesitan formar a algunos aprendices, que son todos blancos. Hay algunos trabajos (por ejemplo, en la industria de la construcción), que se están africanizando. En esos casos, los salarios se bajan en comparación con los de los oficios ocupados totalmente por los blancos y, de todos modos, la africanización sólo se produce cuando existe una necesidad apremiante de trabajadores especializados negros 132/.

558. Las restricciones jurídicas a los sindicatos "reconocidos" se describen en los informes anteriores (en particular el documento E/5622, párrs. 137 y 138). El Sr. Duncan Clarke, en el South African Labour Bulletin, demostró la dificultad extrema con que se tropieza para organizar el mayor grupo de trabajadores africanos. El Agricultural and Plantation Workers' Union, tuvo que luchar para poder existir, debido a que los empleadores se negaban a reconocerlo. Aunque la Masters and Servants Act (que controla la mano de obra agrícola) no prohíbe las negociaciones, la Rhodesian National Farmers' Union ha hecho saber claramente por escrito que no se debe prestar asistencia al sindicalismo agrícola. La Anglo-American Corporation, Arbor Acres (Pty) Ltd. y otras importantes firmas comerciales, apoyan esta posición. El régimen se ha negado resueltamente a reconocer de ningún modo al Agricultural and Plantation Workers' Union, los organizadores tropiezan con dificultades jurídicas para establecer contacto con sus miembros en las explotaciones agrícolas, (que se encuentran casi todas en zonas blancas), los trabajadores mismos sólo pueden pagar cuotas muy pequeñas, los miembros que se han afiliado han sido perseguidos, y los directivos del sindicato han sido atacados (el Secretario General, Sr. Pollant Jabavu Mpofu, está preso desde julio de 1973, y según información transmitida por Amnesty International se encuentra en Gwelo). El sindicato ha tenido algún éxito en el intento de obtener beneficios para los trabajadores después que se produjeron huelgas espontáneas 133/.

559. Al Grupo le ha resultado muy difícil obtener información comparable sobre la remuneración de trabajadores negros y blancos que hacen el mismo trabajo de la misma categoría. Según el Sr. Peter Harris: "El trabajo manual no especializado lo realizan casi totalmente los negros", y cuando se ha ascendido a trabajadores africanos especializados, se ha hecho de tal forma que queden protegidos los empleos de los blancos

132/ Peter Harris, South African Labour Bulletin, 1 (Nº 9) (marzo de 1975), págs. 46 a 52.

133/ D. G. Clarke, en South African Labour Bulletin, 1 (Nº 9) (marzo de 1975), págs. 53 a 65.

-por ejemplo, dando a los trabajadores negros una categoría diferente- y que en ningún caso un blanco trabaje bajo la supervisión de un negro. Así, los negros han ascendido a puestos de responsabilidad en los servicios africanos de educación y salud pública, dande no compiten con los blancos.

560. En un intento de hacer frente al problema del desempleo de los negros, el régimen rebelde llegó a un acuerdo con la Mine Labour Organisation (Wenela) Ltd. para permitirle que contrate trabajadores en Rhodesia, pero el 60% del salario "elevado" que los trabajadores reciben en Sudáfrica debe ser diferido, es decir, debe pagarse en una cuenta en Rhodesia del Sur. Según el "Ministro de Trabajo y Bienestar Social": "Un efecto secundario del plan de pagos diferidos será, naturalmente, la inyección en nuestra economía de una suma considerable de nuevas divisas". Entre enero y abril de 1975, se enviaron a Sudáfrica 1.667 trabajadores 134/. El Director Gerente de la South African Chamber of Mines Labour Organisation dijo, en septiembre de 1975, que estaban reclutando a unos 150 negros rhodesianos por semana y que esperaban que para fines de 1976 habría unos 20.000 en Sudáfrica 135/.

561. El Grupo señala la insuficiencia de la información que publica la prensa de Rhodesia -en particular desde la prohibición de Moto- sobre la remuneración y las condiciones de empleo de los negros. La información que se publica revela cómo controlan los empleadores el mercado de la mano de obra. En octubre de 1974, por ejemplo, en la mina de carbón Wankie se produjo una huelga "ilegal" cuando los negros rechazaron una oferta de un aumento de 10 céntimos por turno además del mínimo básico de 65 céntimos por turno para un trabajador subterráneo. Hubo cierre total durante dos días y fueron detenidos varios negros, 18 de los cuales fueron declarados luego culpables de participar en choques con la policía y enviados a prisión por doce meses. El paro finalizó aceptando los trabajadores los 10 céntimos después de la intervención del dirigente de la Associated Mineworkers of Rhodesia, un sindicato predominantemente blanco. Algunas semanas después, el Sr. Ken Mew, comentando esos sucesos, atacó al "Gobierno" por la falta de una política realista de ingresos. Refiriéndose a la huelga de Wankie, el Sr. Mew afirmó: "Innecesario es decir que, según la versión dada, la huelga era, al menos en parte, obra de los agitadores; como si un hombre necesitara incitación para protestar contra 65 céntimos por 8 horas de trabajo en una mina de carbón" 136/. Si la empresa logró obtener una especie de aceptación de su oferta fue porque la mayoría de los trabajadores, los negros, no estaban representados por un sindicato o por hombres de su confianza. Si lo hubieran estado, y si hubiera sido posible una huelga "legal", sin duda habrían logrado una solución más favorable.

c) Pobreza y remuneración baja de los negros

562. Del informe sobre el estudio sobre el nivel oficial de pobreza en las ciudades (NP), que publicó la Universidad de Rhodesia 137/, ya se trató con algún detalle en el informe del Grupo al Consejo Económico y Social presentado en 1975 (E/5622; párrs. 157 a 160), así como de la respuesta negativa de los "Ministros del Gobierno".

134/ Parl. Deb., 15 de noviembre de 1974, col. 1.039; 11 de abril de 1975, cols. 1.837 a 1.840.

135/ Radio Salisbury, 15 de septiembre de 1975.

136/ Rhodesia Herald, 18, 19, 22 y 28 de octubre de 1974; Sunday Mail, 20 de octubre de 1974.

137/ V. S. Cubitt and R. C. Ridell, Universidad de Rhodesia, 1974.

El Grupo ha informado anteriormente (E/CN.4/1135, párrs. 417 y 418; E/5622, párrs. 153 y 154) sobre la disparidad entre los salarios medios de los trabajadores blancos y los negros.

563. En el período que se examina han aparecido nuevos datos sobre la pobreza. El Secretario de Sanidad del "Gobierno" dijo en septiembre de 1974: "En nuestros hospitales todavía hay pacientes con kwashiorkor, y las condiciones de nuestros TTF son tales que la fiebre tifoidea se difunde y todavía aparece el cólera" 138/.

564. En abril de 1975, el Dr. Eric Gargett, alto funcionario de bienestar social en el Departamento de Vivienda y Parques de Bulawayo, dijo que las familias africanas que están por debajo del NP sobreviven pero no viven. "Esas familias economizan en los bienes de consumo, en particular alimentos y prendas de vestir; no pagan las matrículas escolares; caminan largas distancias porque no pueden pagar los medios de transporte y carecen de artículos de primera necesidad" 139/. A las observaciones del Dr. Gargett, en enero de 1975 siguió un informe según el cual el 70% de los trabajadores africanos en los barrios de Bulawayo vivían por debajo del nivel de subsistencia. Según las informaciones, la pobreza es el mayor de los problemas con que se enfrentan las familias 140/. A pesar de esas pruebas y del NP, el "Ministro de Bienestar Social" dijo en julio que sólo el 0,18% de los habitantes de Rhodesia necesitaban la ayuda de los servicios de asistencia social. Añadió que esta cifra tan baja era una indicación del alto nivel de vida de Rhodesia. "Las necesidades de los pobres no han sido descuidadas en este país". No quedó claro si hablaba solamente de la población blanca 141/.

565. En octubre de 1974, los trabajadores de la industria del vestido obtuvieron un aumento del 7,5%. Esto significó que los salarios de los trabajadores menos pagados aumentó de 8,20 a 8,80 dólares de Rhodesia por semana: bien por debajo del nivel oficial de pobreza para la mayoría de las familias. El aumento entre los salarios superiores fue de 132 a 136 dólares de Rhodesia 142/. El Secretario General de la Rhodesian Engineering and Metal Workers' Union, Sr. David Chimusoro, dijo en abril de 1975: "Los directores de las compañías y los principales hombres de negocios han hablado de la necesidad de pagar mejores salarios, pero no se está haciendo mucho en ese sentido" 143/. El Sr. Phinias Sithole, Presidente de la African Trade Union Congress, expresó la misma opinión y criticó al "Ministro de Trabajo y Bienestar Social" que había pedido a los empresarios "ilustrados" que adoptasen el principio de "un salario justo por un trabajo justo". El Sr. Sithole dijo que lo que los empleadores necesitaban era "una orientación oficial y una legislación enérgicas, y no persuasión". Declaró también que el 99% de los empleados africanos cubiertos por los acuerdos industriales recibían el salario mínimo 144/.

138/ Rhodesia Herald, 28 de septiembre de 1974.

139/ Rhodesia Herald, 10 de abril de 1975.

140/ Rhodesia Herald, 23 de enero de 1975.

141/ Rhodesia Herald, 24 de julio de 1975.

142/ Rhodesia Herald, 17 de octubre de 1974.

143/ Rhodesia Herald, 17 de abril de 1975.

144/ Rhodesia Herald, 15 de marzo de 1975.

6. Otras violaciones graves de los derechos humanos

a) Juicios secretos

566. En Rhodesia del Sur, el "Ministro de Justicia" tiene, en virtud de la sección 403 A de la Criminal Procedure and Evidence Act, facultades para imponer limitaciones tan amplias como desee a la publicación de cuestiones relativas a cualquier juicio. La mayor parte de éstos se celebran ante la sola presencia de la prensa, y ello a condición de que los periódicos publiquen sólo lo autorizado. Únicamente se permite la asistencia de los periodistas blancos. Estas restricciones significan que muchos juicios se celebran en condiciones de secreto completo o virtual.

567. En marzo, abril y mayo de 1975, se celebraron juicios en los cuales no se dieron indicaciones de los cargos, el resultado del juicio ni siquiera la raza de los acusados. El "Ministro de Justicia" manifestó en una declaración oficial que no "sería de interés público" el publicar ninguno de esos datos 145/. En julio de 1975, el juicio de Julius Chimedza se celebró a puerta cerrada; no se dio ninguna otra indicación del carácter del proceso 146/.

b) Otros casos de tortura y agresión

568. En los informes previos se ha demostrado la frecuencia con que los agentes del régimen rebelde emplean la violencia contra los africanos (por ejemplo, véase el documento E/CN.4/1159, párrs. 303 a 312). En particular, los acusados en los juicios suelen denunciar que la policía o las fuerzas de seguridad los han golpeado o torturado para obtener información.

569. En enero de 1975, se presentaron en los tribunales tres demandas contra el "Ministro de Orden Público" en las que se reclamaba indemnización por daños resultantes de ataques perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad. En la primera de estas demandas el Sr. Tawandira y su hija alegaron que en septiembre de 1974 un policía blanco y dos policías negros los habían esposado, vendado los ojos y golpeado durante mucho tiempo. Este incidente se produjo en la zona de Mount Darwin. En el segundo caso, la Sra. Moníca Deka y sus hijas, de la zona de Chesa African Purchase, denunciaron que un policía blanco y uno negro les habían dado puntapiés y golpes, vendado los ojos y sometido a los efectos de un instrumento eléctrico. La agresión se realizó en agosto de 1974 en la zona de Mount Darwin. En el tercer caso, el Sr. J. M. Jairoso, un maestro de escuela, fue golpeado con correas de ventilador y a puntapiés, arrojado al suelo, golpeado con la cabeza contra el piso y en la planta de los pies. Según se indica, esa agresión se produjo en enero de 1973 en el Departamento de Policía de Centenary, y fue obra de un policía blanco y uno negro. Ninguno de los demandados fue acusado de ningún delito serio 147/. En marzo de 1975, un africano de la zona de Mtoko que denunció que la policía lo había sometido a malos tratos después de su detención en febrero de 1975, presentó también una demanda 148/. Hasta ahora el tribunal no ha visto ninguna de estas causas, que probablemente se sobreseerán si el Indemnity and Compensation Bill se convierte en ley (véase párr. 522 supra).

145/ Rhodesia Herald, 18 de marzo, 9 de abril y 21 de mayo de 1975.

146/ Rhodesia Herald, 22 de julio de 1975.

147/ Man in the Middle..., págs. 21 y 22; Rhodesia Herald, 26 de enero de 1975.

148/ Rhodesia Herald, 8 de marzo de 1975.

570. En las pruebas reunidas por la Catholic Commission for Justice and Peace in Rhodesia, se mencionaron 12 incidentes de agresión. Estos incluían los primeros tres casos antes mencionados. En todos ellos se trata de agresiones físicas de la clase más degradante, a menudo en presencia de otros habitantes de los poblados. En un caso, toda una aldea y sus cosechas fueron destruidas porque, según se afirmaba, los aldeanos ayudaban a los combatientes por la libertad. En el último incidente, un soldado comunicó a los aldeanos que tenían que dispersarse en las otras aldeas: no se les permitiría reconstruir la propia. No se planteó la posibilidad de ninguna clase de compensación, excepto en el caso de dos niños que resultaron muertos en un "accidente" en una "aldea protegida". Los padres recibieron 100 dólares de Rhodesia por cada niño "para sufragar los gastos del funeral y por cualquier molestia que se hubiese ocasionado a los padres" 149/.

571. En mayo de 1975, un reservista de la policía que golpeó a un negro con una pistola fue declarado culpable de ataque con intención de inferir lesiones graves. El hombre dijo que sólo quería alejar de su casa a "una pandilla de vagos". También disparó la pistola al aire para asustar y dispersar a un grupo de negros 150/.

572. En otro caso, en junio de 1975, dos hermanos blancos fueron acusados de agredir a un conductor negro que, según sospechaban, había robado una cartera. Aunque la dueña de la cartera dijo que ese hombre no era el responsable, "lo golpearon contra el coche hasta dejarlo atontado" 151/.

573. En una decisión del tribunal de apelación, se puso en libertad a un negro (Mukotsa Ngirazi) que había sido declarado culpable de varias acusaciones de robo de ganado como resultado de una confesión que, según él, la policía le había arrancado a la fuerza después de apalearlo salvajemente 152/.

574. En agosto de 1975, un policía de Rhodesia del Sur fue declarado culpable de agredir al Sr. Francis Mutuma de Hatfield. En julio, otros dos policías blancos fueron declarados culpables del mismo delito. Mutuma fue llevado a una oficina donde le hicieron hacer flexiones. Luego lo apalearon en la espalda y posteriormente tuvo que ingresar en el hospital para que le curaran cinco heridas profundas en la espalda. En el resumen de la vista, el magistrado dijo: "la agresión se cometió para que diese información" 153/.

c) Detenciones injustificadas

575. En octubre de 1974, el Tribunal de Apelación anuló la condena de 48 negros que se habían declarado culpables ante un tribunal inferior de la acusación de no haber obedecido una orden de un comisionado de distrito. Este les había ordenado que se presentasen en su oficina sin darles ninguna razón para justificar la orden, que legalmente estaba facultado para dictar 154/.

149/ Man in the Middle..., págs. 3 a 6.

150/ Rhodesia Herald, 6 de mayo de 1975.

151/ Rhodesia Herald, 4 de junio de 1975.

152/ Rhodesia Herald, 1º de agosto de 1975.

153/ Rhodesia Herald, 21 de agosto de 1975.

154/ Rhodesia Herald, 18 de octubre de 1974.

576. Una mujer a la que se había condenado dos veces por el mismo delito logró que en mayo de 1975 se anulase una de las condenas. La acusada se había declarado culpable la segunda ocasión, además de la primera, probablemente porque no comprendía bien el procedimiento del tribunal. No se hizo ninguna observación sobre los motivos por los que se la había hecho comparecer dos veces 155/.

577. Según un artículo publicado en el Sunday Mail de febrero de 1974, la policía de Salisbury detiene de 50 a 100 negros al día porque no llevan su certificado de registro. En muchos casos esto se debe a que los empleadores blancos retienen los certificados después de firmarlos, y no se los devuelven a sus empleados africanos. Las detenciones que resultan de esto causan "muchas molestias a los empleados y los empleadores" 156/.

d) Comparación de las sentencias impuestas a los blancos y a los negros por infracciones penales

578. El Grupo Especial de Expertos dispone de pruebas evidentes de las distintas sentencias que se imponen a los blancos y los negros. Así, dos negros fueron sentenciados a tres años y medio (con dos años y medio de suspensión) y dos años y medio (con un año y dos tercios de suspensión) por robo con fractura en comercios de dos barrios africanos 157/. Otro negro fue sentenciado a seis años y medio de prisión (con un año de suspensión) por 12 acusaciones de entrada con fractura en escuelas de la zona de Salisbury 158/. En un juicio celebrado por entonces se impuso a un agricultor blanco una multa de 50 dólares de Rhodesia (o 10 días de prisión) por la muerte de una mujer negra 159/. Otro blanco, que había matado a su sirviente y herido a otro negro al disparar cuatro tiros sobre la cabaña en que vivían los sirvientes en el extremo de su jardín, fue condenado a una sentencia "disuasoria" de tres años de prisión. El blanco se había enfadado porque el sirviente había tirado y roto un objeto de adorno de valor sentimental 160/.

e) Educación de los negros: disparidad entre las instalaciones para los negros y los blancos

579. Según información de que dispone el Grupo Especial de Expertos, las cifras estimadas de gastos para la educación de los negros y los blancos en 1974-1975, en total y en proporción a las poblaciones respectivas, eran:

	<u>Africanos</u>	<u>Blancos</u>
Gasto total al año (en miles de dólares de Rhodesia)	30 662	25 830
Población (diciembre de 1974) (en miles de personas)	5 900	274
Costo por habitante	5,2	94,5

Fuente: Digest of Statistics, cuadros 1 a 59 (agosto de 1975).

155/ Rhodesia Herald, 27 de mayo de 1975.

156/ Sunday Mail, 9 de febrero de 1975.

157/ Rhodesia Herald, 24 de abril de 1975.

158/ Rhodesia Herald, 26 de abril de 1975.

159/ Rhodesia Herald, 31 de julio de 1975.

160/ Rhodesia Herald, 20 de junio de 1975.

En la práctica, ello hace que los niños dejen rápidamente de asistir a la escuela primaria y secundaria, como puede observarse en el cuadro siguiente (correspondiente a 1975):

	<u>Africanos</u>	<u>Blancos</u>
Primer año de la escuela primaria	158 322	4 777
Ultimo año de la escuela primaria	68 652	4 860
Primer año de la escuela secundaria	12 652	5 101
Cuarto año de la escuela secundaria	4 863	4 980
Ultimo año de la escuela secundaria	373	831

Fuente: Digest of Statistics, cuadro 12 (agosto de 1975).

580. En 1970, el régimen decidió reducir en un 50% los subsidios para sueldos del personal de las escuelas primarias que administran las iglesias y, como resultado, la mayoría de las iglesias transfirieron sus escuelas al régimen. En enero de 1975, la Diócesis de Mashonaland de la Iglesia Anglicana decidió transferir al régimen sus escuelas (más de 200), debido a problemas financieros. Esto significa que virtualmente todas las escuelas primarias africanas se encuentran bajo control directo del régimen 161/.

581. Según un psicólogo que trabaja para la División Africana del "Ministerio de Educación", "las causas principales del abandono escolar entre los grados 1 a 7 /el comienzo y fin de la educación primaria africana/ son económicos, sociales y culturales". Dijo además que, a su juicio, muchos niños inteligentes no eran elegidos para cursar estudios secundarios debido a las deficiencias de la enseñanza 162/.

582. Según el "Ministro de Educación" no se podía mejorar la enseñanza de la población negra debido al aumento sumamente rápido de esa población, y también a los gastos enormes que ocasionaba la guerra contra los "terroristas". También el Secretario para la Educación Africana, en su informe anual publicado en junio de 1975, dijo que el aumento de la población negra era la causa de que no hubiera recursos suficientes 163/.

583. Aunque los barrios negros en torno de Salisbury corresponden a la jurisdicción del Ayuntamiento de esta ciudad, no forman parte del municipio. Así, según un portavoz del Ayuntamiento, los residentes de los barrios no pueden solicitar becas para estudiar en la universidad 164/.

161/ Rhodesia Herald, 12 de enero de 1975.

162/ Rhodesia Herald, 29 de mayo de 1975.

163/ Rhodesia Herald, 15 de febrero de 1975; Radio Salisbury, 6 de junio de 1975.

164/ Rhodesia Herald, 7 de enero de 1975.

f) Violaciones de la libertad de expresión y reunión

i) Introducción

584. En el informe del Grupo Especial de Expertos correspondiente a 1974 se hacía referencia a las medidas adoptadas por el régimen ilegal para restringir las reuniones en las Tierras Tribales en Fideicomiso (TTF) (E/CN.4/1135, párr. 389). En las zonas urbanas se utilizan medidas administrativas para obligar a cancelar reuniones (E/CN.4/1159, párr. 356). Durante el período que se examina, el "Ministro de Orden Público" promulgó una orden en que se prohibían todas las reuniones en las TTF con algunas excepciones. Esas excepciones son tales que virtualmente se prohíben todas las reuniones políticas o sindicales, pues sólo se pueden celebrar si las autoriza un funcionario del "Ministerio del Interior", es decir, no se permite a los jefes que las autoricen y sólo pueden hacerlo los funcionarios blancos. Según el "Ministro", la nueva medida se refería a las reuniones de menos de 12 personas, que se estaban celebrando en número considerable, pues las reuniones de más de 12 personas ya estaban prohibidas 165/. En la Asamblea se aclaró que esta prohibición incluía las reuniones de información de los representantes parlamentarios africanos con sus electores, a menos que fueran autorizadas 166/.

585. En el párrafo 521 supra se señaló que el Senado había aprobado la Law and Order (Maintenance) Amendment Bill, a pesar del informe negativo de la Comisión Jurídica, en el sentido de que dos secciones del proyecto de ley contravenían la Declaración de Derechos Humanos. En las secciones mencionadas se prohibía que las personas culpables de declaraciones "subversivas" asistieran a reuniones o que se citaran sus declaraciones. No obstante, el Senado hizo que el régimen ilegal volviera a examinar el Printed Publications Bill. La Comisión Jurídica impugnó la obligación de enviar a los Archivos Nacionales todos los nuevos libros 167/.

ii) Ejemplos de violaciones del derecho a la libertad de expresión

586. En el informe del Grupo del año pasado, se indicaba que la publicación semanal católica, Moto, fue prohibida en septiembre de 1974 por un período de tres meses (E/CN.4/1159, párr. 362). Según una información ulterior comunicada al Grupo, en noviembre de 1974 esta medida provisional fue sustituida por otra orden de prohibición permanente dictada por el "Ministro de Orden Público". El "Ministro" aclaró que la prohibición se imponía porque Moto reflejaba la oposición de la mayoría africana al régimen; en particular, había consagrado mucho espacio a la liberación de las colonias portuguesas de África "poniendo de relieve el triunfo de los llamados movimientos africanos de liberación" 168/.

165/ Rhodesia Herald, 4 de agosto de 1975.

166/ Parl. Deb., 8 de agosto de 1975, col. 289.

167/ Rhodesia Herald, 27 de febrero de 1975.

168/ Parl. Deb., 15 de noviembre de 1974, cols. 1075 a 1083.

587. Durante el período que se examina, en la Asamblea se atacó al Rhodesia Herald y al Sunday Mail, aunque ambos periódicos eran decididos partidarios del régimen y ambos funcionan con un grado considerable de autocensura. Un parlamentario del Rhodesia Front atacó en particular al grupo de periódicos del Herald por hacer "tan poco para despertar y mantener la confianza del público". El "Ministro de Información, Inmigración y Turismo" apoyó esa opinión 169/.

588. El régimen tiene también una rígida política de prohibición de los libros y otras publicaciones que entran en el país, cuando estima que "corrompen la moral sexual" o son políticamente peligrosos. En abril, se prohibieron cinco publicaciones de carácter político o semipolítico, y en mayo se prohibió otra publicación política. Entre los títulos figuraban el Zimbabwe Exodus publicado por el African National Council en los Estados Unidos de América, y Focus on Libertation, vol. 7, Nº 6, publicado por All African Council of Churches 170/.

589. Se censuran los periódicos europeos si se considera que critican seriamente al régimen. En el Rhodesia Herald, de 2 de agosto de 1975, cuatro días antes de las conversaciones que se celebraron en Livingstone-Victoria Falls, el Rhodesia Party publicó un anuncio en el que trataba de la distensión y la parte que los vecinos africanos de Rhodesia habían desempeñado en la contención de la "guerra de guerrillas". El "Ministro de Orden Público" pidió al Fiscal de Rhodesia que considerase el anuncio que contravenía la Law and Order (Maintenance) Act. Dos días después, el Sunday Mail rechazó un segundo anuncio del Rhodesia Party luego de haber recabado asesoramiento legal. Es de señalar que el Rhodesia Party es exclusivamente blanco 171/.

iii) Ejemplos de violaciones del derecho a la libre asociación

590. En el informe del año pasado (E/CN.4/1159, párr. 356), se examinaban las violaciones anteriores cometidas por el régimen contra el derecho de libre asociación. La dificultad para reunir pruebas de esas violaciones se debe a que raramente las prohibiciones se publican en la prensa. No obstante, se han señalado algunos ejemplos a la atención del Grupo.

591. En enero de 1975 se invitó a los jefes del ANC recién liberados, Joshua Nkom y Ndabaningi Sithole a un partido amistoso de fútbol que se celebraría en su honor en Highfields. El "Ministro de Orden Público" prohibió el partido aduciendo que la ocasión se utilizaría como una reunión del ANC 172/.

592. Poco después, el ANC anunció que las autoridades habían prohibido una reunión pública en Bulawayo debido a que el ANC no había satisfecho "ciertas condiciones". Otra reunión tuvo que ser cancelada al negarse el permiso para hacer uso de la palabra al orador Joshua Nkomo. También se comunicó al ANC que no se le permitiría que realizase manifestaciones de ninguna clase 173/. En Sinoia, el Comisionado del Distrito prohibió en el mes de marzo la reunión anual de la sección femenina del ANC de la Provincia Norte 174/.

169/ Parl. Deb., 11 de abril de 1975, cols. 1871 a 1880.

170/ Rhodesia Herald, 14 de abril, 26 de abril y 10 de mayo de 1975.

171/ Rhodesia Herald, 23 de agosto de 1975; Sunday Times, 24 de agosto de 1975.

172/ Daily Telegraph, 11 de enero de 1975.

173/ Radio Blantyre, 15 de enero de 1975; Radio Johannesburgo, 15 de enero de 1975; Rhodesia Herald, 15 de enero de 1975.

174/ Rhodesia Herald, 14 de marzo de 1975.

593. En marzo de 1975, la policía de Rhodesia dispersó una marcha fúnebre en honor del Sr. Herbert Chitepo, el jefe asesinado del ZANU y el ANC. Varias personas que participaban en la ceremonia fúnebre se habían reunido en la casa de unos parientes en New Highfields, entre ellas el Sr. Chidyausiku, uno de los miembros africanos del Parlamento. El Sr. Chidyausiku se negó a abandonar el lugar, y, como resultado, se lanzó a un perro contra él. Posteriormente fue acusado de obstruir la labor de la policía 175/.

594. En Chiredzi fueron detenidas 48 personas por participar en una manifestación "ilegal" en apoyo del ANC 176/.

g) Otras violaciones de los derechos humanos

595. En el Criminal Procedure and Evidence Amendment Bill, el régimen aumentó las facultades sumarias del ejecutivo y los tribunales inferiores. El "Ministro de Orden Público" propuso que se le facultase para otorgar un certificado que impidiese a un magistrado liberar a una persona bajo fianza. El segundo cambio sería ampliar la jurisdicción de los tribunales inferiores, que en la actualidad sólo pueden imponer pequeñas multas en los casos de personas que se declaran culpables, si no se les presentan más pruebas. Si el tribunal decide imponer una sentencia mayor, es preciso que se aporten pruebas para demostrar la culpabilidad del acusado. Se pretende reducir esa salvaguardia al simple requisito de que se dé una explicación detallada de la acusación, con lo cual el tribunal puede imponer una sentencia mayor sin ninguna prueba 177/.

596. El régimen ilegal se negó a permitir que después del asesinato de Herbert Chitepo, se trasladase el cadáver a su tierra natal para ser enterrado allí 178/. Según se señala en el párrafo 593 supra, el régimen trató también de suspender todas las ceremonias fúnebres públicas por su muerte.

597. En abril se encarceló a una mujer embarazada de siete meses por no pagar sus deudas 179/.

B. El apartheid y la familia africana

1. Descripción de la familia africana y análisis de su función

a) Antecedentes etnográficos

598. El Grupo Especial de Expertos ha procedido al estudio de esta cuestión por primera vez, aunque ya se ha hecho referencia en varios informes anteriores a los efectos perturbadores que ejercen en la familia africana, tanto en Sudáfrica como en Rhodesia del Sur, las políticas inhumanas y racistas.

175/ Rhodesia Herald, 29 de julio de 1975, 30 de julio de 1975.

176/ Rhodesia Herald, 5 de junio de 1975.

177/ Parl. Deb., 29 de julio de 1975, cols. 1493 a 1498.

178/ Daily Telegraph, 22 de marzo de 1975.

179/ Rhodesia Herald, 19 de abril de 1975.

599. Los mashona y los matabeles, los dos pueblos principales de Rhodesia del Sur, son culturalmente distintos, aunque comparten muchas características comunes. Los mashona ya vivían en el país antes de que llegaran los matabeles, en la primera mitad del siglo XIX, procedentes de Zululandia (Sudáfrica). La estructura tribal de los matabeles estaba más centralizada: los hombres eran guerreros y cazadores, en tanto que las mujeres se dedicaban a la agricultura. En cambio, el pueblo mashona tenía un sistema tribal mucho menos centralizado y no era una nación militar. Ambos pueblos se dedicaban a la ganadería y al cultivo del mijo y de diversos tubérculos.

600. Entre los mashona los cargos de jefe eran hereditarios, y la sucesión era colateral en la línea masculina. Ello entrañaba muchas posibilidades de conflictos graves, que a menudo terminaban con una escisión del clan, del cual se retiraba una de las facciones. Los mismos problemas se planteaban a nivel del "dunhu" o cacicato. La tierra, tanto en el sistema de los matabeles como en el de los mashona, no era de propiedad individual, sino que el jefe o cacique se encargaba de la distribución de las tierras según las necesidades de los interesados. Era característico de las aldeas de los mashonas el traslado de lugar cada ocho o diez años a medida que se agotaban las tierras de labor. El jefe de la tribu solía resolver las controversias entre los dunhus, ocupándose personalmente de los delitos graves (como el homicidio), mientras que el cacique zanjaba los conflictos de menor importancia, especialmente las diferencias entre aldeas sobre tenencia de la tierra. Los tribunales africanos tradicionales han tratado siempre de resolver los conflictos por vía de conciliación, evitando la inculpación o la pena.

601. En la vida colectiva de los mashona y de los matabeles tiene todavía una importancia fundamental la familia, que normalmente es la familia extensa. En las condiciones tradicionales del medio rural, todos los miembros de la comunidad se ocupaban de los niños, y los parientes pobres estaban a cargo de los individuos más prósperos. En estos pueblos no existían en absoluto los problemas de ilegitimidad o de orfandad de los niños porque éstos se consideraban como un don y cualquier niño -fuera quien fuera su padre- era aceptado por la familia. En caso del fallecimiento de los padres naturales, uno de los parientes ocupaba naturalmente su lugar. A las personas de edad, tanto hombres como mujeres, se les rendían honores especiales 180/. La familia africana se caracterizaba por su unidad y cohesión.

b) Influencia del colonialismo y la industrialización

602. Desde que llegaron a Rhodesia del Sur los colonos blancos se han producido cambios espectaculares en la estructura social africana. Tanto los agricultores como los especuladores de oro de raza blanca consideraban a los africanos fundamentalmente como una fuente potencial de mano de obra pero, al mismo tiempo, no querían que en "sus" tierras europeas se instalara un número excesivo de africanos con sus familias. Así, se adoptó el sistema de migración de trabajadores que ya se había

180/ Pueden verse estudios sobre las comunidades tradicionales africanas de Rhodesia Sur en: H. Kuper, A. J. B. Hughes and J. van Velsen: The Shona and Ndebele of Southern Rhodesia (1954), particularmente las págs. 18 a 21, 63 a 93 y 94 a 100; C. Bullock: The Mashona and the Matabele (1950), especialmente los caps. III, IV, V, VI y XXII; M. W. Murphree: Christianity and the Shona (1969), cap. 2; F. J. Holleman: Chief, Council and Commissioner (1968), págs. 83 a 96 y Edgar Moyo: Big Mother and Little Mother in Matabeleland (1973).

desarrollado en Sudáfrica (véase anteriormente el capítulo I, sección E, "El apartheid y la familia africana"). Simultáneamente se trató de delimitar y restringir las tierras propiedad de africanos, por lo que el nomadismo tradicional de la aldea africana se hizo más difícil y acabó por desaparecer. La aplicación de estas medidas obligó gradualmente a algunos hombres a abandonar la tierra para incorporarse a la economía monetaria. Además, los colonos blancos consiguieron reducir los poderes autónomos de los jefes tribales, que habían dirigido las sublevaciones de 1896, para lo cual los convirtieron en pequeños funcionarios públicos encargados de ejecutar las leyes de los gobernantes blancos y de recaudar las contribuciones impuestas por éstos. Ello contribuyó también a una erosión de la jerarquía social y de la estabilidad de las estructuras familiares.

603. El sistema de trabajo migratorio es, evidentemente, la causa principal de la desorganización de la vida de la familia africana. Los hombres africanos buscan trabajo en las economías monetarias, pero tanto los salarios bajos y las viviendas deficientes, como la aplicación del "sistema de pases", que limita el acceso de africanos a las zonas urbanas, son factores que desalientan a esos emigrantes a hacerse acompañar por sus esposas e hijos. De hecho, la economía rural de subsistencia subvenciona efectivamente la economía urbana al proporcionar un lugar para que viva la mayor parte de los miembros de la familia que permanecen en el campo, especialmente los muy jóvenes y los de edad muy avanzada. A menudo ocurre entre las ciudades y las zonas rurales un movimiento regular de niños que pasan algunos períodos en el campo y otros en la ciudad.

604. Las condiciones en las ciudades son tales que destruyen ciertas estructuras sociales establecidas, incluidos los valores económicos y domésticos tradicionales. Los jóvenes que viven solamente en las poblaciones y ciudades pierden el contacto con sus raíces tradicionales, y tienden a aislarse de todo lo que les rodea, salvo de su familia inmediata. En la construcción de las viviendas urbanas para africanos (planeadas por blancos) no se han tenido realmente en cuenta las costumbres de vida de los que las iban a habitar. "Los barrios se han construido para alojar a familias pequeñas de tipo europeo y las escuelas se basan en el mismo principio" 181/.

605. Las iglesias cristianas han contribuido también a la profunda modificación de valores y las costumbres sociales de los africanos. Los misioneros europeos han atacado aspectos de la cultura africana por considerarlos "paganos" y anticristianos, especialmente, las costumbres relacionadas con el matrimonio.

606. Los mashona, en particular, mantenían tradicionalmente una relación muy estrecha y casi religiosa con sus tierras y con su ganado. Los desplazamientos arbitrarios y forzados de africanos de sus tierras -especialmente si tienen poco tiempo para prepararse a esos éxodos- han ejercido efectos muy desmoralizadores. Según las creencias de los mashona, la separación de la tierra es la manifestación del desagrado de algunos espíritus superiores 182/.

181/ Edgar Moyo, op. cit., pág. 45.

182/ Los efectos del colonialismo e industrialización occidentales y de las actividades de las misiones se estudian en las siguientes obras: L. Vambe: An Ill-fated People (1972) (impresiones personales); N. Partridge; Not Alone (1972) (versión optimista de los efectos de la vida urbana -en Bulawayo- sobre los africanos); E. Colson; Social Organisation of the Gwemba Tonga (1960), véanse caps. III y IV; E. Colson; Marriage and Family among the Plateau Tonga (1958), véase cap. IV sobre migración de trabajadores; J. A. Dachs, ed.: Christianity South of the Zambezi (1973), véanse los artículos sobre la religión tradicional en la sociedad mashona, y el matrimonio mashona y las iglesias cristianas.

2. Efectos a corto y a largo plazo de la política de apartheid en la familia africana

a) Antecedentes políticos y económicos

607. El Grupo Especial de Expertos ha examinado en anteriores informes la política del gobierno colonial de Rhodesia del Sur y del actual régimen ilegal. En el informe del Grupo correspondiente a 1970 se estudiaban los antecedentes históricos del desarrollo de las zonas tribales africanas, y en los informes correspondientes a 1970 y 1971 figura un estudio completo de las leyes aplicables a los africanos de estas zonas que se ha puesto al día en los informes posteriores (E/CN.4/1020/Add.1 y E/CN.4/1050). El régimen rebelde continúa aplicando un sistema de explotación de la mano de obra africana, según el cual se obliga a los hombres a trabajar en las zonas urbanas para pagar las contribuciones impuestas por el Gobierno, dar enseñanza a sus hijos y comprar los artículos de consumo producidos por la economía industrial. Al mismo tiempo, el nivel de remuneración es tan bajo que los trabajadores continúan dependiendo frecuentemente de las zonas rurales para mantener a sus familias (véase párr. 489 *supra* y, párrs. 610 y 618 *infra*). En el informe correspondiente a 1974 (E/CN.4/1135, párrs. 357 a 362) figura la distribución de las tierras y de la población en Rhodesia del Sur. Según los datos de ese informe puede observarse una elevada densidad demográfica de la población africana en las Tierras Tribales en Fideicomiso (TTF). En el citado informe (párrs. 372 a 379) también se da cuenta de la acusada depresión económica en que están sumidas esas TTF. Todos estos factores contribuyen a crear condiciones críticas de inseguridad en la vida social africana.

608. El régimen rebelde controla minuciosamente los movimientos de los africanos, obligando para ello a los hombres que estén empleados que llevan consigo un "certificado de registro" (véase también el párr. 501). En el informe del Grupo de Trabajo correspondiente a 1975 se declara que todos los africanos de 12 a 60 años de edad que vivan en determinados distritos del nordeste de Rhodesia del Sur han de solicitar nuevos documentos de registro, que deben llevar consigo en todo momento (E/CN.4/1159, párr. 330).

609. Un estudio sociológico realizado en un barrio africano de las afueras de Salisbury en 1967 mostraba algunas de las características de la población africana. El barrio se había construido para que en él durmiera el personal del servicio doméstico que trabajaba en los suburbios blancos cercanos. El 60% de los cabeza de familia de ese poblado ganaba de 10 a 20 dólares de Rhodesia por mes. Muchos de esos empleados domésticos vivían de hecho en casa de sus empleadores durante los días de labor y sólo regresaban a sus hogares los fines de semana. La relación entre sexos no estaba equilibrada (era mayor el número de niñas y mujeres adultas -hasta los 30 años- que el de hombres, lo que representaba una situación excepcional y reflejaba la finalidad especial del poblado). Una gran proporción de los niños (24%, por lo menos) se encontraban separados de sus familias, principalmente en las zonas rurales. No obstante, eran muy pocos los niños visitantes a los que se permitía residir en ese barrio 183/.

183/ G. Chavunduka: "A social survey of Dzivaresekwa Township, Salisbury", en Zambesia, vol. 2, Nº 2, (diciembre de 1972), págs. 67 a 72.

b) Efectos en las relaciones conyugales

i) Falta de viviendas familiares

610. A continuación se indica la distribución de la población africana cuando se levantó el último censo (abril de 1969):

Distribución de la población africana por sexo y por zona

Categoría de las tierras	Total	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
Total de la población africana	4 846 930	2 440 180	50,3	2 406 750	49,6
<u>Zonas africanas</u>					
Tierras Tribales en Fideicomiso	2 921 840	1 326 710	45,6	1 584 330	54,4
Tierras africanas de compra	135 610	64 500	48,6	68 310	51,4
<u>Zonas blancas</u>					
<u>Zonas urbanas principales</u>					
Barrios africanos	453 840	266 880	58,8	186 960	41,2
Zonas blancas	202 720	138 190	68,2	64 530	31,8
<u>Zonas rurales</u>	919 940	517 710	56,3	402 230	43,7

Fuente: 1969 Population Census, volumen II, The African Population, de los cuadros 4, 5, 8 y 9. La distribución de las tierras descrita es la de la Land Apportionment Act, pero la diferencia es insignificante en comparación con la Land Tenure Act.

De este cuadro se desprende un excedente considerable de hombres africanos en las zonas blancas, particularmente en las zonas blancas de las poblaciones y ciudades. Ello sucede incluso en las explotaciones agrícolas europeas, en las que podría esperarse que hubiera espacio suficiente para una vivienda tradicional con un huerto. Ese excedente de hombres es el resultado del sistema de migración de trabajadores, que indica muy claramente el grado de dislocación de la familia africana y la consiguiente desorganización de las relaciones conyugales.

611. En el párrafo 491 supra se indican las cifras de la población africana (legal) de Salisbury. Estas cifras ponen claramente de manifiesto el número muy elevado de hombres, muchos de los cuales viven en grandes albergues para "solteros". Una situación similar existe en otras zonas urbanas. Los municipios, como el de Salisbury, solían proporcionar vivienda a los trabajadores "migrantes" (del tipo de los citados albergues), en tanto que la administración central construía grupos de viviendas familiares (del tipo a que se hace referencia en el párrafo 604 supra). No obstante, desde que los municipios empezaron a controlar todas las viviendas urbanas de los africanos ^{184/}, las viviendas familiares solamente pueden ser habitadas por la familia biológica del inquilino, o por huéspedes "legales", es decir, personas que trabajan en la ciudad ^{185/}.

^{184/} E. H. Ashton, Rhodesian Journal of Economics 3, Nº 4 (diciembre de 1969), págs. 29 a 37.

^{185/} D. K. Davies; Race Relations in Rhodesia (1975), pág. 295.

612. D. G. Clarke ha publicado un estudio que contiene historias ilustrativas de la situación (enero de 1973) de una serie de empleados del servicio doméstico. Esos casos constituyen un ejemplo de los bajos ingresos y de la separación de las familias a que se ha hecho referencia anteriormente. Así, por ejemplo, se puede citar el caso de un trabajador doméstico, "C", que se encontraba al servicio de su actual empleador desde 1951, y cuya familia vivía con él; su remuneración mensual era de 24 dólares de Rhodesia; carecía en absoluto de días libres -salvo un horario reducido de trabajo los sábados, los domingos y días festivos-, y tenía tres semanas de vacaciones por año no pagadas. "D" era una trabajadora del servicio doméstico que vivía en el hogar del empleador, pero que tenía asimismo una pequeña casa en un barrio, en la que vivían sus cuatro hijos durante las vacaciones; su remuneración era de 12 dólares de Rhodesia al mes, más la comida y la electricidad; trabajaba todos los días de la semana, con medio día libre los jueves y domingos. "I" tenía 60 años de edad y era conserje de un edificio de apartamentos en Salisbury; percibía 19 dólares de Rhodesia por mes, más la vivienda, pero no la comida. Su mujer y sus cuatro hijos vivían en Umtali. "K", un jardinero y trabajador doméstico empleado en Salisbury, ganaba 18 dólares de Rhodesia al mes, y habitaba en la vivienda de su empleador, pero su mujer e hijo se encontraban en Mtoko, e iban a reunirse con él durante sus vacaciones 186/.

ii) La política de "control demográfico"

613. D. G. Clarke ha estudiado asimismo los problemas de la planificación de la familia entre los africanos de Rhodesia del Sur. El crecimiento de la población africana es muy elevado: alrededor de un 3,6% anual a comienzos del decenio de 1970. Según el estudio citado, este aumento de la población se debe a las presiones políticas y económicas: los ingresos extremadamente bajos de los africanos, particularmente la reducción del promedio de ingresos de los que viven en las TTF hacen que la familia numerosa esté económicamente justificada en su caso; por otra parte, el régimen rebelde no ha hecho nada por mejorar las condiciones económicas de las pequeñas familias. Además, ese régimen está declaradamente tratando de aumentar la población blanca; a ese respecto, un informe oficial decía en 1967: "En interés de la economía de Rhodesia, y especialmente de los habitantes africanos, es fundamental que aumenten los efectivos de la comunidad europea, y que se evite un aumento excesivo del desequilibrio numérico" 187/. Con el mismo ánimo, el régimen rebelde y los partidos políticos blancos juzgan necesario limitar la población africana y han tratado de conseguirlo por distintos métodos.

614. En abril de 1973, la división de la región central del Rhodesian Front's pidió que se adoptara una orientación positiva "dentro de la política del Rhodesia Front" para resolver el problema del "crecimiento explosivo de la población" de Rhodesia del Sur 188/. En octubre de ese mismo año, el "Ministro de Sanidad y Bienestar Social" señaló claramente la gran importancia que concedía a la planificación de la familia 189/.

186/ D. G. Clarke: Domestic Workers in Rhodesia (1974), págs. 79 a 88.

187/ D. G. Clarke, en Rhodesian Journal of Economics, 6, Nº 2 (junio de 1972), pág. 35.

188/ Rhodesia Herald, 26 de abril de 1973.

189/ Rhodesia Herald, 29 de octubre de 1973.

615. En el curso de un debate público sobre esta cuestión, un miembro del Departamento de Zoología de la Universidad de Rhodesia declaró que la campaña para reducir la tasa de natalidad en Rhodesia del Sur no tendría éxito más que si iba acompañada de un desarrollo en gran escala de las Tierras Tribales en Fideicomiso 190/. Un destacado periodista del Rhodesia Herald formuló otra sugerencia a este respecto. Proponía que la educación de los tres primeros hijos de una familia fuera completamente gratuita y que los padres sufragaran íntegramente y sin subsidios la educación de los hijos siguientes 191/. El "Ministro de Educación Africana" emprendió también en octubre de 1974 un programa en gran escala de educación sobre cuestiones de planificación de la familia, considerando el exceso de población como un problema mundial y nacional 192/.

616. En el párrafo 582 supra se indicaba que el "Ministro de Educación" había declarado que no se podría mejorar la enseñanza de los africanos a causa del aumento demográfico. A pesar de los discursos pronunciados por los políticos africanos que se oponen a la contracepción, el inspector de sanidad de Gwelo indicaba en su informe correspondiente a 1974 que las mujeres acudían a las clínicas de planificación de la familia 193/.

617. En diciembre de 1973, el Ayuntamiento de Salisbury anunció que iba a aumentar las prestaciones de maternidad y los subsidios para las guarderías infantiles. Estos aumentos oscilaban entre el 170% y el 300%. Aunque esta medida no se adoptó necesariamente como una forma negativa de control de la natalidad, fue atacada violentamente por los africanos, quienes no habían sido consultados acerca de estas propuestas antes de que fueran adoptadas 194/. En marzo de 1975 el Ayuntamiento tenía en estudio una propuesta para repartir las píldoras anticonceptivas gratuitamente, en vez de cobrar el precio actual de 10 céntimos por paquete 195/.

c) Efectos en las relaciones de parentesco

618. El sistema de migración de trabajadores ha dado por resultado el que un número desproporcionado de niños africanos se encuentren en las zonas rurales en lugar de vivir en las zonas urbanas. Esta situación se muestra en el siguiente cuadro:

Residencia de los niños africanos

	Menores de 14 años 4 meses (porcentaje)	Menores de 9 años 4 meses (porcentaje)
Población total	47,7	34,2
En tierras Tribales en Fideicomiso	52,9	37,5
En tierras africanas de compra	50,4	33,5
En zonas blancas	38,6	28,6

Fuente: 1969 Population Census, volumen II, The African Population, cuadro 12. La distribución de las tierras es la prevista en la Land Apportionment Act.

190/ Rhodesia Herald, 1º de diciembre de 1973.

191/ Rhodesia Herald, 19 de abril de 1973.

192/ Rhodesia Herald, 4 de octubre de 1974.

193/ Rhodesia Herald, 5 de noviembre de 1974.

194/ Rhodesia Herald, 17 de diciembre de 1973.

195/ Rhodesia Herald, 12 de marzo de 1975.

En muchos casos los hijos se quedan con la madre (véase, por ejemplo, el párr. 612 anterior), y a veces son confiados a los abuelos o a otros parientes. También se ha podido comprobar que muchos niños son enviados de las zonas rurales a las urbanas debido a las mayores oportunidades de empleo y, a veces también, a los mejores medios educativos que existen en las ciudades 196/.

619. El Grupo Especial de Expertos tiene pruebas de los crecientes problemas que plantea el control social de los niños y adolescentes en los medios urbanos. Estos problemas son consecuencia del modo de vida ideado y aplicado por el régimen. En diciembre de 1973, las autoridades de Salisbury suspendieron los bailes de música "pop" que duraban 12 horas, a causa de los "problemas" que ello planteaba. Según un asistente social, muchos padres africanos "no ejercían un control suficiente" sobre sus hijos 197/.

620. En julio de 1974 se señaló una ola de delincuencia entre la juventud. En efecto, cada vez era mayor el número de robos y violaciones cometidos por los jóvenes, lo cual se atribuía también en parte a la falta de "control de los padres" 198/.

621. En un artículo publicado en una revista anglicana en julio de 1969, el director de Moto, Paul Chidyausiku, describía en términos severos los efectos de los bajos ingresos y del hacinamiento de personas en los barrios africanos. El autor describía en primer lugar las dificultades de una familia pobre con un huésped. Si éste ayuda a la familia con comida, ¿se le puede impedir que duerma con las hijas púberes? Otro caso era el de un padre que envía a su familia al lugar de origen, con lo cual ambos cónyuges pueden experimentar la tentación de tener relaciones extramaritales. Otra familia permanece en el poblado, pero tiene que vivir en condiciones terribles de hacinamiento, compartiendo "la misma habitación con dos, tres e incluso cuatro familias". Los padres duermen en camas y los hijos (a menudo adolescentes) debajo. "Los padres tienen relaciones íntimas en presencia de sus hijos" 199/.

d) Problemas psicológicos, sociales, morales, culturales, políticos y económicos de las familias africanas

622. En un estudio publicado en marzo de 1973, un profesor de la Universidad de Rhodesia analizaba las repercusiones de la urbanización en los africanos, señalando que éstos no sólo se estaban occidentalizando, sino que, además, llevaban sus propias tradiciones al medio urbano y las adaptaban al mismo. En algunos aspectos, su vida se adaptaba simplemente a los valores modernos. Como ejemplo de este proceso de adaptación puede citarse la costumbre del "lobola" -que, traducido aproximadamente, significa "precio de la novia" o dote a la inversa- que se paga actualmente en las ciudades utilizando dinero en vez de ganado. Como consecuencia de este proceso de transformación, según las investigaciones del citado autor, está disminuyendo gradualmente el número de miembros de familias extensas 200/.

196/ Edgar Moyo, op. cit., págs. 43 a 52.

197/ Rhodesia Herald, 10 de diciembre de 1973.

198/ Rhodesia Herald, 7 de enero de 1974.

199/ Contac (revista de la Diócesis de Bulawayo), julio de 1969, pág. 9.

200/ Rhodesia Herald, 9 de marzo de 1973.

623. El Rhodesia Herald ha dado cuenta estos últimos años de una serie de manifestaciones confusas de conflictos culturales. Así, en marzo de 1973, unas muchachas fueron agredidas en el distrito de Harari porque llevaban pelucas y minifaldas, siendo acusadas de imitar a los blancos 201/. En septiembre de ese año, el mismo periodista africano comentaba el caso de un matabele que había estudiado en Inglaterra y que se había casado en ese país también con una matabele. El matrimonio hablaba en su casa solamente en inglés, por lo que sus hijos no sabían hablar matabele en su propio país de origen 202/. En noviembre de 1973, dicho periodista informaba acerca de un debate sobre la repercusión en la vida africana de los conceptos de civilización occidental sobre el tamaño de la familia, la organización política, la higiene, la agricultura y la lengua. Por otra parte, el autor señalaba que el régimen rebelde había hecho un llamamiento a los africanos para que conservaran su cultura aborigen (con lo cual podían desarrollarse por su cuenta en zonas separadas); por otra parte, los blancos han insistido siempre ante los africanos en la "superioridad" de la cultura europea 203/.

624. Probablemente, algunos de los conflictos culturales más graves se producen en torno a las costumbres relativas al noviazgo y al matrimonio. En las zonas rurales, las comunidades locales ejercían un control muy estricto sobre la conducta de los jóvenes de ambos sexos. En las poblaciones y ciudades, las comunidades son mucho mayores y mucho menos personales, de forma que es difícil ejercer un control de esta naturaleza. Algunas familias tratan de mantener una mayor vigilancia, otras se abstienen. En todos los casos, este tipo de vigilancia es mucho menos estricto 204/. En esas situaciones, el contexto de la vida urbana (las casas en que viven estas familias africanas y los empleos que desempeñan) está totalmente controlado por blancos, quienes rara vez tienen una idea de las costumbres y necesidades de los africanos.

625. Ejemplos sorprendentes de la falta de responsabilidad que implica esa ignorancia son dos informaciones aparecidas en el Rhodesia Herald en diciembre de 1973. En una de ellas se decía que el 30% de los africanos que consumían alcohol en Harari se embriagaban todos los fines de semana. En la segunda, se señalaba que una empresa de bebidas alcohólicas de la ciudad de Salisbury había realizado beneficios por valor de 1.820.000 dólares de Rhodesia en el ejercicio económico 1972/73. Debido a esos beneficios, el Ayuntamiento disponía de los medios suficientes para "dar" una serie variada de servicios a los poblados africanos. En realidad, no todos los beneficios citados se destinaron a esta finalidad, y aproximadamente el 10% pasaron a la cuenta del año siguiente. No se destinan fondos de origen blanco a los servicios sociales de los poblados, pero, en cambio, los blancos deciden la forma en que han de utilizarse los fondos de fuentes africanas 205/.

626. Los efectos de tipo moral y psicológico a que da lugar la instalación de grandes efectivos africanos procedentes de las zonas rurales en las "aldeas protegidas" se ha descrito anteriormente en los párrafos 511 a 518. Como se indicaba, esas "aldeas protegidas" se han creado sin tener en cuenta en absoluto el modo de vida de los africanos afectados.

201/ Rhodesia Herald, 21 de marzo de 1973.

202/ Rhodesia Herald, 6 de septiembre de 1973.

203/ Rhodesia Herald, 30 de noviembre de 1973.

204/ Rhodesia Herald, 6 de febrero de 1974 y 14 de mayo de 1975.

205/ Rhodesia Herald, 19 y 30 de diciembre de 1973.

IV. ADOPCION DEL INFORME

627. El presente informe ha sido aprobado y firmado por los miembros del Grupo Especial de Expertos, esto es:

Sr. Kéba M'Baye
Presidente y Relator

Sr. Branimir Janković
Vicepresidente

Sr. Amjad Ali^{1/}

Sr. Annan Arkyin Cato

Sr. Humberto Díaz Casanueva

Sr. Félix Ermacora

^{1/} El Sr. Amjad Ali, miembro del Grupo Especial de Expertos, se hallaba ausente cuando se examinó y aprobó el presente informe.